



ANALES DEL CONCEJO

DE BOGOTÁ, D.C.

PROYECTOS DE ACUERDO

AÑO II N°. 4006 DIRECTORA: LUZ ANGÉLICA VIZCAINO SOLANO AGO. 02 DEL AÑO 2025

TABLA DE CONTENIDO	Pág.
PROYECTO DE ACUERDO NO 745 DE 2025 PRIMER DEBATE. “POR EL CUAL SE PROMUEVEN ESTRATEGIAS PARA LA INTERVENCIÓN DE CULATAS RESULTANTES DE PREDIOS ADQUIRIDOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA LA MOVILIDAD “	39307
PROYECTO DE ACUERDO NO 746 DE 2025 PRIMER DEBATE. “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE PROTEJAN LA SEGURIDAD VIAL EN LA RED DE CICLORRUTAS DEL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES “	39336
PROYECTO DE ACUERDO NO 747 DE 2025 PRIMER DEBATE. “POR EL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE ZONAS TRANQUILAS EN BOGOTÁ D.C. COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES “	39355
PROYECTO DE ACUERDO NO 748 DE 2025 PRIMER DEBATE. “POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 19 DE 1976, SE RECUPERA UN BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL DISTRITO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”...	39372
PROYECTO DE ACUERDO NO 749 DE 2025 PRIMER DEBATE. “POR EL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE Y CIUDAD DE BOGOTÁ COMO EVENTO PERMANENTE DE INTERÉS CULTURAL DISTRITAL “	39383
PROYECTO DE ACUERDO NO 750 DE 2025 PRIMER DEBATE. “POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. “	39403
PROYECTO DE ACUERDO NO 751 DE 2025 PRIMER DEBATE. “POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN ESTATUS ESPECIAL AL CAMPESINADO COMO PROTECTORES (AS) DEL AGUA EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES “	39422
PROYECTO DE ACUERDO NO 752 DE 2025 PRIMER DEBATE. “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO EN OBRAS PÚBLICAS EN BOGOTÁ D.C. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES “	39427
PROYECTO DE ACUERDO NO 753 DE 2025 PRIMER DEBATE. “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE MICRONEGOCIOS BARRIALES Y VECINALES EN BOGOTÁ, D.C. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES “	39440
PROYECTO DE ACUERDO NO 754 DE 2025 PRIMER DEBATE. “POR MEDIO DEL CUAL SE FOMENTA LA PRÁCTICA DE LOS DEPORTES URBANOS Y SE CREA EL FESTIVAL DE DEPORTES URBANOS “DC UNDERGROUND” EN EL DISTRITO CAPITAL “	39449
PROYECTO DE ACUERDO NO 755 DE 2025 PRIMER DEBATE. “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL EXPEDIENTE DIGITAL DE SEGUIMIENTO Y CONSULTA DE INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL “	39462
PROYECTO DE ACUERDO NO 756 DE 2025 PRIMER DEBATE. “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS BAJO LOS CUALES SE CREARÁN E IMPLEMENTARÁN LAS CASAS DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL PYBA Y LAS UNIDADES MÓVILES DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA ANIMALES EN BOGOTÁ	39477
PROYECTO DE ACUERDO NO 757 DE 2025 PRIMER DEBATE. “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS HUMEDALES DEL DISTRITO CAPITAL AL SISTEMA DISTRITAL DE GESTIÓN	

...

Pág.

DEL RIESGO DE DESASTRES Y AL SISTEMA DISTRITAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2469 DE 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES “.....	39494
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 758 DE 2025 PRIMER DEBATE.</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA DISEÑO, LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA U HOGARES CON JEFATURA FEMENINA EN BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES “.....	39512
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 759 DE 2025 PRIMER DEBATE.</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS QUE GARANTICEN LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN QUE REALIZA ACTIVIDADES SEXUALES PAGAS DE ÉLITE EN BOGOTÁ EN LA MODALIDAD DE WEBCAM, PREPAGO, ACOMPAÑANTES, APLICACIONES, ENTRE OTRAS “.....	39536
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 760 DE 2025 PRIMER DEBATE.</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE BUSCA LA PRESERVACIÓN LA CULTURA BOYACENSE EN BOGOTÁ, SE CREA EL EVENTO CARRANGA AL PARQUE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES “.....	39547

PROYECTO DE ACUERDO NO 745 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR EL CUAL SE PROMUEVEN ESTRATEGIAS PARA LA INTERVENCIÓN DE CULATAS RESULTANTES DE PREDIOS ADQUIRIDOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA LA MOVILIDAD”****1. OBJETO DEL PROYECTO**

El presente proyecto de acuerdo tiene como objetivo principal establecer estrategias de intervención de las culatas urbanas expuestas, especialmente aquellas generadas por demoliciones de predios adquiridos por el Distrito para la construcción de obras de infraestructura pública para la movilidad.

Para ello, plantea tres estrategias clave: definir lineamientos técnicos articulados con el POT y normas del espacio público; promover intervenciones reversibles y efímeras lideradas por terceros como universidades, empresas o artistas; y desarrollar un Manual de Intervención de Culatas de Bogotá, que servirá como guía técnica obligatoria para orientar el diseño, los materiales, las alianzas y las buenas prácticas en la transformación estética de estas superficies, fortaleciendo así una política pública sostenible de recuperación urbana.

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**2.1 ANTECEDENTES**

El presente Proyecto de Acuerdo no ha sido presentado anteriormente ante el Concejo de la ciudad.

2.1.1 ¿Qué son las culatas y cuál es su importancia para la ciudad?

En el contexto urbano, las culatas son muros laterales o posteriores de edificaciones que, por lo general, no fueron concebidos para estar expuestos al espacio público. Su aparición suele deberse a procesos de transformación urbana como las demoliciones para la ampliación de vías, la

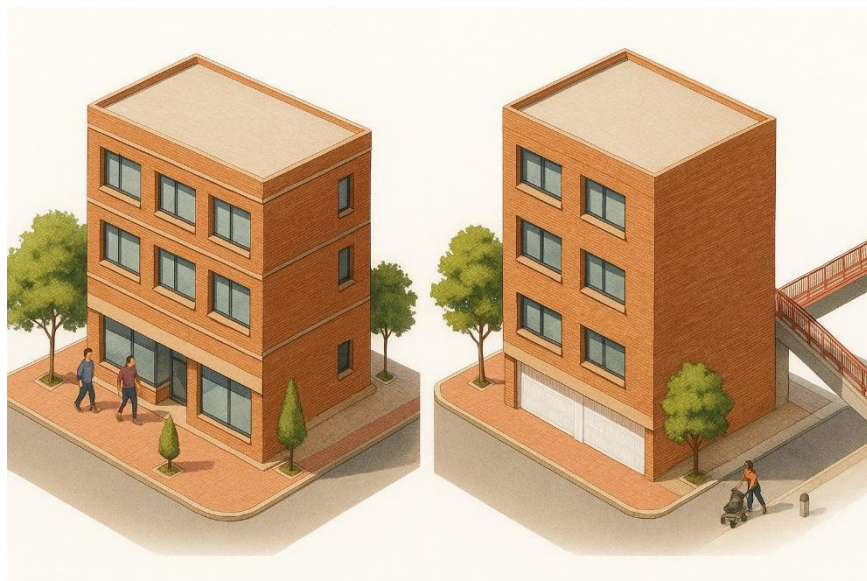
construcción de intercambiadores, estaciones de Transmilenio, corredores del Metro u otras obras de infraestructura. Estas superficies, que en principio permanecían ocultas entre edificaciones contiguas, emergen como elementos visibles en el paisaje urbano, especialmente en zonas de alto flujo vehicular y peatonal, generando un impacto visual significativo en la ciudad.

Según el Manual de Espacio Público de Bogotá, una culata es definida como: “Muro de remate en una construcción, puede resultar de la demolición de una edificación” (2023, p.506). Esta definición técnica cobra relevancia en la medida en que estos muros adquieren un papel protagónico en la imagen de la ciudad, pese a no haber sido diseñados para ello.

Las culatas suelen carecer de tratamiento arquitectónico, acabados o articulación con su entorno, lo que las convierte en superficies ciegas que no dialogan con el espacio público. Esta condición las hace vulnerables a convertirse en puntos de deterioro urbano, fomentando el abandono, el vandalismo, la inseguridad o el depósito informal de residuos. En consecuencia, impactan negativamente en la percepción de seguridad, el orden urbano y la calidad del ambiente construido.

En contraposición a las fachadas activas —que cuentan con aperturas, elementos arquitectónicos y usos que enriquecen la vida urbana— las culatas representan vacíos visuales y funcionales dentro del tejido urbano. Su adecuada intervención puede transformar estos pasivos urbanos en oportunidades para la regeneración estética, social y ambiental del espacio público, contribuyendo a una ciudad más armónica, cuidada y digna para sus habitantes.

Comparación entre una fachada activa y una culata



*Fachada activa (derecha) y culata (izquierda)
Fuente: Elaboración propia.*

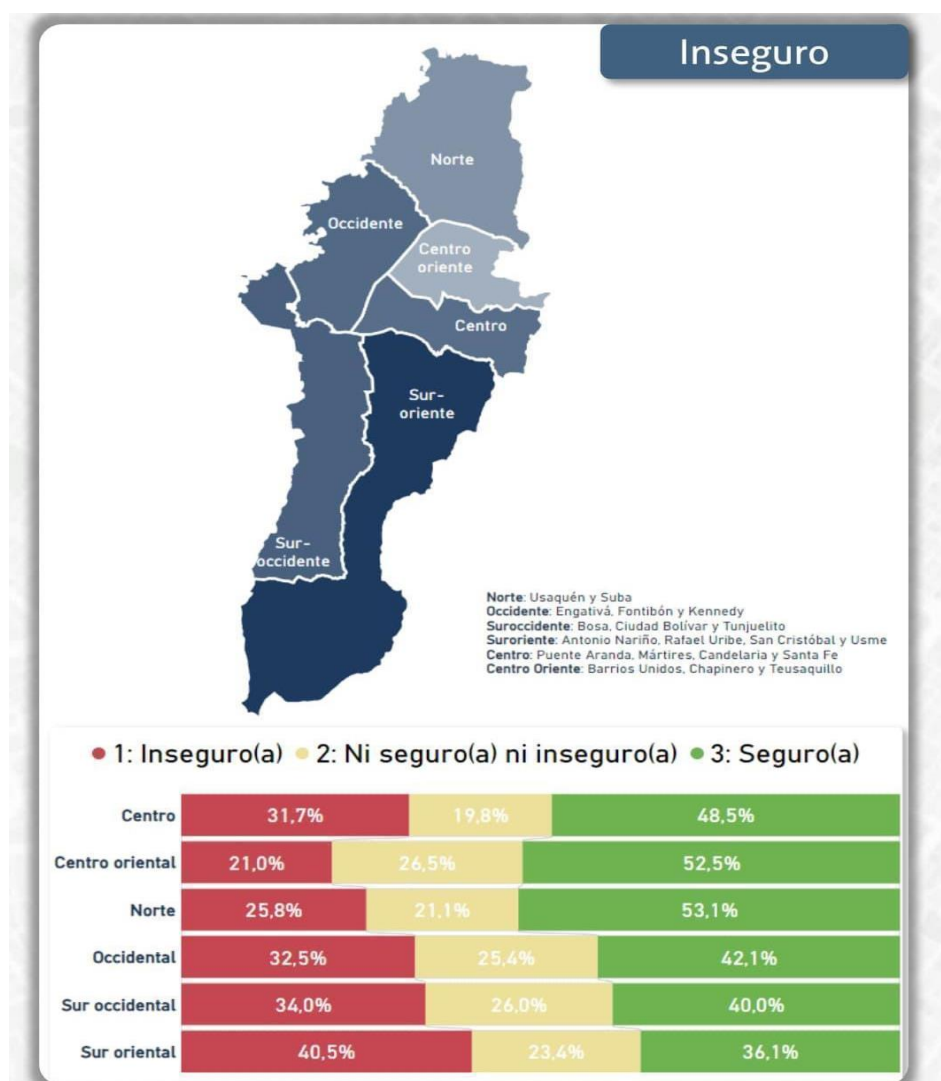
3. JUSTIFICACIÓN

El deterioro visible del entorno construido, especialmente de las culatas, no solo representa un problema estético o arquitectónico, sino que tiene impactos sociales, culturales y psicológicos profundos en la vida de las comunidades. Las fachadas actúan como el rostro de la ciudad; son la primera capa visual que configura la percepción de un barrio o sector. Cuando estas estructuras se encuentran sucias, deterioradas, sin mantenimiento o abandonadas, envían un mensaje de descuido, vulnerabilidad y falta de apropiación ciudadana.

3.1 Las culatas y la inseguridad: un problema de percepción urbana.

La percepción de inseguridad en Bogotá está estrechamente vinculada al deterioro de las culatas, lo cual transmite una percepción de abandono y falta de cuidado. Frente a esta situación, la intervención de culatas se presenta como una estrategia eficaz para transformar el entorno y revitalizar la imagen urbana.

Mapa de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2024 de Bogotá Cómo Vamos:



Fuente: <https://bogotacomovamos.org/wp-content/uploads/2024/12/Encuesta-de-Percepcion-Ciudadana-2024-presentacion.pdf>

Los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2024 de Bogotá Cómo Vamos, reflejan una preocupación constante entre los habitantes de varias zonas de la ciudad especialmente en las localidades del sur. La zona suroriental que incluye a Antonio Nariño, Rafael Uribe, San Cristóbal y Usme presenta un 40,5% de percepción de inseguridad, mientras que la zona suroccidental conformada por Bosa, Ciudad Bolívar y Tunjuelito alcanza un 34,0%. Estos altos porcentajes no solo responden a hechos delictivos, sino también a factores del entorno urbano que inciden directamente en cómo las personas perciben su seguridad.

Uno de estos factores es el deterioro de las culatas. Paredes sucias, pintura descascarada y señales visibles de abandono proyectan una sensación de desprotección y descuido institucional. Esta apariencia puede generar entre los habitantes una mayor sensación de vulnerabilidad y falta de control por parte de las autoridades. La falta de mantenimiento, junto con la carencia de espacios

urbanos adecuados y seguros, afecta de manera negativa la calidad de vida y debilita el sentido de pertenencia hacia el barrio.

En este contexto, mejorar el estado físico de las fachadas no debe verse solo como una intervención estética, sino como una estrategia clave para transformar la percepción de inseguridad, revitalizar el espacio urbano y fortalecer la confianza de la comunidad en su entorno.

A continuación, se muestra una imagen de la culata de algunos predios ubicados sobre la NQS frente a la estación de Transmilenio El Campín.

Foto de culata sobre la NQS con calle 63c en puente peatonal



Fuente: Google maps tomado de: https://www.google.com/maps/@4.6550273,-74.0783442,3a,75y,202.89h,94.29t/data=!3m10!1e1!3m8!1sbXS8iJv8RS1-et6QYn4tWQ!2e0!6shhttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-4.288160813219477%26panoid%3DbXS8iJv8RS1-et6QYn4tWQ%26yaw%3D202.88547030480248!7i16384!8i192!9m2!1b1!2i49?hl=es&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDcxNi4wKXMDSoASAFQAw%3D%3D

3.2.1 Importancia de las culatas en la percepción urbana

En el contexto de la arquitectura y el urbanismo, una culata de edificio se refiere al muro lateral de una construcción que no tiene ventanas ni balcones, generalmente ubicado en el límite con otra propiedad o lote vecino. Es un muro ciego que, en muchos casos, se convierte en la fachada visible cuando se demuele un edificio adyacente.

Estas representan superficies arquitectónicas que no fueron diseñadas para interactuar con el entorno urbano. Estas “paredes muertas” son elementos que no solo rompen la continuidad visual,

sino que también generan un impacto significativo en la percepción urbana y la seguridad de la ciudad.

Las culatas representan una problemática importante para la ciudad como por ejemplo las **rupturas del tejido urbano**: las culatas interrumpen la continuidad estética, funcional y social de los barrios, ocasionando barreras físicas y simbólicas que fragmentan comunidades.

El desinterés institucional: la ausencia de intervención en las culatas proyecta la sensación de abandono por parte de las autoridades y aumenta la percepción de deterioro. **Vulnerabilidad social**: estas zonas tienden a convertirse en puntos ciegos sin vigilancia natural, favoreciendo comportamientos incívicos y reforzando la idea de un peligro constante.

3.2.2. La teoría de las ventanas rotas: prevenir el deterioro urbano:

La teoría de las ventanas rotas: prevenir el deterioro urbano en las culatas

La Teoría de las Ventanas Rotas, formulada por los criminólogos James Q. Wilson y George L. Kelling en 1982, sostiene que el deterioro visible del entorno urbano como ventanas rotas, basura, grafitis no autorizados o muros en mal estado genera una percepción de abandono y descontrol que puede fomentar comportamientos incívicos o incluso criminales. La idea central es que, si un entorno muestra señales claras de que "a nadie le importa", es más probable que las normas sociales se relajen y se deteriore la convivencia ciudadana. (Wilson, J. Q., & Kelling, G. L. (1982). Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety. The Atlantic.)

Aplicada al contexto de Bogotá, las culatas expuestas en grandes corredores urbanos o zonas de renovación vial son superficies que, cuando permanecen grises, deterioradas o sin tratamiento, transmiten un mensaje de abandono institucional y falta de cuidado colectivo. Estas grandes superficies vacías, sin actividad visual ni uso funcional, aumentan la percepción de inseguridad y favorecen la apropiación indebida del espacio por parte de actores que generan desorden o deterioro.

Por el contrario, cuando una culata es intervenida con murales, arte urbano, jardines verticales o iluminación adecuada, se envía un mensaje claro y positivo: "este espacio importa, aquí hay comunidad, aquí hay vida". La presencia de color, contenido cultural o naturaleza en estos muros muertos genera orgullo barrial, activa la vigilancia social y refuerza la percepción de seguridad y pertenencia.

Las intervenciones en culatas representan una estrategia preventiva clave para frenar el deterioro urbano progresivo, contener la expansión del abandono y convertir espacios degradados en oportunidades para la expresión comunitaria, la recuperación del entorno y el fortalecimiento del tejido social.

En ciudades donde la infraestructura vial genera culatas extensas como en Bogotá con obras de infraestructura pública para la movilidad como el Metro, TransMilenio o Regiotram es fundamental aplicar este enfoque preventivo para evitar que estas superficies refuerzan el estigma urbano y se conviertan en focos de inseguridad.

3.2.3. Beneficios del aprovechamiento de las culatas

- **Recuperación de tejido urbano:** murales, muros verdes y mobiliario transforman culatas en espacios activos y conectados con el entorno peatonal.
- **Fomento de identidad local:** intervenciones participativas permiten que los habitantes recreen el sentido del lugar y fortalezcan su pertenencia.
- **Percepción de cuidado y orden:** superficies activas causan una percepción de orden y seguridad, disuadiendo el vandalismo.
- **Activación económica y cultural:** culatas vivas pueden convertirse en vitrinas culturales, atrayendo visitantes y potenciando la economía local.

3.2.4. Soporte técnico e institucional

Bogotá ya cuenta con herramientas normativas para enfrentar esta problemática. El Manual de Normas Urbanísticas, vigente en sectores patrimoniales, recomienda que las culatas sean tratadas con recubrimientos adecuados como muros verdes o muralismo, para integrarse armónicamente al entorno y también Manual del Espacio Público el cual establece lineamientos y criterios para el diseño, construcción y mantenimiento de espacios públicos en entornos urbanos, con el objetivo de garantizar que sean accesibles, seguros, vitales y ambientalmente conectados. Este manual busca integrar la biodiversidad, la renaturalización y el patrimonio en el diseño del espacio público, promoviendo espacios que reflejan la identidad de la ciudad y fomenten la participación ciudadana.

Asimismo, proyectos académicos como “Módulos urbanos para la revitalización de culatas en Bogotá” (Universidad La Gran Colombia, 2015) proponen soluciones modulares de fácil instalación y replicables. Este proyecto desarrollado por estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura, propone la creación e instalación de módulos prefabricados y desmontables que pueden acoplarse a culatas expuestas en la ciudad. Los módulos contemplan:

- Estructuras livianas y sostenibles.
- Revestimientos vegetales o plásticos reciclados.
- Elementos de arte urbano o iluminación.
- Y componentes funcionales como señalización, jardinería vertical o paneles solares.

La intención de este proyecto es ofrecer una solución temporal, adaptable a diferentes escalas y contextos urbanos, que no requiera grandes inversiones ni procesos constructivos complejos. Además, plantea la participación de la comunidad en el diseño e instalación de los módulos, con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia y el cuidado colectivo de estas superficies urbanas.

En sus conclusiones, el proyecto destaca que la intervención de culatas con módulos versátiles permite:

- Mejorar la calidad visual del entorno urbano

- Reducir la percepción de abandono
- Generar espacios de interacción social y cultural.

Este trabajo se convierte así en una referencia conceptual y técnica para el diseño de intervenciones sostenibles sobre culatas en Bogotá, especialmente en contextos afectados por obras de infraestructura vial.

Por otro lado, el proyecto de los andes “Habitando culatas: nuevos espacios públicos para Bogotá” mencionan el hecho de que el metro de Bogotá, traerá junto con el sistema de movilidad, un cambio radical en el uso del suelo. Los automóviles dejarán de circular cerca al metro, convirtiendo a los parqueaderos y bombas de gasolina en espacios residuales. El proyecto propone construir una arquitectura transitoria que se instale sobre estos predios y los transforme en espacio público para la ciudad. Y presenta una serie de lineamientos de intervención de culatas.

3.2.5. Oportunidad en proyectos de movilidad

Proyectos como TransMilenio, Metro y Regiotram dejan tras de sí culatas y lotes remanentes. En lugar de convertirse en “cicatrices urbanas” que fragmentan el entorno, estas áreas pueden convertirse en nuevos espacios públicos, catalizadores de identidad y seguridad urbana. Planes como el prototipo “Habitando culatas” plantean su uso temporario o permanente como zonas de encuentro y apropiación ciudadana.

3.3 LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN DE CULATAS

Los lineamientos de intervención de culatas que se proponen en el presente Proyecto de acuerdo son:

3.3.1 Integración con el entorno urbano inmediato

Las intervenciones sobre culatas deben establecer una relación armónica con su contexto físico, funcional y visual. Esto implica una lectura cuidadosa del entorno construido, considerando elementos como la volumetría, los colores predominantes, los materiales existentes, el mobiliario urbano cercano y el carácter del espacio público adyacente. La integración no se limita al plano estético, sino que busca asegurar coherencia con las dinámicas urbanas, los usos del suelo, la escala peatonal y vehicular, y la identidad barrial. Una intervención bien integrada contribuye a la continuidad del paisaje urbano, evita rupturas visuales abruptas y potencia la calidad del entorno sin desentonar con su realidad inmediata.

3.3.2 Intervenciones reversibles y de bajo impacto en las edificaciones

Toda propuesta de intervención debe contemplar la posibilidad de ser desmontada o retirada sin generar alteraciones permanentes en la edificación o en la estructura del muro intervenido. Este principio responde tanto a razones técnicas como jurídicas, ya que muchas culatas pertenecen a predios privados o a edificaciones con valor patrimonial o funcional. Se deberán emplear soluciones constructivas livianas, anclajes no invasivos, acabados superficiales removibles y técnicas de montaje que no comprometan la integridad física de la estructura existente. Este lineamiento permite

que las intervenciones se adapten a transformaciones futuras del entorno, como nuevas edificaciones, cambios de uso o renovaciones urbanas, sin generar sobrecostos ni afectaciones a terceros.

3.3.3. Sostenibilidad técnica y ambiental

Las intervenciones deben ser sostenibles tanto en su concepción como en su ejecución y mantenimiento. Esto implica utilizar materiales de bajo impacto ambiental, preferiblemente reciclables, reciclados o de origen local, con ciclos de vida prolongados y requerimientos mínimos de mantenimiento. Además, se deben considerar aspectos como la eficiencia energética (p. ej., pinturas que reflejan calor), la capacidad de los materiales para mejorar la calidad del aire (como recubrimientos fotocatalíticos), o incluso la incorporación de elementos vivos, como jardines verticales, cuando sea viable. El enfoque de sostenibilidad también incluye minimizar los residuos generados durante la instalación y propiciar procesos logísticos responsables que reduzcan la huella de carbono de la intervención.

3.3.4. Claridad formal y legibilidad visual

Las intervenciones deben proponer composiciones claras, coherentes y comprensibles para el observador urbano. Esto significa evitar el uso excesivo de elementos decorativos, simbolismos abstractos de difícil interpretación o recursos gráficos que generan saturación visual. La legibilidad debe considerarse desde distintos ángulos, velocidades de tránsito y niveles de observación (peatonal, ciclista o vehicular), de modo que las culatas se conviertan en puntos de referencia que embellecen y ordenan la experiencia del espacio público. Además, se debe garantizar que los elementos gráficos respeten principios básicos de diseño como el contraste, la proporción, la jerarquía y la armonía compositiva, asegurando intervenciones que transmitan orden, estética y claridad comunicativa.

3.4. DISEÑO Y PUBLICACIÓN DEL MANUAL TÉCNICO DE INTERVENCIÓN DE CULATAS DE BOGOTÁ

El Manual Técnico de Intervención de Culatas de Bogotá será el principal instrumento técnico, normativo y orientador derivado del presente proyecto de acuerdo, cuyo propósito es establecer lineamientos claros, aplicables y sostenibles para el tratamiento de culatas visibles desde el espacio público en la ciudad. Este documento será elaborado por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), en coordinación con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Empresa Metro de Bogotá, TransMilenio, la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría del Hábitat, garantizando una visión interdisciplinar, coherente con el modelo de ordenamiento territorial, el desarrollo urbano sostenible y la gestión integral del paisaje urbano.

3.4.1 Objetivo del Manual

El objetivo central del manual es establecer un marco técnico obligatorio para orientar, estandarizar y facilitar las intervenciones en culatas urbanas expuestas, de modo que estas acciones no solo mejoran la estética de la ciudad, sino que también fortalezcan la percepción de seguridad, la cohesión del tejido urbano y la identidad local, sin generar carga fiscal ni comprometer el espacio

público. Será un documento de referencia para urbanistas, arquitectos, artistas, entidades distritales, concesionarios, universidades, empresas privadas u otros actores interesados en recuperar visualmente estas superficies.

3.4.2 Pertinencia del Manual

Actualmente, Bogotá enfrenta un creciente número de culatas visibles producto de grandes proyectos de infraestructura —como el Metro, TransMilenio o corredores viales— que han dejado muros laterales o traseros expuestos sin tratamiento arquitectónico. La ausencia de un instrumento normativo y técnico que oriente su intervención ha derivado en acciones desarticuladas, con criterios variables y muchas veces ineficaces. Por tanto, el manual se configura como una herramienta urgente y necesaria para consolidar una política pública de intervención coherente, replicable y de bajo impacto, alineada con los principios del urbanismo táctico, el embellecimiento urbano y la optimización del espacio residual.

3.4.3 Contenidos del manual

El manual contendrá, al menos, los siguientes componentes estructurales:

Tipologías de culatas, clasificadas según su ubicación, contexto urbano (residencial, industrial, institucional, mixto, etc.), nivel de exposición visual, tamaño, altura, estado físico y relación con proyectos de infraestructura pública.

Estrategias de intervención recomendadas, incluyendo opciones como pintura mural, jardines verticales, arte urbano, cerramientos blandos, iluminación ornamental, uso de materiales reflectantes o biodegradables, entre otros. Cada estrategia deberá incluir criterios de aplicabilidad, limitaciones técnicas y ventajas ambientales.

Estándares técnicos y de sostenibilidad, que definan especificaciones sobre materiales apropiados, durabilidad mínima, mantenimiento preventivo, condiciones de instalación, criterios de reversibilidad, eficiencia energética y mitigación de impactos climáticos.

Revisión de buenas prácticas, que recoja experiencias destacadas a nivel local e internacional en la recuperación visual de muros ciegos o culatas, con análisis comparativo de resultados y viabilidad replicable en Bogotá.

Modelos de implementación y alianzas, que describen esquemas de ejecución con terceros (universidades, empresas, colectivos artísticos, concesionarios, organizaciones culturales), así como mecanismos de control, autorizaciones y seguimiento técnico.

Fichas técnicas y lineamientos gráficos, con esquemas tipo, ilustraciones referenciales, catálogos de materiales, paletas de color sugeridas, y composiciones modulares según cada tipología de culata, facilitando la comprensión y aplicación del manual por parte de diseñadores y ejecutores.

3.4.4 Utilidad del manual

Este manual tendrá carácter vinculante para todas las entidades públicas del Distrito involucradas en obras de infraestructura o urbanismo, así como para cualquier tercero que desee intervenir culatas visibles desde el espacio público. Será una herramienta para:

- Garantizar intervenciones armónicas con el entorno urbano.
- Prevenir el deterioro y la contaminación visual.
- Fomentar prácticas sostenibles y de bajo costo.
- Evitar improvisaciones o soluciones incoherentes.
- Asegurar continuidad en el tratamiento estético del espacio residual.
- Facilitar la toma de decisiones técnicas con base en criterios estandarizados.

Además, al incluir directrices claras y accesibles, el manual permitirá que actores no estatales — como universidades, colectivos culturales o empresas— puedan desarrollar propuestas de intervención autónomas, siempre bajo parámetros técnicos definidos y coherentes con las políticas públicas del Distrito.

3.4.5 Consideraciones adicionales

El manual deberá actualizarse periódicamente para incorporar nuevos materiales, tecnologías emergentes y experiencias locales exitosas. Igualmente, podrá contar con un anexo normativo que precise su articulación con el POT vigente, el Manual del Espacio Público, la normatividad del DADEP y los instrumentos de planeación sectorial.

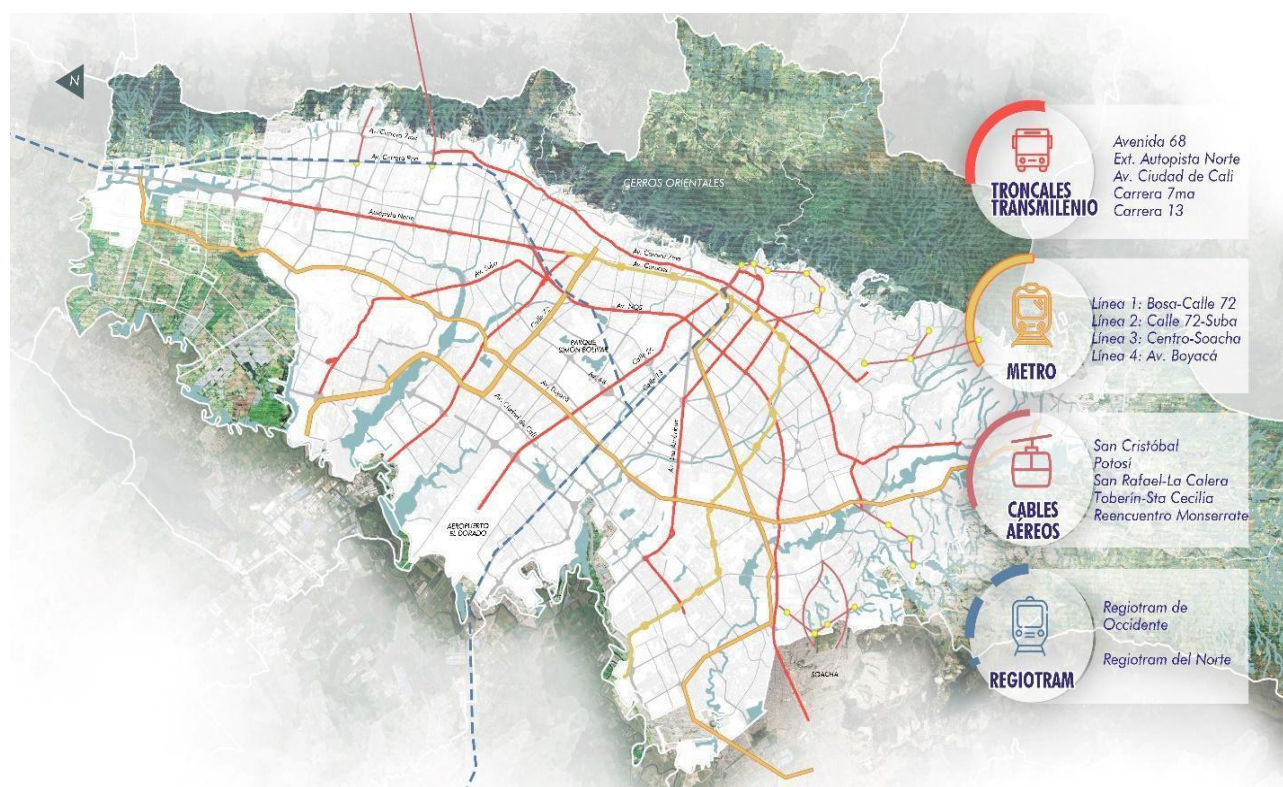
3.5 ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA INICIATIVA

La aplicación del presente Proyecto de acuerdo se limita exclusivamente a culatas generadas por intervenciones de infraestructura de movilidad en el marco de obras públicas como:

- Troncales de TransMilenio (existentes y proyectadas).
- Corredores del Metro de Bogotá (en construcción y proyectadas).
- Corredores del sistema férreo líneas en construcción y proyectadas del Regiotram Norte y Occidente.
- Inmediaciones de las estaciones de los cables aéreos existentes, en construcción y proyectados.
- Ampliación de infraestructura vial

Estas zonas suelen generar vacíos urbanos, muros expuestos y predios no desarrollables que quedan a cargo de la administración sin un uso claro, aumentando el deterioro visual de corredores de altísima visibilidad y tránsito peatonal.

Mapa de sistemas de transporte proyectados



Fuente: Elaboración propia

3.6 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

Para desarrollar estrategias de intervención de culatas de edificios resultantes de las demoliciones de predios adquiridos por el Distrito Capital para la construcción de proyectos de infraestructura pública para la movilidad, se tendrán en cuenta las siguientes estrategias:

3.6.1 Pintura e intervención cromática

Aplicación de pintura duradera en murales o tramas que mejoren la integración visual del entorno.

3.6.2 Limpieza y mantenimiento técnico

Intervenciones periódicas de lavado, resane y control del deterioro superficial, coordinadas con empresas de servicios públicos o de aseo como parte de sus obligaciones contractuales.

3.6.3 Promoción de incorporación de coberturas vegetales y jardines verticales modulares

Instalación de sistemas vegetales modulares que aporten beneficios ambientales, tales como el mejoramiento de la calidad del aire, la reducción en la contaminación acústica y visual, mejorando así la percepción urbana (Secretaría Distrital de Planeación, 2024, pág. 50)

3.6.4 Intervenciones de arte urbano y grafitis

Convocatorias abiertas o convenios con colectivos artísticos para realizar murales temáticos, históricos o identitarios. Estas intervenciones, además de resignificar el entorno, tienen impacto turístico y cultural (ej. *Distrito Grafiti* en Puente Aranda).

3.6.5 Publicidad exterior con corresponsabilidad

Autorización para que empresas de publicidad usen ciertas culatas a cambio de su limpieza, pintura, iluminación o intervención artística. Esto se alinea con el artículo 167 del Acuerdo 927 de 2024, que regula el aprovechamiento económico del espacio público.

3.6.6 Seguridad

Promoción de tratamientos en fachadas cerradas que incluyan intervenciones de iluminación adecuada para su uso en horarios nocturnos (Secretaría Distrital de Planeación, 2024, pág. 53)

3.7 REFERENTES

Es fundamental tener en cuenta los casos de éxito, tanto a nivel nacional como internacional, que han demostrado la eficacia de la intervención de culatas como herramienta para la revitalización urbana, la mejora de la percepción de seguridad y la apropiación del espacio público. Estos referentes permiten identificar buenas prácticas, adaptar metodologías efectivas al contexto local y fortalecer la viabilidad de la iniciativa. A continuación, se presentan algunos ejemplos representativos que sirven como insumo y respaldo para la implementación del presente Proyecto de Acuerdo.

3.7.1 Metro Bogotá – Culata en calle 63 con Caracas



https://www.metrodebogota.gov.co/noticias/metro-bogota-se-une-idartes-y-habilita-espacios-fomentar-arte-urbano-entre-los-jovenes?utm_source

¿**Dónde está?** Culata de la primera Línea del Metro, esquina calle 63 con avenida Caracas, Bogotá.

¿**Cuándo se hizo?** Noviembre-octubre de 2023.

¿**Cómo se implementó?** La Empresa Metro de Bogotá e Idartes crearon la “Beca Museo Abierto” para muralistas. El colectivo Planeta Sur ganó con un homenaje al Festival Rock al Parque, representado en la culata.

¿**Qué problemática soluciona?** Reducción del impacto visual gris y estigmatizante de la obra civil del metro en la trama urbana.

¿**Qué logró?** Intervención visible en entorno de alto tránsito, promoviendo orgullo local, cultura visual y apropiación de la nueva infraestructura.

3.7.2 Portal Suba – Mural cultural en fachada (TransMilenio)



https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/mural-en-el-portal-de-transmilenio-de-suba?utm_source Foto: Prensa TransMilenio.

¿Dónde está? Culata frente al Portal Suba de TransMilenio, Bogotá.

¿Cuándo se hizo? Junio de 2021.

¿Cómo se implementó? Colectivo Subarsivos, beneficiarios de la beca Idartes, pintó 172 m² en la pared lateral del portal con motivos muisca y paisajísticos locales.

¿Qué problemática soluciona? Los muros laterales del portal eran superficies grises que distanciaba a la comunidad de su infraestructura.

¿Qué logró? Transformación del muro en un mural educativo y cultural, visible para 38.800 usuarios diarios, fortaleciendo la identidad local.

3.7.3. 100 Gates Project – Nueva York, EE. UU.



Fuente: <https://spectrumnoticias.com/ny/nyc/noticias/2019/01/30/pintan-grafitis-o-murales-en-puertas-o-portones-de-negocios--con-el-permiso-del-dueno>

¿Dónde está? Barrios de Manhattan (Lower East Side y East Harlem), Staten Island y Brooklyn, Nueva York, EE. UU.

¿Cuándo se hizo? Inició en 2014 y ha continuado hasta la actualidad. En East Harlem comenzó en 2017.

¿Cómo se implementó? El proyecto fue impulsado por la organización Lower East Side Partnership con el apoyo del Departamento de Salud y organizaciones barriales. Artistas locales son invitados a pintar murales en las cortinas metálicas de negocios (portones), con el consentimiento de sus propietarios. Los murales reflejan la identidad del negocio o de la comunidad. Cada intervención es voluntaria, gratuita para los propietarios y apoyada por patrocinadores públicos o privados.

¿Qué problemática soluciona? Combate el grafiti no autorizado, mejora la percepción del espacio urbano durante las noches (cuando los negocios están cerrados) y promueve el arte como herramienta de identidad, cohesión y revitalización. También fortalece la economía local y reduce la percepción de inseguridad.

¿Qué logró? Ha intervenido más de 360 portones de comercios en varios distritos. Negocios como La Tropezienne (pastelería en East Harlem) reportaron incrementos del 10% en sus ventas tras la pintura del mural. Los vecinos perciben los murales como elementos que brindan alegría y seguridad en el espacio público nocturno.

3.7.4 TransMilenio – Intervención en estaciones y portales



[https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/151556/con-arte-y-cultura-transmilenio-le-pone-color-a-estaciones-y-portales/?utm_source=Retratos en túnel del Portal de Suba](https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/151556/con-arte-y-cultura-transmilenio-le-pone-color-a-estaciones-y-portales/?utm_source=Retratos+en+t%C3%BAnel+del+Portal+de+Suba)

¿Dónde está? Estaciones Museo Nacional, Usme, Sur, Norte, Portal Usme y las 24 del Corredor TransMiCable, Bogotá.

¿Cuándo se hizo? Convocatoria en 2019; ejecución y resultados publicados en diciembre de ese año.

¿Cómo se implementó? Nueve colectivos artísticos ganaron convocatoria para intervenir 4.715 m² de muros incluídas culatas mediante murales colaborativos con vecinos.

¿Qué problemática soluciona? Espacios infrautilizados y desconectados culturalmente del entorno.

¿Qué logró? Mejor uso del espacio, mayor percepción de cuidado y participación comunitaria en el sistema de transporte.

3.7.5 Highway 101 Underpasses – Salinas, EE. UU.



<https://kion546.com/news/top-stories/2023/07/10/new-murals-on-display-under-the-highway-101-overpasses-in-salinas/>

¿Dónde está? Paso elevado de la autopista 101 en Salinas, California (Alisal St, East Market St, Sanborn Rd).

¿Cuándo se hizo? Pintura y renovación en 2023.

¿Cómo se implementó? Convenio entre Caltrans y el Arts Council of Monterey County. Artistas locales diseñaron murales con identidad regional (trabajadores agrícolas, flora local).

¿Qué problemática soluciona? Grandes muros grises bajo puente, percepción de abandono y áreas poco transitables.

¿Qué logró? Transformación estética, sentido de pertenencia cultural y empoderamiento comunitario.

4. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

4.1 DE ORDEN INTERNACIONAL

4.1.1 Relación de la Iniciativa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Se tiene que esta iniciativa se enmarca en los ODS:

Objetivo 9: *“construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación”*

Aunque las culatas no corresponden a infraestructura dura en el sentido tradicional, su intervención se vincula con la innovación urbana al incorporar:

- Tecnologías sostenibles, como pinturas fotocatalíticas que contribuyen a la purificación del aire o sistemas modulares de vegetación vertical.
- Materiales de bajo impacto ambiental y procesos constructivos livianos, adecuados para contextos urbanos densos y zonas vulnerables.
- Micro emprendimientos locales, que participan en la ejecución de las intervenciones mediante diseño, pintura, instalación o mantenimiento, promoviendo así el desarrollo de capacidades productivas en la comunidad.

Estas acciones fomentan una infraestructura estética y simbólica que transforma lo residual en elementos activos del entorno urbano.

Objetivo 10: *“Reducir la desigualdad en y entre los países”*

Promover la inclusión social, económica y política de todas las personas

La intervención de culatas tiene un fuerte componente social y participativo, ya que:

- Dirige sus acciones a sectores históricamente marginados, donde el deterioro urbano impacta negativamente en la percepción de seguridad, autoestima colectiva y cohesión social.
- Promueve la inclusión activa de comunidades vulnerables, jóvenes artistas, colectivos sociales, personas mayores y con discapacidad, mediante procesos de diseño y ejecución colaborativa.
- Democratiza el acceso a intervenciones urbanas de calidad, al llevar mejoras tangibles a barrios periféricos, evitando su concentración en zonas centrales o de interés turístico.

Objetivo 11: *“Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”*

Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles

Las culatas, al formar parte del paisaje urbano visible, inciden directamente en la percepción del espacio público. Su transformación contribuye a:

- Mejorar la calidad del entorno urbano, haciéndolo más seguro, acogedor y estéticamente agradable para la comunidad.
- Fomentar la apropiación ciudadana, al convertir muros deteriorados en expresiones colectivas que fortalecen la identidad barrial y el sentido de pertenencia.
- Impulsar intervenciones participativas, donde los vecinos son protagonistas del diseño y ejecución de los murales u obras, lo cual refuerza la cohesión social y la construcción de comunidades más resilientes.

4.1.2 Declaración Universal de Derechos Humanos. “Artículo 25.1. *Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.*

4.1.3 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “Artículo 11.1. *“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”.*

En este orden, la administración debe propender por garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y sus condiciones de existencia. En este contexto, la intervención de culatas externas no solo permite el embellecimiento del entorno urbano, sino que también contribuye positivamente a la percepción de seguridad en la ciudad.

4.2 DE ORDEN CONSTITUCIONAL

Para sustentar jurídicamente el modelo de intervención sobre culatas con fines de embellecimiento urbano y mejora de la percepción de seguridad en los territorios del Distrito Capital, es necesario remitirse al orden constitucional colombiano, particularmente a los principios y normas establecidos en la Constitución Política de 1991, así como a la legislación y jurisprudencia aplicables en materia de seguridad ciudadana, calidad de vida y gestión del espacio público.

4.2.1 Artículo 2: *“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.*

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”

Principio de la responsabilidad del Estado en el orden público y la seguridad: El Estado colombiano tiene el deber de garantizar la convivencia pacífica, la seguridad ciudadana y el orden público. En este sentido, el modelo de intervención sobre culatas refuerza este principio al promover acciones coordinadas entre el Estado, la comunidad y en algunos casos, el sector privado, orientadas a la recuperación del entorno urbano y la mejora de la percepción de seguridad en el espacio público.

4.2.2 Artículo 11: *“El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”.* Derecho a la vida y a la seguridad: La Constitución Política de 1991 establece que todos los ciudadanos tienen derecho a la vida y a la seguridad personal, un derecho esencial para la convivencia pacífica y la dignidad humana.

El derecho a la vida es inviolable y constituye la base de todos los demás derechos fundamentales. La intervención de culatas deterioradas en el espacio urbano puede contribuir a este principio al mejorar las condiciones del entorno físico, reducir factores que alimentan la percepción de inseguridad y promover espacios más dignos, habitables y seguros para las comunidades. Estas acciones, aunque simbólicas o estéticas, tienen un impacto real en la calidad de vida y en la protección integral de las personas frente a riesgos asociados al abandono o deterioro urbano.

4.2.3 Artículo 51: *“Todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”.*

El Estado debe garantizar el acceso progresivo a una vivienda digna para todos los ciudadanos. En este contexto, la intervención de culatas deterioradas se convierte en una acción complementaria que contribuye a mejorar el entorno urbano inmediato de las viviendas, reforzando así las condiciones de habitabilidad y bienestar. Este tipo de intervenciones no solo aportan al embellecimiento del espacio, sino que también inciden positivamente en la percepción de seguridad y en la calidad de vida de las comunidades, especialmente en sectores históricamente marginados.

4.2.4 Artículo 58: *“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resulten en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. (...)”*

El derecho a la propiedad, si bien es fundamental, está sujeto a una función social que implica el respeto por el interés general y el uso adecuado del espacio público. En este marco, la intervención de culatas visibles desde el espacio público promueve el mejoramiento del entorno urbano y la percepción de seguridad, a través de un uso responsable y articulado del paisaje construido. Estas acciones deben garantizar el equilibrio entre los derechos de los propietarios y el interés colectivo por contar con espacios accesibles, estéticamente cuidados y seguros, cuya protección corresponde tanto al Estado como a la ciudadanía.

4.2.5 Artículo 79: *“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.”*

La Constitución reconoce el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, así como el deber del Estado y de los ciudadanos de protegerlo. En este sentido, las intervenciones sobre culatas visibles desde el espacio público constituyen una estrategia para resignificar territorios deteriorados, mejorar la calidad del paisaje urbano y contribuir a un entorno más limpio, ordenado y estéticamente cuidado. Estas acciones no solo elevan el valor ambiental del entorno inmediato, sino que también inciden en la percepción de seguridad y en el bienestar colectivo, en cumplimiento de este mandato constitucional.

4.2.6 Artículo 95: *“La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. (...)”*

Este artículo establece que no solo es deber del Estado garantizar condiciones de seguridad y orden, sino también de los ciudadanos participar activamente en la conservación y mejoramiento del entorno urbano. En este sentido, la comunidad tiene la responsabilidad de colaborar en la recuperación y dignificación de las culatas, como parte de un esfuerzo colectivo para lograr espacios públicos más seguros, habitables y estéticamente armónicos.

4.2.7 Artículo 113: *“Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.”*

La intervención y mejoramiento de las culatas visibles en el espacio público requiere la articulación institucional entre las distintas entidades del distrito, en cumplimiento del principio de coordinación establecido en el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Esta labor conjunta permite desarrollar acciones que promuevan el arte, la cultura y el cuidado estético de las edificaciones, contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y a una mayor percepción de seguridad en el entorno urbano.

4.2.8 Artículo 365: *“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.”*

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar general y la calidad de vida de los ciudadanos, lo cual implica promover entornos urbanos seguros, adecuados y saludables. En este

contexto, la intervención en las culatas visibles del espacio público representa una estrategia para mejorar el entorno físico y social de las comunidades. Estas acciones pueden contribuir a la dignificación del paisaje urbano, fomentar la apropiación ciudadana del territorio y fortalecer el sentido de pertenencia, aspectos clave para el bienestar colectivo y el ejercicio efectivo del derecho a una vida digna.

4.3 DE ORDEN LEGAL

Diversos cuerpos normativos respaldan y refuerzan las propuestas orientadas al tratamiento de culatas visibles en el espacio público como parte de estrategias de mejoramiento urbano participativo, con enfoque en la dignidad, habitabilidad y estética del entorno.

4.3.1 Ley 388 de 1997 – Ley de Ordenamiento Territorial: Esta ley tiene como objetivos promover el ordenamiento del territorio, ejecutar acciones urbanísticas eficientes y velar por la protección del espacio público.

Artículo 4 – Participación Democrática: *“En ejercicio de las diferentes actividades que conforman la acción urbanística, las administraciones municipales, distritales y metropolitanas deberán fomentar la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante la participación de los pobladores y sus organizaciones.”*

Este artículo promueve la articulación entre las entidades públicas, la ciudadanía y el sector privado para generar intervenciones concertadas. En este marco, el mejoramiento de las culatas, como parte visible del paisaje urbano, representa una acción urbanística que puede fortalecer el sentido de pertenencia y la integración comunitaria.

4.3.2 Ley 489 de 1998 – Régimen Jurídico de las Entidades del Estado: Esta ley regula la organización y funcionamiento de las entidades públicas, estableciendo los principios de coordinación y colaboración interinstitucional.

El tratamiento de culatas requiere del trabajo conjunto de diversas entidades del Estado, especialmente en el nivel distrital y local, para garantizar que las intervenciones sean coherentes con las políticas de desarrollo urbano, cultura, seguridad y participación ciudadana.

4.3.3 Ley 675 de 2001 – Ley de Propiedad Horizontal: Aunque esta ley regula principalmente la propiedad horizontal, establece disposiciones sobre el manejo de los bienes comunes, lo cual incide directamente en el cuidado de las fachadas y culatas de edificaciones privadas que hacen parte del paisaje urbano.

Una gestión eficiente de estas estructuras arquitectónicas contribuye al mejoramiento del entorno inmediato, promoviendo espacios más habitables, seguros y dignos.

4.3.4 Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana: Esta ley busca garantizar la seguridad, convivencia y cuidado del espacio público a través de comportamientos cívicos y la participación ciudadana.

Artículo 1 – Objeto: *Establece condiciones preventivas para la convivencia, y determina deberes ciudadanos y funciones del Estado para garantizar entornos seguros.*

Artículo 2 – Objetivos específicos: *Dispone, entre otros puntos:*

1. *Propiciar comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público.*
2. *Fomentar el respeto y cuidado del entorno urbano.*

Estas disposiciones respaldan la necesidad de intervenir las culatas, como parte del espacio visible, para mejorar la percepción de seguridad, fortalecer el civismo y revitalizar el entorno mediante acciones colectivas.

Artículo 140 – Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público: *“Omitir el cuidado y mejoramiento de las áreas públicas mediante el mantenimiento, aseo y enlucimiento de las fachadas, jardines y antejardines de las viviendas y edificaciones de uso privado.”*

Este artículo otorga sustento legal a la necesidad de mejorar y embellecer fachadas y culatas, por su impacto directo en la calidad del espacio público.

4.3.5 Ley 2079 de 2021 – “Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de vivienda y hábitat”: Tiene como objetivo garantizar el derecho a una vivienda y hábitat dignos, mediante políticas de mejoramiento integral.

Artículo 5 – Principios: Establece que las entidades públicas deben implementar mecanismos para mejorar la calidad de vida de la población, en especial la menos favorecida, a través de intervenciones que aborden no solo el interior de las viviendas, sino también su entorno físico.

Las intervenciones sobre culatas visibles contribuyen a este propósito, al mejorar las condiciones urbanas exteriores, fomentar el bienestar colectivo y dignificar los barrios.

4.3.6 Decreto 1077 de 2015 - Decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio

Artículo 2.2.3.1.5 – Elementos del espacio público: *“Son también elementos constitutivos del espacio público las áreas y elementos arquitectónicos espaciales y naturales de propiedad privada que, por su localización y condiciones ambientales y paisajísticas, sean incorporadas como tales en los planes de ordenamiento territorial (...), tales como cubiertas, fachadas, paramentos, pórticos, antejardines, cerramientos.”*

Este artículo reconoce las fachadas y culatas como elementos que, aunque de propiedad privada, pueden ser incorporados al sistema de espacio público por su impacto visual, funcional y ambiental. Su adecuada intervención permite armonizar el entorno urbano y fortalecer la planeación y gestión territorial.

4.4 DE ORDEN DISTRITAL

A nivel distrital, diversas normas y políticas respaldan la intervención y mejoramiento de fachadas y culatas visibles como parte de procesos de revitalización urbana participativa, que buscan embellecer el entorno, promover la apropiación del espacio público y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

4.4.1 Decreto 322 de 2019 – Estrategia de concertación y parámetros de enlucimiento de fachadas

Artículo 2: Establece la estrategia de concertación con la comunidad para definir criterios de color y diseño en las intervenciones de enlucimiento, promoviendo la apropiación del entorno urbano mediante el mejoramiento estético de fachadas.

Artículo 3: Faculta a la Secretaría Distrital del Hábitat para intervenir en fachadas, cuando los propietarios no lo hagan, como medida correctiva orientada a la transformación y mejora del espacio público.

Estas disposiciones avalan la participación institucional en el tratamiento de culatas como elementos relevantes en el paisaje urbano, especialmente en zonas consolidadas o vulnerables.

4.4.2 Decreto 555 de 2021 – Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.

Artículo 5 – Objetivos del ordenamiento territorial: La revitalización de sectores estratégicos incluye acciones de embellecimiento, mejoramiento integral y conservación del tejido urbano, buscando cualificar barrios y consolidar comunidades mediante intervenciones urbanas.

Artículo 103 – Principios rectores del ordenamiento: Establece la necesidad de dignificar el espacio público, animar las fachadas y restringir elementos que deterioran el entorno urbano. El tratamiento de culatas contribuye directamente a este objetivo, al mejorar la percepción del entorno y promover la habitabilidad.

Artículo 118 – Estrategias para la transformación de entornos construidos: Se promueve la participación ciudadana en el mejoramiento integral de barrios, lo cual puede incluir la intervención de culatas como parte de la mejora estética y funcional del entorno construido.

Artículo 504 – Formalización urbanística: Reconoce la necesidad de definir acciones públicas y privadas para el mejoramiento integral del asentamiento, incluyendo fachadas visibles que forman parte del entorno urbano.

Artículo 505 – Rol de la administración pública: La administración distrital puede intervenir directamente en barrios formalizados mediante programas de mejoramiento integral del hábitat, incluyendo la intervención de fachadas y culatas.

Artículo 550 – Pagarés y bonos de reforma urbana: Se contempla el financiamiento de proyectos de mejoramiento y rehabilitación de vivienda, infraestructura urbana y espacio público. Las culatas, como parte de la imagen urbana, pueden ser incluidas en estos programas para armonizar visual y funcionalmente los barrios.

4.4.3 Relación de la Iniciativa con el Plan Distrital de Desarrollo Acuerdo 927 de 2024 “Bogotá Camina Segura 2024 - 2027”

Artículo 5.1 – Bogotá avanza en seguridad: Se promueve la construcción de una ciudad segura, donde el entorno físico favorezca el arraigo, la confianza y el respeto. El tratamiento de culatas contribuye a mejorar la imagen urbana y fortalecer la percepción de seguridad.

Artículo 8.5 – Programa 5. Espacio público seguro e inclusivo: Establece que el embellecimiento de fachadas y otras expresiones culturales en el espacio público son fundamentales para fortalecer la convivencia, el patrimonio y el derecho ciudadano a una ciudad estética y segura.

Artículo 14.1 – Programa 23. Ordenamiento territorial sostenible y participativo: Promueve la apropiación del espacio público mediante arte urbano y participación ciudadana. Las culatas, como lienzos visibles y frecuentemente descuidados, pueden convertirse en puntos estratégicos de intervención artística y comunitaria.

Artículo 15 – Propósito del objetivo “Bogotá Confía en Su Gobierno”: Se prioriza el gasto público eficiente y la articulación interinstitucional para el desarrollo territorial. La intervención en culatas puede integrarse como una acción de bajo costo y alto impacto para fortalecer la imagen de los barrios.

Artículo 16.2 – Programa 33. Fortalecimiento institucional: Resalta la importancia de la articulación entre entidades públicas, sector privado y ciudadanía para el mantenimiento y embellecimiento del espacio urbano.

Artículo 167 – Instrumentos de aprovechamiento económico del espacio público: Se promueve la gestión integral del espacio público, incluyendo el embellecimiento de elementos arquitectónicos visibles como fachadas y culatas, mediante instrumentos administrativos y financieros.

5. COMPETENCIA

De conformidad con las disposiciones que facultan al Concejo de Bogotá para desarrollar su función normativa, se encuentra que esta Corporación cuenta con la competencia y la iniciativa para dictar normas en pro del espacio público y el bienestar general. Este proyecto de Acuerdo se inscribe dentro de dichas atribuciones, al proponer una estrategia de mejora territorial que articula diversos actores institucionales y comunitarios.

En primer lugar, La Constitución Política en su artículo 313 dispone:

“ARTÍCULO 313. Corresponde a los Concejos:

- 1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio [...].*

En cuanto al orden legal, se encuentra la competencia a través del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 - Estatuto Orgánico de Bogotá, el cual establece las atribuciones del Concejo Distrital:

“ARTÍCULO 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito [...].”

25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes.

Siendo lo anterior, se concluye que el Concejo de Bogotá tiene competencia para presentar, conocer, debatir y pronunciarse sobre este proyecto de acuerdo.

6. IMPACTO FISCAL

En cumplimiento de lo establecido por la Ley 819 de 2003 *“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”* según lo dispuesto en su artículo 7:

“Artículo 7º. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

Esta propuesta normativa no genera un impacto fiscal adicional, considerando que esta iniciativa, se encuentra ya prevista dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones, dentro del presupuesto asignado y en otras disposiciones distritales vigentes, entre estas el Plan Distrital de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial. Por lo anterior, la ejecución de esta iniciativa no requiere recursos adicionales a los ya aprobados.

Sin embargo, se solicita a la Secretaría Distrital de Hacienda, el concepto sobre esta iniciativa con el fin de conocer el análisis respecto del impacto de la misma, sin ignorar que, según la Sentencia C-911 de 2007 de la Corte Constitucional, en donde manifiesta que el impacto fiscal de las normas no puede convertirse en impedimento para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa.

Al respecto, *“Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirán a concederle una forma de poder de veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. (...), es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda.”*

Cordialmente,

SANDRA FORERO RAMÍREZ

Concejal de Bogotá D.C.

Partido Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO NO 745 DE 2025**PRIMER DEBATE****"POR EL CUAL SE PROMUEVEN ESTRATEGIAS PARA LA INTERVENCIÓN DE CULATAS RESULTANTES DE PREDIOS ADQUIRIDOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA LA MOVILIDAD"****EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 1 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia y el numeral 1 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer estrategias para la intervención de culatas urbanas expuestas, resultantes de predios adquiridos para la construcción de proyectos de infraestructura pública para la movilidad

ARTÍCULO 2. LINEAMIENTOS. La administración distrital deberá adoptar una estrategia para la intervención de culatas que cumplan con los siguientes lineamientos:

1. Integración con el entorno urbano inmediato
2. Intervenciones reversibles y de bajo impacto en las edificaciones
3. Sostenibilidad técnica y ambiental
4. Claridad formal y legibilidad visual

ARTÍCULO 3. MANUAL TÉCNICO DE INTERVENCIÓN. La Administración Distrital dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Acuerdo, coordinará con las entidades competentes, la elaboración conjunta del Manual Técnico de Intervención de Culatas resultantes de predios adquiridos para proyectos de infraestructura pública para la movilidad de Bogotá, que establecerá criterios obligatorios para orientar las intervenciones en estas superficies.

ARTÍCULO 4. ALIANZAS: La administración distrital promoverá alianzas con universidades, centros de estudio, organizaciones culturales, empresas privadas y comunidades, mediante estrategias que incluyan pintura e intervención cromática, muros verdes modulares y arte urbano, de conformidad con el Manual Técnico de Intervención de Culatas de Bogotá y la normatividad vigente.

ARTÍCULO 5. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 746 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE PROTEJAN LA SEGURIDAD VIAL EN LA RED DE CICLORRUTAS DEL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”****1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO:**

Este Proyecto de Acuerdo tiene como objeto establecer los lineamientos para la elaboración y construcción de estrategias que le permitan a la Administración Distrital proteger la seguridad vial de los actores más vulnerables en la red de ciclorrutas de toda la ciudad. Lo anterior, con el fin de garantizar una mayor seguridad en estas vías, aumentar y mejorar los viajes en bicicleta y en otros vehículos sostenibles y seguros, y promover el uso y disfrute de estas vías por niños, niñas, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y ciudadanía en general. Esto, con el propósito de garantizar el derecho que tienen los bogotanos a moverse de forma segura y sostenible.

2. SUSTENTO JURÍDICO**1.1 NORMAS NACIONALES****1.1.1. Constitución Política:**

- **Artículo 24:**

Consagra el derecho fundamental que tenemos todos los colombianos a circular libremente por el territorio nacional, con las limitaciones que establezca la ley.

- **Artículo 365:**

Establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y, por lo tanto, tiene el deber de garantizar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Aunque este artículo dispone que estos servicios pueden ser prestados no sólo por el Estado —de forma directa o indirecta—, sino también por comunidades organizadas o particulares, aquel mantiene a su cargo la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios públicos.

1.1.2. Leyes

- **Ley 105 de 1993 – “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”**

Esta ley establece los principios rectores del transporte¹, entre los cuales, se destacan los siguientes: (i) de la intervención del Estado, el cual dispone que a este corresponde la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas; y (ii) de la seguridad, el cual hace referencia a que la seguridad de las personas constituye una prioridad del Sistema y del Sector Transporte. Igualmente, esta ley establece los principios del transporte público, entre los cuales, se resaltan los siguientes: (i) del acceso al transporte, el cual implica que el usuario pueda transportarse mediante el medio y modo que escoja en buenas condiciones de acceso, comodidad, calidad y seguridad; y (ii) del transporte intermodal, el cual implica que las autoridades competentes promoverán el mejor comportamiento intermodal, favoreciendo la sana competencia entre modos de transporte, así como su adecuada complementación².

- **Ley 769 de 2002 – “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.**

Esta ley rige en todo el territorio nacional y regula la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos, por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o por las vías privadas que internamente circulen vehículos. También regula la actuación y los procedimientos de las autoridades de tránsito. Igualmente señala que el derecho que tiene todo colombiano a circular libremente se encuentra sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades, para garantizar la seguridad y comodidad de los habitantes, la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público. Además establece como principios rectores del Código Nacional de Tránsito Terrestre, la seguridad de los usuarios, la movilidad, la calidad, la oportunidad, el cubrimiento, la libertad de acceso, la plena identificación, la libre circulación, la educación y la descentralización³.

Concretamente, el artículo 3° define como autoridades de tránsito, entre otras, a los siguientes: (i) Ministerio de Transporte; (ii) gobernadores y alcaldes; (iii) organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital; (iv) Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte; (v) y agentes de tránsito y transporte.

- **Ley 1083 de 2006 – “Por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana sostenible y se dictan otras disposiciones”.**

En el artículo 1° se regulan los planes de movilidad sostenible y segura para municipios, distritos y áreas metropolitanas, y se dispone que en estos mecanismos se dará prelación a los medios de transporte no motorizados (peatón y bicicleta) y al transporte público con tecnología de bajas o cero emisiones.

¹ Ley 105 de 1993. Artículo 2.

² Ley 105 de 1993. Artículo 3.

³ Ley 769 de 2002. Artículo 1.

- **Ley 1811 de 2016 – “Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito.”**

En el artículo 1° se establece que esta ley tiene por objeto incentivar el uso de la bicicleta como medio principal de transporte en todo el territorio nacional; así como, aumentar el número de viajes en bicicleta, avanzar en la mitigación del impacto ambiental que generan los vehículos automotores y mejorar la movilidad urbana. Como mecanismos para incentivar el uso de la bicicleta, se resaltan, entre otros, los siguientes: (i) los funcionarios públicos tendrán derecho a medio día laboral libre remunerado por cada 30 veces que demuestren haber llegado a trabajar en bicicleta (artículo 5); y (ii) las entidades públicas habilitarán como mínimo el 10% de los cupos que tengan para el estacionamiento de vehículos automotores para bicicletas y, en caso de que el cupo sea inferior a 120 estacionamientos de automotores, se garantizará un mínimo de 12 cupos para bicicletas (artículo 6).

- **Ley 2251 de 2022 – “Por la cual se dictan normas para el diseño e implementación de la política de seguridad vial con enfoque de sistema seguro y se dictan otras disposiciones Ley Julián Esteban”**

Esta ley establece disposiciones normativas que orienten la formulación, implementación y evaluación de la política pública de seguridad vial con el enfoque de sistema seguro. En su artículo 2° señala los principios de seguridad vial, entre los cuales se resaltan, entre otros, los siguientes: (i) sistema seguro, el cual tiene en cuenta la vulnerabilidad de las personas a las lesiones graves causadas por accidentes de tránsito, y reconoce que el sistema se debería concebir para tolerar el error humano; (ii) seguridad vehicular, el cual establece que las normas técnicas en el diseño, la concepción, la fabricación, el ensamblaje, la importación, la comercialización y el mantenimiento de vehículos automotores, deben garantizar la protección a la vida, la integridad personal y la salud, tanto a los usuarios de los vehículos, como a los usuarios vulnerables fuera de él (peatones, ciclistas y motociclistas); y (iii) seguridad en las vías, el cual implica que los cuerpos operativos de control de tránsito, del ámbito nacional, deben intervenir y ejercer el control de las normas de tránsito a los usuarios de las vías en todos los municipios del país; para garantizar un alto nivel de cumplimiento y luchar contra su transgresión.

- **Ley 2486 de 2025 – “Por medio de la cual se regula la circulación y se promueve el uso de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana, como alternativas de movilidad sostenible”**

Esta norma tiene por objeto regular la circulación de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana y promover el uso de dichos vehículos como medios de transporte personal, que constituyen alternativas de movilidad urbana sostenible. También define los Vehículos Eléctricos Livianos de Movilidad Personal Urbana (VELMPU), como “vehículos asistidos o impulsados por un motor eléctrico, de peso reducido, diseñados para uso individual en entornos urbanos, que cumplen con las características y especificaciones técnicas definidas por el Ministerio de Transporte para circular por la ciclo-

infraestructura y las vías permitidas, en los términos de la presente ley. La potencia nominal de estos vehículos no podrá exceder los 1000W”.

Igualmente, la norma permite que los VELMPU circulen a máximo 25 km/h en ciclo-infraestructura y a 40 km/h en demás vías permitidas. Adicionalmente, la norma exime a estos vehículos y, a los demás vehículos eléctricos cuyo peso, incluyendo su batería, no supere los 60 km, o que, teniendo un peso superior, no puedan desarrollar velocidades superiores a 40 km/h, de matrícula, licencia de conducción y SOAT.

1.1.3. Decretos del orden nacional

- **Decreto 798 de 2010 – “Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1083 de 2006”**

Esta norma reglamenta los estándares urbanísticos básicos para el desarrollo de la vivienda, los equipamientos y los espacios públicos, necesarios para su articulación con los sistemas de movilidad, principalmente con la red peatonal y de ciclorrutas que complementen el sistema de transporte, y establece las condiciones mínimas de los perfiles viales al interior del perímetro urbano de los municipios y distritos que hayan adoptado un plan de ordenamiento territorial, en los términos del literal a) del artículo 9° de la Ley 388 de 1997⁴.

- **Decreto 1430 de 2022 - Por medio del cual se aprueba el "Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031"**

Esta norma aprueba el Plan Nacional de Seguridad Vial para la vigencia 2022 – 2031 y establece como áreas de acción y objetivos generales de las bases estratégicas de dicho plan, entre otros los siguientes:

Área de Acción	Objetivo General
Velocidades seguras	1. Fomentar la conducción de vehículos a velocidades seguras en las vías del país.
Infraestructura vial segura	1. Proteger la vida desde el diseño, construcción, mejoramiento y conservación de la infraestructura vial. 2. Mitigar el riesgo en puntos, tramos y sectores críticos de siniestralidad. 3. Ascender hacia tecnologías y procesos de alto reconocimiento internacional en dispositivos y señalización para la infraestructura segura.
Comportamiento seguro en los actores viales	1. Incentivar los comportamientos seguros por parte de los actores viales

⁴ Ley 388 de 1997. Artículo 9: “PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. El plan de ordenamiento territorial que los municipios y distritos deberán adoptar en aplicación de la presente ley, al cual se refiere el artículo 41 de la Ley 152 de 1994, es el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Los planes de ordenamiento del territorio se denominarán: // a) Planes de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los distritos y municipios con población superior a los 100.000 habitantes; (...)”.

Cumplimiento de normas de tránsito en materia de seguridad vial	1. Consolidar el cumplimiento de las normas de tránsito que propenden por la seguridad vial como estrategia fundamental para la protección de la vida.
Atención integral a las víctimas de siniestros viales	1. Fortalecer la atención integral y rehabilitación a víctimas de accidentes de tránsito (siniestros viales). 2. Mejorar la calidad de la atención inicial a las personas lesionadas en un accidente de tránsito (siniestro vial). 3. Fortalecer el acceso para la atención hospitalaria y la rehabilitación física, mental y social de las víctimas de accidentes de tránsito (siniestros viales). 4. Fortalecer el acompañamiento psicológico, social y jurídico que se les brinda a las víctimas de accidentes de tránsito (siniestros viales).
Gobernanza	1. Fortalecer los principios de la gobernanza en la gestión de la seguridad vial bajo el enfoque sistema seguro. 2. Fortalecer las políticas públicas territoriales para la protección de la vida de los actores viales. 3. Articular el sector público con los actores privados, sociales y académicos en la implementación de la política de seguridad vial.
Gestión del Conocimiento	1. Fortalecer la gestión del conocimiento acerca del fenómeno de siniestralidad vial como base para la formulación e implementación de la política pública en seguridad vial.

1.2 DOCUMENTOS CONPES DEL ORDEN NACIONAL

- **CONPES 3991 del 14 de abril de 2020: “Política Nacional de Movilidad Urbana y Regional”**

En este documento se identificó como objetivo general proporcionar lineamientos para la gestión integral de la movilidad urbana y regional, con el fin de contribuir al bienestar social, la protección del ambiente y el crecimiento económico de las ciudades. Además, se establecieron como objetivos específicos, los siguientes: (i) mejorar la calidad de la movilidad reduciendo las externalidades negativas del transporte —como la contaminación, la siniestralidad y la congestión— para elevar la calidad de vida y la productividad urbana; (ii) fortalecer la capacidad institucional nacional y local para planear, ejecutar y gestionar estrategias integrales de movilidad urbana y regional; y (iii) adoptar modelos de financiamiento que aseguren la sostenibilidad y calidad del transporte público.

1.3 OTROS DOCUMENTOS

- **Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas del Ministerio de Transporte**

Este documento define los lineamientos de diseño e implementación de infraestructura para bicicletas en el país, y las condiciones bajo las cuales se debe desarrollar. Explica que una ciudad ciclo-inclusiva es aquella en la que cualquier persona puede usar la bicicleta de forma segura y cómoda para todos sus desplazamientos. Además, menciona que los modos prioritarios de transporte son los menos contaminantes, de menor consumo energético y que generan menor riesgo. Estos son, el peatón y la bicicleta. Por esta razón, los modos prioritarios deben materializarse en la prioridad en las vías, y el diseño de la infraestructura, su gestión y las inversiones deben estar direccionadas a alcanzar dicho objetivo.

1.4 NORMAS DISTRITALES

- **Acuerdo Distrital 668 de 2017 – “Por medio del cual se crea el programa “Parquea tu bici”, se institucionaliza la semana de la bicicleta, el día del peatón en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”**

Esta norma crea el programa “parquea tu bici”, que tiene como objeto el desarrollo de acciones pedagógicas e informativas dirigidas al cumplimiento de obligaciones legales que recaen sobre los parqueaderos para bicicletas, e institucionaliza la semana de la bicicleta.

- **Acuerdo Distrital 708 de 2018 – “Por medio del cual se adoptan los lineamientos de la política pública de la bicicleta en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”**

Esta norma tiene como objeto establecer los lineamientos para la elaboración y la construcción de la Política Pública de la Bicicleta en el Distrito Capital, con el fin de garantizar el derecho que tienen los bogotanos a elegir la bicicleta como medio de transporte. De acuerdo con el artículo 2°, esta política pública se orientará, entre otros, por los siguientes principios: (i) accesibilidad, el cual implica garantizar a toda la población, con o sin limitaciones cognitivas o físicas, el uso de la bicicleta y de toda su infraestructura; (ii) corresponsabilidad, el cual consiste en promover acciones conjuntas entre Administración Distrital, ciclistas y usuarios de otros medios de transporte con el propósito de asumir una corresponsabilidad en torno al uso de la bicicleta; (iii) crecimiento sostenible, el cual busca asegurar el uso de la bicicleta en relación recíproca con el desarrollo, la estructura económica de la ciudad y el disfrute del medio ambiente; (iv) humanización, el cual señala que el usuario de la bicicleta será el fin último de toda decisión; (v) igualdad, el cual implica garantizar que el ciclista tenga las mismas condiciones que los usuarios de otros medios de transporte; (vi) ciudad saludable, el cual busca lograr un entorno urbano que genere un impacto directo en la salud de los habitantes, además de ayudar en la movilidad urbana; (vii) integración multimodal, el cual tiene como fin asegurar la articulación e interconexión entre todos los medios de transportes de la ciudad, para facilitar el acceso, la cobertura y la complementariedad de los ciclistas en la movilidad de Bogotá; (viii) libertad, el cual busca garantizar a todos los ciudadanos la posibilidad de elegir la bicicleta como medio de transporte; (ix) participación, el cual implica reconocer a los ciclistas como actores activos en el desarrollo de la Política Pública de la Bicicleta; y (x) planificación, el cual tiene como fin adoptar toda decisión en el marco de la Política Pública de la Bicicleta, con sustento

en criterios de planeación y organización, siguiendo el ritmo de crecimiento demográfico y territorial de la ciudad.

Por su parte, el artículo 3° establece los lineamientos de la Política Pública de la Bicicleta de la siguiente manera: (i) fomento y promoción, el cual promueve la mejora de la movilidad en la ciudad a través del desarrollo de acciones que reconozcan el uso de la bicicleta como medio de transporte que ayuda a la salud de los ciudadanos, así como a la protección del ambiente.; (ii) multimodalidad, el cual asegura la articulación e interconexión entre todos los medios de transporte de la ciudad, para facilitar el acceso, la cobertura y la complementariedad de los ciclistas en la movilidad de Bogotá; (iii) garantía de infraestructura, el cual reconoce el derecho al uso de la bicicleta como medio de transporte habitual vinculado a una infraestructura adecuada que incluya vías exclusivas, parqueaderos, accesibilidad e interconexión con los otros medios de transporte; (iv) pedagogía y cultura ciudadana, el cual dispone que los ciclistas deben comportarse garantizando su derecho, pero también sus deberes, por lo que es necesario realizar campañas pedagógicas dirigidas a todos los ciudadanos sobre el uso y respeto de la bicicleta como medio de transporte habitual; (v) seguridad vial, el cual señala que los ciclistas deberán tener la posibilidad de acceder a un manual de uso de la bicicleta, con el fin de conocer las medidas de seguridad necesarias que permitan salvaguardar su vida y bienestar, así como la de los demás ciudadanos que hagan uso de otros medios de transporte; y (vi) seguridad personal, el cual reconoce el uso de la bicicleta como medio habitual de transporte que debe transitar con tranquilidad, sin temor al hurto del vehículo o a que se ponga en riesgo la vida del conductor.

- **Acuerdo Distrital 827 de 2021 – “Por medio del cual se promueve el uso de la bicicleta como un medio de transporte estratégico y prioritario durante la construcción de obras de infraestructura en la ciudad, y se dictan otras disposiciones”**

Esta norma busca promover el uso prioritario y estratégico de la bicicleta como uno de los principales medios de transporte durante la construcción de obras de infraestructura en la ciudad. Así, la Secretaría Distrital de Movilidad en el marco de los Planes de Manejo de Tránsito, propenderá por que las obras de infraestructura en el Distrito prioricen y promuevan la movilidad sostenible de peatones y ciclistas.

- **Acuerdo Distrital 927 de 2024 – “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura””**

Esta norma adopta el Plan Distrital de Desarrollo 2024 – 2027 y en el artículo 14.4 establece el Programa 26. Movilidad Sostenible del Objetivo Estratégico “Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática”. En este programa se gestionará la expansión del sistema de bicicletas compartidas y/o públicas en otras zonas de la ciudad, con el fin de ahorrar tiempo, mitigar la congestión del tráfico, promocionar estilos de vida más saludables, reducir la contaminación del aire y del ruido, entre otros. En este sentido, la ciudad tendrá más oferta de medios de transporte sostenibles y multimodales, teniendo como uno de

los ejes principales el uso de la bicicleta. Así, se incorporará la bicicleta al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y se fortalecerá la articulación interinstitucional de la Política Pública de la Bicicleta.

- **Decreto Distrital 569 de 2014 – “Por medio del cual se adopta el Sistema de Bicicletas Públicas para la ciudad de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones relativas al uso de la bicicleta en el Distrito Capital”**

Esta norma adopta el Sistema de Bicicletas Públicas de Bogotá “SBP”, que consiste en el conjunto de elementos, equipos y operaciones logística, para facilitar a los ciclousuarios su movilización utilizando bicicletas de uso público. Además establece como objetivo de este sistema, promover el uso de la bicicleta como un mecanismo alternativo de transporte, que favorece la salud pública, genera beneficios en materia ambiental, de movilidad y de intercambio modal.

- **Decreto Distrital 456 de 2018 – “Por medio del cual se declara Bogotá una capital mundial de la bicicleta”**

Esta norma declara a Bogotá como “Capital Mundial de la Bicicleta”, con el fin de posicionarla como un destino turístico seguro y amigable para los ciclistas, sensibilizar a los conductores sobre la prioridad de los bici usuarios y promover inversiones distritales que garanticen una circulación segura, confiable y recreativa. Esta declaración busca contribuir a una movilidad sostenible y a la reducción de emisiones contaminantes en el Distrito Capital.

- **Decreto Distrital 480 de 2022 – “Por medio del cual se crea la Comisión intersectorial de la Bicicleta del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”**

Esta norma crea la Comisión Intersectorial de la Bicicleta del Distrito Capital para fortalecer la gestión, fomentar el uso de la bicicleta y la economía centrada en ella, a través del seguimiento institucional en la implementación del Documento CONPES D.C. 15 de 2021 “Política Pública de la Bicicleta 2021-2039”.

- **Decreto Distrital 497 de 2023 – “Por el cual se adopta el Plan de Movilidad Sostenible y Segura - PMSS - para Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”**

Esta norma adopta el Plan de Movilidad Sostenible y Segura -PMSS- para el Distrito Capital, en sus suelos urbano, rural y de expansión. En su artículo 8 establece como uno de los objetivos sectoriales de movilidad sostenible y segura, consolidar un sistema de movilidad sostenible y descarbonizado, pasando de una ciudad dependiente de buses y automóviles a un sistema multimodal de transporte público desde lo Regional a lo Local, basado, entre otros, en 499 km de ciclo-infraestructura nuevos.

En su artículo 10 se establecen como estrategias para cumplir con dicho objetivo sectorial, entre otras, las siguientes: (i) mejorar la asequibilidad y sostenibilidad del sistema de transporte público de pasajeros; y

(ii) descarbonizar el Transporte Público de Pasajeros en la ciudad, mediante la consolidación de ciclo-infraestructura de escala distrital, entre otras.

Además, frente a la estrategia de descarbonizar el Transporte Público de Pasajeros, en el artículo 14 se dispone que esta busca mejorar las condiciones urbanísticas de Bogotá e impulsar el uso de la bicicleta en las escalas regional y distrital, con lo cual, la Administración Distrital deberá desarrollar proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible e implementar ciclo-infraestructura conectada con el SITP y el sistema de transporte regional.

1.5 DOCUMENTOS CONPES DISTRITALES

• CONPES D.C. 15 de 2021 “Política Pública de la Bicicleta 2021 - 2039”:

En este documento se identificó como objetivo general de la Política Pública de la Bicicleta, “[m]ejorar las condiciones físicas, socioeconómicas y culturales de la ciudad para el uso y disfrute de la bicicleta. Así, se establecieron como objetivos específicos de la política pública: (i) “Más seguridad personal”, lo que implica optimizar las condiciones de seguridad personal para la ciudadanía que usa la bicicleta en Bogotá; (ii) “Mayor seguridad vial”, lo que implica proteger a los ciclistas de la ciudad frente a siniestros viales asociados al uso de la bicicleta; (iii) “Más y mejores viajes en bicicleta”, lo que implica mejorar la experiencia de viaje de los ciclistas en Bogotá; (iv) “Más bici para todas y todos”, fortalecer la cultura en torno a la bicicleta; y (v) “Bogotá polo productor de la bicicleta”, lo que implica fortalecer las actividades económicas asociadas al uso y disfrute de la bicicleta.

3. ANTECEDENTES DE PROYECTOS DE ACUERDO SIMILARES

PROYECTO DE ACUERDO	AUTOR	OBJETO	TRÁMITE
650 de 2025	HC Julián Espinosa	“Por medio del cual se crea el sistema de voluntarios bici-usuarios en seguridad para ciclorutas de la Capital y se dictan otras disposiciones”	Solicitud de desarchivo del PA 053 de 2025
717 de 2024	HC Rolando Alberto González García	“Por el cual se establecen lineamientos para promover la implementación de ciclotalleres en vía para los biciusuarios de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”	Archivado
276 de 2021	H.C. Ana Teresa Bernal Montañez	“Por medio del cual se promueve una estrategia para ampliar el acceso al Sistema Público de	Archivado

		Bicicletas y se dictan otras disposiciones”	
234 de 2019	Hs.Cs. Hosman Yaith Martínez Moreno, María Fernanda Rojas Mantilla, Edward Anibal Arias, María Clara Name Ramírez, Dora Lucía Bastidas Ubate y Jorge Eduardo Torres Camargo	“Por medio del cual se crean las Zonas Adelantadas para uso exclusivo de Bicicletas”	Archivado
446 de 2018	Hs.Cs. Yefer Yesid Vega Bobadilla, Pedro Julián López Sierra, Rolando Alberto González García, Juan Felipe Grillo Carrasco, Julio Cesar Acosta Acosta, José David Castellanos Orjuela, César Alfonso García Vargas, Roberto Hinestrosa Rey, Jorge Lozada Valderrama+E414 y Celio Nieves Herrera	“Por medio del cual se establece el pito o silbato como medida de seguridad para el ciclista, la bici-persona y el bici-usuario en el Distrito Capital”	Archivado
495 de 2018	Hs.Cs. Hosman Yaith Martínez Moreno, María Fernanda Rojas Mantilla, María Clara Name Ramírez, Dora Lucía Bastidas Ubate, Edward Anibal Arias Rubio y Jorge Eduardo Torres Camargo	“Por medio del cual se crean las Zonas Adelantadas para uso exclusivo de Bicicletas”	Archivado
172 de 2018	Hs.Cs. Rolando Alberto González García, Julio César Acosta Acosta, José David Castellanos Orjuela, Pedro Julián López Sierra, César Alfonso García Vargas, Juan Felipe Grillo Carrasco, Roberto Hinestrosa Rey, Jorge Lozada Valderrama, Yefer Yesid Vega Bobadilla y Gloria Elsy Díaz Martínez	“Por el cual se establecen acciones para promover el Servicio de Asistencia Técnica en Vía para los usuarios de bicicletas de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”	Archivado
410 de 2017	Hs.Cs. José David Castellanos Orjuela, Julio César Acosta Acosta, Yefer Yesid Vega Bobadilla, Roberto Hinestrosa Rey, César Alfonso García Vargas, Jorge Lozada Valderrama, Pedro Julián López Sierra, Juan Felipe Grillo Carrasco y Rolando Alberto González García	“Por medio del cual se crea el Fondo para la Construcción y Mantenimiento de infraestructura de bicicletas, se establecen estrategias de recaudo voluntario para dicho fondo y se dictan otras disposiciones en el Distrito Capital”	Archivado
188 de 2011	H.C. Carlos Orlando Ferreira Pinzon	“Por medio del cual se insta a la Administración	Archivado

		Distrital a reglamentar el uso de las bicicletas eléctricas en la red de ciclorrutas de la ciudad de Bogotá”	
--	--	--	--

4. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DEL PROYECTO DE ACUERDO

4.1. La bicicleta y la ciclo-infraestructura en Colombia y Bogotá

Desde hace más de un siglo, las bicicletas han sido utilizadas con fines recreativos, de deporte y de transporte en el país. En otras palabras, “la bicicleta es un ícono en Colombia”⁵. En relación con la bicicleta como medio de transporte, esta se consolidó en la primera mitad del siglo XX, pero luego fue olvidada por el aumento del uso de vehículos motorizados. “La imagen de la bicicleta se vinculó así al deporte y a la pobreza, al juego infantil o a la falta de recursos para alcanzar la ansiada motorización”⁶. No obstante, en la última década del siglo XX varios grupos sociales empezaron a exigir que se tuviera en cuenta la bicicleta como medio de transporte idóneo para las ciudades del país. De este modo, la recuperación del uso cotidiano de la bicicleta se relacionó con la contaminación, el cambio climático y la equidad en los desplazamientos con estos vehículos⁷.

Este cambio en el discurso se evidenció y benefició con el éxito de las ciclovías recreativas, dominicales y nocturnas, así como con el auge del deporte ciclista en la década de los 80s, impulsado por el éxito de los deportistas nacionales en competencias a nivel nacional e internacional⁸. En este panorama la infraestructura para el uso de bicicletas, o ciclo-infraestructura, cumple un rol fundamental en “generar una mayor legitimidad de este medio de transporte”⁹, pues una mala calidad y experiencia en estas vías puede tener un impacto negativo en la imagen y uso de la bicicleta. Por eso, es esencial garantizar una adecuada planeación, diseño y construcción de estas vías, y una buena adaptación a las exigencias físicas, económicas, sociales y culturales de cada lugar en que se van a implementar.

En el caso de Bogotá, la bicicleta también es un ícono de la capital y parte de su identidad colectiva. Desde los años 70s, organizaciones y colectivos sociales han demandado y promovido la creación de espacios exclusivos para el uso y disfrute de la bicicleta. Por ejemplo, el 15 de diciembre de 1974 se llevó a cabo el primer ensayo de lo que hoy se conoce como ciclovía, en 1976 la Administración Distrital decidió destinar vías estratégicamente situadas para el tránsito exclusivo de ciclistas y peatones, y el 7 de junio de 1976 se expidieron los Decretos 566 y 657 mediante los cuales se crearon las ciclovías.

De tal forma, gracias a la movilización ciudadana, se logró que en 1983 Bogotá tuviera 82 km de ciclovía y en 2020 128 km¹⁰. Igualmente, entre 1998 y 2000, producto de los proyectos de renovación vial a través

⁵ MINISTERIO DE TRANSPORTE. Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas. Bogotá. 2016. Pág. 17. Información disponible en: <https://mintransporte.gov.co/publicaciones/4853/publicacionesmovilidad-sostenibleguia-de-ciclo-infraestructura-para-ciudades-colombianas/>

⁶ Ibidem. Pág. 17.

⁷ Ibidem. Pág. 17.

⁸ Ibidem. Pág. 18.

⁹ Ibidem. Pág. 19.

¹⁰ ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Documento CONPES D.C. 15 de 2021. Información disponible en: https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/doc_conpes_de_pp_bicicleta_-20210224_vconpes_0.pdf

de troncales de Transmilenio y otros tramos estratégicos para conectar la ciudad, se logró incluir la red de ciclorrutas. Esta red inició con 10 km, en 2016 llegó a 448 km, en 2020 alcanzó 553 km¹¹ y en 2025 cuenta con 661 km. Además, como meta de la ciudad se tiene proyectado construir 754 km nuevos de ciclorrutas entre 2021 y 2035.

Este aumento en la red de ciclorrutas tiene una razón de ser: casi un millón de viajes diarios que se realizan en Bogotá (sin incluir los desplazamientos menores de 15 minutos) son en bicicleta. Según la Encuesta de Movilidad 2023¹², de los 12.143.325 de viajes diarios que se realizan en Bogotá, el modo que tiene mayor participación es el transporte público con 4.211.486 viajes (34,68%), seguido del peatonal con 3.342.400 viajes (27,52%), el auto con 1.692.598 viajes (13,94%), la moto con 887.352 (7,31%) viajes y la bicicleta con 886.655 (7,30%) viajes.

Adicionalmente, en la ciudad se realizan actividades orientadas a la promoción del uso de la movilidad sostenible, como el Día sin Carro¹³ y la Semana de la Bicicleta que se realiza en la última semana de septiembre de cada año¹⁴. También en 2018, mediante el Decreto Distrital 456, se declaró a Bogotá como una “Capital Mundial de la Bicicleta”. Lo anterior, representa un gran reto para la ciudad que requiere de una actuación articulada entre la Administración Distrital y la sociedad civil, con el fin de garantizar una mayor seguridad en las ciclorrutas, aumentar y mejorar los viajes en bicicleta y en otros vehículos sostenibles y seguros, y promover el uso y disfrute de estas vías por la ciudadanía en general.

4.2. El aumento del uso de las ciclorrutas de Bogotá por vehículos potentes y veloces que ponen en riesgo la seguridad vial

Desde hace varios años, está cambiando la forma en que los ciudadanos se movilizan en el mundo, especialmente, como consecuencia del uso de vehículos livianos, eléctricos, potentes y veloces que circulan a más de 40 km/h. Por ejemplo, Taiwán es conocido por tener 20 millones de habitantes y 14 millones de ciclomotores o mopeds¹⁵. En Shanghái se estima que la flota de mopeds eléctricos ha crecido de 1.3 millones en 2006 hasta 10 millones en 2023¹⁶. Por su parte, el mercado mundial de ciclomotores eléctricos se valoró en 4.120 millones de dólares en 2022 y se espera que alcance los 27.240 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 23,58% durante el periodo de previsión 2023-2031¹⁷.

Aunque en Bogotá no se tienen cifras oficiales sobre el aumento de estos vehículos en las vías y su mercado, es claro que han incrementado exponencialmente en los últimos años. También se ha

¹¹ Ibidem.

¹² ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Encuesta de Movilidad 2023. Información disponible en: <https://observatorio.movilidadbogota.gov.co/sites/observatoriodes.movilidadbogota.gov.co/files/2024-05-29/encuesta/Cartilla%20Encuesta%20de%20Movilidad%202023.pdf>

¹³ Decreto Distrital 036 de 2023.

¹⁴ Acuerdo 668 de 2017.

¹⁵ PROBOGOTA, 2025. Mesa de expertos en movilidad: Micromovilidad y red bici.

¹⁶ PROBOGOTA, 2025. Mesa de expertos en movilidad: Micromovilidad y red bici.

¹⁷ SLAWOMIR DOROKI, 2025. The electric powered two- wheeled vehicle market in both global and European perspectives.

identificado su uso indebido por andenes y ciclorrutas, vías pensadas para un tránsito lento y seguro, poniendo en riesgo la seguridad vial.

Particularmente, las ciclorrutas son vías diseñadas con radios de giro, anchos de carril, visibilidad en intersecciones y señalización horizontal/vertical pensada para velocidades bajas y masas de bicicletas convencionales. Por eso, conducir a más de 25 km/h por vías diseñadas exclusivamente para bicicletas, aumenta el riesgo de salirse del carril o invadir otros espacios, la visibilidad insuficiente en curvas o cruces para detectar a tiempo a peatones o ciclistas lentos, y la imposibilidad de percibir con suficiente antelación la señalización necesaria para reaccionar a mayores velocidades. Esto pone en riesgo la vida e integridad de los usuarios más vulnerables en el espacio público —como son los peatones y ciclistas—, y programas hitos de movilidad sostenible y segura de la ciudad —como “Al Colegio en Bici” y “Ciempiés”—.

Dichos riesgos se evidencian en las cifras de accidentes de tránsito. Según, la Secretaría Distrital de Movilidad, entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2025, se registraron en la ciudad 11.687 siniestros graves con vehículos como bicicletas, patinetas, motociclos y mototriciclos¹⁸. Concretamente, los accidentes con bicicletas son los más numerosos, ya que en este periodo se presentaron 11.108 siniestros, de los cuales 10.395 dejaron personas lesionadas y 411 fallecidos. Además el año 2021 fue el más crítico con 2.414 casos.

Después, siguen los accidentes con mototriciclos que registran 464 casos, con 439 lesionados y 10 fallecidos. Para este tipo de vehículos, los años más críticos fueron 2023 y 2024, con 105 y 108 registros, respectivamente. En relación los accidentes con motociclos, se presentaron 174 casos, con 143 lesionados y 10 fallecidos. El año más crítico para siniestros con motociclos fue 2024, el cual registró 35 casos. Por último, están las patinetas que registran 149 accidentes, 3 casos en 2020, 64 casos en 2024 y 28 casos en lo corrido de 2025.

Ahora bien, es necesario aclarar que puede existir un subregistro en las cifras de accidentes de tránsito con estos vehículos, ya que el mecanismo que se utiliza en el país para medir la siniestralidad vial —Informe Policial de Accidentes de Tránsito (IPAT)—, no incluye este tipo de vehículos. Esto debido a que el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial no actualizan este mecanismo desde el año 2012.

Por estas razones, y teniendo en cuenta que la movilidad sostenible está evolucionando y estos vehículos eléctricos llegaron para quedarse, es necesario establecer lineamientos que le permitan a la Administración Distrital crear estrategias para proteger la seguridad vial de los actores más vulnerables en la red de ciclorrutas de toda la ciudad. Lo anterior, con el objetivo de garantizar una mayor seguridad en las

¹⁸ EL TIEMPO. 2025. Secretaria de Movilidad de Bogotá rompe su silencio y advierte que nueva ley de vehículos eléctricos livianos pone en riesgo la seguridad vial. Información disponible en: <https://www.eltiempo.com/bogota/secretaria-de-movilidad-de-bogota-rompe-su-silencia-y-advierte-que-nueva-ley-de-vehiculos-electricos-livianos-pone-en-riesgo-la-seguridad-vial-3476130>

ciclorrutas, aumentar y mejorar los viajes en bicicleta y en otros vehículos sostenibles y seguros, y promover el uso y disfrute de estas vías por la ciudadanía en general.

5. RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Este Proyecto de Acuerdo se alinea directamente con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, en específico con el ODS 11¹⁹: Ciudades y comunidades sostenibles, al establecer lineamientos para la creación de estrategias que busquen promover la movilidad segura, accesible y equitativa (ONU, 2025). Estos lineamientos no solo tendrán como propósito mejorar las condiciones de seguridad vial para peatones y ciclistas, sino que promoverán entornos urbanos más inclusivos, especialmente para niñas, niños, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad. Así, se fomenta una ciudad pensada para las personas, que prioriza modos de transporte sostenibles y reduce la desigualdad en el acceso al espacio público y a la movilidad.

Asimismo, el proyecto aporta al cumplimiento del ODS 13²⁰: Acción por el clima, al incentivar el uso de la bicicleta y otros medios sostenibles y seguros como alternativas reales frente al transporte motorizado, reduciendo así las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector transporte (Pacto Mundial, 2024). La promoción activa de estos modos, sumada a un entorno seguro y una institucionalidad adecuada para su gestión, fortalece las capacidades del Distrito para enfrentar el cambio climático desde una política de movilidad sostenible y resiliente, adaptada a las necesidades de la ciudad y sus habitantes. Por último, el Proyecto de Acuerdo se articula con el ODS 8²¹: Trabajo decente y crecimiento económico, pues incentiva el crecimiento de sectores económicos vinculados con el uso de la bicicleta. La mejora de la infraestructura ciclística y el fortalecimiento institucional para su gestión generan condiciones favorables para dinamizar actividades como el comercio de bicicletas y accesorios, el mantenimiento y reparación, los servicios logísticos de última milla, el ciclismo turístico y urbano, y el desarrollo de innovaciones tecnológicas asociadas a la movilidad sostenible. En este sentido, este Proyecto de Acuerdo impulsa una economía local más resiliente, verde y sostenible, que abre oportunidades para emprendimientos y negocios de bajo impacto ambiental en el marco de una transición hacia modelos urbanos más sostenibles.

6. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

Este Concejo es competente para expedir la presente iniciativa de conformidad con lo establecido en la siguiente normatividad:

- **Constitución Política:** el artículo 313 establece como funciones a cargo de los concejos, entre otras, las siguientes: reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio (numeral 1); y las demás que la Constitución y la ley le asignen (numeral 10).

¹⁹ ONU. (2025). “Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”. Información disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/>

²⁰ Pacto Mundial. (2024). “ODS 13 Acción por el clima”. Red España. Información disponible en: <https://www.pactomundial.org/ods/13-accion-por-el-clima/>

²¹ ONU. (2023). “Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos”. Información disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/>

- **Decreto Ley 1421 de 1993** “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”: el artículo 12 establece como atribuciones que le corresponden al Concejo de Bogotá, entre otras, las siguientes: dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito (numeral 1); dictar normas de tránsito y transporte (numeral 19); y cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes (numeral 25).

7. ANÁLISIS DE IMPACTO FISCAL

La Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones” en su artículo 7 establece:

ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso.

Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces.

Esta iniciativa **no tiene un impacto fiscal** por cuanto no implica la apropiación de recursos adicionales a los sectores y entidades responsables de su implementación.

Además, el Proyecto de Acuerdo se articula de manera directa con las metas de producto establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo 2024 – 2027, bajo la línea estratégica “Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática”, específicamente en el eje de “*Movilidad Sostenible*”. En particular, se relaciona con las metas de conservar 142 kilómetros lineales de la red de cicloinfraestructura, construir 59 kilómetros adicionales, generar 5000 nuevos cupos de cicloparqueaderos seguros incluyendo portales, y poner en operación el 100% de 28 kms de ciclorrutas y 840.000 m2 de espacio público como parte de troncales nuevas de Transmilenio, al proponer lineamientos que busquen crear estrategias que fortalezcan

la operación, seguridad y disfrute de esta infraestructura. Lo anterior, teniendo en cuenta que el proyecto complementa estas metas al reconocer la importancia de integrar la red de ciclo-infraestructura al sistema general de movilidad urbana. En este sentido, el proyecto no solo contribuye a la expansión física de la infraestructura, sino también a su adecuada gestión, uso y sostenimiento, garantizando que los avances en infraestructura vayan acompañados de los componente institucionales, sociales y de seguridad vial necesarios.

8. PROYECTO DE ARTICULADO

PROYECTO DE ACUERDO NO 746 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE PROTEJAN LA SEGURIDAD VIAL EN LA RED DE CICLORRUTAS DEL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**

En ejercicio de las facultades que le confiere los numerales 1 y 10 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia y los numerales 1, 19 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993

ACUERDA:

Artículo 1. Objeto. El presente acuerdo tiene como objeto establecer lineamientos para la elaboración y construcción de estrategias que le permitan a la Administración Distrital proteger la seguridad vial de los actores más vulnerables en la red de ciclorrutas, con el fin de garantizar el derecho que tienen los ciudadanos a moverse de forma segura y sostenible.

Artículo 2. Principios. La formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las estrategias a que se refiere el artículo anterior, propenderán por la aplicación de los siguientes principios:

Accesibilidad. Asegurar a todas las personas, con o sin discapacidad, el uso y disfrute seguro de la red de ciclorrutas de toda la ciudad.

Seguridad vial. Garantizar la seguridad vial a los peatones, los ciclistas y los usuarios de otros vehículos sostenibles y seguros en la red de ciclorrutas de la ciudad.

Corresponsabilidad. Promover acciones conjuntas entre la Administración Distrital, la academia, los peatones, los ciclistas, los usuarios de otros vehículos sostenibles y seguros, y demás sociedad civil, con el fin de asumir una corresponsabilidad respecto al uso responsable y seguro de la red de ciclorrutas.

Igualdad. Garantizar que los peatones y los ciclistas se encuentren bajo las mismas condiciones de seguridad que los demás actores viales que tengan permitido hacer uso de la red de ciclorrutas.

Integración multimodal. Garantizar la articulación e integración de todos los modos de transporte de la ciudad, para facilitar el aumento y la mejora de los viajes en bicicleta y en otros vehículos sostenibles y seguros que tienen permitido transitar de forma segura por la red de ciclorrutas.

Participación. Reconocer a los peatones, los ciclistas y los usuarios de otros vehículos sostenibles y seguros, como actores activos en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las estrategias que establezca la Administración Distrital para garantizar la seguridad vial en la red de ciclorrutas.

Artículo 3. Lineamientos. La Administración Distrital propenderá por que las estrategias que se creen para proteger la seguridad vial de los actores más vulnerables en la red de ciclorrutas se orienten por los siguientes lineamientos:

Decisiones técnicas. Toda estrategia deberá tener un sustento técnico que respalde su implementación.

Seguridad vial. Toda estrategia deberá tener en cuenta las características técnicas de las vías que componen la red de ciclorrutas y los actores viales que tienen permitido hacer uso de estas, con el fin de garantizar la seguridad vial.

Fomento y promoción. Promover el uso y disfrute seguro de la red de ciclorrutas por niños, niñas, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y ciudadanía en general.

Pedagogía. Promover los derechos y deberes de los peatones, los ciclistas y los usuarios de otros vehículos sostenibles y seguros en la red de ciclorrutas, así como el cumplimiento de las normas y el respeto de las autoridades de tránsito.

Artículo 4. Cuerpo especial de agentes y guías de tránsito para la red de ciclorrutas de la ciudad. La Administración Distrital propenderá por que de manera progresiva y exclusiva se establezca un cuerpo especial de agentes de tránsito, guías de tránsito y demás personas que controlen, gestionen y vigilen el tránsito, para la red de ciclorrutas de toda la ciudad.

Artículo 5. Informes. La Administración Distrital, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, elaborará un informe integral para el Concejo de Bogotá, sobre el balance de la implementación de las disposiciones del presente acuerdo. Este informe integral se presentará cada 3 de junio, en el marco del Día Mundial de la Bicicleta.

Artículo 8. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Cordialmente,

JUAN DAVID QUINTERO RUBIO

Autor Principal

Concejal de Bogotá D.C.

DAVID SAAVEDRA MURCIA

Autor

Concejal de Bogotá D.C.

CRISTINA CALDERÓN RESTREPO

Autora

Concejal de Bogotá D.C.

FERNANDO LÓPEZ GUTIERRÉZ

Autor

Concejal de Bogotá D.C.

JUAN JAVIER BAENA MERLANO

Autor

Concejal de Bogotá D.C.

JESÚS DAVID ARAQUE MEJÍA

Autor

Concejal de Bogotá D.C.

JUAN MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ

Autor

Concejal de Bogotá D.C.

RICARDO CORREA MOJICA

Autor

Concejal de Bogotá D.C.

PROYECTO DE ACUERDO NO 747 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE ZONAS TRANQUILAS EN BOGOTÁ D.C. COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO**

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos para la promoción, delimitación, protección y gestión de zonas tranquilas en Bogotá D.C., con el fin de prevenir y mitigar los efectos nocivos de la contaminación acústica sobre la salud, la intimidad y la tranquilidad de la ciudadanía.

II. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente Proyecto de Acuerdo se encuentra fundamentado en las siguientes disposiciones legales:

Del orden Constitucional:

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Bloque de Constitucionalidad:**Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:****Artículo 12**

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

De orden legal:

Ley 99 de 1993: “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.”

ARTÍCULO 1. Principios Generales Ambientales. *La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales: (...)*

7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables.

Ley 1801 de 2016: "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana"

ARTÍCULO 33. Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas. *Los siguientes comportamientos afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas y por lo tanto no deben efectuarse:*

1. En el vecindario o lugar de habitación urbana o rural: Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con:

a) Sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia por su impacto auditivo

b) Cualquier medio de producción de sonidos o dispositivos o accesorios o maquinaria que produzcan ruidos, desde bienes muebles o inmuebles, en cuyo caso podrán las autoridades identificar, registrar, salvo sean originados en construcciones o reparaciones en horas permitidas;

c) Actividades diferentes a las aquí señaladas en vía pública o en privado, cuando trascienda a lo público, y perturben o afecten la tranquilidad de las personas. (...)

COMPORTAMIENTOS	MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Numeral 1	Multa General tipo 3; Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas.

Ley 232 de medio de la dictan normas funcionamiento de los establecimientos comerciales".

1995: "Por cual se para el

Artículo 2o. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, es obligatorio para el ejercicio del comercio que los establecimientos abiertos al público reúnan los siguientes requisitos:

a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del respectivo municipio.

Decreto 948 de 1995: REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.

Artículo 14°.- Norma de Emisión de Ruido y Norma de Ruido Ambiental. El Ministerio del Medio Ambiente fijará mediante resolución los estándares máximos permisibles de emisión de ruido y de ruido ambiental, para todo el territorio nacional.

Dichos estándares determinarán los niveles admisibles de precisión sonora, para cada uno de los sectores clasificados por el artículo 15 de este Decreto, y establecerán los horarios permitidos, teniendo en cuenta los requerimientos de salud de la población expuesta.

Las normas o estándares de ruido de que trata este artículo se fijarán para evitar efectos nocivos que alteren la salud de la población, afecten el equilibrio de ecosistemas, perturben la paz pública o lesionen el derecho de las personas a disfrutar tranquilamente de los bienes de uso público y del medio ambiente.

Las regulaciones sobre ruido podrán afectar toda presión sonora que generada por fuentes móviles o fijas, aún desde zonas o bienes privados, trascienda a zonas públicas o al medio ambiente.

Artículo 15°.- Clasificación de sectores de Restricción de Ruido Ambiental. Para la fijación de las normas de ruido ambiental el Ministerio del Medio Ambiente atenderá a la siguiente sectorización:

- 1) Sectores A. (Tranquilidad y Silencio), áreas urbanas donde estén situados hospitales, guarderías, bibliotecas, sanatorios y hogares geriátricos.
- 2) Sectores B. (Tranquilidad y Ruido Moderado), zonas residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, parques en zonas urbanas, escuelas, universidades y colegios.
- 3) Sectores C. Ruido Intermedio Restringido), zonas con usos permitidos industriales y comerciales, oficinas, uso institucional y otros usos relacionados.

4) Sectores D. (Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido Moderado), áreas rurales habitadas destinadas a la explotación agropecuaria, o zonas residenciales suburbanas y zonas de recreación y descanso.

Artículo 112°.- *Visitas de Verificación de Emisiones. Las fuentes fijas de emisión de contaminación del aire o generación de ruido, podrán ser visitadas en cualquier momento por parte de funcionarios de la autoridad ambiental competente o por los auditores a quienes la función técnica de verificación les haya sido confiada, los cuales al momento de la visita se identificarán con sus respectivas credenciales, a fin de tomar muestras de sus emisiones atmosféricas.*

Parágrafo 1°.- *La renuencia por parte de los usuarios responsables, a tales inspecciones, dará lugar a la aplicación de las sanciones pertinentes.*

Parágrafo 2°.- *La autoridad ambiental competente, podrá solicitar a cualquier usuario, cuando lo considere necesario, una muestra del combustible empleado para realizar un análisis de laboratorio.*

Parágrafo 3°.- *Las autoridades ambientales podrán contratar con particulares la verificación de los fenómenos de contaminación cuando no dispusieren del personal o de los instrumentos técnicos para realizar las inspecciones técnicas o los análisis de laboratorio requeridos. Los costos de las verificaciones y análisis técnicos serán de cargo de los agentes emisores a quienes se hace la inspección o la verificación.*

Ley 1333 de 2009. POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

ARTÍCULO 5°. *Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, las demás normas ambientales vigentes y en los actos administrativos con contenido ambiental expedidos por la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.*

De orden Distrital:

Acuerdo 19 de 1996: Por el cual se adopta el Estatuto General de Protección Ambiental del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y se dictan normas básicas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente.

Artículo 8°.- *Funciones de las Entidades del SIAC. Las entidades incorporadas por este acuerdo al Sistema Ambiental del Distrito Capital, desarrollarán las siguientes funciones en materia ambiental:*

SECRETARÍA DE GOBIERNO

(...) A nivel local corresponde a las alcaldías locales, en coordinación con el DAMA, y con el apoyo de la Policía Nacional, adelantar el control al cumplimiento de las normas ambientales en su jurisdicción, especialmente las que se refieren al uso del espacio público, el control del ruido, la contaminación visual y al tráfico ilegal de fauna y flora, y coordinar con las demás entidades distritales la realización de los planes y trabajos que en materia ambiental se desarrollen en su jurisdicción.

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU,
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE**

Estas entidades, o la(s) que haga(n) sus veces, pertenecen a los grupos uno y tres de las entidades del SIAC definidas en el artículo anterior. Como integrantes del grupo uno de las entidades del SIAC les corresponde principalmente: hacer respetar el espacio público de la ciudad, y controlar y sancionar a los vehículos cuyas emisiones de gases y de ruido excedan los límites permitidos por la normatividad ambiental.

**Secretaria de Obras públicas, Instituto de Desarrollo Urbano IDU, Secretaria de Transito y Transportes y
Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S. A.**

Las entidades que hagan sus veces promoverán la movilización de personas y bienes, minimizando los tiempos, las distancias, el gasto energético, la ocupación del espacio y la generación de impactos, especialmente ruido y emisiones. Para esto es preciso partir de una localización racional de las actividades que demanden y las estructuras que ofrezcan esta función; la adecuación de la infraestructura y la conversión tecnológica gradual de la maquinaria empleada, apuntando a privilegiar el sistema integrado de transporte público sobre el particular; las energías menos contaminantes sobre las convencionales y el transporte en bicicleta y peatonal, por encima del automotor.

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Para efectos de la justificación del presente Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se establecen los lineamientos para la formulación de una Política de Calidad Acústica para la ciudad de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”, se seguirá el siguiente orden:

1. Introducción.
2. Contaminación Acústica.
3. Problemática del ruido en Bogotá.
4. Factores que generan contaminación auditiva.
 - a. Bares ilegales
 - b. Metro de Bogotá
5. Contaminación auditiva y salud pública.
6. Necesidad de lineamientos para la promoción, delimitación, protección y gestión de zonas tranquilas

1. Introducción

El presente Proyecto de Acuerdo tiene como propósito establecer los lineamientos para la formulación de una Política de Calidad Acústica en el Distrito Capital, en respuesta a la creciente problemática de contaminación auditiva que afecta significativamente la calidad de vida, la salud pública y el equilibrio ambiental en la ciudad de Bogotá D.C.

La contaminación por ruido, también conocida como contaminación acústica, se ha consolidado como una de las formas más persistentes de deterioro ambiental en contextos urbanos. Este fenómeno, producido por diversas fuentes como el tráfico vehicular, los establecimientos comerciales, la industria, la construcción y el entretenimiento nocturno (especialmente bares que operan ilegalmente), ha sobrepasado en numerosos sectores de la ciudad los niveles permisibles establecidos en la normativa nacional e internacional, sin que exista hasta ahora una política pública integral y articulada que enfrente el problema de forma estructural y con enfoque territorial.²²

²² <https://pulsarinstruments.com/es/noticias/la-oms-dice-que-el-ruido-es-uno-de-los-principales-peligros-para-la-salud/>

En este contexto, resulta necesario formular una Política de Calidad Acústica que permita diseñar, implementar y monitorear acciones concretas orientadas a prevenir, controlar y mitigar los impactos del ruido, en coherencia con los principios constitucionales de sostenibilidad ambiental, dignidad humana y salud como derecho fundamental. Además, se propone fortalecer el marco institucional del Distrito en esta materia, atendiendo los insumos técnicos disponibles, como el Mapa Estratégico de Ruido (MER), y facilitando la articulación entre las entidades responsables de la salud, el ambiente, la planeación y la convivencia ciudadana.

2. Contaminación Acústica.

La contaminación acústica fue definida en la reciente Ley 2450 de 2025 o Ley Anti Ruido como aquella “*alteración del ambiente con ruidos o vibraciones nocivas, molestas o no deseadas, que impactan en la salud, la calidad de vida y que implican un riesgo para la salud pública o degradan la calidad del ambiente en sus diferentes medios.*” Desde una perspectiva jurídico-técnica, se trata de una definición de carácter amplio o extensivo, en tanto incorpora una variedad de elementos subjetivos y objetivos (como la nocividad, la molestia o el carácter no deseado del ruido), y abarca múltiples supuestos de hecho. Además, el uso de expresiones abiertas como 'calidad de vida', 'riesgo para la salud pública' o 'ambiente en sus diferentes medios' evidencia una intencionalidad legislativa de no restringir la aplicación del concepto a casos taxativos, sino de permitir una interpretación flexible y contextualizada por parte de las autoridades ambientales y judiciales.

Adicionalmente, este enfoque adoptado por la Ley Anti Ruido supone un carácter proteccionista, es decir, trata de delimitar un hecho, generado por un sinnúmero de factores, que inciden directamente en afectaciones graves a la salud y en el entorno en el que vivimos. Dicho enfoque se encuentra acorde con las diversas sentencias de tutela proferidas por la corte constitucional, en el que la contaminación auditiva tiene un carácter pluriofensivo en materia de derechos fundamentales.

Al respecto, la Corte Constitucional ha tutelado los derechos fundamentales a la intimidad, a la tranquilidad y a la salud en aquellos casos en los que, por causa de la contaminación por ruido, dichos derechos se han visto afectados. Ello se debe a que la contaminación acústica constituye una intromisión indebida en el espacio privado de las personas y vulnera su tranquilidad, entendida como un derecho fundamental susceptible de protección, en tanto es inherente a la persona humana y tiene un carácter personalísimo, derivado necesariamente del derecho a una vida digna, sin perjuicio de aquellos daños que ocasiona de forma directa a la salud.²³

A pesar de los pronunciamientos de la Corte Constitucional y del adecuado enfoque adoptado por la denominada Ley Anti Ruido, en Bogotá persiste una problemática generalizada de contaminación acústica, originada en diversas fuentes de emisión sonora. Entre estas se destacan los bares, gastrobares, restaurantes, así como las actividades culturales y deportivas, conciertos, festivales, el uso de armas de fuego, gritos, riñas, equipos de poda, zonas de construcción, entre otros.

3. Problemática del ruido en Bogotá

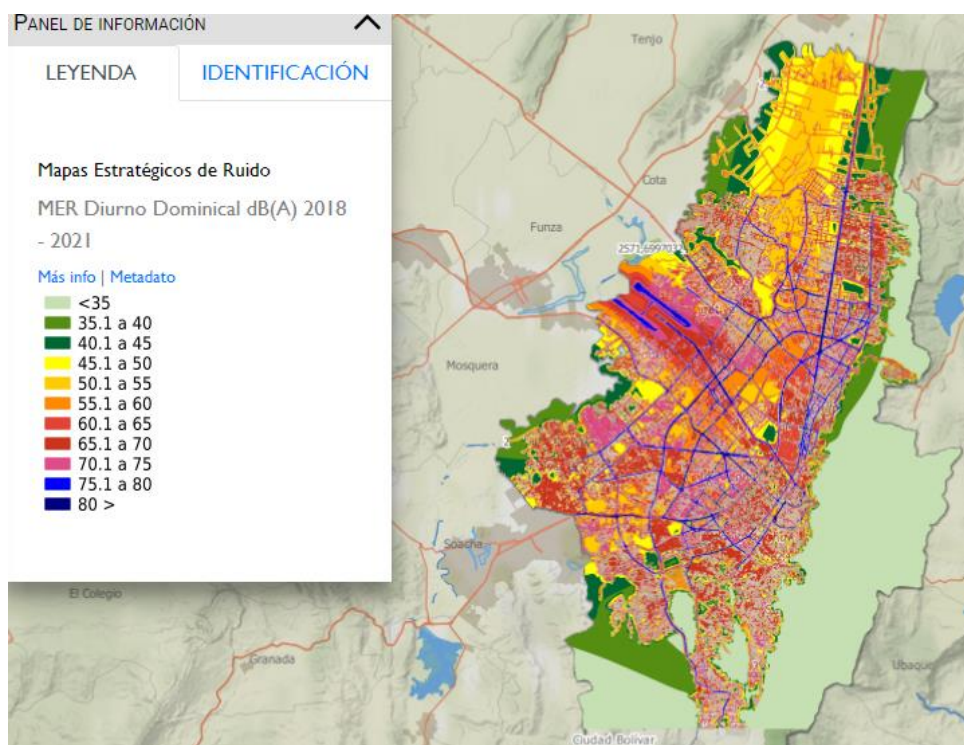
Según datos del Observatorio Ambiental de Bogotá, los Mapas Estratégicos de Ruido (MER) actualizados para el período 2018-2019 revelan que en las principales vías de la ciudad, como la Avenida Boyacá y la Autopista Norte, los niveles de ruido diurnos superan los 65 dB(A), mientras que en horario nocturno estos niveles siguen por encima de los 70 dB(A)²⁴. Estas cifras exceden los estándares permitidos por el Decreto la Resolución 627 de 2006, que establece que el ruido ambiental no debe superar los 70 dB(A) durante el día y 60 dB(A) en la noche para proteger la salud pública²⁵.

²³ Ver sentencias. T.394 de 1997, T-1158/05 y T-672 de 2014

²⁴ <https://oab.ambientebogota.gov.co/mapas-de-ruido-ambiental-de-bogota/>

²⁵ [Cuáles son los niveles de ruido permitidos según la Resolución 0627 de 2006 - Historial de noticias - Secretaría Distrital de Ambiente](#)

El análisis del Mapa Estratégico de Ruido (MER), disponible en el visor geográfico del Distrito <https://visorgeo.ambientebogota.gov.co>, evidencia que en zonas como Chapinero, Teusaquillo, Suba, Engativá, Barrios Unidos y Kennedy, así como en principales corredores viales como la Avenida Boyacá y la Autopista Norte, los niveles de presión sonora suelen superar los 70 dB(A) en el día y 60 dB(A) en la noche, afectando de manera directa la tranquilidad, el bienestar y la salud de los habitantes.



Esta situación se ve agravada por la proliferación de bares ilegales y establecimientos nocturnos que operan sin licencia, en contravía de las normas de uso del suelo y los parámetros de emisiones acústicas. La ausencia de control efectivo y vigilancia oportuna ha generado una percepción de impunidad frente a estas conductas, lo que incentiva prácticas lesivas para la convivencia y el derecho al descanso de las comunidades urbanas.

4. Factores que generan contaminación auditiva

Según la Ley 2450 de 2025 denominada Ley contra el ruido en su artículo 8° parágrafo 2°, establece como principales factores de emisión sonora el tráfico vehicular, ferroviario, marítimo, fluvial y aéreo. Además de las actividades económicas de industria, comercio y servicio; así como las realizadas en espacio público, como actividades culturales, turísticas y deportivas. Estos factores inciden especialmente en zonas de uso mixto, donde confluyen áreas residenciales con actividades económicas, afectando la calidad de vida de la población del distrito capital.

En concordancia con lo establecido en la Ley 2450 de 2025, el tráfico vehicular se identifica como la principal fuente de emisión sonora en la ciudad. La circulación continua de automotores, sumada al uso indiscriminado del claxon y al deterioro de la infraestructura vial, genera niveles de presión sonora que frecuentemente superan los límites permitidos por la normativa ambiental. Las vías troncales y arteriales representan puntos críticos de contaminación auditiva, especialmente en zonas de uso mixto, donde coexisten áreas residenciales con actividades económicas.

Por otro lado, las actividades comerciales y de servicios, particularmente aquellas que operan en horario nocturno como bares, discotecas, terrazas y otros establecimientos de entretenimiento, constituyen una fuente relevante de ruido ambiental. La ausencia de licencias adecuadas y de infraestructura con control acústico incrementa significativamente los niveles sonoros durante las horas de descanso nocturno, afectando la calidad de vida de los habitantes y generando conflictos recurrentes entre vecinos, especialmente en sectores residenciales donde estas actividades se desarrollan sin una adecuada regulación.

Asimismo, las obras civiles y el uso de maquinaria pesada asociadas al desarrollo de infraestructura urbana representan un importante factor de emisión sonora. Cuando estas actividades se ejecutan sin medidas de mitigación adecuadas o fuera de los horarios permitidos, impactan de forma negativa la tranquilidad de las comunidades aledañas. Este problema se acentúa en áreas urbanas de uso mixto, donde grandes proyectos constructivos colindan con viviendas, exponiendo a la población a altos niveles de ruido de manera prolongada.

El uso de altavoces, perifoneo y otros dispositivos de amplificación sonora en espacios públicos, con fines comerciales, políticos, sociales o religiosos, también representa una fuente constante de ruido que incide directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Estas prácticas, comunes en centros de barrio, mercados populares y zonas de alta circulación peatonal, afectan principalmente a quienes residen o transitan por estas áreas. La normativa vigente establece límites para este tipo de emisiones, ya que vulneran el entorno acústico y el derecho al descanso.

Finalmente, en sectores donde coexisten zonas residenciales con actividades industriales, el funcionamiento de compresores, generadores, equipos de carga y otras maquinarias sin el debido aislamiento acústico genera un impacto sonoro considerable. La Ley 2450 de 2025 reconoce estas actividades productivas como factores significativos de emisión sonora, que requieren regulación y control técnico para garantizar un equilibrio entre el desarrollo económico y el bienestar de la población expuesta al ruido industrial.

A lo anterior se suman nuevas fuentes emergentes de contaminación auditiva que, aunque no siempre han sido visibilizadas con la misma intensidad, generan impactos significativos en la vida urbana y requieren atención por parte de las autoridades ambientales y de planeación. Entre estas se destacan la proliferación de bares y establecimientos nocturnos que operan de manera ilegal, sin controles acústicos, así como la implementación de grandes sistemas de transporte masivo, como el metro, cuya operación y construcción también representan un desafío para la gestión del ruido en zonas densamente pobladas.

4.1 Bares ilegales

Una de las problemáticas más sensibles identificadas por las comunidades y las autoridades locales es la operación de bares, discotecas y otros establecimientos nocturnos sin licencia o fuera de los horarios permitidos. Estas actividades suelen desarrollarse en zonas residenciales o mixtas, donde su impacto es particularmente perjudicial para la convivencia, el descanso y la salud de los residentes.

Al no contar con adecuadas medidas de insonorización ni controles técnicos, estos establecimientos superan con frecuencia los niveles máximos de ruido ambiental permitidos por el Decreto 948 de 1995 y la Resolución 627 de 2006, generando conflictos vecinales, deterioro del espacio público y una sensación generalizada de impunidad.

Pese a que la Secretaría de Gobierno de Bogotá, en conjunto con otras entidades distritales, ha intensificado en los últimos años los operativos de inspección, vigilancia y control (IVC), con el objetivo de cerrar establecimientos que incumplen la normatividad y afectan la tranquilidad ciudadana, las cifras reportadas por las inspecciones de policía demuestran que dichos esfuerzos han resultado ineficaces. Las problemáticas derivadas de estos establecimientos —incluso aquellos que operan de manera legal— continúan vulnerando la tranquilidad de las personas y transgrediendo las normas de policía y

convivencia.

Pese a que la Secretaría de Gobierno de Bogotá, en conjunto con otras entidades distritales, ha intensificado en los últimos años los operativos de inspección, vigilancia y control (IVC) con el objetivo de cerrar establecimientos que incumplen la normatividad y afectan la tranquilidad ciudadana, las cifras reportadas por las inspecciones de policía demuestran que dichos esfuerzos han resultado ineficaces. Las problemáticas derivadas de estos establecimientos —incluso aquellos que operan de manera legal— continúan vulnerando la tranquilidad de las personas y transgrediendo las normas de policía y convivencia.

Uno de los factores más críticos es la contaminación acústica generada por la actividad económica nocturna, especialmente en sectores residenciales o mixtos. Esta situación se ve reflejada en el aumento sostenido de expedientes relacionados con comportamientos contrarios a la convivencia, tipificados en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, particularmente aquellos que afectan la actividad económica regulada en los artículos 92 y 93 del mencionado estatuto. A continuación, se presentan las cifras más relevantes.

CIFRAS DE EXPEDIENTES EN INSPECCIONES DE POLICÍA CON RELACIÓN AL RUIDO

La Ley 2450 de 2025, denominada Ley contra el Ruido, en su artículo 8°, parágrafo 2°, establece como principales fuentes de emisión sonora el tráfico vehicular, ferroviario, marítimo, fluvial y aéreo, así como las actividades económicas del sector industrial, comercial y de servicios. De igual forma, identifica como generadoras de ruido las actividades realizadas en espacio público, tales como eventos culturales, turísticos y deportivos. Estos factores tienen un impacto especialmente negativo en las zonas de uso mixto, donde convergen áreas residenciales con dinámicas económicas, afectando significativamente la calidad de vida y la tranquilidad ciudadana.

En consonancia con lo anterior, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) clasifica las conductas que afectan la tranquilidad, el bienestar y la salud por generación de ruido en dos grandes grupos:

- i) las generadas por establecimientos de comercio en el marco de una actividad económica, y
- ii) las producidas en el vecindario o lugar de habitación urbana o rural:

En cuanto a la afectación por parte de la actividad económica, el **artículo 93** del citado Código dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 93. Comportamientos relacionados con la seguridad y tranquilidad que afectan la actividad económica. Los siguientes comportamientos relacionados con la seguridad y tranquilidad afectan la actividad económica y por lo tanto no deben realizarse:

(...)

3. Generar ruidos o sonidos que afecten la tranquilidad de las personas o su entorno.

(...)

En respuesta a un derecho de petición radicado el **14 de marzo de 2025**, se informó que, a **abril del mismo año**, se encontraban **alrededor de 1.300 expedientes activos** en las **inspecciones de policía** relacionados con infracciones a este artículo, lo que da cuenta del **creciente número de conflictos vecinales y quejas por ruido** derivados del desarrollo de actividades económicas.

Por otra parte, otra conducta que contribuye de manera directa al deterioro del ambiente sonoro de la ciudad es la **inobservancia de los horarios de funcionamiento** establecidos por el Alcalde Mayor para los establecimientos abiertos al público. Esta infracción está contemplada en el artículo 92 del Código de Policía:

ARTÍCULO 92. Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica. Los siguientes comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad afectan la actividad económica y por lo tanto no deben realizarse:

(...)

4. Quebrantar los horarios establecidos por el Alcalde.

(...)

En relación con esta infracción, se reportó que, a **mayo de 2024**, existían **3.364** expedientes abiertos en las estaciones e inspecciones de policía. **Para mayo de 2025**, la cifra ascendió a **3.809 expedientes**, lo que representa un incremento del **13,2%** (equivalente a 445 nuevos casos en 11 meses). Este aumento evidencia una tendencia creciente de incumplimiento normativo por parte de algunos establecimientos comerciales y sugiere una mayor necesidad de intervención institucional, así como del fortalecimiento de la capacidad sancionatoria y preventiva de las autoridades distritales.

Por otra parte, frente a aquellas conductas en el vecindario o lugar de habitación urbana o rural, el Código Nacional de Policía dispuso:

ARTÍCULO 33. Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas. Los siguientes comportamientos afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas y por lo tanto no deben efectuarse:

1. En el vecindario o lugar de habitación urbana o rural: Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con:

a) Sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia por su impacto auditivo, en cuyo caso podrán las autoridades de Policía desactivar temporalmente la fuente del ruido, en caso de que el residente se niegue a desactivarlo;

b) Cualquier medio de producción de sonidos o dispositivos o accesorios o maquinaria que produzcan ruidos, desde bienes muebles o inmuebles, en cuyo caso podrán las autoridades identificar, registrar y desactivar temporalmente la fuente del ruido, salvo sean originados en construcciones o reparaciones en horas permitidas;

c) Actividades diferentes a las aquí señaladas en vía pública o en privado, cuando trascienda a lo público, y perturben o afecten la tranquilidad de las personas

Bajo esta conducta, **entre mayo de 2024 y mayo de 2025, se registró un incremento del 15% en los reportes relacionados con afectaciones por ruido, pasando de 4.207 a 4.837 casos**. Este aumento de 630 reportes no es un simple dato estadístico: es un reflejo directo del deterioro progresivo de las condiciones acústicas en la ciudad y una alerta sobre el debilitamiento de la convivencia ciudadana. Adicionalmente, revela un aumento en las fuentes generadoras de ruido —como fiestas, dispositivos de alto volumen o maquinaria fuera de los horarios permitidos—, sino también una creciente percepción de afectación entre los ciudadanos, lo que a su vez puede derivar en conflictos comunitarios, afectaciones a la salud mental y trastornos del sueño.

Este comportamiento revela un aumento en las fuentes generadoras de ruido —como fiestas, dispositivos de alto volumen o maquinaria fuera de los horarios permitidos—, sino también una creciente percepción de afectación entre los ciudadanos, lo que a su vez puede derivar en conflictos comunitarios, afectaciones a la salud mental y trastornos del

sueño. En este contexto, se vuelve urgente fortalecer las acciones institucionales de control, inspección y sanción, con énfasis en las zonas de mayor reincidencia, al tiempo que se impulsa la implementación de políticas públicas integrales en materia de calidad acústica urbana.

4.2 Metro de Bogotá

Una de las problemáticas emergentes más sensibles identificadas por las comunidades y las autoridades locales es la afectación acústica derivada de las obras de infraestructura del sistema de transporte masivo Metro de Bogotá, en particular durante la ejecución de la Primera Línea. Aunque este proyecto representa un avance fundamental para la movilidad de la ciudad, su implementación ha generado un conjunto de externalidades negativas para las poblaciones cercanas, entre las que se destaca la contaminación auditiva, especialmente en localidades como Kennedy, Bosa y Fontibón.

Durante el desarrollo de las obras, la maquinaria pesada, los equipos de perforación y la actividad constante en frentes de trabajo han provocado niveles de presión sonora que sobrepasan lo permitido por la Resolución 627 de 2006, afectando la salud y el bienestar de los habitantes aledaños. En zonas residenciales, estas emisiones han tenido un impacto considerable, vulnerando el derecho al descanso y a un entorno sano. Las quejas ciudadanas se han intensificado, al punto de que en abril de 2024, en una sesión descentralizada del Concejo de Bogotá realizada en el barrio Las Vegas de Kennedy, más de 40 ciudadanos expresaron públicamente sus denuncias frente al aumento del ruido, la pérdida de tranquilidad y otros efectos colaterales asociados a la construcción del metro.²⁶

Pese a que la Empresa Metro de Bogotá ha dispuesto canales institucionales de atención a peticiones, quejas y reclamos (PQRS), y aunque existen mecanismos formales para reportar afectaciones, los reportes ciudadanos indican que las respuestas institucionales han sido lentas o insuficientes para mitigar los impactos. Las comunidades perciben una falta de acciones correctivas eficaces frente a los efectos sonoros de la obra, lo que ha derivado en un sentimiento de desprotección institucional.

Uno de los factores más críticos identificados en este proceso es la falta de una estrategia clara de gestión del ruido durante la fase constructiva del proyecto. Esto se traduce no solo en molestias para la población, sino también en el incumplimiento de estándares de convivencia establecidos por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. De acuerdo con este marco normativo, comportamientos como los que generan ruidos o sonidos que afectan la tranquilidad de las personas se encuentran tipificados en el artículo 93, numeral 3, y deben ser objeto de vigilancia, control y sanción por parte de las autoridades competentes.

ARTÍCULO 93. Comportamientos relacionados con la seguridad y tranquilidad que afectan la actividad económica. Los siguientes comportamientos relacionados con la seguridad y tranquilidad afectan la actividad económica y por lo tanto no deben realizarse: (...)

3. Generar ruidos o sonidos que afecten la tranquilidad de las personas o su entorno.

En este contexto, resulta urgente fortalecer las acciones de monitoreo ambiental, realizar mediciones permanentes de los niveles de presión sonora y establecer medidas de compensación para las comunidades directamente afectadas. Asimismo, se hace necesario que la Empresa Metro de Bogotá articule sus procesos constructivos con estándares de sostenibilidad urbana y protección a la salud auditiva, en cumplimiento de las normas ambientales y de convivencia vigentes. Esta problemática plantea desafíos importantes para la administración distrital, que debe garantizar tanto la ejecución de obras de alto impacto como la salvaguarda de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

²⁶ [Metro de Bogotá: Denuncias en Kennedy](#)

5. Contaminación auditiva y salud pública

La exposición constante a altos niveles de ruido no solo afecta la audición, sino que tiene repercusiones profundas sobre la salud física, mental y emocional de las personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado al ruido ambiental como el segundo factor ambiental más perjudicial para la salud en Europa, solo superado por la contaminación atmosférica. Esta advertencia también aplica a contextos urbanos como Bogotá, donde los niveles sonoros exceden con frecuencia los límites recomendados por las autoridades sanitarias internacionales²⁷.

El ruido prolongado y por encima de los 55 dB(A) durante el día o 45 dB(A) en la noche puede ocasionar efectos adversos acumulativos que deterioran el bienestar general. Entre los principales impactos en la salud pública, se destacan:

- Trastornos del sueño: La interrupción del sueño causada por ruidos nocturnos —como tráfico, música o maquinaria— puede derivar en fatiga crónica, somnolencia diurna, irritabilidad y un aumento del riesgo de accidentes laborales o de tránsito.
- Problemas cardiovasculares: Estudios clínicos han establecido una correlación entre la exposición continua al ruido y el incremento de la presión arterial, así como un mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, especialmente en adultos mayores.
- Deterioro cognitivo en la infancia: La contaminación sonora afecta negativamente el desarrollo neurológico de niñas y niños. La constante exposición a ruido interfiere con la memoria, la concentración y las habilidades lingüísticas, reduciendo el rendimiento escolar y las oportunidades de aprendizaje a largo plazo.
- Salud mental y emocional: El ruido urbano persistente se ha relacionado con mayores niveles de estrés, ansiedad y depresión. En ambientes urbanos densos, donde el ciudadano no puede controlar su exposición al sonido, el impacto psicológico puede convertirse en una fuente de malestar crónico²⁸.

La Asociación Médica Mundial (AMM) advierte que estos niveles de ruido urbano crónico deben ser reconocidos como una forma de contaminación ambiental con implicaciones directas en la salud pública. Entre sus recomendaciones, se encuentra la promoción de políticas de control acústico urbano, el fortalecimiento de la legislación sobre niveles sonoros permitidos, y la inclusión de la contaminación acústica como prioridad en la planificación territorial y sanitaria.

La AMM también subraya que el ruido no solo genera incomodidad o trastornos del sueño, sino que puede producir efectos biológicos adversos como aumento de la presión arterial, estrés, deterioro del rendimiento cognitivo en escolares, y riesgo elevado de enfermedades cardiovasculares y mentales. Por ello, considera esencial una respuesta institucional coordinada entre los sectores de salud, ambiente, educación y planificación urbana²⁹.

6. Necesidad de lineamientos para la promoción, delimitación, protección y gestión de zonas tranquilas

La ausencia de lineamientos para la promoción, delimitación, protección y gestión de zonas tranquilas ha limitado significativamente la capacidad institucional del Distrito para enfrentar la contaminación auditiva de forma estructural, preventiva y eficaz. Aunque existen normas puntuales sobre límites máximos permisibles y sanciones por ruido excesivo, estas disposiciones resultan dispersas, reactivas y poco articuladas entre las entidades responsables de la gestión ambiental, de la salud y del orden público.

²⁷ <https://pulsarinstruments.com/es/noticias/la-oms-dice-que-el-ruido-es-uno-de-los-principales-peligros-para-la-salud/>

²⁸ <https://www.bbc.com/mundo/articles/cr5nd42jz0jo>

²⁹ <https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-la-amm-sobre-la-contaminacion-acustica/>

La implementación de estos lineamientos permitirían establecer normas claras y diferenciales sobre los niveles de ruido permitidos en función de zonas tranquilas, incorporando criterios técnicos, científicos y territoriales. Esto posibilitaría una regulación más precisa y adecuada a las características sonoras de estos entornos urbanos.

Asimismo, dichos lineamientos se centran en fortalecer los mecanismos de control y restricción, mediante protocolos de monitoreo continuo y la capacitación de personal especializado para la medición de emisiones sonoras. También facilitaría una atención más eficaz de las quejas ciudadanas relacionadas con el ruido.

Por otra parte, estos lineamientos se establecen como base para la asignación de recursos y la inversión pública en acciones de mitigación, actualización tecnológica y acondicionamiento acústico en las zonas tranquilas, particularmente aquellas donde se evidencie la coexistencia conflictiva entre actividades comerciales y usos residenciales.

Además, fomentarán procesos pedagógicos y campañas de concientización sobre los efectos del ruido en la salud física y mental, promoviendo una cultura de corresponsabilidad entre los ciudadanos, comerciantes y actores institucionales.

Finalmente, permitirían establecer una coordinación interinstitucional efectiva entre entidades distritales como las secretarías de Ambiente, Salud, Gobierno, Planeación, Movilidad y Seguridad, con la participación activa de las alcaldías locales, el sector empresarial, la academia y la comunidad organizada. Esto garantizaría una respuesta integral, articulada y sostenible frente al fenómeno del ruido urbano.

IV. CONCLUSIÓN

La formulación de lineamientos para la promoción, delimitación, protección y gestión de zonas tranquilas constituye una necesidad urgente e impostergable ante los crecientes niveles de contaminación auditiva que afectan gravemente la salud pública, la calidad de vida, la convivencia ciudadana y el equilibrio ambiental en el entorno urbano. La evidencia técnica, proveniente del Mapa Estratégico de Ruido (MER) y de diagnósticos ambientales oficiales, demuestra que zonas de la ciudad presentan niveles de presión sonora que exceden los límites establecidos por la normativa nacional e internacional, especialmente en áreas residenciales.

La contaminación acústica no es solo una molestia, sino un riesgo real para la salud. Su relación comprobada con trastornos del sueño, enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo infantil y afecciones mentales exige una respuesta estructural desde las instituciones públicas. La ausencia de una política pública integral sobre este fenómeno ha impedido una intervención efectiva, generando vacíos normativos, dispersión institucional y respuestas reactivas que no resuelven de fondo la problemática.

Este Proyecto de Acuerdo propone subsanar esa brecha mediante el establecimiento de lineamientos claros, técnicos y territoriales para la formulación e implementación de protección y gestión de zonas tranquilas que permita gestionar el entorno sonoro urbano de forma planificada, interinstitucional y participativa. La iniciativa no pretende limitar la actividad económica ni la vida urbana, sino establecer un marco de equilibrio y corresponsabilidad entre desarrollo, productividad y bienestar ciudadano. Se trata de construir una Bogotá que escuche a su ciudadanía, que reconozca el valor del silencio como parte del derecho a un ambiente sano y que actúe de manera decidida frente a una de las formas más invisibles pero persistentes de contaminación.

En definitiva, este Proyecto de Acuerdo es una apuesta por una ciudad más humana, ordenada y saludable. Una ciudad donde el progreso no implique ruido, y donde el derecho al descanso, al aprendizaje, al diálogo y a la tranquilidad puedan ser garantizados para todos y todas.

V. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

3.4 Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar.

Este proyecto de acuerdo busca mitigar los efectos negativos del ruido ambiental sobre la salud física y mental de los habitantes de Bogotá D.C., reconociendo que la contaminación auditiva es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, trastornos del sueño, estrés crónico, ansiedad y deterioro cognitivo, especialmente en niños y adultos mayores. Al implementar una política de calidad acústica, se promueven condiciones de vida más saludables, entornos urbanos seguros y el bienestar emocional de la ciudadanía, reduciendo la carga sobre el sistema de salud pública.

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y a la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

La formulación de una Política Distrital de Calidad Acústica contribuirá directamente a la sostenibilidad ambiental urbana mediante la regulación del entorno sonoro, el control de fuentes de ruido y la promoción de prácticas responsables en la planeación del territorio. Esto incluye la aplicación del Mapa Estratégico de Ruido (MER) como herramienta técnica para definir zonas prioritarias de intervención y garantizar el uso adecuado del suelo según la presión sonora ambiental. Así, se construye una ciudad más resiliente, ordenada y con mejor calidad de vida para todos sus habitantes.

VI. RELACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO “BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024-2027”

14.6. Programa 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. Debemos disminuir la afectación negativa sobre los ecosistemas y reducir los impactos ambientales asociados a la calidad del recurso hídrico, del aire, acústico y visual, de emisión de ruido, de publicidad exterior visual, y del suelo de protección y de la fauna y flora silvestres.

El Programa 28, enmarcado en el objetivo estratégico del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura 2024-2027”, tiene como finalidad reducir la afectación negativa sobre los ecosistemas urbanos y rurales, a través del control de distintos tipos de emisiones y de la mitigación del deterioro ambiental en la ciudad. Dentro de sus líneas prioritarias se encuentran el mejoramiento de la calidad del aire, el recurso hídrico, la gestión del suelo de protección, así como la regulación de la contaminación acústica y visual.

El proyecto de acuerdo que establece los lineamientos para la formulación de una Política Distrital de Calidad Acústica guarda una estrecha relación con este programa, al enfocarse directamente en uno de los componentes que el mismo busca controlar: la emisión de ruido ambiental. A través de esta política se pretende generar un marco normativo, institucional y técnico que permita prevenir, controlar y mitigar los efectos nocivos del ruido en el entorno urbano, protegiendo tanto la salud pública como los ecosistemas locales.

La iniciativa fortalece el compromiso del Distrito con la sostenibilidad ambiental, al proponer acciones específicas como el uso del Mapa Estratégico de Ruido (MER), la delimitación de zonas de alta sensibilidad acústica, la adopción de tecnologías silenciosas y la armonización de la normativa distrital con los estándares nacionales e internacionales sobre contaminación sonora.

De igual manera, el proyecto aporta a los objetivos del programa al propiciar la articulación entre entidades como la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Salud, y las alcaldías locales para ejercer control efectivo sobre las fuentes emisoras de ruido. Así, se favorece un desarrollo urbano más armónico, con criterios de justicia ambiental, prevención del riesgo y equidad territorial.

En este contexto, la formulación de lineamientos para la promoción, delimitación, protección y gestión de zonas seguras no solo responde al mandato de protección ambiental del Programa 28, sino que se convierte en un instrumento clave para garantizar el derecho colectivo a un ambiente sano y para consolidar una Bogotá más ordenada, saludable y resiliente frente al cambio climático y la presión urbana.

VII. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En primer lugar, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que:

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así: DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”. Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

(...) 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. (...)

Asimismo, el Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

VIII. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003:

“En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

Atentamente,

JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA

H. Concejal de Bogotá D.C.

Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO NO 747 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE ZONAS TRANQUILAS EN BOGOTÁ D.C., COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993.

ACUERDA

Artículo 1. Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos para la promoción, delimitación, protección y gestión de zonas tranquilas en Bogotá D.C., con el fin de prevenir y mitigar los efectos nocivos de la contaminación acústica sobre la salud, la intimidad y la tranquilidad de la ciudadanía.

Artículo 2. Definiciones. El presente acuerdo tendrá en consideración las siguientes definiciones:

- 1. Contaminación acústica.** Alteración del ambiente con ruidos o vibraciones nocivas, molestas o no deseadas, que impactan en la salud, la calidad de vida y que implican un riesgo para la salud pública o degradan la calidad del ambiente en sus diferentes medios.
- 2. Efectos en la salud.** Dependiendo de los niveles y el tiempo de exposición, la contaminación acústica puede causar algunos de los siguientes inconvenientes en la salud física y mental de los seres humanos: daño cardiovascular; problemas auditivos unilaterales o bilaterales como pérdida auditiva permanente; pérdida auditiva temporal, fatiga auditiva, tinnitus, entre otros; asimismo, puede generar daños en la salud psicosocial como estrés, malestar e irritabilidad; problemas en el aprendizaje, disminución de la capacidad de atención, concentración, memoria, y problemas comunicativos para diferenciar sonidos, palabras, oraciones, comprender mensajes, entre otros.
- 3. Fuentes de emisión sonora.** Pueden ser fijas o móviles, permanentes o estacionarias. Dentro de las fijas se encuentran las actividades económicas del tipo industrial, comercial y de servicios como equipos de refrigeración, de inyección, servicios públicos, ductos de extracción de aire, extractores, bares, gastrobares, restaurantes y similares. Las fuentes móviles se asocian principalmente al sector transporte como el tránsito vehicular, aéreo, ferroviario, marítimo, fluvial o aeroportuario, vehículos con exhostos modificados y el perifoneo comercial. Asimismo, existen fuentes de emisión sonora estacionarias, como son las actividades culturales, deportivas, conciertos y festivales, armas de fuego, gritos, riñas, sonido generado por equipos de poda, zonas de construcción, entre otros.
- 4. Indicadores o descriptores acústicos.** Todos aquellos indicadores o descriptores nacionales o internacionales que miden, cuantifican y describen la calidad acústica, bien sea en salud, en la convivencia, en lo ambiental, al interior de una edificación, la emisión de fuentes fijas y móviles, entre otros.
- 5. Servidumbre acústica.** Territorio delimitado en los mapas de ruido, en los que las inmisiones podrán superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las correspondientes áreas acústicas y donde se podrán establecer restricciones para determinados usos del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones, con la finalidad de, al menos, cumplir los valores límites de inmisión establecidos para aquellos.
- 6. Zonas tranquilas:** Espacio urbano delimitado por la autoridad competente, conforme a las disposiciones del presente artículo y las normas reglamentarias que lo desarrollen, que comprende áreas residenciales o exclusivamente destinadas al desarrollo habitacional, cuya preservación es prioritaria para garantizar la calidad del ambiente acústico y proteger la salud y el bienestar de la ciudadanía.

Artículo 3. Delimitación. La Administración Distrital, en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, reglamentará el procedimiento para la delimitación de las zonas tranquilas, en concordancia con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y las normas vigentes sobre uso del suelo, calidad acústica y convivencia ciudadana, el cual deberá garantizar la participación efectiva de la ciudadanía, incluyendo a las organizaciones comunales, los consejos locales de planeación y las organizaciones de propiedad horizontal, a través de mecanismos de consulta, concertación o incidencia en la toma de decisiones.

Artículo 4. Existencia. Una vez declarada una zona tranquila por la autoridad competente, su existencia y características deberán ser consideradas en los procedimientos sancionatorios, policivos y contravencionales que se adelanten por el incumplimiento de los límites de emisión de ruido establecidos en la normatividad vigente, o por perturbación a la convivencia establecidos en dichas zonas.

Parágrafo: La delimitación de las zonas tranquilas en Bogotá podrá servir como insumo para la revisión y formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y demás instrumentos de planificación territorial.

Artículo 5. Protecciones. Una vez declarada una zona tranquila por la autoridad competente, la administración distrital de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial podrá limitar el desarrollo de actividades económicas que generen ruido constante, aglomeraciones o impactos acústicos significativos. Entre estas se encuentran bares, discotecas, cantinas, tabernas, salas de juego, billares, casinos y demás establecimientos abiertos al público que afecten las condiciones de tranquilidad y bienestar de la zona. Así mismo, la existencia de zonas tranquilas deberá ser tenida en cuenta en la formulación e implementación de planes, proyectos y actuaciones orientadas a la mejora de la movilidad en Bogotá, garantizando que las intervenciones en infraestructura vial o en el sistema de transporte no vulneren el ambiente acústico ni la vocación habitacional de estas áreas.

Artículo 6. Promoción. La Administración Distrital, a través de sus canales institucionales y con el apoyo de las entidades competentes, propenderá por realizar campañas de información, sensibilización y apropiación ciudadana sobre las Zonas Tranquilas, destacando sus beneficios para la salud, la convivencia y el ambiente.

Artículo 7. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y Cúmplase

JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA
Concejal de Bogotá
Partido Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO NO 748 DE 2025**PRIMER DEBATE****"POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 19 DE 1976, SE RECUPERA UN BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL DISTRITO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**

El Concejo de Bogotá, D.C., en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, y en concordancia con el Estatuto Orgánico de Bogotá,

ANTECEDENTES:

En el año 2015 se presentó al Concejo de Bogotá el proyecto de Acuerdo 413 de 2015, el cual buscaba derogar el Acuerdo 19 del 10 de diciembre de 1976 y asignarle la administración del inmueble en cuestión al Departamento Administrativo Para la Defensoría del Espacio Público -DADEP, pero dicho proyecto de Acuerdo fue archivado sin ser debatido, quedando en el limbo el tema.

1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

El presente Proyecto de Acuerdo tiene por objeto modificar el Acuerdo Distrital No. 19 de 1976 y dictar otras disposiciones con el fin de garantizar el retorno de dicho bien al uso público y su aprovechamiento en beneficio del sistema educativo distrital, asignando su administración al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -DADEP.

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los términos del artículo 123 de la ley 388 de 1997, se entiende que el bien inmueble ubicado en la calle 63 Sur No. 80 H-53 Barrio Centro de la Localidad de Bosa, no ostentaba titularidad en cabeza de particulares o entidades públicas, de acuerdo con la ley civil, por tanto, se encuentran en condición de bien baldío urbano y es de propiedad del Distrito Capital de Bogotá por el solo ministerio de la ley que es el título adquisitivo de dominio de conformidad con el artículo 1494 del Código Civil.

Que en cumplimiento de las funciones asignadas a la Superintendencia de Notariado y Registro, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nacional 2723 de 2014, *"Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Notariado y Registro"*, artículo 11 numerales 3, 26 y artículo 13 numeral 19, para su conocimiento y aplicación, el Despacho del Superintendente de Notariado y Registro, impartió orientaciones para la identidad

jurídico registral de los bienes baldíos urbanos de propiedad de las entidades territoriales cedidos por la nación en virtud de la Ley.

Que de acuerdo a lo expuesto en el artículo 2 del Decreto 478 de 2022 *“Por medio del cual se modifica la estructura organizacional del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público”*, corresponde a la Directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público: *“2. ejercer la representación legal del departamento y 8. Establecer lineamientos para la ejecución de los planes, programas y proyectos relacionados con la titulación y saneamiento de los bienes inmuebles del Distrito Capital”*.

Que mediante la Instrucción Administrativa No. 03 del 26 de marzo de 2015 que derogó la Instrucción Administrativa No. 018 del 24 de agosto de 2009, la Circular No. 222 de Noviembre de 2010, se redefinieron las condiciones para la titulación de los predios baldíos y la correspondiente inscripción por parte de las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con el objeto de darles identidad registral a los bienes de los municipios y distritos, cuyo dominio fue adquirido en virtud de la Ley, y con el fin de darle seguridad jurídica a los títulos correspondientes.

Que por intermedio de la Instrucción Administrativa No. 11 del 24 de mayo de 2017, la Superintendencia de Notariado y Registro, adicionó la instrucción administrativa No. 03 del 26 de marzo de 2015 concerniente a un procedimiento específico para realizar la búsqueda y posterior expedición del certificado de antecedente de carencia registral.

Por intermedio de memorando interno DADEP No. 20181100031283 del 18 de octubre de 2018, la entonces Oficina Asesora Jurídica, hoy Oficina Jurídica -OJ-, del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, de conformidad con los compromisos suscritos el día 11 de octubre de 2018 en la Alcaldía Local de Bosa, con el objetivo de recuperar el predio identificado en el Inventario General del Patrimonio Inmobiliario Distrital con RUPI 2-738 ubicado en la Calle 63 Sur No. 80H-53, remitió a la Subdirección de Administración Inmobiliaria insumos para el inicio de las acciones respectivas para la defensa del inmueble aludido, indicando lo siguiente:

“Ahora bien, debe señalar este Departamento Administrativo que por solicitud de la comunidad aledaña al predio objeto de restitución y de propiedad de Bogotá D.C., se tuvo conocimiento de la existencia de un proceso judicial de pertenencia por parte del Representante Legal de la Cooperativa Educacional de Bosa, en contra de personas indeterminadas, proceso avocado por el Juzgado 51 Civil del Circuito de Bogotá e identificado con el radicado 11001400303320130011800, proceso que fuera fallado en fecha 12 de octubre de 2016, declarando a favor del demandante la adquisición del dominio del inmueble con nomenclatura Calle 63 Sur No 80 H-53 Barrio Centro de la Localidad de Bosa. No obstante, lo anterior se presentó nota devolutiva por parte de la oficina de Instrumentos Públicos de la Zona Sur, al momento de inscribir la sentencia y consecutivamente el DADEP a través de la oficina jurídica intervino en el proceso por parte

del DADEP solicitando copia del expediente al advertirse la prescripción del bien fiscal del Distrito Capital.

Como consecuencia de lo expuesto el despacho de la señora Juez 51 Civil del Circuito de Bogotá, a través de auto de fecha 31 de mayo de 2018 dentro del radicado 110013103036620130011800, procedió a declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso, incluso, de la sentencia proferida en audiencia pública de fecha 12 de octubre de 2016, en virtud de la cual se declaró como propietaria del inmueble ubicado en la Calle 63 Sur No. 80 H-53 Barrio Centro de la Localidad de Bosa a la Cooperativa Educacional de Bosa-Coopebo, además ordenó vincular al proceso al Distrito Capital de Bogotá, a la Superintendencia de Notariado y Registro, al Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER), a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a Víctimas, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Cabe señalar que la decisión del despacho judicial se da con ocasión a lo consignado en la Resolución No. 314 de la Superintendencia de Notariado y Registro, por lo que en la parte motiva de la nulidad precisó que:

“la mencionada providencia no podía registrarse ni abrirse folio de matrícula inmobiliaria por cuanto el inmueble ubicado en la calle 63 Sur No. 80 H-53 Barrio Centro de la Localidad de Bosa no tiene antecedentes registrales, circunstancia que a la luz del artículo 675 del Código Civil cataloga al referido inmueble como baldío, el cual al tenor del artículo 123 de la Ley 388 de 1997, están en cabeza de Bogotá D.C. (...)”.

Que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Sur, al instante de la inscripción y registro de la sentencia anteriormente referida, presentó nota devolutiva de la misma y consecuentemente este Departamento Administrativo por intermedio de su Oficina Asesora Jurídica, intervino en el proceso solicitando copia del expediente alegando la prescripción del bien fiscal del Distrito Capital.

Que el Juzgado Cincuenta y Uno (51) Civil del Circuito de Bogotá D.C., declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso radicado 11001400303320130011800 incluyendo el fallo proferido en audiencia pública celebrada el día 12 de octubre de 2016 mediante Auto fechado el día 31 de mayo de 2018, radicado 110013103036620130011800, argumentando en su parte motiva:

“la mencionada providencia no podía registrarse ni abrirse folio de matrícula inmobiliaria por cuanto el inmueble ubicado en la calle 63 Sur No. 80 H-53 Barrio Centro de la Localidad de Bosa no tiene antecedentes registrales, circunstancia que a la luz del artículo 675 del Código Civil cataloga al referido inmueble como baldío, el cual al tenor del artículo 123 de la Ley 383 de 1997, están en cabeza de Bogotá D.C. (...)”.

Que la demanda de pertenencia antes mencionada fue presentada y tramitada desde el año 2013 por el señor Juan Hernando Guerrero Rodríguez, identificado con C.C. 19.295.895, representante legal de la Cooperativa Educacional de Bosa Ltda., (hoy Cooperativa Educativa de Bosa, identificada con NIT. 860.054.107-1), ello a pesar de tener pleno conocimiento de que el bien inmueble que intentaba adquirir por usucapión le había sido **cedido** por un término de cincuenta (50) años por el Concejo de Bogotá, y de que es un bien público, es decir, de propiedad del Distrito Capital, con lo cual queda claro la mala fe de la citada Cooperativa, quien es la que hoy tiene la tenencia del inmueble ubicado en la calle 63 Sur No. 80 H-53 Barrio Centro de la Localidad de Bosa, y lo explota económicamente arrendando a particulares (personas naturales y jurídicas) los salones y el pasillo del frente del predio, e incluso hizo registrar el predio en catastro como “corredor comercial”, violando flagrantemente lo pactado en el Acuerdo No. 19 de 1976.

Que con fundamento en las disposiciones establecidas en el artículo 7 de la Ley 137 de 1959, el artículo 123 de la Ley 388 de 1997 y la instrucción administrativa No. 03 del 26 de marzo de 2015, adicionada por la Instrucción administrativa No. 11 del 24 de mayo de 2017, expedidas por la Superintendencia de Notariado y Registro, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público mediante radicado DADEP No. 20212030130931 del 5 de octubre de 2021, instaurado ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Sur, bajo el turno 2022-186830 del 4 de mayo de 2022, solicitó certificado de carencia registral en relación con el predio aludido anteriormente.

Que así mismo, mediante radicado DADEP No. 20224000144322 del 29 de junio de 2022 el Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Sur certificó lo siguiente:

“(...) una vez consultada la documentación aportada, en virtud de los solicitado por el (a) Señor

(a): DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO; verificado los índices de propietarios y direcciones que se lleva actualmente por medio magnético en esta Oficina, NO se encontró antecedente registral frente al predio que se relaciona a continuación del cual se procede a expedir la certificación de carencia registral”.

Que agotado el anterior trámite, por medio de la Resolución No. 126 de 25 de abril de 2023, la Directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -DADEP, declaró el dominio pleno a nombre de Bogotá Distrito Capital, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 388 de 1997, respecto del bien baldío identificado para ese momento con el código catastral 00452204120000000, nomenclatura urbana CL 63 SUR 80H 53 y CHIP AAA0045XJRJ, alinderado de la siguiente manera:

Por el Norte: en distancia de 53 41 metros con el predio con nomenclatura oficial CL 63 SUR 80H 59.

Por el Sur: en distancia de 40.32 metros con el predio de nomenclatura oficial CL 63 SUR 80H 41 y en 14.00 metros con el predio con nomenclatura oficial CL 65 SUR 80H 28.

Por el Oriente: en distancia de 2.60 metros con la Calle 63 Sur.

Por el Occidente: en distancia de 23.00 metros con el predio con nomenclatura oficial CL 65 SUR 80H 44.

Área de terreno: 1235,50 m².

Sumado a ello, en la citada resolución, el DADEP solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Sur de Bogotá D.C., dar apertura al folio de matrícula inmobiliaria en los términos de la Instrucción Administrativa No. 03 del 26 de marzo de 2015, adicionada por la Instrucción Administrativa No. 11 del 24 de mayo de 2017, expedidas por la Superintendencia de Notariado y Registro.

En atención a lo anterior, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Sur de Bogotá D.C., procedió a aperturar folio de matrícula inmobiliaria para el predio identificado con el código catastral 00452204120000000, nomenclatura urbana CL 63 SUR 80H 53 y CHIP AAA0045XJRJ, siéndole asignado el folio **50S-40818409**, dentro del cual, en la anotación 1 aparece registrado el acto de adjudicación de baldío a través de la Resolución No. 126 de 25 de abril de 2023, a nombre del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -DADEP, quedando titulado y registrado en debida forma el bien inmueble en mención.

Que la recuperación del espacio público, y más de instalaciones educativas, es de vital importancia para el Distrito Capital, teniendo en cuenta la alta demanda de cupos escolares que se presentan, lo cual impactaría en la calidad del servicio de educación que se le pueda brindar a los niños, niñas y adolescentes del Distrito.

Que, además de los reiterados incumplimientos, es de conocimiento público que la Cooperativa Educativa de Bosa, identificada con NIT 860.054.107-1 y representada legalmente por el señor Juan Hernando Guerrero Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.295.895, o quien haga sus veces, ha demostrado con sus acciones la falta de intención de devolver el bien inmueble que le fue cedido hace aproximadamente 48 años.

Como prueba de ello, se encuentra el proceso de pertenencia que, de manera dolosa, el señor Juan Hernando Guerrero Rodríguez adelantó en contravía de los intereses del Distrito, con el propósito de apropiarse de la titularidad del mencionado bien inmueble.

Que para tal efecto, y ante los reiterados y evidentes incumplimientos por parte del cesionario, conocido hoy como Cooperativa Educativa de Bosa, identificada con NIT. 860.054.107-1, representada legalmente por el señor Juan Hernando Guerrero Rodríguez,

identificado con C.C. 19.295.895, o quien haga sus veces, el Concejo de Bogotá encuentra necesario modificar el Acuerdo 19 del 10 de diciembre de 1976, con el fin de recuperar este bien público.

3. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa responde a un deber ineludible del Concejo de Bogotá: **proteger y recuperar los bienes públicos del Distrito Capital**, especialmente cuando han sido indebidamente apropiados, utilizados con fines distintos a los establecidos y alejados de su propósito social. Este proyecto busca restablecer la legalidad en relación con un bien inmueble que pertenece al Distrito, pero que ha sido objeto de uso irregular y aprovechamiento indebido por parte de un cesionario que incumplió los términos de la cesión otorgada en 1976, destinándolo a actividades comerciales e incluso intentando apropiarse del inmueble mediante vías judiciales que finalmente no prosperaron.

Permitir que este tipo de conductas queden sin respuesta institucional no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que sienta un precedente negativo. Recuperar este bien no es un asunto menor; se trata de reafirmar el principio de supremacía del interés general sobre cualquier beneficio privado, principio consagrado en nuestra Constitución (artículos 1, 58, 82 y 209).

La protección del patrimonio público es una función esencial del Estado y una responsabilidad compartida entre los órganos del poder público. El Concejo Distrital, en uso de sus atribuciones legales, tiene el deber de actuar con decisión y firmeza cuando se trata de salvaguardar los bienes que pertenecen a todos los bogotanos. En este caso, además, se busca que el inmueble recupere su vocación original, servir al sistema educativo público, o darle un uso administrativo en una localidad con falta de infraestructura para beneficio de la comunidad.

La acción normativa propuesta no implica la adquisición ni construcción de un inmueble, solo implica la reasignación administrativa de un bien que ya hace parte del inventario distrital y que debe ser gestionado por la entidad competente, en este caso el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP.

El DADEP cumple la función de defensa, inspección, vigilancia, regulación y control del espacio público, así como la administración de bienes inmuebles y la conformación del inventario general del patrimonio inmobiliario distrital. Dentro de sus responsabilidades se encuentran, entre otras:

- Recibir y tomar posesión de zonas de cesión o bienes revertidos.

- Adelantar el proceso de titulación, registro y saneamiento jurídico de los inmuebles públicos.
- Administrar, mantener y entregar dichos bienes, suscribiendo los actos contractuales y administrativos a que haya lugar.
- Formular y ejecutar políticas públicas relacionadas con la defensa y recuperación del espacio público.
- Promover acciones judiciales y administrativas para la defensa de los bienes del Distrito.

En suma, este Proyecto de Acuerdo no solo se justifica desde el punto de vista jurídico y normativo, sino que también responde a un deber institucional de custodiar el patrimonio público, reparar una afectación prolongada a los intereses colectivos y restablecer el uso legítimo del espacio urbano para el beneficio de la ciudadanía bogotana.

4. ANÁLISIS JURÍDICO.

Artículo 1 de la Constitución Política de Colombia prevé: *Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general*".

Que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política Nacional, las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.

Que el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, establece que *"Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.*

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.

Que a su vez, el artículo 45 ibídem, ordena que *“El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.*

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud”.

Que el inciso primero del artículo 82 de la Carta Política Nacional ordena que *“es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”.*

Que según lo normado en el artículo 83 de la Constitución Política Nacional, *“las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.*

Que el artículo 113 de la Constitución Política establece que *“(…) Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.*

Que jurisprudencialmente la Corte Constitucional Colombiana en sentencia C - 536 de 1997, Magistrado Ponente Doctor Antonio Barrera Carbonell, definió los bienes baldíos como *“bienes que pertenecen a la Nación, cuya adjudicación se puede hacer a los particulares o a las entidades públicas, bajo un criterio de utilidad y de beneficio social, económico y ecológico, según la filosofía que inspira la reforma agraria, la cual tiene pleno sustento en los arts. 60, 64, 65, 66 y 334 de la Constitución”.*

Que de acuerdo con el artículo 675 Código Civil Colombiano los bienes baldíos se definen como: *“Son bienes de la Unión todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño”.*

Que con la promulgación y entrada en vigencia de la Ley 388 de 1997 en el marco de la Constitución Política de 1991, los municipios y distritos adquirieron la titularidad del dominio sobre los bienes inmuebles baldíos que se encuentran dentro de su perímetro urbano, cuando en su artículo 123 dispuso:

“De conformidad con lo dispuesto en la Ley 137 de 1959, todos los terrenos baldíos que se encuentran en suelo urbano en los términos de la presente ley, en los municipios y distritos y que no constituyan reserva ambiental pertenecerán a dichas entidades territoriales.”

Que por medio del Acta de 15 de febrero de 1955, se hizo entrega de dieciocho (18) bienes raíces del Municipio de Bosa al Distrito Especial de Bogotá, entre los cuales figura en el numeral 5 el predio conocido como *Escuela Urbana de Niñas Tercero y Cuarto Grado Calle*

13 No. 13-57, actualmente conocido como “Colegio Cooperativo de Bosa”, ubicado en la calle 63 Sur No. 80 H-53 Barrio Centro de la Localidad de Bosa.

Que por medio del Acuerdo No. 19 de 10 de diciembre de 1976, el Concejo del Distrito Especial de Bogotá, cedió el lote de terreno de propiedad del Distrito a la Cooperativa Educativa de Bosa Ltda., por un término de cincuenta (50) años a partir de su sanción, con destinación específica para ampliación de aulas y la educación de las clases menos favorecidas, estableciendo de manera clara que el lote no podía ser vendido ni arrendado por la entidad beneficiaria.

Que en el año 2015 se presentó en el Concejo de Bogotá el proyecto de Acuerdo 413 de 2015, el cual buscaba derogar el Acuerdo 19 del 10 de diciembre de 1976 y asignarle la administración del inmueble en cuestión al Departamento Administrativo Para la Defensoría del Espacio Público -DADEP, pero dicho proyecto de Acuerdo fue archivado sin ser debatido, quedando en el limbo el tema.

Que, al no haberse derogado en el año 2015 el Acuerdo 19 del 10 de diciembre de 1976, se permitió que la Cooperativa Educativa de Bosa, identificada con NIT 860.054.107-1 y representada legalmente por el señor Juan Hernando Guerrero Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.295.895, o quien haga sus veces, continuara durante aproximadamente nueve (9) años más usufructuando de manera irregular un bien de uso público, el cual debería estar siendo destinado por el Distrito a la prestación de servicios educativos para niños, niñas y adolescentes de Bosa; situación que debe ser corregida con la mayor brevedad posible.

Que con la modificación del acuerdo se busca que el proceso de entrega del Colegio Cooperativo de Bosa sea más ágil y rápido, garantizando que ese bien público pase a ser utilizado por la comunidad y que, además, prime el interés general sobre el particular, dando así cumplimiento a lo ordenado por la Constitución Política Nacional.

5. COMPETENCIA DEL CONCEJO.

El Concejo de Bogotá, conforme al artículo 313-1 de la Constitución Política de 1991 “*Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio*” y, el decreto Ley 1421 de 1993, en su artículo 12-1 “*Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.*”, Así mismo, tiene la facultad de regular y formular políticas públicas en beneficio de la ciudadanía, como de promover estrategias de movilidad sostenible que benefician a las comunidades más vulnerables.

5. IMPACTO FISCAL.

La ejecución del presente Acuerdo no genera un impacto fiscal directo. La administración del inmueble será asumida por el DADEP, entidad que ya cuenta con competencias y estructura funcional para tales efectos. En consecuencia, no implica nuevas apropiaciones presupuestales ni creación de obligaciones financieras para el Distrito.

7. TÍTULO – ATRIBUCIONES - CONSIDERANDOS

PROYECTO DE ACUERDO NO 748 DE 2025**PRIMER DEBATE****"POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 19 DE 1976, SE RECUPERA UN BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL DISTRITO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 12 numeral 1 del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. La cesión efectuada mediante el Acuerdo 19 de 1976 se da por terminada de manera anticipada de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva, y en consecuencia, el bien inmueble retorna a la plena disposición del Distrito Capital.

ARTÍCULO 2. El bien inmueble ubicado en la Calle 63 Sur No. 80H-53, en la localidad séptima de Bosa, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-40818409, CHIP AAA0045XJRJ y código catastral 00452204120000000, será administrado y protegido por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, conforme a sus competencias.

ARTÍCULO 3. El uso del inmueble referido será definido en articulación con la Alcaldía Local de Bosa, en función de las necesidades sociales, educativas o comunitarias de la localidad, garantizando su destinación en beneficio de la ciudadanía.

ARTÍCULO 4. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deja sin efecto el Acuerdo 19 de 1976, así como todas las disposiciones que le sean contrarias.

OSCAR FERNANDO BASTIDAS JACANAMIJOY

Concejal De Bogotá D.C

Vocero De Bancada Del Movimiento Alternativo Indígena Y Social - Mais

PROYECTO DE ACUERDO NO 749 DE 2025**PRIMER DEBATE****"POR EL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE Y CIUDAD DE BOGOTÁ COMO EVENTO PERMANENTE DE INTERÉS CULTURAL DISTRITAL".****1. OBJETO DEL PROYECTO**

El presente Proyecto de Acuerdo tiene como objetivo institucionalizar la Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá como un evento permanente de interés cultural distrital, garantizando su continuidad y desarrollo periódico como una de las manifestaciones artísticas y culturales más importantes de la ciudad, que contribuye al posicionamiento internacional de Bogotá en el circuito global del arte contemporáneo.

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**2.1 ANTECEDENTES**

El presente Proyecto de Acuerdo no ha sido presentado anteriormente ante el Concejo de la ciudad.

2.2 IMPORTANCIA HISTÓRICA Y EVOLUCIÓN DE LAS BIENALES DE ARTE

Las bienales de arte nacen como respuesta a la necesidad de consolidar espacios para la difusión del arte contemporáneo, permitiendo visibilizar tendencias, lenguajes emergentes y discursos críticos. La primera bienal del mundo, la Bienal de Venecia, fue creada en 1895 con el objetivo de fortalecer la reputación cultural de Italia y revitalizar su economía a través del turismo artístico. Este modelo se replicó en distintos continentes, transformando a las bienales en plataformas internacionales de diálogo cultural, diplomacia blanda, regeneración urbana y dinamismo económico.

A lo largo del siglo XX y XXI, las bienales se convirtieron en instrumentos para:

- Democratizar el acceso al arte.
- Establecer redes globales de creadores y gestores culturales.
- Posicionar a las ciudades como polos culturales internacionales.
- Estimular la economía naranja y el turismo cultural.
- Promover procesos de memoria, identidad y transformación social.

Colombia no ha sido ajena a esta tendencia. Desde finales de los años 60, el país ha desarrollado iniciativas bienales que han dejado huella en la historia del arte nacional. Sin embargo, muchas de estas iniciativas no han logrado sostenerse en el tiempo por falta de institucionalización, lo que

resalta la importancia de formalizar espacios como la Bienal Internacional de Arte y la Ciudad de Bogotá.

A nivel internacional, las bienales más reconocidas han logrado posicionar a sus ciudades sede como referentes culturales globales:

Bienal de Venecia (Italia)



Fuente: <https://artishockrevista.com/2024/05/23/60-bienal-de-venecia-extranjeros-a-nuestros-propios-tiempos/> : Visitantes en la 60ª Biennale di Venezia, 2024. Foto: Andrea Avezzi. Cortesía: La Biennale di Venezia

Creación: Fundada en 1895, es la más antigua y prestigiosa del mundo.

Edición de la bienal: 60ª Exposición Internacional de Arte – “Foreigners Everywhere” (2024)

Ubicación: Venecia, principales escenarios: Giardini y Arsenale

Descripción de la edición: organizada por Adriano Pedrosa (primer curador latinoamericano), reunió a 331 artistas de más de 80 países con énfasis en perspectivas marginalizadas: migrante, indígena, queer y del Sur Global. Obras destacadas incluyeron instalaciones críticas sobre colonialismo, refugiados y memoria histórica.

¿Que representa para Venecia?: Reafirma a Venecia como epicentro global del arte contemporáneo, reforzando su papel diplomático-cultural y su atractivo turístico mediante profundas reflexiones sobre identidad, poder y diversidad

Bienal de Bienal de São Paulo (Brasil)



Vista de exposición: 35ª Bienal de São Paulo: coreografías de lo imposible , Fundação Bienal de São Paulo (6 de septiembre a 10 de diciembre de 2023). Cortesía de la Fundación Bienal de São Paulo. Fuente: Foto: Levi Fanan.

Creada: En 1951, consolidó a São Paulo como centro cultural de referencia en América Latina

Edición de la bienal: 35.ª Bienal – “Choreographies of the Impossible” (6 sept – 10 dic 2023)

Ubicación: Pabellón Ciccillo Matarazzo, Parque Ibirapuera, São Paulo

Descripción de esta edición: esta edición se enfoca en mostrar cómo ayuda el arte a imaginar lo que parece imposible en la vida: nuevas formas de convivir, resistir y sanar como sociedad. Fue organizada por un grupo de curadores de orígenes diferentes.

Las obras combinaban video, sonido, danza, escultura, objetos rituales y elementos tradicionales.

¿Qué representa para São Paulo?: Refuerza su papel como una ciudad abierta al mundo, que apoya el arte diverso y transforma temas difíciles como el racismo, el medio ambiente o la espiritualidad en espacios de reflexión. Además, promueve el arte accesible y gratuito para el público, ayudando a conectar a las personas con las culturas y realidades de otras regiones.

Bienal de Sídney (Australia)



Artspace, una de las instituciones líderes en producción y presentación de arte contemporáneo en Asia Pacífico, en la Bienal de Sídney. Fuente: Fotógrafo: Daniel Boud

Creación: Ha sido clave para el arte contemporáneo en la región Asia-Pacífico desde 1973

Edición de la bienal: 24ª edición – “*Ten Thousand Suns*” (9 mar – 10 jun 2024)

Ubicación: White Bay Power Station y otras sedes emblemáticas de Sídney (Opera House, Art Gallery NSW, etc.)

Descripción de la edición: Esta edición celebró los 50 años de la Bienal de Sídney. Participaron 96 artistas de más de 50 países, con obras que hablaban sobre esperanza, fuerza colectiva y sanación

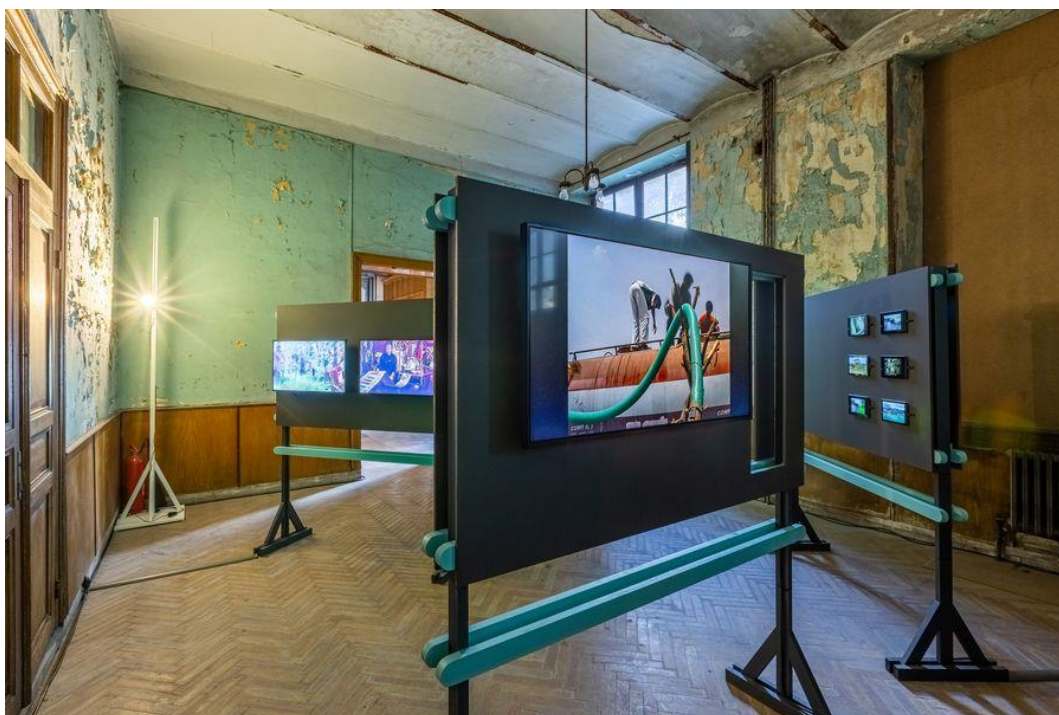
en tiempos difíciles. El título “Diez mil soles” sugiere una visión optimista del futuro, como si cada sol fuera una oportunidad para empezar de nuevo.

Lo más especial fue que muchas de las obras se instalaron en la White Bay Power Station, una antigua planta eléctrica abandonada que fue reabierta para el arte. También hubo obras de artistas aborígenes australianos y de comunidades de otras partes del mundo que han vivido injusticias.

¿Qué representa para Sídney?

La bienal mostró cómo el arte puede transformar espacios industriales en lugares de encuentro y reflexión. Reforzó a Sídney como una ciudad donde el arte no es solo para museos, sino que puede ser parte de la vida cotidiana y ayudar a sanar heridas sociales e históricas. También fue una muestra de respeto a las culturas indígenas.

Bienal de Estambul (Turquía)



Fuente: <https://artishockrevista.com/2022/10/17/anarchivando-practicas-de-archivo-en-la-17-bienal-de-estambul/> 17° Bienal de Estambul. Turquía, 2022. Foto: Sahir Ugur Eren. Cortesía: Bienal de Estambul.

Edición de la bienal: 17.^a Bienal, realizada del 17 de septiembre al 20 de noviembre de 2022, curada por Ute Meta Bauer, Amar Kanwar y David Teh como un proceso colectivo y experimental.

Ubicación: Más de 50 sedes urbanas de Estambul, como el hammam Çinili del siglo XV, una antigua escuela griega, estaciones de metro, bibliotecas, radios comunitarias, librerías y espacios culturales independientes

Descripción: Organizada por los curadores Ute Meta Bauer, Amar Kanwar y David Teh, esta edición se pensó durante la pandemia como una invitación a reconstruir colectivamente la ciudad. Planteada como una metáfora de “compostaje”, la bienal buscó transformar los saberes populares, históricos y ambientales en nuevas formas de vida y diálogo comunitario.

La exposición no se limitó a museos: incluyó más de 50 proyectos locales en lugares como un hammam del siglo XV, una antigua escuela griega, bases de radio independientes, espacios de artistas migrantes y estaciones del metro transformadas en instalación artística

Contó con más de 50 proyectos que incluyeron arte, activismo y archivo cultural, invitando al público a leer, escuchar, conversar y pensar juntos en espacios no convencionales dentro de la ciudad

¿Qué representa para Estambul?:

- Arte fuera de los museos: acercó el arte a la calle y sectores menos atendidos.
- Diálogo crítico: puso en primer plano temas sociales, ecológicos, históricos y comunitarios.
- Espacio urbano y memoria: permitió redescubrir lugares patrimoniales y nuevas historias urbanas.
- Participación: activó comunidades y espacios diversos en un proceso artístico colectivo

2.3 LAS BIENALES DE ARTE EN COLOMBIA

Colombia ha construido una rica tradición en eventos artísticos de gran formato que han marcado la evolución del arte moderno y contemporáneo nacional. A lo largo del siglo XX, estas manifestaciones culturales sirvieron como plataformas fundamentales para la inserción del país en las redes internacionales del arte y para la consolidación de espacios de exhibición y reflexión artística.

- **La Bienal de Coltejer (1968 y 1970) - Medellín**

La Bienal de Coltejer se erigió como uno de los proyectos culturales más ambiciosos del país durante las décadas de los sesenta y setenta. Organizada en Medellín con el respaldo financiero de la empresa textil Coltejer, esta iniciativa logró posicionar a la capital antioqueña como un centro artístico de relevancia en América Latina. El evento atrajo a figuras prominentes del arte contemporáneo internacional, estableciendo un precedente importante para el desarrollo de bienales en territorio colombiano. Su impacto trascendió las fronteras nacionales, consolidando a Medellín como una ciudad con vocación cultural y artística que perdura hasta la actualidad.

- **La Bienal Americana de Artes Gráficas (1971-1986) - Cali**

En la capital vallecaucana se desarrolló entre 1971 y 1986 la Bienal Americana de Artes Gráficas, evento especializado que se convirtió en un referente continental para la promoción del grabado y las artes gráficas. Durante sus quince años de existencia, esta bienal otorgó visibilidad a artistas emergentes y facilitó el intercambio cultural con creadores de otros países latinoamericanos. Su enfoque específico en las artes gráficas llenó un vacío importante en el panorama cultural

colombiano, contribuyendo significativamente al desarrollo de esta disciplina artística en el país y fortaleciendo los vínculos culturales regionales.

- **La Bienal del Museo de Arte Moderno de Bogotá (1988-2009)**

Entre 1988 y 2009, el Museo de Arte Moderno de Bogotá organizó una bienal que, aunque de alcance principalmente nacional, desempeñó un papel crucial en la consolidación del arte contemporáneo colombiano. Esta iniciativa, que se extendió por más de dos décadas, sirvió como plataforma de exhibición para artistas nacionales y contribuyó a la formación de públicos especializados en arte contemporáneo. A pesar de no contar con una proyección internacional significativa, constituyó un espacio fundamental para el diálogo y la reflexión sobre las tendencias artísticas nacionales.

- **La Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Cartagena de Indias (BIACI, 2014 y 2017)**

La BIACI representó un esfuerzo ambicioso por descentralizar el arte contemporáneo y llevarlo a una ciudad con extraordinaria carga histórica y turística. Durante sus dos ediciones (2014 y 2017), contó con la participación de artistas internacionales y nacionales de reconocida trayectoria, enfocándose en el arte contemporáneo global con propuestas curatoriales de gran alcance. La bienal apostó por convertir a Cartagena en un destino cultural de primer nivel, aprovechando su infraestructura turística y su patrimonio arquitectónico. Sin embargo, a pesar de su éxito inicial en términos de calidad artística y convocatoria, no logró establecer continuidad regular debido a problemas de financiación y complejidades logísticas, evidenciando la necesidad de contar con marcos institucionales sólidos para garantizar la sostenibilidad de este tipo de eventos.

Estas experiencias históricas fueron fundamentales para el desarrollo del arte moderno y contemporáneo en Colombia, permitiendo que el país se insertara en las redes internacionales del arte y consolidando espacios de exhibición y reflexión en torno a las tendencias y discursos artísticos del momento. Sin embargo, también demostraron la importancia de contar con respaldo institucional y financiero estable para garantizar la continuidad de estos eventos culturales de gran envergadura.

2.4 LA BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE Y CIUDAD DE BOGOTÁ BOG25³⁰

La Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá BOG25 representa un momento histórico para el posicionamiento definitivo de la capital colombiana en el circuito internacional del arte

³⁰ Secretaría Distrital de Cultura <https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogota-creadora-internacional-principal/noticias/en-2025-bogota-tendra-una-bienal-internacional-de-arte>

contemporáneo. Con su propuesta curatorial "Ensayos sobre la felicidad", la BOG25 ha demostrado el potencial de Bogotá para albergar eventos artísticos de talla mundial.

Esta iniciativa cultural sitúa a Bogotá en el grupo de grandes ciudades mundiales que albergan eventos artísticos de esta magnitud, comparable con metrópolis como São Paulo, Sídney, Venecia, Berlín, Buenos Aires o Estambul.

Propuesta Curatorial: "Ensayos sobre la felicidad"

La propuesta curatorial "Ensayos sobre la felicidad" constituye una exploración profunda y crítica sobre múltiples perspectivas de este concepto en el contexto contemporáneo. A través de esta propuesta conceptual, se plantea un diálogo innovador entre el arte, la ciudad y sus habitantes, desarrollándose mediante categorías curatoriales específicas que abordan las tensiones latentes entre la necesidad de disfrutar y el imperativo de ser feliz desde una perspectiva crítica y reflexiva.

Las categorías curatoriales incluyen:

- **Goce Público:** Obras que reflexionan sobre el disfrute compartido de los espacios y experiencias colectivas, explorando la acción colectiva, el carnaval y el juego
- **Ritual y Naturaleza:** Propuestas artísticas que conectan los rituales humanos con el entorno natural, examinando paraísos artificiales, estados alterados y procesos de sanación
- **Ciudad Promesa:** Exploraciones artísticas sobre las aspiraciones, utopías y desilusiones de la vida urbana, tratando la expansiva metrópolis como lugar de acogida y aspiración a una vida mejor
- **Estratigrafía:** Intervenciones que investigan las capas históricas, culturales y sociales de la ciudad, abordando la segregación y endogamia en una urbe dividida por estratos
- **Elogio al Ocio:** Obras que valoran el tiempo libre, la contemplación y el descanso como aspectos esenciales de la felicidad
- **Optimismo Tóxico:** Críticas artísticas a los discursos superficiales y forzados sobre la felicidad en la sociedad contemporánea, acercándose críticamente al auge de la literatura de autoayuda
- **Estados Alterados:** Reflexiones sobre las transformaciones emocionales, físicas o mentales que atraviesan los seres humanos

Características principales de la BOG25:

La BOG25 se configura como el evento internacional más importante de Bogotá y Colombia en el ámbito de las artes plásticas, incorporando también el diseño y la arquitectura como elementos protagónicos. Sus características principales incluyen:

- Más de 100 artistas nacionales e internacionales de reconocida trayectoria
- Intervenciones artísticas en el espacio público
- Cerca de 30 exposiciones en espacios independientes e institucionales
- Inversión aproximada de \$8.000 millones de pesos
- Proyección de 2 millones de asistentes

- Uso de espacios emblemáticos como el Eje Ambiental, Palacio San Francisco, Jardín Botánico, Plaza Cultural La Santamaría

Impactos de las Bienales de Arte:

Las bienales de arte generan múltiples impactos positivos para las ciudades que las albergan:

Impacto Cultural:

- Fortalecen la escena artística local
- Promueven el diálogo intercultural
- Contribuyen a la formación de públicos
- Dinamizan la economía creativa

Impacto Económico:

- Atraen turismo cultural nacional e internacional
- Dinamizan sectores como hotelería, gastronomía y comercio
- Generan empleo directo e indirecto
- Impulsan la economía naranja

Impacto Urbano:

- Revitalizan espacios públicos
- Promueven la apropiación ciudadana del territorio
- Contribuyen a la renovación urbana
- Fortalecen la identidad territorial

Impacto Internacional:

- Posicionan a la ciudad en redes globales del arte
- Fortalecen la marca territorial
- Atraen inversión cultural
- Facilitan intercambios artísticos y académicos

2.5 JUSTIFICACIÓN PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN

La experiencia internacional demuestra que las bienales de arte exitosas requieren continuidad y estabilidad institucional. La dependencia de voluntades políticas específicas ha llevado al fracaso de importantes iniciativas artísticas en Colombia.

La institucionalización de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá como evento permanente garantizará:

1. **Continuidad temporal:** Independiente de cambios de administración

2. **Estabilidad presupuestal:** Inclusión en presupuestos distritales de manera sistemática
3. **Desarrollo progresivo:** Consolidación y crecimiento del evento a lo largo del tiempo
4. **Posicionamiento internacional:** Credibilidad ante la comunidad artística global
5. **Impacto sostenible:** Beneficios culturales, económicos y sociales permanentes para Bogotá

3. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA INICIATIVA

3.1 DE ORDEN INTERNACIONAL

3.1.1 RELACIÓN DE LA INICIATIVA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Se tiene que esta iniciativa se enmarca en los ODS:

Objetivo 4: Educación de Calidad: *“Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos y las habilidades necesarios para promover el desarrollo sostenible, lo que incluye, entre otros, la educación para el desarrollo sostenible y estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, ciudadanía y valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible”.*

La cultura incentiva a los niños y jóvenes al acercamiento con entornos educativos que les resulten divertidos, promoviendo su creatividad, y utilizando el arte como mecanismo de aprendizaje, bajo este sentido, resulta importante institucionalizar la bienal de arte para promover una cultura de paz e innovación.

Objetivo 5: Igualdad de Género: *“Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles”.*

Empoderar a las mujeres y niñas a través del arte y la cultura, para promover el desarrollo económico, así mismo, a través de la cultura educar a la sociedad con el fin de eliminar cualquier forma de discriminación o violencia de género.

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico: *“Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros”.*

A través de la bienal de arte, se busca promover la generación de empleo por medio de espacios que permitan la visualización y comercialización de obras de arte elaboradas por artistas emergentes. Así mismo, se estimula el crecimiento económico, pues en este espacio se permite a los micro y pequeños empresarios poner a disposición del comercio sus productos y servicios.

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades: *“Para 2030, empoderar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o condición económica o de otro tipo”.*

La cultura es un instrumento para unir a todos los ciudadanos, en pro del arte y el crecimiento económico, porque permite exponer la diversidad de ideas y propende por contribuir en la economía.

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles: *“Para alcanzar el Objetivo 11, los esfuerzos deben centrarse en aplicar políticas y prácticas de desarrollo urbano inclusivo, resiliente y sostenible que den prioridad al acceso a los servicios básicos, a la vivienda a precios asequibles, al transporte eficiente y a los espacios verdes para todo el mundo”.*

La cultura y el arte como bienes inmateriales fomentan el crecimiento económico, inclusivo y sostenible, debido a que a través de la industria creativa se generan medios de subsistencia para las comunidades y mercados locales.

3.2. DE ORDEN CONSTITUCIONAL

En el orden constitucional de Colombia, es necesario referirse a diversas normas y principios establecidos en la Constitución Política de 1991, así como a leyes y jurisprudencia que regulan aspectos relacionados con la seguridad, la calidad de vida, y el manejo del espacio público.

Artículo 2: *“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.”*

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”

La Bienal de Arte, propende por mantener tradiciones culturales, a través de la participación ciudadana y fomento al crecimiento económico, entendiendo el arte como modo de vida.

Artículo 7: *“El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”.*

Este artículo fundamenta la promoción de la cultura como un deber constitucional, y de ahí la importancia de institucionalizar la Bienal de Arte como espacio de cultura y desarrollo económico.

Artículo 8: *“Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.*

Con la institucionalización de la Bienal de Arte, se propende por garantizar el mantenimiento, protección y promoción cultural en la ciudad.

Artículo 16: *“Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”.*

La Bienal de Arte constituye un espacio para el desarrollo cultural, artístico y de expresión para todos los ciudadanos de Bogotá.

Artículo 70: *“El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.”*

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación”.

Al institucionalizar la Bienal de Arte, el distrito propenderá por fomentar el acceso a la cultura y la promoción del arte en la ciudad.

Artículo 71: *“La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades”.*

A través de la Bienal de Arte, se presentarán expresiones artísticas para promover el desarrollo cultural y económico de la ciudad.

Artículo 311: *“Al municipio como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”.*

Bajo este fundamento, la Bienal de Arte contribuye al desarrollo y la participación comunitaria, en las actividades relacionadas con el mejoramiento social y cultural de la ciudad.

3.3. DE ORDEN LEGAL

Varios cuerpos legales apoyan y refuerzan la propuesta presentada:

Ley 397 de 1997 – “Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias”: Esta ley tiene como propósito proteger la cultura y el arte como estrategias para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Artículo 1: “De los principios fundamentales y definiciones de esta ley. La presente ley está basada en los siguientes principios fundamentales y definiciones:

1. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias.
2. La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la identidad y la cultura colombianas.
3. El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana (...).”

Bajo este contexto normativo, recibe sustento la Bienal de Arte como expresión de la cultura y el desarrollo económico de la ciudad.

Artículo 2: “Del papel del Estado en relación con la cultura. Las funciones los servicios del Estado en relación con la cultura se cumplirán en conformidad con lo dispuesto en el Artículo anterior, teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la política estatal sobre la materia son la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación y el apoyo y el estímulo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y nacional”.

A través de la actuación de la administración distrital, se promoverá la cultura, el arte y el desarrollo económico de Bogotá.

Artículo 18: “De los estímulos. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para tal efecto establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes, así como para integrantes de las comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y colectivo en cada una de las siguientes expresiones culturales: a. Artes plásticas; b. Artes musicales; c. Artes escénicas; d. Expresiones culturales tradicionales, tales como el folclor,

las artesanías, la narrativa popular y la memoria cultural de las diversas regiones y comunidades del país; e. Artes audiovisuales; f. Artes literarias; g. Museos Museología y Museografía; h. Historia; i. Antropología; j. Filosofía; k. Arqueología; l. Patrimonio; m. Dramaturgia; n. Crítica; ñ. Y otras que surjan de la evolución sociocultural, previo concepto del Ministerio de Cultura”.

A través de la Bienal de Arte, se expondrán diferentes expresiones culturales, lo cual promueve la diversidad, la cultura y el arte en la ciudad.

Documento Conpes 3659 DNP de 2010 “Política Nacional para la Promoción de las Industrias Culturales en Colombia” *“El objetivo central de esta Política es aprovechar el potencial competitivo de las industrias culturales, aumentar su participación en la generación del ingreso y el empleo nacionales, y alcanzar elevados niveles de productividad”*

A través de la Bienal de Arte, Bogotá contará con espacios para el aprovechamiento del potencial local y el desarrollo económico a través de la cultura y el arte.

3.4 DE ORDEN DISTRITAL

Decreto 627 de 2007 “Por el cual se reforma el Sistema Distrital de Cultura y se establece el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio”

Artículo 2: *“Objeto- El Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio está encargado de promover, articular y regular de manera concertada y corresponsable la interacción social entre los Agentes Culturales, Organismos y Organizaciones involucrados en los procesos de participación, planeación, fomento, organización, información y regulación propios de los campos del Arte, la Cultura y del Patrimonio. Este Sistema facilita la adecuada administración y gestión de las políticas públicas orientadas al desarrollo cultural de la ciudad y de la ciudadanía, además permite la movilización de voluntades, el desarrollo de iniciativas y el diálogo de las organizaciones sociales con las autoridades públicas en los campos respectivos”.*

La Bienal de Arte, vista como el desarrollo de políticas públicas relacionadas con la promoción de la cultura, el arte y el desarrollo económico.

Artículo 5: *“Principios- El Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio se regirá por los siguientes principios orientadores y de gestión. 5.1 PRINCIPIOS ORIENTADORES- 5.1.1 Diversidad Cultural en perspectiva de derechos: La ciudad está habitada por grupos sectoriales, sociales, poblacionales y étnicos que de manera efectiva y legítima ejercen sus derechos culturales en procura de desarrollar y preservar sus identidades, prácticas artísticas, culturales, patrimoniales, formas de vida, creencias y saberes. Los grupos sectoriales, sociales, poblacionales y étnicos que habitan la ciudad acceden, disfrutan, intercambian y apropian las prácticas artísticas, culturales y del patrimonio del orden local, regional e internacional en ejercicio de sus derechos a la cultura, considerando criterios de legalidad, libre elección, autonomía y valoración.*

La diversidad cultural contribuye a una "existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual más satisfactoria para todas las personas" (Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, artículo 3), y constituye uno de los elementos esenciales de transformación de la realidad urbana, rural

y social. El Estado garantizará el reconocimiento, titularidad, ejercicio y restablecimiento de los derechos culturales (...)"

A través de la institucionalización de la Bienal de Arte, la ciudad contará con espacios para la cultura, la sensibilización ciudadana, la apropiación del territorio y la promoción de la diversidad cultural a través del arte.

DECRETO 465 DE 2006 “Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos Culturales de Bogotá Distrito Capital”

Artículo 6. Objetivo General Del Plan Maestro. El objetivo general del Plan Maestro es generar los criterios culturales de ordenamiento territorial, desarrollar acciones tendientes a identificar, conservar, mantener y crear las características del paisaje cultural urbano y propender por una infraestructura equilibrada en el territorio, articulada, cualificada, y sostenible social y económicamente, para atender la oferta y la demanda cultural de los pueblos y sectores de la ciudad y la región.

Política Pública de Cultura Ciudadana 2019-2038 - “Consejo Distrital de Política Económica y Social del Distrito Capital” - Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte *“La política parte del supuesto de que el componente cultural, es decir la cultura ciudadana, es transversal a toda la vida de la ciudad. Para estos efectos se entiende la cultura como el conjunto diverso de modos de ser, sentir, pensar y actuar en la ciudad mediado por el reconocimiento del otro (la ciudad, las personas u otras formas de vida) y el respeto a la diferencia, la construcción del tejido social, la convivencia, las sociabilidades y el desarrollo libre de proyectos de vida individuales y colectivos”.*

• RELACIÓN DE LA INICIATIVA CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO “BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024 - 2027”

La institucionalización de la Bienal se articula perfectamente con el Acuerdo 927 de 2024: *“Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”.*”, específicamente con:

Artículo 2: *“Visión 2027 - Bogotá será la ciudad del bien- estar. Bogotá será la ciudad del bien-estar y de la igualdad de oportunidades en el marco de la confianza, el respeto y la libertad. Será una ciudad diversa, accesible, incluyente, segura y justa, generadora de acuerdos en los que todas y todos tengamos la posibilidad de ser y hacer.*

En esta capital global, incluyente, productiva e innovadora, la ciudadanía será la protagonista de un proyecto de desarrollo sostenible que nos una, comprometido con la acción climática y la justicia ambiental.

En Bogotá seremos capaces de resolver nuestros problemas y de construir una visión conjunta de futuro”

Artículo 5: (...) “5.3. Bogotá confía en su potencial: *Bogotá debe ser una ciudad en la que todos y todas podamos desarrollar y aprovechar al máximo nuestro potencial como personas, familias, empresas, academia y sociedad. Esto requiere consolidar a Bogotá como una ciudad del*

conocimiento, educada y competitiva, mediante el acceso a bienes y servicios -públicos y privados-, que brinden oportunidades de desarrollo para todos y todas. Una ciudad que adopta la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel) como motor para el desarrollo de los ecosistemas empresariales, de alta productividad y de emprendimiento, que se alinean con las vocaciones individuales fomentadas desde la niñez y del territorio. Para ello, Bogotá estará soportada en un ambiente que estimula la generación y apropiación social del conocimiento”

Artículo 10: (...) **“10.8. Programa 14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural.** El objetivo de este programa es contribuir a la salud mental y física de la ciudadanía en su ciclo de vida mediante el incentivo de la práctica deportiva, recreativa, artística, cultural y patrimonial en los barrios, comunidades y en la Bogotá Región, apropiándose de las diferentes disciplinas deportivas que oferta el distrito e invitando a conocer cada una de ellas, aprovechando los espacios públicos accesibles y seguros, haciendo uso de diversas plataformas en beneficio de la salud tanto física como mental y promoviendo hábitos de vida saludable, con ejercicios que buscan relaciones interculturales”

Artículo 55. “Coordinación distrital para la promoción y fomento de las actividades artísticas, culturales, recreativas, deportivas y religiosas en el Distrito Capital. La Secretaría Distrital de Cultura y de Gobierno, en el marco de sus competencias, coordinarán con las entidades que participan en la regulación y/o autorización de los espectáculos públicos artísticos, culturales, recreativos, deportivos y religiosos, definirán e implementarán una estrategia que conduzca a la articulación efectiva institucional e intersectorial para promover, facilitar y fomentar la realización de este tipo de eventos en el Distrito Capital (...)”.

Artículo 65. “**Fortalecimiento de los Festivales al Parque que mantendrán su carácter público.** La Administración Distrital fortalecerá y consolidará el programa de Festivales al Parque de Bogotá como plataforma creativa y espacio de encuentro entre artistas, productores, emprendedores, sectores comerciales de economías sociales, y ciudadanía en general, que contribuye al desarrollo económico, turístico, artístico, cultural y social de la ciudad en el corto y mediano plazo. El sector Cultura, Recreación y Deporte en los festivales al parque impulsará una estrategia de marketing y promoción de los eventos generando alianzas con entidades públicas y privadas para obtener ingresos adicionales incluyendo la comercialización de productos y servicios, publicidad, entre otras acciones de mercadeo, con el objetivo de aumentar la visibilidad y participación de dichos eventos, fortaleciendo la sostenibilidad financiera de los mismos”

Artículo 116. “Cooperación estratégica con el sector privado para el desarrollo de eventos deportivos, sociales y culturales. Para los procesos de producción y desarrollo de programas, festivales o eventos deportivos, sociales y/o culturales de alcance metropolitano, la Administración Distrital podrá establecer acciones de cooperación y alianzas estratégicas con actores del sector privado que cuenten con reconocimiento, acreditación, experiencia y capacidad financiera, con el fin de respaldar la organización, ejecución y operatividad del programa y/o evento que llegue a realizarse, y en función de garantizar impactos positivos de índole social y económico en el Distrito Capital”.

Proyectos de inversión relacionados:

Proyecto 7957: *"Fortalecimiento de prácticas y transformaciones culturales, patrimoniales, urbanas y sociales para el bienestar integral de Bogotá D.C."*

Proyecto 8150: *"Consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento, divulgación y apropiación de los patrimonios a nivel territorial y poblacional en Bogotá D.C."*

4. COMPETENCIA

De conformidad con las disposiciones que facultan al Concejo de Bogotá para desarrollar su función normativa, se encuentra que esta Corporación cuenta con la competencia y la iniciativa para dictar normas sobre la materia que trata el presente Proyecto de Acuerdo.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que:

"ARTÍCULO 313. Corresponde a los Concejos:

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio [...].

10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen [...]"

Por su parte, el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 - Estatuto Orgánico de Bogotá, establece de manera específica las atribuciones del Concejo Distrital:

"ARTÍCULO 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito [...]"

13. Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural.

Por lo anterior, se concluye que el Concejo de Bogotá tiene la competencia otorgada por la Constitución y la Ley para presentar, conocer, debatir y pronunciarse sobre este proyecto de acuerdo.

5. IMPACTO FISCAL

En observancia de la Ley 819 de 2003, *"Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones"*, específicamente lo dispuesto en su artículo 7º que establece:

"Artículo 7º. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo."

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo".

Se concluye que esta propuesta normativa no genera un impacto fiscal adicional, considerando que esta iniciativa, se encuentra ya prevista dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones, dentro del presupuesto asignado y en otras disposiciones distritales vigentes, entre estas el Plan Distrital de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial. Por lo anterior, la ejecución de esta iniciativa no requiere recursos adicionales a los ya aprobados.

Cordialmente,

SANDRA FORERO RAMÍREZ

Concejal de Bogotá D.C
Partido Centro Democrático

ARTICULADO PROPUESTO

PROYECTO DE ACUERDO NO 749 DE 2025**PRIMER DEBATE****"POR EL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE Y CIUDAD DE BOGOTÁ COMO EVENTO PERMANENTE DE INTERÉS CULTURAL DISTRITAL"****EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C**

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 1 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia y el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA:

Artículo 1. Objeto. Institucionalizar la Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá como evento permanente de interés cultural distrital, garantizando su realización periódica como una de las manifestaciones artísticas más importantes de la ciudad.

Artículo 2. Definición. La Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá es un evento de exhibición artística de gran escala que se realizará cada dos años, reuniendo a artistas, curadores, críticos y público en torno a diversas expresiones del arte contemporáneo, con el propósito de posicionar a Bogotá como referente cultural internacional y fortalecer la escena artística local.

Artículo 3. Objetivos. La Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá tendrá los siguientes objetivos:

1. Consolidar a Bogotá como eje del arte contemporáneo en Colombia y referente internacional
2. Fomentar el talento local y promover el intercambio artístico internacional
3. Transformar el espacio público a través de intervenciones artísticas
4. Impulsar el turismo cultural y dinamizar la economía local
5. Fortalecer alianzas estratégicas entre los sectores público, privado y académico
6. Desarrollar nuevas audiencias para la cultura y el arte contemporáneo
7. Contribuir a la construcción de ciudadanía y apropiación del territorio

Artículo 4. Características. La Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá se caracterizará por:

1. La participación de artistas nacionales e internacionales de reconocida trayectoria
2. La inclusión de intervenciones artísticas en el espacio público
3. El desarrollo de una agenda académica y de mediación cultural
4. La utilización de espacios emblemáticos de la ciudad
5. La promoción de la diversidad y la inclusión en todas sus manifestaciones

Artículo 5. Responsabilidades. La Administración Distrital, en cabeza del Sector de Cultura, Recreación y Deporte, coordinará las acciones necesarias para la realización de la Bienal

Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá, en articulación con las demás entidades distritales competentes y en colaboración con el sector privado, la academia y organizaciones culturales.

Artículo 6. Espacios. La Bienal se desarrollará prioritariamente en espacios públicos emblemáticos de la ciudad, sin perjuicio de la utilización de espacios culturales, académicos y privados que contribuyan a sus objetivos.

Parágrafo. La Administración Distrital facilitará el uso de espacios públicos distritales para la realización de las actividades de la Bienal, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad y conservación del patrimonio.

Artículo 7. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 750 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO**

El presente Acuerdo tiene como objeto promover la implementación del Mecanismo de Obras por Impuestos en el Distrito Capital, incentivando su aprovechamiento para la ejecución y entrega de obras de trascendencia social e importancia estratégica para el Distrito Capital.

II. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DEL PROYECTO

Uno de los mayores factores de desconfianza de la ciudadanía en los gobiernos son las pérdidas de tiempo y dinero en la construcción de infraestructura pública: Obras con retrasos; Sobrecostos que casi superan el presupuesto inicial; Contratos que nunca se terminan o proyectos que nunca empezaron son permanentes en casi todo el país.

Bogotá no ha sido la excepción, y en algunos casos con un agravante, han sido obras que se han cobrado específicamente a las poblaciones que se verían beneficiadas con su **terminación y entrega**. Este modelo de obras por valorización empezó hace 30 años; pero la verdad no ha logrado funcionar del todo bien.

El ejemplo es concreto, la “Conexión de la Calle 45 entre carreras 5 y 13”, una obra aprobada en el primer Acuerdo de Valorización en 1995 que apenas se está construyendo en su última fase. Ahora, sin dejar de desconocer el avance que este proyecto ha tenido en esta Administración, con un reporte del 22.96%; el diagnóstico en general es desalentador, pues la primera etapa de este proyecto se ejecutó parcialmente mediante un contrato del 2013, sólo entre las carreras 7 y 13. Es decir, el proyecto empezó 18 años tarde, se contrató a medias, y hasta después de 30 años parece que por fin se van a entregar las obras pendientes.

Y hay más casos como estos, en que si bien se terminaron las obras, se contrataron y empezaron hasta varios años después de haberse aprobado ³¹:

- **Acuerdo 25 de 1995**
 - Ampliación Cl 53 de Cra 24 - Cra 7
- Contratada por partes entre 1999 y 2003:
- IDU-326-1999
 - IDU-409-2002
 - IDU-262-2003

³¹ IDU - Oficio DTAV 202556500146751 del 06 de febrero de 2025 - REF: *Respuesta Proposición 137 de 2025. Tema: Obras por Valorización. Oficio Concejo 2025EE1463. Radicado IDU 202552600136612 del 29 de enero de 2025.*

- Eje Ambiental de la Av. Jiménez
Contratada por partes entre 2001 y 2003:
 - IDU-091-2001
 - IDU-427-2003
- Av. De los Comuneros de Av. Caracas a Av. Circunvalar Contratada hasta el 2006:
 - IDU-163-2006
- Av. La Sirena de Autonorte a Av. Boyacá, y Puente Cl 153 por Autopista Norte
Contratada por partes entre 1999 y 2011:
 - IDU-298-1999
 - IDU-023-2001
 - IDU-070-2003
 - DU-032-2011
- Conexión Cra. 11 entre Calle 100-106’’:
Contratada 17 años después:
 - IDU-074-2012
- - **Acuerdo 180 de 2005**
- Av San José (AC 170) desde Av Boyacá hasta Av Cota (AK 91)
- Av Laureano Gómez (AK 9) desde Av San Juan Bosco (AC 170) hasta Av de los Cedritos (AC 147)
Contratadas 4 años después:
 - IDU-66-2009
- Intersección Vial Av Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94 Contratada 7 años después:
 - IDU-005-2012
- Av Santa Lucía (TV 42) desde Av General Santander (DG 39A Sur) hasta Av Jorge Gaitán Cortes (AK 33) *
Contratada en su última etapa hasta 8 años después:
 - IDU-868-2013
- Diseño, rehabilitación y ampliación de aproximadamente 2.3 km-carril de la Avenida del Ferrocarril de Occidente entre la Carrera 100 y Carrera 93 Contratada 9 años después:
 - IDU-1835-2014
- Avenida El Rincón desde la Avenida Boyacá hasta la Carrera 91
- Avenida el Rincón por Avenida Boyacá
Contratada 13 años después, y las obras siguen ejecutándose:
 - IDU-1550-2018
- Avenida Cota (Desde la Avenida San José (AC 170) hasta límite del Distrito Capital - Río Bogotá)
Contratada 16 años después y sigue en ejecución:
 - IDU-1815-2021

Ahora, otro ejemplo cercano al de la Calle 45:

- **Acuerdo 180 de 2005**
 - Avenida Ciudad de Cali (AK 86) por Avenida Ferrocarril de Occidente (AC 22)
 - Contratada inicialmente en 2018; y 19 años después sigue sin terminar:
 - Primer contrato IDU-1541-2018: Meta física sin alcanzar por hechos sobrevinientes.
 - Nuevo proceso de contratación en curso: Proceso de Selección IDU-LP-SGDU-011-2024.

Si bien con la asignación de los proyectos inicia el recaudo para su financiamiento, en un proceso que puede tomar algunos años, repasando estos ejemplos se presumen fallas en la formulación de los contratos y ejecución de las obras, que hoy no podrían justificarse viendo la importancia y costos de las vías. Y peor aún son las obras contratadas que quedaron tiradas en medio de su ejecución, generando sobrecostos, lo cual remite al mismo proceso contractual; es decir, cómo se eligen los contratistas:

- **Acuerdo 724 de 2018**
 - Conexiones transversales peatonales en las calles 73, 79B y 85 en Chapinero
 - Primer contrato IDU-1299-2020: No se completó la meta física del proyecto por incumplimiento del contratista. Se realizó la toma de posesión física de la obra.
 - Nuevo contrato adjudicado: IDU-1767-2023
 - Aceras y ciclorutas en las calles 92 y 94 en Chapinero
 - Primer contrato IDU-1279-2020: No se completó la meta física del proyecto por incumplimiento del contratista. Se sancionó al contratista de obra, a través de una Multa, lo que conlleva acciones legales y administrativas para los consorciados.
 - Nuevo contrato adjudicado: IDU-2400-2024
 - Puente Peatonal de la Calle 112 sobre Carrera 9 en Usaquén
 - Primer contrato IDU-215-2020: No se completó la meta física del proyecto por incumplimiento del contratista. Se sancionó al contratista de obra, aplicando la sanción máxima (Caducidad), lo que conlleva acciones legales y administrativas para los consorciados.
 - Nuevo contrato adjudicado: IDU-2314-2024

Como se ve, difícilmente se ha tenido garantía en la entrega a tiempo de obras aprobadas en Acuerdos de Valorización; es decir, obras ejecutadas mediante proyectos cobrados previamente a la ciudadanía, y pagados expresamente para su construcción. Con este diagnóstico, no son mejores los reportes de otras obras que no hayan derivado de estos acuerdos: Estudios incompletos, indefiniciones en los diseños supuestamente definitivos, contradicciones en los trámites con las empresas de servicios públicos y retrasos con los permisos para la ejecución, se han vuelto el común denominador de las obras en la ciudad; todo lo que se puede interpretar con deficiencias en la gestión de la misma Administración Distrital y sus entidades.

A propósito de esta problemática, en los últimos años se ha venido desarrollando e implementando en el país el concepto de Obras por Impuestos. Este mecanismo, aunque tiene una esencia financiera, como alternativa al

cumplimiento tributario de los contribuyentes, bien puede habilitarse como un recurso político para la participación incidente de la ciudadanía en el desarrollo urbano y físico en general de sus ciudades.

El mecanismo de obras por impuestos surgió a través de la Ley 1819 de 2016 (art.238), haciendo parte de una reforma tributaria, con el fin de generar incentivos para cerrar brechas de desigualdad socioeconómica, en las zonas consideradas como más afectadas por el conflicto armado (ZOMAC), estableciéndose la posibilidad de que personas jurídicas pudieran efectuar el pago parcial del impuesto de renta, mediante la inversión directa en la ejecución de proyectos de trascendencia social, en los municipios ubicados en estas regiones³².

La actual Administración se ha propuesto, como uno de los objetivos en su ejercicio de poder político, recuperar la confianza de la ciudadanía; para el caso de esta iniciativa, sería fundamental disponer de la mejor normativa posible, bajo condiciones claras que incentiven su participación, para su vinculación al Mecanismo de Obras por Impuestos.

El reto no es menor, se trata de implementar una medida que a nivel nacional apenas sigue madurando, que parece tener más dudas que certezas: “(...) parece ocurrir que existe apatía o dificultad por parte de los contribuyentes para su utilización. Ello puede deberse a la falta de claridad acerca de las obligaciones y deberes del Estado frente a los contribuyentes que realizan estas obras (...) se debe indagar acerca del papel o rol del Estado de cara a las garantías ofrecidas a los contribuyentes que deciden acceder al mecanismo de obras por impuestos y hasta dónde se entiende cumplido el requisito de la realización de este tipo de obras para el mantenimiento del beneficio tributario. En este sentido, se debe resaltar que, en la realización de una obra, sin que esta sea la diferencia, podrían ocurrir situaciones o vicisitudes con la potencialidad de afectar o anular del todo el beneficio, lo que debe llevar a analizar más allá del funcionamiento del mecanismo, en caso de incumplimiento de las partes: ¿Quién está obligado a responder? ¿En los casos en que el incumplimiento sea del Estado, podríamos hablar de casos de responsabilidad del Estado?”³³.

En el Distrito no podría ser más complejo el panorama para la aplicación del Mecanismo de Obras por Impuestos: Frentes de obra activos por toda la ciudad que ocupan y exigen las capacidades administrativas y técnicas de las entidades; y redes de servicios públicos con inventarios inciertos y tediosos trámites de aprobación ante sus empresas dueñas o administradoras.

El presente Proyecto de Acuerdo busca complementar la normativa que hasta ahora se ha desarrollado en la ciudad, incluyendo elementos que aseguren sinergias entre el sector público, los contribuyentes y demás ejecutores de proyectos por el Mecanismo de Obras por Impuestos. Necesitamos mitigar al máximo posible los riesgos asociados a ejecutar obra pública en Bogotá, que desarrollar “proyectos de trascendencia social e importancia estratégica para el Distrito Capital”, como los define la normativa, signifique trabajar de la mano con la Administración Pública; así se puede recuperar la confianza de los ciudadanos por parte de sus gobernantes.

La decisión política de vincular a los contribuyentes en la construcción de obra pública en la ciudad debe sustentarse en normativa jurídica y técnica que sea clara y suficiente, que motive su participación y haga valer la pena asumir el compromiso de hacer inversión social en la ciudad.

III. MARCO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

● MARCO CONSTITUCIONAL:

³² Garavito Martín, J. (2021). La problemática del mecanismo de obras por impuestos frente a la responsabilidad de sus intervinientes. Universidad Externado de Colombia.

³³ Barliza Illidge, V. (2022). Mecanismo de obras por impuestos en Colombia ¿Éxito o fracaso?. Universidad Externado de Colombia.

En el marco de la Constitución, considerando las responsabilidades de la Administración Pública en la formulación e implementación del Mecanismo de Obras por impuestos, pueden citarse los artículos 90 y 209:

“Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.”

“Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”

- **NORMATIVA NACIONAL:**

A propósito del Mecanismo de Obras por impuestos, su reglamentación e implementación en el país, se pueden citar la siguiente normativa.

- a. Ley 1819 de 2016**

“Por medio de la cual se adopta una Reforma Tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.”

- Artículo 238. Obras por impuestos.
Reglamentado por el Decreto 1208 de 2022.

- b. Decreto Ley 624 de 1989**

“Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales.”

- Artículo 800-1. Obras por impuestos.
Adicionado por el Art. 79 de la Ley 2010 de 2019.
Adicionado por el Art. 34 de la Ley 2155 de 2021. Modificado por el Art. 26 de la Ley 2277 de 2022.
Modificado por el Art. 294 de la Ley 2294 de 2023

- **NORMATIVA DISTRITAL:**

En la alcaldía de Carlos Fernando Calán se ha asumido con hechos la posibilidad de implementar el Mecanismo de Obras por Impuestos en Bogotá, muestra de esto son las consideraciones expuestas en el mismo Plan Distrital de Desarrollo para su mandato y el Decreto Distrital 054 de 2025.

- a. ACUERDO 927 DE 2024 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**

“Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”

Artículo 16. Programas del Objetivo Estratégico “Bogotá Confía en su Gobierno”. Adóptense los siguientes programas del objetivo “Bogotá confía en su Gobierno”:

16.7. Programa 38. Gestión eficiente de los ingresos y gastos enfocados en la confianza ciudadana. *Este programa desarrollará acciones para aumentar y optimizar los ingresos del Distrito Capital, hacer más eficientes sus gastos, garantizar su calidad, y mejorar el servicio a las y los contribuyentes en sus interacciones con la Administración para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Se fortalecerán las fuentes actuales de ingreso de la ciudad entendiendo la importancia de la gestión catastral y generando estrategias para disminuir la evasión y la cartera, al tiempo que se trabajará por articular o fortalecer nuevos actores que permitan mecanismos alternativos de financiación de las inversiones públicas; entre ellos, el fortalecimiento de las alianzas público-privadas, las alianzas público-populares, también conocidas como obras con saldo pedagógico, y la implementación para la ciudad de Bogotá del mecanismo de obras por impuestos.*

Artículo 261. *Contratación en obras de infraestructura vial. La Administración Distrital a través del Sector movilidad, seguirá aplicando cualquier tipología de contratación en las diferentes obras de infraestructura vial. Para el cumplimiento de este artículo, podrá realizar APP, ya sea de iniciativa pública y/o privada, obras por impuestos o cualquier otra modalidad, en aplicación con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, La Ley 1508 de 2012, la Ley 1150 de 2017, la Ley 2294 de 2023 y demás normativa concordante.*

Artículo 287. *Obras por impuestos. Las personas naturales y las personas jurídicas, contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que en el año o período gravable inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos brutos iguales o superiores a treinta y tres mil seiscientos diez (33.610) UVT, podrán participar del mecanismo de obras por impuestos*

287.1. *Celebrar convenios con las entidades públicas del nivel distrital para el desarrollo de obras y proyectos de importancia estratégica definidos por la Secretaría Distrital de Planeación y autorizados por el CONFIS Distrital, por los que recibirán a cambio títulos negociables para el pago de los impuestos distritales, en los términos que para el efecto se disponga en el reglamento. El objeto de los convenios será la inversión directa en la ejecución de obras y proyectos de trascendencia social, de conformidad con lo establecido en la evaluación de viabilidad del proyecto, de acuerdo con la reglamentación.*

287.2. *Destinar un porcentaje del valor de la inversión directa a la ejecución de proyectos viabilizados y prioritarios de trascendencia social que se encuentren debidamente aprobados por la Secretaría Distrital de Planeación y autorizados por el CONFIS Distrital, para el pago de los impuestos distritales, en los términos establecidos en la reglamentación que para el efecto expida la Administración Distrital.*

Parágrafo 1. *Autorícese a la Secretaría Distrital de Hacienda para la emisión de los Títulos para la Renovación del Territorio Distrital (TRTD), los cuales serán usados como contraprestación de las obligaciones derivadas de los convenios de obras por impuestos. Dichos títulos tendrán la calidad de negociables. La administración Distrital reglamentará las condiciones de los TRTD y los requisitos para su emisión.*

Parágrafo 2. *Con el fin de promover el desarrollo urbano y el bienestar social, la Administración Distrital reglamentará el pago de las obligaciones urbanísticas en proyectos urbanos desarrollados en planes parciales o unidades de actuación urbanística o de gestión al interior de planes parciales, o, en actuaciones urbanísticas en cualquier tratamiento urbanístico, mediante la ejecución de obras*

de carga general asociadas a infraestructura vial y de transporte, servicios públicos, espacio público y/o equipamientos.

Derivado del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 y otras normas asociadas al Mecanismo de Obras por Impuestos y su posible implementación en Bogotá D.C., surge el Decreto Distrital 054 de 2025, en cuyo objeto se expone lo siguiente:

b. DECRETO DISTRITAL 054 DE 2025 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

“Por medio del cual se reglamenta el Mecanismo de Obras por Impuestos del que trata el artículo 287 del Acuerdo 927 de 2024 en sus aspectos generales, en la modalidad de convenio y se expiden otras disposiciones”

Artículo 1°. Objeto y Ámbito de Aplicación. *El presente decreto tiene como propósito la definición y determinación del procedimiento para que las personas naturales o jurídicas contribuyentes de impuestos distritales puedan acceder al Mecanismo de Obras por Impuestos previsto en el artículo 287 del Acuerdo Distrital 927 del 2024, así como las condiciones para el acceso a cualquiera de sus dos modalidades.*

Lo dispuesto en el presente Decreto aplica a todas las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que en el año o período gravable inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos brutos iguales o superiores a treinta y tres mil seiscientos diez (33.610) Unidades de Valor Tributario (UVT), que opten por el Mecanismo de Obras por Impuestos.

IV. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 313 de la constitución Política, el artículo 8°, los numerales 1° y 3° del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 - Estatuto Orgánico de Bogotá D.C., el Cabildo Distrital es competente para:

- **Artículo 8. Funciones generales.** El Concejo es la suprema autoridad del Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo. También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las autoridades distritales.
- **Artículo 12. Atribuciones.** Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:
 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.
 3. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas: ordenar exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y anticipos con el fin de garantizar el efectivo recaudo de aquéllos.

De conformidad con lo señalado en el artículo 1° del Acuerdo 741 de 2019, modificado por el Acuerdo 837 de 2022, el Concejo de Bogotá, ejerce sus atribuciones como suprema Autoridad del Distrito Capital, de conformidad con la Constitución y la Ley.

De igual manera, conforme lo dispone el artículo 3° ibídem, el Concejo de Bogotá, ejerce las atribuciones, funciones, y competencias, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política, el estatuto orgánico para Bogotá, las leyes especiales (...).”

V. IMPACTO FISCAL

Teniendo en cuenta los mandatos de la ley 819 de 2003, en cuanto a la declaración de impacto fiscal de las normas estipulado en el artículo 7° de la mencionada ley, y teniendo en cuenta lo establecido por la Corte Constitucional en Sentencia C- 911 de 2007, en la que puntualizó que el impacto fiscal de las normas no puede convertirse en óbice, para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa.

La presente iniciativa no tiene un impacto fiscal, por cuanto no implica la apropiación de recursos adicionales a los sectores y entidades responsables de su implementación.

VI. RELACIÓN DE LA INICIATIVA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Esta iniciativa propone la implementación de medidas que promuevan la participación ciudadana, por medio de los contribuyentes, en la ejecución y entrega de obras de trascendencia social e importancia estratégica para el Distrito Capital.

Las decisiones y normativa a desarrollar, derivadas de esta iniciativa, van a fortalecer lazos de comunicación y aprendizaje entre la Administración Pública de la ciudad, la academia y el sector privado. El objetivo esencial de esta relación multiactor en el desarrollo de la ciudad debe ser la generación de confianza en la toma de decisiones sobre proyectos urbanos, su financiamiento, ejecución, terminación, entrega y aprovechamiento, incentivando un mayor sentido de pertenencia y cultura ciudadana por los habitantes y visitantes de Bogotá.

Con este enfoque, este Proyecto de Acuerdo puede enmarcarse en el logro de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible, a partir de la definición de la Organización de las Naciones Unidas³⁴:

- **Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.**

El Objetivo 8 pretende promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.

La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el bajo consumo producen la erosión del contrato social básico subyacente en las sociedades: el derecho de todos a compartir el progreso. La creación de empleos de calidad sigue constituyendo un gran desafío para casi todas las economías.

Los gobiernos deben trabajar para construir economías dinámicas, sostenibles, innovadoras y centradas en las personas para promover el empleo juvenil y el empoderamiento económico de las mujeres, en particular, y el trabajo decente para todos.

- **Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación.**

³⁴ <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

El Objetivo 9 pretende construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación.

El crecimiento económico, el desarrollo social y la acción por el clima dependen en gran medida de las inversiones en infraestructuras, el desarrollo industrial sostenible y el progreso tecnológico. Ante la rápida evolución del panorama económico mundial y el aumento de las desigualdades, el crecimiento sostenido debe implicar una industrialización que, en primer lugar, haga accesibles las oportunidades a todas las personas y, en segundo lugar, se apoye en la innovación y en infraestructuras resistentes.

Relacionada con esta iniciativa, una de las metas de este objetivo 9 es:

Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas.

● **Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.**

El Objetivo 11 pretende lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Las ciudades representan el futuro del modo de vida global. La población mundial alcanzó los 8000 millones de personas en 2022, de las cuales más de la mitad viven en zonas urbanas. Se prevé que esta cifra aumente y que para 2050 el 70 % de la población vivirá en ciudades.

Aproximadamente 1100 millones de personas viven actualmente en barrios marginales, o en condiciones similares en las ciudades, y se espera que en los próximos 30 años haya 2000 millones más.

*Sin embargo, muchas de estas ciudades **no están preparadas para esta rápida urbanización, y el desarrollo de la vivienda, las infraestructuras y los servicios se ve superado, lo que provoca un crecimiento de los barrios marginales o de condiciones similares.***

*Al apostar por la sostenibilidad, elegimos construir ciudades en las que todos los ciudadanos tengan una calidad de vida digna y **formen parte de la dinámica productiva de la ciudad, lo que genera prosperidad compartida y estabilidad social** sin dañar el medio ambiente.*

Sobre lo que se puede hacer para contribuir a lograr este objetivo, la ONU define, entre otros, lo siguiente:

Participe activamente en la administración y gestión de su ciudad. Defienda el tipo de ciudad que cree que necesita.

VII. RELACIÓN DE LA INICIATIVA CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO “BOGOTÁ CAMINA SEGURA” (Acuerdo 927 de 2024)

Como se expuso en el aparte del marco jurídico, a continuación se relaciona el artículo del Plan Distrital de Desarrollo 2024 - 2027 que incluye alcances de esta iniciativa:

Artículo 287. Obras por impuestos. *Las personas naturales y las personas jurídicas, contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que en el año o período gravable inmediatamente anterior hayan*

obtenido ingresos brutos iguales o superiores a treinta y tres mil seiscientos diez (33.610) UVT, podrán participar del mecanismo de obras por impuestos.

287.1. Celebrar convenios con las entidades públicas del nivel distrital para el desarrollo de obras y proyectos de importancia estratégica definidos por la Secretaría Distrital de Planeación y autorizados por el CONFIS Distrital, por los que recibirán a cambio títulos negociables para el pago de los impuestos distritales, en los términos que para el efecto se disponga en el reglamento. El objeto de los convenios será la inversión directa en la ejecución de obras y proyectos de trascendencia social, de conformidad con lo establecido en la evaluación de viabilidad del proyecto, de acuerdo con la reglamentación.

287.2. Destinar un porcentaje del valor de la inversión directa a la ejecución de proyectos viabilizados y prioritarios de trascendencia social que se encuentren debidamente aprobados por la Secretaría Distrital de Planeación y autorizados por el CONFIS Distrital, para el pago de los impuestos distritales, en los términos establecidos en la reglamentación que para el efecto expida la Administración Distrital.

***Parágrafo 1.** Autorícese a la Secretaría Distrital de Hacienda para la emisión de los Títulos para la Renovación del Territorio Distrital (TRTD), los cuales serán usados como contraprestación de las obligaciones derivadas de los convenios de obras por impuestos. Dichos títulos tendrán la calidad de negociables. La administración Distrital reglamentará las condiciones de los TRTD y los requisitos para su emisión.*

***Parágrafo 2.** Con el fin de promover el desarrollo urbano y el bienestar social, la Administración Distrital reglamentará el pago de las obligaciones urbanísticas en proyectos urbanos desarrollados en planes parciales o unidades de actuación urbanística o de gestión al interior de planes parciales, o, en actuaciones urbanísticas en cualquier tratamiento urbanístico, mediante la ejecución de obras de carga general asociadas a infraestructura vial y de transporte, servicios públicos, espacio público y/o equipamientos.*

VIII. RELACIÓN DE LA INICIATIVA CON EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Decreto 555 de 2021)

A continuación, se relacionan contenidos de la Revisión General del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., adoptada mediante Decreto 555 de 2021, que incluyen alcances de esta iniciativa:

Artículo 3. Políticas de largo plazo del ordenamiento territorial del Distrito Capital.

***10. Política de Integración Regional.** Busca consolidar acuerdos regionales para el desarrollo sostenible de la región, mediante arreglos institucionales apropiados y compromisos bilaterales o multilaterales que garanticen oportunidades para todos y todas, así como la aplicación de los principios de buen gobierno y efectividad donde Bogotá se compromete.*

***Artículo 14.** Acciones que concretan el Modelo de Ocupación Territorial -MOT. El Modelo de Ocupación Territorial (MOT) se desarrolla a través de acciones que estén alineadas con objetivos y fines pertinentes a los dispuestos para el proyecto.*

***3. Los instrumentos y mecanismos de planificación, gestión y financiación** que articulan decisiones de ordenamiento para viabilizar y concretar los programas, proyectos y actuaciones del POT mejorando las condiciones de proximidad y vitalidad de la ciudad y centros poblados rurales, el sistema de movilidad*

disminuyendo el déficit habitacional y ofreciendo alternativas de vivienda digna para los hogares, así como redistribuyendo los beneficios económicos del desarrollo territorial para el conjunto de la población e incentivando la captura pública de valor.

6. Implementación de un modelo de gobernanza para el ordenamiento territorial que asegure la **participación de los diferentes actores, que promueva mecanismos de** colaboración, innovación social, cogestión y **cofinanciación** en los instrumentos de planeación, gestión y **financiación**, que garantice la ejecución de los programas y los proyectos del presente Plan, así como el diseño e implementación de un sistema de seguimiento y evaluación que dé cuenta de sus propósitos, objetivos y metas.

Artículo 156. Cualificación del Sistema Vial. Todas las vías del sistema vial que lo requieran deberán ser objeto de cualificación de sus condiciones estructurales, urbanísticas y ambientales por parte de las entidades del sector movilidad, que se repartirán las funciones así:

Entidad	Intervención sobre componente
Instituto de Desarrollo Urbano	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar los proyectos de intervención y construcción de las calles de la malla de integración regional, de la malla vial arterial y de las mallas por donde circule el componente flexible del sistema de transporte público de la ciudad. - Construcción de las calles de la malla intermedia y local, la red de cicloinfraestructura y la red de infraestructura peatonal.
Fondos de Desarrollo Local	- Elaborar proyectos y construcción de las calles de la malla local, la red de cicloinfraestructura y la red de infraestructura peatonal en articulación con el componente programático del presente Plan.
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.	<p>Adelantar intervenciones de conservación del espacio público para la movilidad.</p> <p>-Adelantar labores de conservación de la malla vial local, intermedia, rural, la red de cicloinfraestructura y la red de infraestructura peatonal. Con el fin de mejorar la gestión en las intervenciones, las entidades que por competencia desarrollen las mismas, coordinarán la planeación, programación, seguimiento e información de estas obras con la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</p>

Parágrafo 2. Las calles de la malla local e intermedia **podrán intervenir con esquemas de financiación público comunitaria y con apoyo del sector privado. Sin perjuicio de las demás fuentes de financiación e instrumentos contemplados en el presente plan, estos esquemas podrán contemplar como aporte el trabajo de los residentes y propietarios de las zonas a intervenir.** y los aportes públicos podrán financiar la intervención con contraprestaciones dinerarias cobradas por plazos a los predios colindantes con las obras realizadas.

Artículo 554. Estrategia de financiación del Plan de Ordenamiento Territorial. Los soportes territoriales, programas, proyectos, acciones, actividades y metas de los componentes urbano y rural del presente Plan se financiarán con recursos dinerarios o en especie provenientes de los ingresos distritales en el presupuesto anual distrital, de los instrumentos de financiación asociados al desarrollo territorial y de otras fuentes que se dispongan para tal efecto.

Artículo 557. Otras fuentes de financiamiento. En el marco de la implementación del presente Plan se podrán establecer otras fuentes de financiamiento a las definidas en el presente Plan.

Artículo 569. Programa de hábitat y vivienda popular. El programa aporta al objetivo del Plan de Ordenamiento Territorial de Reducir los desequilibrios y desigualdades para una Bogotá más solidaria y cuidadora. Apuesta por la oferta de vivienda (nueva, en arriendo, reúso de edificaciones, vivienda colectiva, progresiva y productiva, lotes con servicios, vivienda de interés cultural u otras alternativas) y mejoramiento del hábitat especialmente para grupos de población vulnerables bajo los principios de integralidad, progresividad, inclusión social y socioeconómica. Promueve el desarrollo de vivienda productiva y actividades complementarias en entornos de proximidad donde se asegure la desconcentración de servicios, el empleo cercano, condiciones de habitabilidad y mejore las oportunidades, la cohesión social y la identidad local en los barrios populares. Contribuye a concretar las estrategias territoriales de la Estructura Socioeconómica y Cultural.

2. Subprograma de vivienda de Interés Social y Prioritario	
Descripción	Busca la provisión de suelo, así como la construcción y promoción de vivienda de interés social y prioritario con adecuadas condiciones y garantizando entornos de calidad urbanística, mediante mecanismos que incentiven la oferta habitacional para las familias con menores ingresos. De igual forma, su ubicación será estratégica en polígonos de revitalización y redensificación de áreas urbanas deficitarias ya sean de tratamiento de Mejoramiento Integral o de Consolidación, que cuenten con las condiciones y sistemas urbanos a corto y mediano plazo para ser desarrolladas con proyectos de vivienda de interés social, la gestión del suelo y la estructuración y promoción de intervenciones urbanas integrales. Asimismo, se deberá estructurar, implementar y monitorear el funcionamiento y la aplicación de los instrumentos de financiación de la vivienda propuestos en el presente Plan y, <u>promover estrategias para la vinculación de actores públicos y privados en la financiación de proyectos urbanos para la producción de vivienda social.</u> La Secretaría de Hábitat, en coordinación con entidades competentes, serán las responsables de la ejecución de este subprograma.

IX. PARTICIPACIÓN CIUDADANA DENTRO DEL PROYECTO

La iniciativa formulada en este proyecto de acuerdo incluye, como una de sus novedades respecto a la normativa distrital publicada hasta la fecha, precisamente considerar la inclusión de la ciudadanía en la conformación de la Mesa Técnica de Obras por Impuestos, o en cualquier otra instancia asociada a la formulación e implementación del Mecanismo de Obras por Impuestos en el Distrito.

X. TÍTULO, ATRIBUCIONES Y CONSIDERANDOS

PROYECTO DE ACUERDO ____ DE ____

“POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 313 de la constitución Política; el artículo 8º y los numerales 1º y 3º del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 - Estatuto Orgánico de Bogotá D.C.,

ACUERDA

XI. ARTICULADO

ARTÍCULO PRIMERO.- OBJETO: El presente Acuerdo tiene como objeto promover la implementación del Mecanismo de Obras por Impuestos en el Distrito Capital, incentivando su aprovechamiento para la ejecución y entrega de obras de trascendencia social e importancia estratégica para el Distrito Capital.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ALCANCE: La Administración Distrital incluirá en el Manual Operativo del Mecanismo de Obras por Impuestos, y demás normativa a expedir para reglamentar su implementación, los lineamientos expuestos en los siguientes artículos.

ARTÍCULO TERCERO.- ENTIDADES, OBRAS Y MODALIDADES: La normativa para la implementación del Mecanismo de Obras por Impuestos en el Distrito deberá poder aplicarse en todas las entidades distritales que ejecuten

obras públicas, considerando intervenciones para construcciones nuevas o actividades de conservación, mantenimiento, rehabilitación, o cualquier otra que aplique sobre obras existentes.

PARÁGRAFO 1: El Mecanismo de Obras por Impuestos se podrá implementar, además de los otros proyectos que defina la Administración Distrital, para obras a cargo del Distrito derivadas de Acciones Populares y/o cualquier otra decisión judicial.

PARÁGRAFO 2: Se incluirá en la normativa las condiciones para la aplicación de las dos modalidades vigentes: i) Mediante la celebración de convenios con las entidades públicas del nivel distrital, y ii) Mediante la celebración de una fiducia.

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUIDAD: El Mecanismo de Obras por Impuestos podrá implementarse para la ejecución de proyectos del Plan Distrital de Desarrollo y/o POT vigentes, o aquellos que rijan en vigencias o administraciones futuras.

ARTÍCULO QUINTO.- COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL: Se definirán instancias y metodologías de acompañamiento y apoyo en la gestión, entre las entidades y los contribuyentes y/o ejecutores involucrados en el Mecanismo de Obras por Impuestos, que abarquen pero sin limitarse a las siguientes etapas de los proyectos:

- a. Formulación, maduración y/o estructuración.
- b. Actividades preliminares y/o de ejecución.
- c. Permisos, aprobaciones, conceptos y/o trámites en general con entidades públicas, privadas y Empresas de Servicios Públicos.
- d. Terminación, entrega, recibo y/o liquidación.

PARÁGRAFO 1: El acompañamiento desde la Administración Distrital será por parte de la entidad distrital competente a la que se circunscribe el proyecto, pudiendo participar otras entidades según sus alcances y competencias.

ARTÍCULO SEXTO.- RESPONSABILIDADES DEL DISTRITO: La normativa para la implementación del Mecanismo de Obras por Impuestos en el Distrito incluirá la descripción y trámite de circunstancias sobrevenientes o adversas a los proyectos, no imputables al contribuyente y/o ejecutor, y/o imputables a la administración. Se definirá el acompañamiento y apoyo en su gestión por parte de la entidad distrital competente para su abordaje, con miras a la resolución de conflictos y avance en la ejecución del proyecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- NORMATIVA COMPLEMENTARIA: De ser necesario, la

Administración Distrital expedirá normativa adicional con lineamientos particulares a cada entidad, incluyendo consideraciones propias para su vinculación en la formulación e implementación del Mecanismo de Obras por Impuestos según sus alcances y competencias.

ARTÍCULO OCTAVO.- INFORMES.- La Administración Distrital presentará anualmente un informe al Concejo Distrital sobre el cumplimiento de este Acuerdo, incluyendo entre otros la siguiente información, con corte a la fecha de presentación del informe:

- I. Del total de proyectos ejecutados o en curso, mediante la implementación del Mecanismo de Obras por Impuestos, precisando lo siguiente para cada uno:
 - a. Objeto.
 - b. Plazo y presupuesto inicial.
 - c. Fecha de inicio y fecha de terminación vigente.

- d. Entidad distrital competente, contribuyente(s) y/o ejecutor(es) responsables o involucrados en el proyecto.
 - e. Plazo y presupuesto vigentes, con suspensiones, prórrogas, adiciones, otros costos adicionales o cualquier otra modificación.
 - f. Porcentaje de avance físico programado y ejecutado.
 - g. Porcentaje de avance presupuestal programado y ejecutado.
- II. Del total de proyectos presentados a consideración, para su financiamiento con cargo al Mecanismo de Obras por Impuestos, precisando en cada caso si fueron presentados por entidades o contribuyentes interesados, relacionando las entidades o contribuyentes según corresponda.
- a. Relación de los proyectos autorizados por el CONFIS Distrital.
 - b. Registro del Banco de Proyectos de Inversión considerados como viables y vigentes.
 - c. Relación de los proyectos que NO tuvieron concepto de viabilidad.
 - d. Relación de los proyectos que estén siendo evaluados para emitir concepto de viabilidad o inviabilidad.

ARTÍCULO NOVENO.- PLAZO: La Administración Distrital, en un plazo no mayor a doce (12) meses, posteriores a la aprobación de este acuerdo, formulará, regulará y publicará la normativa técnica y jurídica derivada para su cumplimiento.

ARTÍCULO DÉCIMO.- VIGENCIA.- El presente Acuerdo rige a partir de su publicación en el Registro Distrital.

XII. BIBLIOGRAFÍA

- a. Alcaldía Mayor de Bogotá - DECRETO DISTRITAL 054 DE 2025 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. *“Por medio del cual se reglamenta el Mecanismo de Obras por Impuestos del que trata el artículo 287 del Acuerdo 927 de 2024 en sus aspectos generales, en la modalidad de convenio y se expiden otras disposiciones”*.
- b. Barliza Illidge, V. (2022). *Mecanismo de obras por impuestos en Colombia ¿Éxito o fracaso?*. Universidad Externado de Colombia.
- c. Constitución Política de Colombia - Artículos 90 y 209.
- d. Concejo de Bogotá - ACUERDO 927 DE 2024 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. *“Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”*.
- e. Congreso de la República de Colombia - Ley 1819 de 2016: *“Por medio de la cual se adopta una Reforma Tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.”*
- f. Congreso de la República de Colombia - Decreto Ley 624 de 1989: *“Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales.”*
- g. Garavito Martín, J. (2021). *La problemática del mecanismo de obras por impuestos frente a la responsabilidad de sus intervinientes*. Universidad Externado de Colombia.
- h. IDU - Oficio DTAV 202556500146751 del 06 de febrero de 2025 - REF: *Respuesta Proposición 137 de 2025. Tema: Obras por Valorización. Oficio Concejo 2025EE1463. Radicado IDU 202552600136612 del 29 de enero de 2025.*

- i. Organización de las Naciones Unidas - ONU: Objetivos de Desarrollo Sostenible.
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

Firmas,

Original firmado en PDF

CRISTINA CALDERÓN RESTREPO

Concejal de Bogotá
Partido Nuevo Liberalismo

FERNANDO LÓPEZ GUTIÉRREZ

Concejal de Bogotá
Partido Nuevo Liberalismo

JUAN BAENA MERLANO

Concejal de Bogotá
Partido Nuevo Liberalismo

RICARDO CORREA

Concejal de Bogotá
Partido Nuevo Liberalismo

JESUS DAVID ARAQUE

Concejal de Bogotá
Partido Nuevo Liberalismo

JUAN MANUEL DÍAZ

Concejal de Bogotá
Partido Nuevo Liberalismo

PROYECTO DE ACUERDO NO 750 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 313 de la constitución Política; el artículo 8º y los numerales 1º y 3º del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 - Estatuto Orgánico de Bogotá D.C.,

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO.- OBJETO: El presente Acuerdo tiene como objeto promover la implementación del Mecanismo de Obras por Impuestos en el Distrito Capital, incentivando su aprovechamiento para la ejecución y entrega de obras de trascendencia social e importancia estratégica para el Distrito Capital.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ALCANCE: La Administración Distrital incluirá en el Manual Operativo del Mecanismo de Obras por Impuestos, y demás normativa a expedir para reglamentar su implementación, los lineamientos expuestos en los siguientes artículos.

ARTÍCULO TERCERO.- ENTIDADES, OBRAS Y MODALIDADES: La normativa para la implementación del Mecanismo de Obras por Impuestos en el Distrito deberá poder aplicarse en todas las entidades distritales que ejecuten obras públicas, considerando intervenciones para construcciones nuevas o actividades de conservación, mantenimiento, rehabilitación, o cualquier otra que aplique sobre obras existentes.

PARÁGRAFO 1: El Mecanismo de Obras por Impuestos se podrá implementar, además de los otros proyectos que defina la Administración Distrital, para obras a cargo del Distrito derivadas de Acciones Populares y/o cualquier otra decisión judicial.

PARÁGRAFO 2: Se incluirá en la normativa las condiciones para la aplicación de las dos modalidades vigentes: i) Mediante la celebración de convenios con las entidades públicas del nivel distrital, y ii) Mediante la celebración de una fiducia.

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUIDAD: El Mecanismo de Obras por Impuestos podrá implementarse para la ejecución de proyectos del Plan Distrital de Desarrollo y/o POT vigentes, o aquellos que rijan en vigencias o administraciones futuras.

ARTÍCULO QUINTO.- COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL: Se definirán instancias y metodologías de acompañamiento y apoyo en la gestión, entre las entidades y los contribuyentes y/o ejecutores involucrados en el Mecanismo de Obras por Impuestos, que abarquen pero sin limitarse a las siguientes etapas de los proyectos:

- a. Formulación, maduración y/o estructuración.
- b. Actividades preliminares y/o de ejecución.
- c. Permisos, aprobaciones, conceptos y/o trámites en general con entidades públicas, privadas y Empresas de Servicios Públicos.
- d. Terminación, entrega, recibo y/o liquidación.

PARÁGRAFO 1: El acompañamiento desde la Administración Distrital será por parte de la entidad distrital competente a la que se circunscriba el proyecto, pudiendo participar otras entidades según sus alcances y competencias.

ARTÍCULO SEXTO.- RESPONSABILIDADES DEL DISTRITO: La normativa para la implementación del Mecanismo de Obras por Impuestos en el Distrito incluirá la descripción y trámite de circunstancias sobrevenientes o adversas a los proyectos, no imputables al contribuyente y/o ejecutor, y/o imputables a la administración. Se definirá el acompañamiento y apoyo en su gestión por parte de la entidad distrital competente para su abordaje, con miras a la resolución de conflictos y avance en la ejecución del proyecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- NORMATIVA COMPLEMENTARIA: De ser necesario, la

Administración Distrital expedirá normativa adicional con lineamientos particulares a cada entidad, incluyendo consideraciones propias para su vinculación en la formulación e implementación del Mecanismo de Obras por Impuestos según sus alcances y competencias.

ARTÍCULO OCTAVO.- INFORMES.- La Administración Distrital presentará anualmente un informe al Concejo Distrital sobre el cumplimiento de este Acuerdo, incluyendo entre otros la siguiente información, con corte a la fecha de presentación del informe:

- I. Del total de proyectos ejecutados o en curso, mediante la implementación del Mecanismo de Obras por Impuestos, precisando lo siguiente para cada uno: a. Objeto.
 - b. Plazo y presupuesto inicial.
 - c. Fecha de inicio y fecha de terminación vigente.
 - d. Entidad distrital competente, contribuyente(s) y/o ejecutor(es) responsables o involucrados en el proyecto.
 - e. Plazo y presupuesto vigentes, con suspensiones, prórrogas, adiciones, otros costos adicionales o cualquier otra modificación.
 - f. Porcentaje de avance físico programado y ejecutado.
 - g. Porcentaje de avance presupuestal programado y ejecutado.
- II. Del total de proyectos presentados a consideración, para su financiamiento con cargo al Mecanismo de Obras por Impuestos, precisando en cada caso si fueron presentados por entidades o contribuyentes interesados, relacionando las entidades o contribuyentes según corresponda.
 - a. Relación de los proyectos autorizados por el CONFIS Distrital.
 - b. Registro del Banco de Proyectos de Inversión considerados como viables y vigentes.
 - c. Relación de los proyectos que NO tuvieron concepto de viabilidad.
 - d. Relación de los proyectos que estén siendo evaluados para emitir concepto de viabilidad o inviabilidad.

ARTÍCULO NOVENO.- PLAZO: La Administración Distrital, en un plazo no mayor a doce (12) meses, posteriores a la aprobación de este acuerdo, formulará, regulará y publicará la normativa técnica y jurídica derivada para su cumplimiento.

ARTÍCULO DÉCIMO.- VIGENCIA.- El presente Acuerdo rige a partir de su publicación en el Registro Distrital.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA

LUZ ANGÉLICA VIZCAINO SOLANO

Presidente del Concejo de Bogotá, D.C.

Secretaria General de Organismo Control

PROYECTO DE ACUERDO NO 751 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN ESTATUS ESPECIAL AL CAMPESINADO COMO PROTECTORES (AS) DEL AGUA EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

OBJETO DEL PROYECTO

“RECONOCER AL CAMPESINADO COMO SUJETOS CLAVE EN LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AGUA, OTORGÁNDOLES UN ESTATUS ESPECIAL EN EL MARCO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL”

I. SUSTENTO JURÍDICO

DE ORDEN CONSTITUCIONAL

- **Artículo 64 de la Constitución Política:** Garantiza el acceso progresivo de los trabajadores agrarios a la propiedad de la tierra en condiciones de equidad.
- **Artículo 79:** Derecho a un ambiente sano y participación comunitaria en la protección de los recursos naturales.
- **Acto Legislativo 01 de 2023:** Reconoce al campesinado como sujeto de derechos.

DE ORDEN LEGAL

- **Ley 160 de 1994:** Promueve el uso adecuado del suelo y la gestión sostenible de los recursos naturales.
- **Ley 1931 de 2018:** Fortalece la gestión integral del cambio climático y la protección de fuentes hídricas.
- **Decreto 1076 de 2015:** Reglamenta la gestión ambiental en Colombia.
- **Ley 99 de 1993:** Establece la estructura del Sistema Nacional Ambiental (SINA).

NORMATIVIDAD DISTRITAL

- **Acuerdo 742 de 2019:** Política Pública de Ruralidad de Bogotá.
- **Acuerdo 927 de 2024:** Establece medidas de protección y fortalecimiento de la vida campesina en el marco de las Transformaciones Rurales Integrales. Cita explícitamente los siguientes artículos:
 - **Artículo 48. Transformaciones Rurales Integrales:** Establece la territorialización del Acuerdo de Paz mediante Transformaciones Rurales

Integrales y la Hoja de Ruta PDET-BR, con medidas de inclusión social y productiva y protección de la ZRC de Sumapaz.

- **Artículo 114. Articulación de la vida campesina:** Propende por un programa integral de protección y fortalecimiento de la vida campesina en los ámbitos productivo, social, cultural y territorial, promoviendo un enfoque diferencial.
- **Plan de Ordenamiento Territorial (POT) - Decreto 555 de 2021:** Define las áreas de protección hídrica, zonas de conservación y directrices específicas sobre el manejo de los ecosistemas estratégicos y los corredores ecológicos en el Distrito Capital.

II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

Los ecosistemas de páramo y las áreas rurales de Bogotá son esenciales para la provisión de agua potable de la ciudad y de la región circundante. El campesinado desempeña un papel fundamental en la protección de estas fuentes de agua, mediante prácticas agroecológicas, conservación de suelos y actividades sostenibles. Sumapaz, al ser el páramo más grande del mundo, representa el 42% del territorio distrital y alberga más de 92.000 hectáreas de áreas protegidas, siendo un espacio clave para la preservación de los recursos hídricos.

El reconocimiento del campesinado como protectores del agua propenderá por el fortalecimiento de los procesos de gobernanza comunitaria y promoverá la justicia socioambiental al visibilizar su contribución en la mitigación de la crisis hídrica. Datos recientes indican que el 70% de las fuentes hídricas en el área rural se encuentran bajo manejo comunitario, lo que evidencia el compromiso de las comunidades campesinas con la protección de los bienes comunes.

A pesar de su rol fundamental, las comunidades rurales enfrentan desafíos significativos, como la falta de acceso a infraestructura básica y el riesgo de pérdida de territorios por presiones urbanísticas. Este proyecto propende por garantizar su permanencia en el territorio mediante el otorgamiento de un estatus especial que reconozca sus aportes y promueva su fortalecimiento.

Datos Relevantes:

- **Producción hídrica:** Los páramos de Sumapaz, Guerrero y Chingaza abastecen al 80% de Bogotá y la Sabana.
- **Cobertura forestal:** El 65% de las áreas rurales del Distrito corresponden a zonas de protección hídrica.
- **Participación campesina:** Más del 40% de las iniciativas de conservación están lideradas por asociaciones campesinas.

La implementación de este estatus especial propenderá por el diseño de incentivos para la adopción de prácticas de conservación, como pagos por servicios ambientales, apoyo técnico y asistencia financiera.

III. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta a la Corporación para dictar normas así:

DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.
Art. 12. Atribuciones. *Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:*

1. *Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.*

Este marco legal otorga al Concejo de Bogotá la autoridad para crear programas y proyectos que mejoren la gestión de riesgos a nivel comunitario, asegurando una administración pública eficiente y participativa.

IV. IMPACTO FISCAL

El presente proyecto no genera impacto fiscal alguno, ya que las actividades relacionadas con el reconocimiento del campesinado como protectores del agua serán financiadas mediante recursos ya asignados en los programas existentes de desarrollo ambiental y protección hídrica del Distrito Capital. Además, se promoverá la participación de entidades privadas y comunitarias para cofinanciar los proyectos, así como la colaboración interinstitucional con el Gobierno Nacional y organismos internacionales para la gestión y apoyo en la implementación de estas medidas. De esta manera, se asegura la optimización de los recursos sin la necesidad de destinar nuevos fondos fiscales adicionales.

DONKA ATANASSOVA IAKIMOVA

Concejala de Bogotá

Partido Polo Democrático Alternativo Coalición Pacto - Histórico

V. TÍTULO – ATRIBUCIONES - CONSIDERANDOS

PROYECTO DE ACUERDO NO 751 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN ESTATUS ESPECIAL AL CAMPESINADO COMO PROTECTORES (AS) DEL AGUA EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 12 numeral 1 del Decreto Ley 1421 de 1993.

VI. ARTICULADO

ACUERDA:

Artículo 1. Objeto. Reconocer al campesinado de Bogotá como protectores del agua y propender por la adopción de mecanismos que garanticen su participación y fortalecimiento en las políticas de conservación hídrica.

Artículo 2. Estatus Especial. Se otorgará al campesinado un estatus especial que conlleva los siguientes beneficios:

1. Acceso prioritario a programas de pagos por servicios ambientales.
2. Asistencia técnica y capacitación en gestión sostenible de recursos hídricos.
3. Fortalecimiento de los proyectos comunitarios de protección del agua mediante convenios con entidades públicas y privadas.

Artículo 3. Creación de incentivos. La Administración Distrital propenderá por el diseño de un plan de incentivos que incluya recursos financieros, asistencia técnica y acceso a proyectos de reforestación.

Artículo 4. Participación comunitaria. La participación de las comunidades campesinas se promoverá mediante mesas de trabajo permanentes en las localidades rurales.

Artículo 5. Monitoreo y evaluación. La Secretaría de Ambiente presentará un informe semestral sobre los avances de las medidas adoptadas en el marco de este acuerdo.

Artículo 6. Vigencia. Este acuerdo regirá a partir de la fecha de su publicación.

PROYECTO DE ACUERDO NO 752 DE 2025**PRIMER DEBATE****"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA
PREVENCIÓN DEL ACOSO EN OBRAS PÚBLICAS EN BOGOTÁ D.C. Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****1. OBJETO**

La presente iniciativa busca establecer lineamientos de política pública para prevenir el acoso callejero en contextos de obra pública en Bogotá D.C., con el propósito de promover espacios urbanos seguros y libres de violencias basadas en género. El proyecto define criterios aplicables a la planeación, ejecución, supervisión y seguimiento de obras contratadas por entidades distritales, dentro del marco de sus competencias legales y contractuales.

2. PROBLEMÁTICAS A ABORDAR

El acoso sexual callejero constituye una de las expresiones más normalizadas de violencia basada en género. Su persistencia en el espacio público limita sustancialmente el ejercicio de derechos fundamentales por parte de las mujeres. Esta violencia se manifiesta a través de comentarios sexuales no solicitados, silbidos, gestos obscenos, miradas lascivas, tocamientos, persecuciones, exhibicionismo y grabaciones sin consentimiento. Más allá de su carácter individual, reproduce dinámicas de subordinación y exclusión del cuerpo femenino en la vida urbana.

Investigaciones desarrolladas entre 2022 y 2024 confirman que los entornos de obra pública son especialmente propensos a este tipo de violencias. La Veeduría Distrital de Bogotá (2023) reportó que el 38 % de las mujeres ha sido víctima de acoso en dichos contextos. Por su parte, la Encuesta de Seguridad de Mujeres (Secretarías de Seguridad y de la Mujer, 2022) reveló que el 84 % ha sufrido acoso callejero en el último año, y el 40 % lo ha experimentado en más de tres ocasiones.

El Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) indicó en 2024 que más del 60 % de las mujeres desconoce los canales institucionales de denuncia, y cerca de la mitad desconfía de la eficacia de la respuesta institucional. Esta desconfianza se agudiza en contextos de obra, donde la ausencia de personal fijo, protocolos visibles o canales inmediatos de reporte refuerza la impunidad.

Según el informe semestral de la Secretaría Distrital de la Mujer (enero–junio de 2024), 388 mujeres fueron atendidas por duplas psicojurídicas tras sufrir violencia en el espacio público. Una proporción significativa de estos casos ocurrió cerca de obras en ejecución o

intervenciones urbanísticas. La ausencia de mecanismos visibles de orientación y atención inmediata agrava la desprotección institucional.

El estudio “Acoso sexual callejero como obstáculo al derecho a la ciudad” (Defensoría del Pueblo y ONU Mujeres, 2021) documentó testimonios de mujeres que, por miedo al acoso, modificaron sus rutas, evitaron zonas específicas o dejaron de usar transporte público. Estas decisiones afectan su autonomía, movilidad y bienestar emocional.

Un informe de georreferenciación elaborado por el IDU y la Secretaría de la Mujer (2024) identificó 27 frentes de obra activos sin señalización adecuada, personal capacitado ni estrategias institucionales de prevención. Esta omisión es grave, considerando que las obras públicas están bajo responsabilidad estatal y, por tanto, sujetas a un deber reforzado de protección de derechos.

Además, el 51 % de las mujeres encuestadas por la Secretaría de la Mujer en 2022 manifestó que la presencia de grupos de hombres, especialmente trabajadores en obra, incrementa su percepción de inseguridad. Esta afirmación se respalda en el estudio de GIZ sobre género y movilidad activa (2023), que identificó el temor al acoso como una de las principales barreras para que las mujeres caminen o usen bicicleta.

El más reciente informe de la Secretaría de Seguridad (2024) sobre puntos críticos en la ciudad evidenció que muchas zonas de obra carecen de iluminación, vigilancia o señalización disuasoria, condiciones que incrementan la percepción de desprotección. La falta de articulación entre contratistas, entidades del sector infraestructura e instancias de género impide respuestas integrales y sostenidas.

El Programa Bogotá Mujer Cuidadora recogió en 2023 y 2024 decenas de testimonios de mujeres hostigadas verbalmente en obras sin recibir orientación institucional. Esta omisión estatal refuerza la impunidad y normaliza las violencias.

Asimismo, un estudio cualitativo de la Universidad Nacional (2023) demostró que el acoso callejero en entornos de obra tiene efectos psicológicos duraderos: miedo, hipervigilancia, ansiedad y deterioro de la autoestima. Muchas mujeres internalizan la culpa, profundizando el daño emocional.

Pese a que la Ley 1257 de 2008 y la Ley 2365 de 2024 imponen obligaciones preventivas para entidades públicas y privadas, no existe una reglamentación específica que aplique estos principios a contextos de obra. Esta omisión se traduce en vacíos contractuales, ausencia de cláusulas de prevención y falta de estándares mínimos para la protección de derechos en la ejecución de obras públicas.

3. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA Y OPORTUNIDAD POLÍTICA

El ordenamiento jurídico ofrece herramientas sólidas para enfrentar el problema:

- La Ley 1257 de 2008 establece medidas obligatorias para prevenir violencias contra las mujeres en espacios públicos.
- La Ley 2365 de 2024 impone responsabilidades a empleadores públicos y privados

en la prevención del acoso en entornos laborales.

- El Convenio 190 de la OIT, adoptado mediante Ley 2237 de 2022, extiende la protección laboral a espacios de obra y tránsito.
- La CEDAW y la Convención de Belém do Pará comprometen a Colombia a adoptar políticas eficaces contra la violencia basada en género.
- Las sentencias T-195 de 2022 y T-140 de 2021 de la Corte Constitucional exigen a las entidades territoriales garantizar entornos urbanos seguros, especialmente para mujeres, niñas y adolescentes.

En el plano distrital, aunque existen avances como el protocolo de prevención de violencias en transporte y espacio público, su aplicación no se ha extendido a las obras públicas. El Proyecto de Acuerdo 024 y 088 de 2025 —aprobado el 22 de mayo de 2025— visibilizó la problemática, pero no incorporó disposiciones específicas para obras. Este nuevo proyecto busca precisamente llenar ese vacío.

El IDU ha sido pionero en adoptar medidas contractuales como la Resolución 617 de 2024, el Apéndice H en pliegos de condiciones y la Guía de Acciones para la Prevención y Denuncia de la Violencia Basada en Género. Estas buenas prácticas, sin embargo, no tienen fuerza vinculante para otras entidades distritales ni se aplican a obras privadas con impacto en el espacio público.

Por ello, se requiere un marco normativo común que eleve estas experiencias a estándar distrital. El presente proyecto propone medidas concretas: formación obligatoria, señalización visible, mecanismos accesibles de reporte, articulación institucional y promoción de buenas prácticas. Todo ello dentro del marco legal y sin crear funciones nuevas ni generar impacto fiscal adicional.

El Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027 “Bogotá Camina Segura” respalda esta iniciativa, al contemplar estrategias para erradicar las violencias de género, mejorar la seguridad urbana e integrar el enfoque de género en la gestión territorial.

El presente Proyecto de Acuerdo se articula directamente con los objetivos y estrategias del Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027 “Bogotá Camina Segura”, aprobado mediante el Acuerdo 927 de 2024, particularmente en lo relacionado con la erradicación de las violencias basadas en género en el espacio público y la construcción de entornos urbanos seguros e inclusivos.

Se destaca su alineación con los siguientes componentes del Plan:

- **Programa 2: “Cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y violencias basadas en género”:** El proyecto promueve medidas preventivas específicas en frentes de obra pública, considerados espacios de alta exposición al acoso sexual callejero. Al exigir protocolos de prevención a los contratistas desde la fase de

contratación, se fortalece la capacidad institucional para intervenir directamente en estos entornos.

- **Programa 5: “Espacio público seguro e inclusivo”:** Contribuye a garantizar condiciones de seguridad física, simbólica y cultural para las mujeres y poblaciones diversas en zonas de intervención urbanística, mediante lineamientos sobre señalización visible, formación del personal y mecanismos de reporte accesibles, sin requerir apropiación presupuestal adicional.
- **Estrategia de transformación cultural con enfoque de género:** El proyecto respalda esta estrategia al incorporar acciones concretas de sensibilización, exigibles a los contratistas, como campañas pedagógicas, compromisos de conducta y capacitaciones, las cuales pueden implementarse con apoyo técnico gratuito de la Secretaría Distrital de la Mujer.

Asimismo, se enmarca en la línea transversal de ciudad cuidadora y libre de violencias, al promover la articulación efectiva entre entidades como el IDU, la Secretaría Distrital de la Mujer, las alcaldías locales y los actores privados que ejecutan obras públicas, bajo un enfoque de corresponsabilidad y gestión contractual con enfoque de derechos.

4. PROPUESTAS DE IMPLEMENTACIÓN

La ejecución del presente Acuerdo se estructura sobre los siguientes pilares, orientados a que las entidades distritales incorporen lineamientos vinculantes en los procesos de contratación estatal y en la supervisión de obras públicas:

4.1 INCLUSIÓN DE POLÍTICA PREVENTIVA COMO REQUISITO HABILITANTE

Las entidades distritales deberán exigir a los contratistas, consorcios y uniones temporales, en los pliegos de condiciones de los procesos de selección, la presentación de una política de prevención del acoso callejero como requisito habilitante. Esta política deberá estar orientada a prevenir las violencias basadas en género en el entorno de obra, y contemplar medidas de sensibilización, mecanismos de reporte y principios de actuación interna. La política será evaluada como parte de la capacidad técnica del oferente.

4.2 FORMACIÓN OBLIGATORIA DEL PERSONAL EN OBRA

Los contratos que se suscriban deberán incluir cláusulas específicas que obliguen a los contratistas a garantizar procesos de capacitación para todo el personal que labore en el frente de obra. La formación podrá ser presencial o virtual, deberá realizarse dentro del primer mes de vinculación y será desarrollada en coordinación con la Secretaría Distrital de la Mujer, con base en protocolos vigentes.

4.4. SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA Y ZONAS SEGURAS

Durante la ejecución de las obras, los contratistas deberán instalar señalización visible con mensajes disuasivos frente al acoso, información sobre rutas de atención y códigos QR que remitan a la Línea Púrpura u otros canales oficiales. Se promoverá la creación de “zonas seguras” para el reporte inmediato de hechos, las cuales deberán estar debidamente demarcadas, iluminadas y referenciadas en los planes de manejo social.

4.5 VERIFICACIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN

Las interventorías y supervisiones deberán verificar periódicamente el cumplimiento de las obligaciones aquí descritas, incluyendo la existencia de la política de prevención, la ejecución de capacitaciones, la instalación de señalización y la operatividad de los canales de reporte. Los informes de interventoría deberán contener un apartado específico sobre estas obligaciones.

5. MARCO JURÍDICO

5.1 DE ORDEN DISTRITAL

Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027 “Bogotá Camina Segura”: Reconoce el enfoque de género como eje transversal y establece el programa “Cero tolerancia a las violencias contra las mujeres”. Incluye estrategias para intervenir entornos urbanos inseguros, formar servidores públicos, y desarrollar campañas de prevención en espacio público y transporte.

Protocolo Distrital para la Prevención, Atención y Sanción del Acoso en Espacio Público y Transporte (2020): Instrumento técnico de articulación intersectorial que establece cinco fases de intervención. Ha servido como base para capacitaciones, activación de rutas de atención y desarrollo de acciones pedagógicas.

Acuerdo 584 de 2015: Adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género del Distrito, incorporando enfoque interseccional y territorial. Ordena a las entidades distritales implementar acciones estructurales para erradicar desigualdades.

Acuerdo 526 de 2013: Crea los Consejos Locales de Seguridad de las Mujeres como instancias de participación ciudadana para incidir en políticas de seguridad urbana con enfoque de género.

Acuerdo 092 de 2003: Impulsa acciones pedagógicas e institucionales para construir una cultura de equidad entre hombres y mujeres en Bogotá, con énfasis en la educación y el espacio urbano.

Acuerdo 066 de 2002: Ordena campañas masivas y permanentes de prevención de violencia contra las mujeres, incluyendo aquella que ocurren en escenarios cotidianos como la calle, los entornos laborales o los sistemas de transporte.

Acuerdo 788 de 2020: Establece lineamientos para la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas, planes y proyectos del Distrito, incluyendo sus entidades descentralizadas.

Resolución 617 de 2024 del IDU: Adopta la Política “Gente IDU”, que incorpora el enfoque de género en procesos de contratación, gestión del talento humano y ejecución de obras. Establece obligaciones contractuales para contratistas, incluyendo formación al personal, lenguaje incluyente y estrategias de señalización.

Programa CALDAS del IDU: Estrategia institucional de cultura organizacional que promueve la prevención del acoso sexual laboral, el respeto a la diversidad y la formación en nuevas masculinidades.

Resolución 617 de 2024 del IDU: Adopta la Política de Inclusión Social y Equidad “Gente IDU”, que incorpora el enfoque de género en los procesos de contratación y en la gestión de talento humano. Complementariamente, el IDU ha implementado el Apéndice H – Especificaciones para el componente de diálogo ciudadano y comunicación estratégica, en el que se incluyen requerimientos obligatorios sobre formación en género, prevención de violencias, estrategias de señalización, y cultura institucional de respeto.

Guía de Acciones para la Prevención y Denuncia de la Violencia Basada en Género – IDU: Documento exigido contractualmente en múltiples obras del IDU, aprobado por interventoría, que establece mecanismos específicos de denuncia, sanciones internas, canales de atención, principios rectores y lenguaje incluyente. Es un instrumento técnico replicable para el resto de entidades distritales con funciones en obra pública.

5.2 DE ORDEN NACIONAL

Constitución Política de Colombia: Consagra la igualdad real y efectiva (art. 13), la protección especial a la mujer (art. 43) y el derecho a condiciones dignas de trabajo (art. 53). Sirve como fundamento para exigir medidas preventivas contra el acoso callejero en entornos laborales y urbanos.

Ley 1257 de 2008: Norma marco para la protección integral de las mujeres. Ordena a las autoridades prevenir y atender violencias en el espacio público, y adoptar políticas institucionales con enfoque de derechos.

Ley 2365 de 2024: Impone a empleadores públicos y privados la obligación de prevenir el acoso sexual mediante políticas, protocolos, formación y medidas de protección. Aunque centrada en espacios laborales formales, su contenido es aplicable por analogía a frentes de obra contratados por el Estado.

Ley 1010 de 2006: Tipifica el acoso laboral y protege la dignidad humana en relaciones contractuales. Es relevante para regular el comportamiento del personal vinculado a proyectos de obra pública.

Decreto 4108 de 2011: Define funciones del Ministerio del Trabajo, incluyendo la promoción de ambientes laborales seguros y libres de violencia, lo que refuerza la obligación de adoptar medidas preventivas en toda relación de trabajo, incluida la contratación pública.

Sentencia C-127 de 2011: Se reconoció que el principio de igualdad exige la adopción de medidas diferenciadas para garantizar los derechos de poblaciones históricamente discriminadas. Validó la constitucionalidad de normas que otorgan protecciones específicas a las mujeres frente a la violencia y el acoso.

Sentencia T-195 de 2022: Se reiteró que el acoso callejero constituye una manifestación de violencia basada en género, incluso si no hay contacto físico. Enfatizó el deber de las autoridades de adoptar políticas públicas para su prevención, especialmente en el espacio público, y reiteró que no puede ser considerado una conducta inofensiva.

Sentencia T-140 de 2021: Se reconoció la existencia estructural de acoso callejero y la obligación de los entes territoriales de implementar acciones institucionales integrales. Subrayó que esta forma de violencia limita la libertad de movimiento de las mujeres y reproduce desigualdades sociales y de género.

5.3 DE ORDEN INTERNACIONAL

CEDAW – Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979): Obliga a los Estados a adoptar medidas legislativas, administrativas y judiciales para eliminar la discriminación y violencia contra las mujeres, incluidas aquellas que ocurren en espacios públicos.

Convención de Belém do Pará (1994): Instrumento vinculante del sistema interamericano que exige a los Estados actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y erradicar la violencia contra las mujeres, incluyendo aquella en la comunidad o el espacio público.

Convenio 190 de la OIT (2019): Ratificado mediante la Ley 2237 de 2022. Reconoce como violencia laboral aquella que ocurre dentro y fuera del lugar de trabajo, incluyendo trayectos, entornos de obra y espacios asociados a la prestación del servicio.

Observación General No. 35 del Comité CEDAW (2017): Actualiza el concepto de violencia de género, incluye expresamente el acoso callejero como una forma de violencia que requiere legislación estatal específica.

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948): Consagra el derecho a la seguridad, a la dignidad y a la libertad de circulación, principios que fundamentan la prevención del acoso en el espacio público.

Agenda 2030 – Objetivos de Desarrollo Sostenible: (i) ODS 5: eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en el ámbito público y privado; (ii) ODS 11: promover ciudades inclusivas, seguras y sostenibles, especialmente para grupos vulnerables.

6. COMPETENCIA CONCEJO DE BOGOTÁ

De conformidad con la Constitución Política y las disposiciones que regulan la organización y funcionamiento de las entidades territoriales, el Concejo de Bogotá cuenta con competencia para expedir acuerdos que desarrollen lineamientos de política pública en materia de prevención de violencias basadas en género en el espacio urbano, incluyendo entornos de obra pública.

En particular, el artículo 313 de la Constitución y el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 facultan al Concejo para: (i) Reglamentar el ejercicio de funciones y la prestación de servicios a cargo del Distrito; (ii) Dictar Acuerdos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; (iii) Promover la transversalización del enfoque de género en las políticas, programas y proyectos del Distrito; (iv) Establecer criterios para la contratación pública dentro del marco legal vigente.

El presente Proyecto de Acuerdo no crea funciones nuevas ni impone sanciones, sino que establece lineamientos de política pública que pueden ser incorporados por las entidades distritales dentro del marco de la contratación estatal. En particular, faculta al Concejo para definir criterios orientadores que permitan a las entidades exigir a contratistas, consorcios y uniones temporales la adopción de protocolos de prevención del acoso callejero como parte de los requisitos habilitantes o condiciones contractuales. Estas disposiciones se enmarcan en la competencia del Concejo para promover estándares de gestión pública con enfoque de género, fortalecer la corresponsabilidad institucional y garantizar la coherencia normativa del Distrito en la prevención de violencias basadas en género en el espacio urbano.

7. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, el presente Proyecto de Acuerdo no genera impacto fiscal para el Distrito Capital, ya que no implica la creación de nuevas funciones, estructuras administrativas ni la asignación de recursos adicionales por parte de las entidades distritales.

Las medidas propuestas se enmarcan en las competencias existentes de las entidades ejecutoras de obra pública y se implementan a través de ajustes en los pliegos de condiciones de los procesos de contratación. En particular, el protocolo de prevención del

acoso callejero deberá ser presentado, financiado y ejecutado directamente por los contratistas, consorcios o uniones temporales como parte de los requisitos habilitantes o de cumplimiento contractual, dentro de su presupuesto y sin generar erogaciones para el Distrito.

Adicionalmente, los contenidos pedagógicos, rutas de atención y materiales de formación ya se encuentran disponibles en el Protocolo Distrital para la Prevención, Atención y Sanción del Acoso en el Espacio Público y Transporte, así como en los canales y herramientas técnicas ofrecidas por la Secretaría Distrital de la Mujer. Esta entidad, además, desarrolla conversatorios y capacitaciones sobre el tema de forma gratuita, lo que permite la articulación interinstitucional sin requerir nuevas apropiaciones presupuestales.

10. CONCLUSIONES

El acoso callejero en contextos de obra pública constituye una manifestación persistente y naturalizada de violencia basada en género que restringe el ejercicio del derecho a la ciudad, especialmente para las mujeres y poblaciones diversas. Aunque sus impactos han sido ampliamente documentados, la respuesta institucional ha sido fragmentada y limitada, sin una regulación específica que defina estándares preventivos aplicables a los procesos contractuales del Distrito. Este Proyecto de Acuerdo busca llenar ese vacío normativo mediante la adopción de lineamientos que obliguen a contratistas, consorcios y uniones temporales a implementar políticas de prevención del acoso como requisito habilitante, fortaleciendo la corresponsabilidad institucional en entornos de intervención urbana.

La propuesta no implica impacto fiscal para el Distrito, dado que las obligaciones recaen sobre los contratistas, quienes deberán asumir los costos de implementación dentro de sus presupuestos contractuales. Además, su contenido se apoya en instrumentos jurídicos y técnicos ya existentes, como el Protocolo Distrital y la oferta gratuita de formación de la Secretaría de la Mujer, lo que garantiza su viabilidad operativa. En suma, el Proyecto de Acuerdo representa una acción afirmativa concreta que refuerza el enfoque de género en la gestión del espacio público y la contratación estatal, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Distrital y a la construcción de una ciudad segura, cuidadora e incluyente para todos.

CRISTINA CALDERÓN RESTREPO

Concejal de Bogotá
Partido Nuevo Liberalismo

FERNANDO LÓPEZ GUTIÉRREZ

Concejal de Bogotá
Partido Nuevo Liberalismo

JUAN BAENA MERLANO

Concejal de Bogotá
Partido Nuevo Liberalismo

RICARDO CORREA MOJICA

Concejal de Bogotá
Partido Nuevo Liberalismo

JESÚS DAVID ARAQUE MEJÍA

Concejal de Bogotá
Partido Nuevo Liberalismo

JUAN MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ

Concejal de Bogotá
Partido Nuevo Liberalismo

PROYECTO DE ACUERDO NO 752 DE 2025

PRIMER DEBATE

**"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA
PREVENCIÓN DEL ACOSO EN OBRAS PÚBLICAS EN BOGOTÁ D.C. Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**

EL CONCEJO DE BOGOTÁ

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial de las que le confiere el numeral 1 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA

ARTÍCULO 1. Objeto. Establecer lineamientos de política pública orientados a la prevención del acoso callejero en entornos de obra pública en Bogotá D.C., mediante la incorporación de criterios obligatorios en los procesos contractuales y de supervisión de las entidades distritales, con el fin de garantizar entornos urbanos seguros, libres de violencias basadas en género.

ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente Acuerdo aplican a todas las entidades distritales que planeen, contraten, ejecuten o supervisen obras públicas en Bogotá D.C., así como a los contratistas, consorcios o uniones temporales que suscriban contratos con el Distrito en esta materia.

ARTÍCULO 3. Definición de acoso en obras públicas. Para efectos del presente Acuerdo, se entiende por acoso cualquier manifestación verbal, gestual, física o simbólica de connotación sexual no consentida que ocurra en el espacio público donde se ubique una obra pública, y que tenga como efecto intimidar, incomodar, violentar o limitar el tránsito y uso del entorno urbano por parte de las mujeres y personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas.

ARTÍCULO 4. Requisito habilitante para contratistas. Las entidades distritales deberán incluir en los pliegos de condiciones de los procesos de contratación de obra pública la exigencia de que los proponentes presenten una política de prevención del acoso callejero como requisito habilitante. Esta política deberá contener, como mínimo: (i) Diagnóstico del riesgo de violencia de género en el entorno de obra; (ii) Estrategias de formación y sensibilización para el personal vinculado; (iii) Mecanismos de reporte accesibles y seguros; (iv) Compromisos de conducta y medidas correctivas internas; (v) Estrategias de señalización y comunicación en campo.

ARTÍCULO 5. Obligaciones contractuales de los adjudicatarios. Además del cumplimiento del requisito habilitante, los contratistas deberán incorporar en la ejecución del contrato las siguientes acciones: (i) Realizar capacitaciones obligatorias al personal de obra sobre prevención del acoso, lenguaje incluyente, derechos de las mujeres y diversidad; (ii) Instalar señalización visible con mensajes de prevención y canales de reporte, en coordinación con el plan de manejo social; (iii) Habilitar mecanismos accesibles de denuncia o atención ante hechos de acoso, articulados con las rutas existentes del Distrito; (iv) Reportar a la entidad contratante el cumplimiento de estas obligaciones en sus informes periódicos.

ARTÍCULO 6. Supervisión e interventoría. Las entidades contratantes deberán incorporar en los estudios previos, contratos de interventoría o supervisión, el seguimiento específico al cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del presente Acuerdo. Los informes de supervisión deberán contener un capítulo dedicado al avance en las medidas de prevención del acoso callejero.

ARTÍCULO 7. Apoyo institucional. La Secretaría Distrital de la Mujer brindará acompañamiento técnico para la elaboración de los términos de referencia, políticas de prevención, protocolos de atención y contenidos formativos, sin que ello implique apropiaciones presupuestales adicionales. Las capacitaciones podrán articularse con la oferta formativa gratuita de dicha entidad.

ARTÍCULO 8. Articulación interinstitucional. Las entidades distritales con funciones en obra pública —como el Instituto de Desarrollo Urbano, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Secretaría Distrital de Movilidad, las alcaldías locales y otras— deberán armonizar sus procedimientos internos con lo dispuesto en este Acuerdo e intercambiar buenas prácticas mediante comités técnicos, espacios de formación y actualizaciones periódicas de lineamientos.

ARTÍCULO 9. Obras privadas en espacio público. La Administración Distrital podrá promover, de manera voluntaria, la adopción de las disposiciones de este Acuerdo en las obras privadas que intervengan o afecten el espacio público, mediante incentivos simbólicos, protocolos modelo, estrategias pedagógicas u otras acciones no vinculantes.

ARTÍCULO 10. Seguimiento y evaluación. La Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Concejo de Bogotá hará seguimiento anual a la implementación de este Acuerdo, con base en los informes presentados por las entidades ejecutoras y la Secretaría Distrital de la Mujer.

ARTÍCULO 11. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a los días del mes de ____ del año 2025

Referencias:

Acuerdo 066 de 2002. “Por medio del cual se promueve la prevención de la violencia contra la mujer en Bogotá D.C.” Concejo de Bogotá.

Acuerdo 092 de 2003. “Por el cual se promueven acciones para la construcción de una cultura de equidad entre hombres y mujeres.” Concejo de Bogotá.

Acuerdo 526 de 2013. “Por el cual se crean los Consejos Locales de Seguridad de las Mujeres.” Concejo de Bogotá.

Acuerdo 584 de 2015. “Por medio del cual se adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en Bogotá D.C.” Concejo de Bogotá.

Acuerdo 788 de 2020. “Por medio del cual se establecen lineamientos para la transversalización del enfoque de género en las políticas, planes y programas del Distrito.” Concejo de Bogotá.

Acuerdo 927 de 2024. “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027 ‘Bogotá Camina Segura’.” Concejo de Bogotá.

Constitución Política de Colombia. (1991).

Corte Constitucional. Sentencia C-127 de 2011.

Corte Constitucional. Sentencia T-140 de 2021.

Corte Constitucional. Sentencia T-195 de 2022.

Decreto Ley 1421 de 1993. “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá.”

Decreto 4108 de 2011. “Por el cual se determinan los objetivos y estructura del Ministerio del Trabajo.”

IDU. (2024). *Resolución 617 de 2024*. Política de Inclusión Social y Equidad “Gente IDU”.

IDU. (2024). *Apéndice H – Especificaciones para el componente de diálogo ciudadano y comunicación estratégica*.

IDU. (s.f.). *Guía de Acciones para la Prevención y Denuncia de la Violencia Basada en Género*.

Ley 1010 de 2006. “Por la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral.”

Ley 1257 de 2008. “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.”

Ley 2237 de 2022. “Por medio de la cual se aprueba el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo.”

Ley 2365 de 2024. “Por medio de la cual se refuerzan los deberes de prevención del acoso sexual en entornos laborales.”

“SDMujer atiende en casos de acoso en el espacio y transporte público” Enlace: <https://www.sdmujer.gov.co/noticia/news/sdujer-atiende-casos-de-acoso-en-espacio-y-transporte-publico>

Organización de las Naciones Unidas. (1979). *Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)*.

Organización de los Estados Americanos. (1994). *Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – Belém do Pará*.

Organización Internacional del Trabajo. (2019). *Convenio 190 sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo*.

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1948). *Declaración Universal de los Derechos Humanos*.

Naciones Unidas. (2015). *Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*.

PROYECTO DE ACUERDO NO 753 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE MICRONEGOCIOS BARRIALES Y VECINALES EN BOGOTÁ, D.C. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****1. OBJETO.**

La presente iniciativa tiene como objetivo establecer los lineamientos generales para la formulación e implementación de la Política Pública Distrital de Micronegocios Barriales y Vecinales en Bogotá, D.C. Asimismo, se define el micronegocio como una unidad económica ubicada en zonas barriales o rurales, con hasta nueve personas ocupadas y cuyos ingresos anuales no superan las 3.500 Unidades de Valor Tributario (UVT), conforme a lo establecido en la Ley 2470 de 2025.

El proyecto establece que la Política Pública Distrital de Micronegocios Barriales y Vecinales en Bogotá deberá formularse con base en los siguientes lineamientos: el reconocimiento de los micronegocios, tiendas y panaderías como actores esenciales en el abastecimiento local y en la seguridad alimentaria del Distrito; la inclusión de estos en programas de formación, acompañamiento empresarial, acceso a financiación, formalización, innovación y asociatividad; la implementación de un sistema distrital de información georreferenciada con enfoque diferencial; y la promoción de su acceso a la seguridad social, la certificación de competencias laborales y la participación en espacios comerciales como ferias y ruedas de negocio, entre otros aspectos.

Se propone que la formulación e implementación de esta política estará a cargo de la Administración Distrital, liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico, junto con la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Educación y otras entidades competentes. La Secretaría de Desarrollo Económico será responsable del seguimiento técnico.

Por otro lado, contempla que el Distrito contará con un plazo máximo de 18 meses para diseñar, adoptar e implementar esta política pública.

2. ASPECTOS GENERALES**Nacional**

De acuerdo con la Encuesta de Micronegocios – EMICRON, publicada por el DANE en junio de 2025, durante el primer trimestre del año se estimaron 2,3 millones de micronegocios activos en las 24 principales ciudades del país. De estos, la gran mayoría —2,2 millones— están en manos de trabajadores por cuenta propia, y apenas cerca de 100.000 son gestionados por personas con al menos un empleado a cargo. Este dato ratifica que el micronegocio sigue siendo una alternativa predominante de autoempleo urbano en Colombia.³⁵

Asimismo, es importante traer a coalición la Encuesta de Micronegocios (EMICRON) Panaderías y tiendas de barrio 2019-2023, que, según el DANE, se registraron aproximadamente 546.817 micronegocios de panaderías y tiendas de

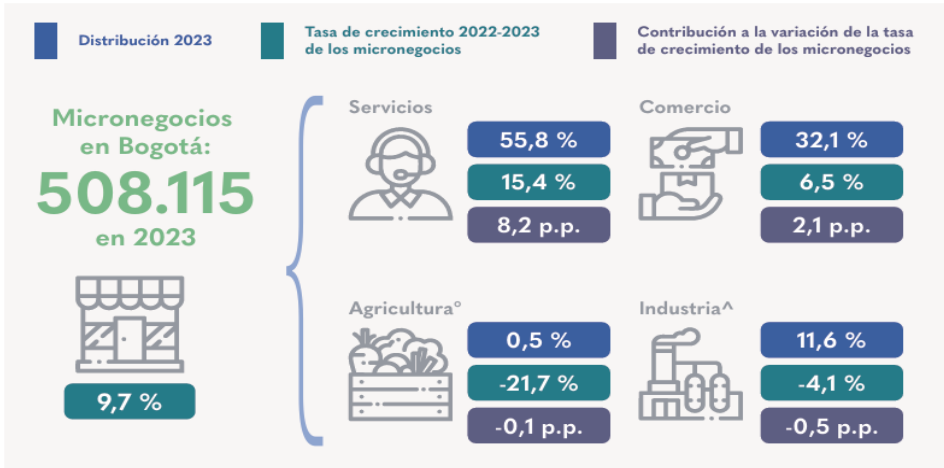
³⁵ [Mercado](#)

barrio en el país. El 88,7 % de estos micronegocios eran administrados por trabajadores(as) independientes, mientras que el 11,3 % correspondía a patronos(as) o empleadores(as) que contaban con al menos una persona a su cargo. Asimismo, contiene que el 60,4% propietarios(as) de micronegocios de panaderías y tiendas de barrio, eran hombres y 39,6% mujeres.³⁶

Bogotá

Según el Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá, en la caracterización de los micronegocios en la ciudad para el año 2023 se registraron 508.115 unidades, lo que representó un incremento del 9,7 % frente a 2022. Estos negocios se concentraron principalmente en los sectores de servicios (55,8 %) y comercio (32,1 %). En promedio, cada micronegocio generó \$61,8 millones en ventas anuales. Solo el 15,2 % accedió a algún tipo de crédito, en su mayoría a través del sistema financiero formal, y el 64,5 % de esos recursos se destinaron a inversión en el propio negocio. La participación de mujeres como propietarias aumentó a 35,2 %. No obstante, la informalidad persiste como una barrera estructural: solo el 27,1 % cuenta con matrícula mercantil, el 47,3 % no tiene RUT y el 46,2 % no lleva registros contables.³⁷

Gráfica 1.1 Micronegocios en Bogotá según actividad económica, 2022-2023



Fuente: Figura tomada de la Caracterización de los micronegocios en Bogotá Resultados en 2023 - Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá,

De igual manera, se encontró que el 62,2 % de los micronegocios en Bogotá llevan tres años o más en funcionamiento, lo que evidencia su permanencia como forma estable de generación de ingresos en la ciudad. De ese total, el 43,8 % supera los diez años de actividad, mientras que el 18,4 % tiene entre cinco y menos de diez años de operación. Por otro lado, el 15,2 % lleva entre uno y menos de tres años, lo que muestra una base consolidada, pero también una renovación constante del sector.³⁸

Por otro lado, es importante destacar que, entre las conclusiones, se resalta que en Bogotá persisten retos clave como la informalidad “reflejada en la baja tasa de inscripción en la Cámara de Comercio (apenas el 27,1 % de los negocios), la falta de registros contables (46,2 % manifiesta no llevarlos) y la no tenencia de registros tributarios (47,3 %). A esto se suma la alta concentración de micronegocios gestionados por trabajadores por cuenta propia (87,9 %), lo que resalta la necesidad de implementar políticas públicas orientadas a promover su formalización y estabilidad laboral”. De igual manera, el acceso al crédito y a otros mecanismos de financiamiento formal.³⁹

³⁶ [bol-EMICRON-PanaderiasTiendasBarrio-2023.pdf](#)

³⁷ [ne_emicron_vfinal-CARACTERIZACION-MICRONEGOCIOS.pdf](#)

³⁸ *ibid*

³⁹ [ne_emicron_vfinal-CARACTERIZACION-MICRONEGOCIOS.pdf](#)

Al respecto, el Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá (agosto de 2024), resaltó que el 84,8 % de los micronegocios establecidos en la ciudad no acceden al sistema financiero formal, lo que evidencia una alta exclusión financiera. En los negocios nuevos, apenas el 11,6 % logró un crédito formal, mientras que el 20,5 % recurrió a préstamos informales, como familiares o prestamistas del “gota a gota”. Las razones principales: temor al endeudamiento (45 %), falta de requisitos (14,2 %) y reportes negativos o intereses altos (8,6 %).⁴⁰

3. CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

Artículo 1.

“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”

Artículo 25.

“El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.”

Artículo 333.

“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.”

LEYES

Ley 2470 de 2025 *“Por medio de la cual se formulan lineamientos para la política pública a favor de los micronegocios barriales y vecinales del país y se dictan otras disposiciones”*

Ley 2069 de 2020 *“Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia.”*

⁴⁰ [84,8 % de los micronegocios en Bogotá no acude al sistema financiero: Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico](#)

Artículo 1. Objeto.

“La presente Ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad.

Dicho marco delineará un enfoque regionalizado de acuerdo a las realidades socioeconómicas de cada región.”

Ley 1429 de 2010 *“Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo.”*

Artículo 1o. Objeto.

“La presente ley tiene por objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse.”

Ley 905 de 2004 *“Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones”*

Artículo 17. El artículo 31 de la Ley 590 de 2000 quedará así:

“

Artículo 31. Programas educativos para Mipymes y de creación de empresas. El Sena, las universidades e institutos técnicos y tecnológicos, sin perjuicio de su régimen de autonomía, considerarán lo dispuesto en la presente ley a efecto de establecer diplomados, programas de educación no formal, programas de extensión y cátedras especiales para las Mipymes y a promover la iniciativa empresarial.

...”

Decreto Ley 1421 de 1993 *“Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”*

Artículo 12. Atribuciones.

“Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

...”

ACUERDOS DISTRITALES

Acuerdo 927 de 2024 *“Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”*

Artículo 12. Programas del objetivo estratégico “Bogotá confía en su potencial”. Adóptense los siguientes programas del objetivo “Bogotá confía en su potencial”:

12.4. Programa 19. Desarrollo empresarial, productividad y empleo.

“El programa parte de la necesidad que tiene Bogotá de posicionarse como un destino atractivo para la inversión extranjera, la creación y potencialización de empresas innovadoras, la realización de grandes eventos, realizar aprovechamiento económico racional del espacio público y la atracción de turistas. Para ello, este programa fortalecerá el tejido empresarial de Bogotá mediante estrategias que promuevan mejoras en la productividad de las empresas a través de la innovación, la participación en mercados internacionales y el posicionamiento de la ciudad como destino de inversión extranjera directa y epicentro de eventos de ciudad con alcance internacional.

(...)

Adicionalmente, el programa permitirá la creación de una línea de crédito con condiciones favorables que apoye a comerciantes afectados por retrasos de obras públicas. Dicho retraso será definido por un índice objetivo de la Secretaría de Desarrollo Económico. Esto con el propósito de alivianar las cargas públicas que son soportadas por las Mipymes y los micronegocios, y que se desbordan con los atrasos de las obras, lo cual impide que se desarrollen, sean productivas y que genere empleo en la ciudad.

...”

12.5. Programa 20. Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente.

“El propósito del programa es garantizar la implementación de un Sistema Distrital de Apoyo al Emprendimiento, a través del cual se ofrecerán servicios de asistencia técnica, tecnológica y financiera para que las personas interesadas en emprender o que ya cuentan con una idea de negocio, la puedan materializar. Esto incluirá comerciantes informales con miras a llevarlos a la formalidad.

(...)

Como parte de la inclusión y mecanismos financieros, se promoverán el acceso a financiamiento formal y/o la asignación de recursos no reembolsables. Los mecanismos de financiación podrán incluir financiación a la tasa de interés. Dichos instrumentos serán clave para cubrir necesidades de liquidez, capital de trabajo y modernización de los micronegocios y las micro, y pequeñas, medianas empresas, incluyendo aquellas afectadas por los retrasos en las obras públicas de la ciudad.

...”

Artículo 93. Apoyo financiero al tejido productivo.

“La Administración Distrital, a través del Sector Desarrollo Económico desarrollará programas y estrategias para apoyar financieramente a los Micronegocios, Micro, pequeñas y medianas empresas domiciliada en Bogotá D.C., mediante la puesta en marcha de créditos con tasa compensada, la operación de líneas de crédito, la asignación de recursos no reembolsables, y, en general, la implementación de otros mecanismos alternativos de financiamiento. Para efectos de este artículo, el término Micronegocio significa una unidad económica conformada desde una (1) hasta nueve (9) personas ocupadas, que desarrolla una actividad productiva de bienes o servicios, con el objeto de obtener un ingreso, actuando en calidad de propietario o arrendatario de los medios de producción.

Parágrafo. Dentro de la línea de financiación de los micronegocios, las estrategias de apoyo financiero que lleguen a implementarse se promoverán aquellas unidades económicas conformadas única o mayoritariamente por mujeres, jóvenes, personas mayores y demás poblaciones vulnerables que se prioricen.”

Artículo 110. Alianzas para la inclusión financiera y combatir el "gota a gota" en micronegocios.

“El Sector de Desarrollo Económico podrá desarrollar y ejecutar programas para facilitar los microcréditos, como instrumento de creación, formalización, fortalecimiento, inclusión financiera y combatir el gota a gota de los micronegocios, con entidades sin ánimo de lucro, entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, por la Superintendencia de la Economía Solidaria y/o con Sociedades Comerciales que otorguen líneas de financiamiento o de microcrédito en desarrollo de su objeto social, dentro de los parámetros establecidos por la ley.

Para lograr los objetivos mencionados, el Sector de Desarrollo Económico con las entidades establecidas en el párrafo anterior, podrá suscribir convenios, acuerdos, alianzas o cualquier tipo de mutuo entendimiento, con o sin transferencia de recursos, para la ejecución de programas, planes y proyectos de microcréditos con microempresarios formales e informales en el Distrito Capital.”

Artículo 115. Fondo para el Desarrollo de los Micronegocios de Bogotá FONDEM.

“Créase el fondo cuenta como una cuenta especial sin personería jurídica de la Secretaría de Desarrollo Económico para el desarrollo de los micronegocios de Bogotá – FONDEM para el manejo presupuestal, contable y de tesorería de los recursos financieros destinados a proyectos de desarrollo de las actividades económicas asociadas a los micronegocios en la ciudad de Bogotá D.C.

En el fondo cuenta podrán concurrir recursos provenientes de participación de terceros del sector privado, de cooperación nacional o internacional o donantes de otra naturaleza, con el objetivo de garantizar la implementación programas relacionados con el aumento de talento humano, actividad productiva de empresarios y emprendedores y economía popular de la ciudad. El fondo cuenta no podrá ser financiado con aportes del Distrito que provengan de recursos de crédito.

...”

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE – ODS⁴¹

El presente Proyecto de Acuerdo se encuentra alineado con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y contribuye directamente al cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se alinea, en particular con el **ODS 1** (Fin de la pobreza), al fortalecer los ingresos de las unidades económicas de base barrial; el **ODS 8** (Trabajo decente y crecimiento económico), mediante el fomento del emprendimiento formal y la inclusión financiera; y el **ODS 10** (Reducción de las desigualdades), al priorizar poblaciones vulnerables en los programas de apoyo a micronegocios.

4. IMPACTO FISCAL

Teniendo en cuenta que el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, establece lo siguiente:

“Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

⁴¹ **Naciones Unidas.** (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (Resolución A/RES/70/1). Recuperado de <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso.

Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces.”

Es importante señalar que la presente iniciativa no genera impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el Presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación.

Atentamente,

BANCADA PARTIDO POLÍTICO MIRA

FABIÁN ANDRÉS PUENTES SIERRA

Concejal de Bogotá
Partido Político MIRA

SAMIR BEDOYA PIRAQUIVE

Concejal de Bogotá
Partido Político MIRA

PROYECTO DE ACUERDO NO 753 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE MICRONEGOCIOS BARRIALES Y VECINALES EN BOGOTÁ, D.C., Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 313 y 322 de la Constitución Política, y los numerales 1 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos de política pública distrital para el fortalecimiento, formalización y generación de empleo mediante los micronegocios barriales y vecinales en Bogotá, incluyendo a tiendas y panaderías de barrio como aliados estratégicos en el suministro de productos de primera necesidad, en el marco de la economía popular y comunitaria.

Se entenderá como micronegocio barrial o vecinal aquella unidad económica que se caracteriza por contar de una (1) a nueve (9) personas ocupadas y desarrollar una actividad productiva de bienes o servicios con el objeto de obtener un ingreso, actuando en calidad de propietario o arrendatario de los medios de producción ubicado en las zonas barriales o rurales, cuyos ingresos brutos anuales no superen tres mil quinientas (3.500) Unidades de Valor Tributario, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 2470 de 2025, o la norma que lo modifique o adicione.

ARTÍCULO SEGUNDO. LINEAMIENTOS. La Política Pública Distrital de Micronegocios Barriales y Vecinales en Bogotá, deberá formularse a partir de los lineamientos:

- a. Reconocer a los micronegocios, tiendas y panaderías como parte de la cadena de abastecimiento local y actores clave en la seguridad alimentaria del Distrito.
- b. Incluir a los micronegocios, tiendas y panaderías en programas distritales de promoción, formación, acompañamiento empresarial y fortalecimiento productivo.
- c. Diseñar y actualizar un sistema distrital de información y caracterización de micronegocios, tiendas y panaderías, georreferenciado por localidades, con enfoque diferencial.
- d. Brindar acompañamiento para la formalización de los micronegocios, tiendas y panaderías.
- e. Fomentar el acceso a las fuentes de financiación para micronegocios, tiendas y panaderías.
- f. Promover procesos de asociatividad entre micronegocios, tiendas y panaderías, como mecanismo para fortalecer capacidades colectivas, generar redes de cooperación territorial y facilitar el acceso a programas de formación, financiación, comercialización y formalización.
- g. Fomentar el acceso a programas de formación técnica, certificación de competencias laborales y desarrollo de capacidades para el emprendimiento, en articulación con la oferta distrital y nacional.
- h. Promover la participación de micronegocios en ferias, ruedas de negocio, mercados campesinos, entre otros.
- i. Fomentar procesos de innovación, digitalización y comercio electrónico dirigidos a micronegocios, tiendas y panaderías.

- j. Promover mecanismos de acceso al Sistema de Seguridad Social y esquemas de protección para la vejez.
- k. Impulsar estrategias de inclusión financiera para micronegocios, tiendas y panaderías.

ARTÍCULO TERCERO. ENTIDADES RESPONSABLES. Corresponde a la Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría de Educación del Distrito y las demás entidades del Distrito competentes, la formulación y socialización de la Política Pública Distrital de Micronegocios Barriales y Vecinales en Bogotá.

PARÁGRAFO. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico realiza el seguimiento técnico a la ejecución e implementación de la política pública.

ARTÍCULO CUARTO. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. La Administración Distrital, en coordinación con las entidades responsables, deberán publicar en la página Web de cada entidad un informe semestral sobre la implementación, ejecución, cumplimiento y evaluación de La Política Pública Distrital de Micronegocios Barriales y Vecinales en Bogotá.

ARTÍCULO QUINTO. PLAZO. La Administración Distrital contará con un plazo máximo de dieciocho (18) meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, para el diseño, adopción e implementación de la Política Pública Distrital de Micronegocios Barriales y Vecinales en Bogotá.

ARTÍCULO SEXTO. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D.C., a los _____ del mes de _____ del año 2025.

Atentamente,

BANCADA PARTIDO POLÍTICO MIRA

FABIÁN ANDRÉS PUENTES SIERRA
Concejal de Bogotá
Partido Político MIRA

SAMIR BEDOYA PIRAQUIVE
Concejal de Bogotá
Partido Político MIRA

PROYECTO DE ACUERDO NO 754 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE FOMENTA LA PRÁCTICA DE LOS DEPORTES URBANOS Y SE CREA EL FESTIVAL DE DEPORTES URBANOS “DC UNDERGROUND” EN EL DISTRITO CAPITAL”.

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**1. OBJETO DEL PROYECTO**

El presente Proyecto de Acuerdo tiene como objeto fomentar la práctica de los Deportes Urbanos en Bogotá y así mismo, lograr la creación del festival de Deportes Urbanos en la ciudad.

2. ANTECEDENTES.

El presente Proyecto de Acuerdo que se pone en consideración del Concejo de Bogotá, no cuenta con antecedentes, toda vez que es la primera vez que se presenta ante el Cabildo Distrital002E

3. JUSTIFICACIÓN

Las expresiones urbanas y/o callejeras, en conjunto con su entorno cultural, deportivo y social, constituyen nuevas formas de manifestación juvenil que se destacan por su carácter inclusivo, su capacidad de resignificar el espacio público y su conexión con prácticas emergentes que representan a las nuevas generaciones.

Estas formas de expresión combinan la cultura urbana con la actividad física, el arte, la música y el deporte, consolidándose como herramientas fundamentales para la construcción de tejido social, el fortalecimiento de identidades colectivas y la promoción de la participación ciudadana, la convivencia y la apropiación del territorio. En este sentido, dichas manifestaciones no solo expresan valores culturales contemporáneos, sino que también contribuyen activamente al desarrollo social y humano de la juventud bogotana.

La realización de eventos y festivales multidisciplinarios que integren estas expresiones con prácticas culturales, artísticas, deportivas y educativas debe ser promovida e impulsada desde los diferentes sectores, tanto públicos como privados. Estas iniciativas constituyen espacios legítimos de participación, innovación y transformación social que responden a las dinámicas culturales actuales y a las necesidades de las juventudes en la ciudad.

Los eventos urbanos y de expresiones callejeras.

- a. Fortalecen la inclusión y participación.
- b. Mejoran el uso y la apropiación del espacio público.
- c. Previenen violencias y fortalecen la seguridad urbana.
- d. Impulsan la economía creativa y el emprendimiento local.
- e. Fortalecen las políticas públicas de juventud, deporte y cultura.
- f. Contribuyen al desarrollo humano y social.

La ciudad de Bogotá, con su diversidad social, cultural y territorial, es escenario de múltiples formas de expresión artística y deportiva que nacen desde las calles, los barrios y los jóvenes, las expresiones urbanas y callejeras, como el Street workout, breakdance, el graffiti, el freestyle, el skateboarding, el parkour, la calistenia, el DJing y el Stunt Bike; estas prácticas, promovidas principalmente por niños, niñas, adolescentes y jóvenes, han sido históricamente invisibilizadas o estigmatizadas, pese a su creciente impacto positivo en la convivencia, la apropiación del territorio y el desarrollo humano en la ciudad.

En Bogotá existen festivales y/o eventos significativos como Hip Hop al Parque o Viva el Planeta, que han demostrado el poder transformador del arte urbano y la cultura juvenil. Sin embargo, estos festivales se realizan de manera descentralizada, y cada uno maneja diferentes expresiones deportivas y culturales, hace falta un espacio que articule de manera más amplia y sistemática las múltiples expresiones que convergen en la cultura callejera contemporánea, donde se integren el deporte, el arte, la música, la innovación social y el emprendimiento juvenil.

3.1 CONTEXTO INTERNACIONAL

A nivel global, existen referentes consolidados que demuestran el impacto positivo y la relevancia de este tipo de festivales urbanos, entre los que se destacan:

Referentes Internacionales

KARDO – Concurso Internacional de Cultura Callejera y Deporte (Rusia)

- Tipo: Festival multideportivo y cultural
- Disciplinas: Breaking, BMX, calistenia, graffiti, DJing, parkour, skateboarding, tricking, freerunning, hip-hop, kickscootering

- Importancia: Reconocido por su enfoque inclusivo y por ofrecer becas, premios y apoyo profesional. Otorga hasta 5 millones de rublos en premios.

Urban World Series – Extreme Barcelona (España)

- Tipo: Festival multideportivo internacional
- Disciplinas: BMX, skate, scooter, breaking, parkour, escalada, basket 3x3, freestyle trampoline
- Importancia: Uno de los festivales de deportes urbanos más importantes del mundo. Funciona como clasificatorio oficial hacia los Juegos Olímpicos en varias disciplinas

FISE – Festival International des Sports Extrêmes (Francia)

- Tipo: Circuito internacional de deportes extremos y urbanos
- Disciplinas: BMX, skate, parkour, roller, wakeboard, spine ramp, breaking
- Importancia: Uno de los eventos más prestigiosos de Europa en este ámbito, reconocido por su proyección global y profesionalización del talento juvenil.

Red Bull Competitions (Internacional)

- Tipo: Competencias urbanas y extremas de alto nivel
- Disciplinas: Red Bull BC One (breaking), Rampage (MTB), Street Style (freestyle), Art of Motion (parkour), Cerro Abajo (downhill urbano), entre otras
- Importancia: Si bien no son federativos, gozan de gran reconocimiento internacional y alta participación de jóvenes talentos.

3.2 CONTEXTO NACIONAL.

A nivel nacional también encontramos diferentes espacios donde incentiva a la práctica de los deportes urbanos y por supuesto, d la cultura urbana en las diferentes ciudades.

Medellín Urbana Fest (Medellín)

- Tipo: Festival urbano gratuito
- Actividades: Freestyle, breakdance, dancehall, grafiti en vivo, diseño gráfico

• **Importancia:** Promueve la visibilidad del talento juvenil y la expansión de espacios culturales. Organizado por la Alcaldía de Medellín en barrios populares como la Comuna 13.

Hip Hop al Parque (Bogotá)

- **Tipo:** Festival gratuito, al aire libre
- **Actividades:** Hip hop, DJs, breakdance, grafiti, streetdance
- **Importancia:** Evento emblemático de la ciudad y uno de los más grandes de América Latina en su género. Promueve cultura ciudadana, transformación social y expresión juvenil.

Viva el Planeta (Bogotá)

- **Tipo:** Festival musical-territorial con enfoque ambiental
- **Actividades:** Ska, rock, reggae, talleres ambientales, skate, parkour, BMX, roller derby, bikepolo
- **Importancia:** Combina música, arte urbano y activismo ecológico. Es una plataforma para el arte con conciencia ambiental y juvenil

3.3 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Este Proyecto de Acuerdo se alinea de manera concreta con el siguientes Objetivo de Desarrollo Sostenible



Promoción de la Actividad Física: Los deportes urbanos fomentan estilos de vida activos, reduciendo el sedentarismo, especialmente entre jóvenes.

Bienestar Mental: La práctica libre en espacios urbanos favorece la salud emocional y fortalece la autoestima y la resiliencia.

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES



Reapropiación del Espacio Público: Bogotá ha venido adaptando plazas, parques y ciclovías para deportes urbanos, lo que dinamiza zonas abandonadas o inseguras.

Inclusión Social: Estos deportes promueven la participación de jóvenes de sectores vulnerables, reduciendo la marginalidad.

10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES



Acceso Libre y Gratuito: No requieren grandes recursos económicos ni membresías en clubes, lo que democratiza el acceso al deporte.

Visibilidad de Comunidades Diversas: Jóvenes afrocolombianos, indígenas, migrantes y LGBTIQ+ encuentran espacios de expresión e integración

4 EDUCACIÓN DE CALIDAD



Educación No Formal: Muchos colectivos enseñan de manera autogestionada, promoviendo valores como disciplina, respeto, autocuidado y trabajo en equipo.

Programas de la Secretaría de Educación y el IDRD han integrado estos deportes en actividades extracurriculares.



Movilidad Sostenible: Muchos practicantes usan bicicletas, patinetas o patines como medios de transporte diario.

Conciencia Ambiental: Algunas comunidades deportivas promueven jornadas de limpieza y apropiación ecológica de espacios urbanos.

3.4 IMPORTANCIA DE LOS DEPORTES URBANOS

La promoción de las expresiones culturales y deportivas urbanas representa una oportunidad estratégica para fortalecer la inclusión social, la participación juvenil y la transformación positiva del espacio público en Bogotá. Estas manifestaciones, al integrar arte, deporte, cultura y comunidad, se consolidan como herramientas poderosas para construir tejido social, prevenir violencias, dinamizar la economía creativa y fomentar la identidad colectiva de las nuevas generaciones.

A través del impulso institucional de festivales y eventos multidisciplinarios que reconozcan y potencien estas prácticas, la ciudad avanza hacia una política pública más incluyente, contemporánea y conectada con las realidades juveniles. La experiencia nacional e internacional demuestra que estos espacios no solo promueven la expresión ciudadana y la convivencia, sino que también generan oportunidades de formación, emprendimiento y profesionalización del talento emergente.

3.5 FINALIDADES DEL PROYECTO DE ACUERDO

Este proyecto de acuerdo contempla dentro de su relevancia ciertas finalidades que vale la pena nombrar:

1. Visibilizar y fortalecer las expresiones culturales y deportivas urbanas
2. Promover la convivencia, el respeto por la diversidad y la cultura ciudadana a través de prácticas creativas y recreativas
3. Apoyar la circulación y visibilización del talento juvenil en diversas disciplinas urbanas.
4. Promover la participación (toda la comunidad) adolescente y jóvenes como actores creativos y transformadores del espacio público.

- 5. Estimular la apropiación cultural del territorio, la convivencia y la construcción de identidad en sus disciplinas (entornos)
- 6. Fomentar la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en actividades culturales y deportivas urbanas.
- 7. Resignificar el espacio público como escenario para la expresión ciudadana y la construcción de tejido social.

3.6 PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL “BOGOTÁ CAMINA SEGURA”

Es así como, el presente proyecto de acuerdo se encuentra engranado con las finalidades, proyectos, enfoques y atributos del presente Plan de Desarrollo Distrital permitiendo una articulación entre la necesidad evidenciada y expuesta con los programas a ejecutar por la Administración.

4. MARCO JURÍDICO

4.1 MARCO CONSTITUCIONAL, LEGAL Y NORMATIVO

CONSTITUCIONALIDAD

Artículo 1	Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general
Artículo 5	El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad
Artículo 13	El Estado deberá proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.
Artículo 29	Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la

	educación inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas.
Artículo 41	Obligaciones del Estado. El Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá: (...)
Artículo 42	<p>La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.</p> <p>El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable.</p> <p>La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.</p> <p>Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes.</p> <p>Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley.</p> <p>Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes.</p> <p>La Ley reglamentará la progeneritura responsable.</p> <p>La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos.</p> <p>Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil.</p> <p>Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley.</p> <p>Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil.</p> <p>También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley.</p> <p>La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes.</p>
Artículo 43	<p>La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.</p> <p>El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.</p>
Artículo 44	Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual,

	explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia
Artículo 54	Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.”

LEGAL

NORMATIVA NACIONAL	APLICACIÓN
Ley 181 de 1995	Reglamenta el fomento del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre
Ley 2210 de 2022	Regula la profesión de entrenador deportivo, incluyendo la elaboración de planes de entrenamiento, formación de talentos y gestión deportiva
Ley 2023 de 2020	Se crea la tasa pro deporte y recreación
Ley 2369 de 2024	Se crean los Centros de Deporte y Recreación - Cubos y el algoritmo de detección de talentos deportivos - estrella, se asignan funciones al sistema único de información del deporte

NORMATIVIDAD DISTRITAL

Acuerdo 25 de 1999	Busca garantizar los derechos al deporte, la recreación y el disfrute de parques y escenarios deportivo
Acuerdo 107 de 2003	Establece el Sistema Distrital del Deporte y sus objetivos, incluyendo la promoción del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre
Acuerdo 869 de 2023	El IDRD incluirá deportes olímpicos, paralímpicos, nacionales y para-nacionales, así como aquellos con ligas reconocidas en el Distrito.
Acuerdo 927 de 2024	Adopta el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024-2028, que incluye la identificación de talentos deportivos y la oferta del IDRD

5. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ DC

Este Concejo es competente para tramitar la presente iniciativa de conformidad con las siguientes normas:

➤ **Constitución Política de Colombia.**

- **Artículo 313.** Corresponde a los concejos:

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.

➤ **Decreto Ley 1421 de 1993. Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá.**

- **Artículo 12°.** Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

6. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 “En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que aclarar que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación, en la medida en que el presupuesto asignado para el desarrollo del presente proyecto de acuerdo fue planteado dentro del marco fiscal del Plan de Desarrollo Distrital vigente.

Es relevante mencionar, para el caso en concreto que, la Corte Constitucional en Sentencia C-911 de 2007, puntualizó que el impacto fiscal de las normas no puede convertirse en obstáculo para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa, afirmando:

“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside

en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo”.

“(…) Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda”.

Así las cosas, el Artículo 7 de la Ley 819 de 2003 establece la obligatoriedad de analizar el impacto fiscal de las normas en cuanto a los gastos adicionales o reducción de los ingresos correspondientes a la entidad territorial en la cual se apliquen.

El presente Proyecto de Acuerdo no incluye en su articulado ninguna disposición que pueda generar gastos adicionales a los presupuestados para el cumplimiento de los fines de las entidades distritales y puede ser desarrollado en las funciones operativas propias de las entidades distritales, por lo que no genera impacto fiscal.

En el mismo sentido, tampoco tiene incidencia en la reducción de los ingresos distritales.

Cordialmente



ANDRÉS DARÍO ONZAGA NIÑO
Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

PROYECTO DE ACUERDO NO 754 DE 2025**PRIMER DEBATE****“Por medio del cual se fomenta la práctica de los Deportes Urbanos y se crea el festival de Deportes Urbanos “DC UNDERGROUND” en el Distrito Capital”.**

El Concejo de Bogotá D.C., en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las previstas en el Decreto-Ley 1421 de 1993, Artículo 12, numeral 1

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto fomentar la práctica de los Deportes Urbanos en Bogotá y así mismo, la creación del festival de Deportes Urbanos en la ciudad.

ARTÍCULO 2. FINALIDADES. Las finalidades del presente Acuerdo serán:

1. Visibilizar y fortalecer las expresiones culturales y deportivas urbanas
2. Promover la convivencia, el respeto por la diversidad y la cultura ciudadana a través de prácticas creativas y recreativas
3. Apoyar la circulación y visibilización del talento juvenil en diversas disciplinas urbanas.
4. Promover la participación (toda la comunidad) adolescente y jóvenes como actores creativos y transformadores del espacio público.
5. Estimular la apropiación cultural del territorio, la convivencia y la construcción de identidad en sus disciplinas (entornos)
6. Fomentar la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en actividades culturales y deportivas urbanas.
7. Resignificar el espacio público como escenario para la expresión ciudadana y la construcción de tejido social.

ARTÍCULO 3. La Administración Distrital, por intermedio de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDR; dentro del marco de sus competencias, realizará anualmente festival “DC UNDERGROUND”

ARTÍCULO 4.. La programación y difusión del evento recreodeportivo se dará a conocer a través de los canales institucionales que se disponga, acorde a la disponibilidad de los escenarios y equipamientos para tal fin.

ARTÍCULO 5. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá a los ____ días del mes de _____ de dos mil veinticuatro (2025).

PROYECTO DE ACUERDO NO 755 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL EXPEDIENTE DIGITAL DE SEGUIMIENTO Y CONSULTA DE INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL”.****II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****1. OBJETO DEL PROYECTO**

El objetivo principal del presente Proyecto de Acuerdo es la creación de un expediente digital de seguimiento y consulta de información de los estudiantes con discapacidad en el Distrito Capital

2. JUSTIFICACIÓN

Bogotá alberga una población significativa de 458.088 personas con discapacidad (PcD), lo que representa el 6.41% del total de sus habitantes, con una notable concentración en los estratos socioeconómicos más bajos. La capital colombiana ha adoptado un marco legal y político robusto, destacando la Ley 1618 de 2013 y la Ley 1996 de 2019, que presumen la capacidad legal de las PcD, y la Política Pública de Discapacidad para Bogotá 2023-2034 (PPDD), con una inversión de 2.2 billones de pesos. Esta política busca garantizar el goce efectivo de derechos y la inclusión social.

A pesar de los avances normativos y la inversión, la implementación enfrenta desafíos sustanciales. En accesibilidad, persisten barreras significativas en la infraestructura urbana, el transporte público (TransMilenio y SITP), y la accesibilidad digital, lo que limita la autonomía de las PcD. En salud, si bien la cobertura de afiliación es alta, se observan obstáculos en el acceso a citas especializadas y una falta de ajustes razonables en la atención. La inclusión educativa avanza con programas específicos, pero aún enfrenta barreras pedagógicas y de recursos. En el ámbito laboral, solo el 30% de las PcD participan en el mercado formal, evidenciando prejuicios y falta de oportunidades.

Los principales hallazgos revelan una brecha entre la intención política y la realidad de la implementación, con bajas tasas de ejecución en algunas metas del Plan de Desarrollo Distrital. Las barreras actitudinales, la falta de estandarización en la infraestructura y la

brecha digital son obstáculos recurrentes. Las recomendaciones clave incluyen fortalecer la aplicación de políticas existentes, mejorar la accesibilidad integral en todos los entornos, fomentar activamente la inclusión laboral y educativa con incentivos y capacitación, y potenciar las redes de apoyo social y la sensibilización ciudadana. La situación de la discapacidad en Bogotá es un reflejo de un compromiso creciente, pero también de la necesidad imperante de transformar las intenciones en realidades tangibles para una inclusión plena y efectiva.

La capital colombiana, Bogotá, se ha consolidado como un centro urbano de gran dinamismo y diversidad. Dentro de su vasta población, las personas con discapacidad (PcD) constituyen un grupo demográfico significativo, cuya situación es un indicador clave del nivel de inclusión y equidad social de la ciudad. Comprender la realidad de las PcD en Bogotá implica analizar no solo las cifras, sino también el marco normativo que las ampara, los servicios disponibles y, fundamentalmente, las barreras que aún persisten en su camino hacia una participación plena en la sociedad.

Para los propósitos de la política pública en Bogotá, la discapacidad no se concibe como un atributo inherente a la persona, sino como el resultado de una interacción dinámica entre el individuo y los diversos entornos en los que se desenvuelve: políticos, sociales, económicos, ambientales y culturales. En estos entornos, las personas pueden encontrar limitaciones o barreras que impiden su desempeño y participación en las actividades cotidianas. Esta perspectiva se alinea con el modelo social de la discapacidad, que sostiene que las dificultades experimentadas por las PcD son, en gran medida, creadas por el contexto y las estructuras sociales, y no por las deficiencias individuales.

La adopción de este enfoque social por parte de la política distrital representa un cambio fundamental. Al desplazar el foco de la "deficiencia" individual a las "barreras" del entorno, la responsabilidad de la inclusión recae en la sociedad en su conjunto, que debe modificar sus estructuras para permitir la participación plena de todas las personas. Este entendimiento es crucial porque moldea todas las estrategias de intervención y las políticas, orientándolas hacia la eliminación de obstáculos sistémicos en lugar de centrarse únicamente en la rehabilitación clínica del individuo. La situación de la discapacidad en Bogotá, por lo tanto, se evalúa a través de la capacidad de la ciudad para remover estas barreras y crear entornos verdaderamente accesibles e inclusivos.

Generalidades de la Discapacidad.

La definición de la discapacidad es compleja, controversial y cambiante según el enfoque y el momento histórico en que se enmarca. Sin embargo, a partir de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, en nuestro país se considera que:

“La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, preámbulo literal.

El enfoque “biopsicosocial”, define la discapacidad, desde el punto de vista relacional, como el resultado de interacciones complejas entre las limitaciones funcionales (físicas, intelectuales o mentales) de la persona y del ambiente social y físico que representan las circunstancias en las que vive esa persona...incluye deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, denotando los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una condición de salud) y la de los factores contextuales individuales (factores ambientales y personales). CIF, Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, desarrollada por la Organización Mundial de la Salud OMS, Ginebra, Suiza 2001.

Clasific

ación de la Discapacidad en Colombia.

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad. Artículo 1, párrafo 2.

Categorías de Discapacidad en Colombia.

- **Categorías de Discapacidad**

En el marco del presente Proyecto de Acuerdo, es necesario también clasificar los tipos de discapacidad que hoy en día mundialmente han sido reconocidos y que por medio de la Resolución 113 de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, han sido adoptadas por el Gobierno Nacional.⁴²

- 1. Discapacidad física:** consiste en deficiencias corporales funcionales a nivel del musculo esquelético, neurológico, tegumentario de origen congénito o adquirido, pérdida o ausencia de alguna parte de su cuerpo, o presencia de desórdenes del movimiento corporal⁴³.

⁴² Resolución 113 de 2020. “Por la cual se dictan disposiciones en relación con la certificación de discapacidad y el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad”.

Ministerio de Salud y Protección Social. 31-01-2020.

⁴³ Ibidem.

2. **Discapacidad auditiva:** se encuentran personas que presenten en forma permanente deficiencias en las funciones sensoriales relacionadas con la percepción de los sonidos y la discriminación de su localización. Consiste en el deterioro o falta de la función sensorial de oír (sordera parcial o total, dificultades para hablar)⁴⁴
3. **Discapacidad visual:** consiste en el deterioro o falta de la función sensorial de ver (visión disminuida, ceguera). Se incluye a aquellas personas que presentan deficiencias en percibir la luz, forma, tamaño o color de los objetos.
4. **Sordoceguera:** *“Es una discapacidad única que resulta de la combinación de una deficiencia visual y una deficiencia auditiva, que genera en las personas problemas de comunicación, orientación, movilidad y el acceso a la información. “Resolución 113 de 2020.*
5. **Discapacidad Intelectual:** es aquella que se presenta cuando las personas presentan dificultades para el aprendizaje, la comprensión y la adaptación del entorno.
6. **Discapacidad psicosocial (mental):** consiste en alteraciones o deficiencias en las funciones mentales, específicamente en el pensar, sentir y relacionarse.
7. **Discapacidad Múltiple:** presencia de dos o más deficiencias asociadas de orden físico, sensorial, mental o intelectual, las cuales afectan significativamente el nivel de desarrollo, las posibilidades funcionales, la comunicación, la interacción social y el aprendizaje.

3. PANORAMA DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN BOGOTÁ

En Bogotá, según datos de la Secretaría de Educación Distrital con fecha de corte de 31 de marzo de 2025 se tienen 21.877 estudiantes con algún tipo de discapacidad matriculados en el Distrito.

La atención educativa a estudiantes con discapacidad no obedece a un “proyecto o programa” sino a un ejercicio de derechos, en el marco del Decreto 1421 de 2017, que le apuesta al acceso, a la permanencia, a

⁴⁴ Ibidem.

la participación y al progreso de las y los estudiantes con discapacidad, cursando las trayectorias educativas completas del sistema educativo, a partir de la implementación de políticas, prácticas y culturas inclusivas.⁴⁵

Adicionalmente, en el marco del actual Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá camina segura”, la administración distrital ha establecido un compromiso firme con la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad. Este compromiso se manifiesta en la implementación de estrategias intersectoriales que buscan garantizar el acceso, permanencia y calidad educativa para esta población.

Entre las acciones destacadas se encuentra la adaptación de servicios y estrategias prioritarias para la atención integral de personas con discapacidad. Además, se promueve la articulación entre las entidades para fortalecer la atención diferencial, asegurando que las instituciones educativas cuenten con las adecuaciones necesarias en infraestructura, recursos pedagógicos y formación docente, permitiendo así un entorno inclusivo y equitativo para todos los estudiantes.

Estas acciones están alineadas con los principios de equidad y justicia social que orientan el Plan, reafirmando el compromiso de Bogotá con la garantía de derechos y la construcción de una ciudad más inclusiva.

4. ORIENTACIONES PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

Ahora bien, la SED ha dado pasos importantes en cuanto al desarrollo de componentes técnicos y pedagógicos, que han sido dirigidos a la comunidad educativa; en ese sentido, se cuentan con orientaciones para fortalecer la atención inclusiva de estudiantes con discapacidad.

- Ruta de atención educativa a estudiantes con trastorno del espectro autista (TEA).
- Estrategias pedagógicas para la atención de estudiantes con trastorno del espectro autista (TEA).
- Lineamiento para la atención educativa a la población con discapacidad matriculada en el sistema educativo de Bogotá.
- Ruta para la atención educativa a la población con discapacidad matriculada en el sistema educativo de Bogotá.
- Ruta para la atención educativa a jóvenes y adultos con discapacidad intelectual en el Distrito.
- Cartografía de las aulas de apoyo pedagógico que atienden estudiantes con discapacidad de la ciudad de Bogotá.
- Ruta para la transformación de las aulas de apoyo pedagógico hacia las aulas de fortalecimiento para el tránsito educativo en el marco de la inclusión y la equidad en la educación.

5.1 SISTEMA DE APOYOS

De conformidad con el Decreto 1421 de 2017, por parte de las entidades competentes se ha establecido un sistema de apoyos integrales donde se pretende facilitar el acceso, la permanencia y la participación de los estudiantes con discapacidad.

Este sistema se conforma de apoyos pedagógicos, apoyos comunicativos (intérpretes de lengua de señas colombiana, modelos lingüísticos y mediadores pedagógicos; así como también de auxiliares de enfermería.

⁴⁵ Respuesta Derecho de Petición SED S-2025-23782

DOCENTES DE APOYO	AUXILIARES DE ENFERMERÍA	MEDIADORES PEDAGÓGICOS	INTÉRPRETES DE LENGUA DE SEÑAS	MODELOS LINGÜÍSTICOS	GUÍA INTÉRPRETES
1.123	203	145	70	12	2

En total y a la fecha según información oficial de la entidad, se tienen 1.555 apoyos.

5.2 IMPORTANCIA Y RELEVANCIA DEL PROYECTO DE ACUERDO.

Crear un expediente digital de seguimiento y consulta para estudiantes con discapacidad en Bogotá tiene múltiples beneficios esenciales, alineados con la normativa nacional y local:

1. Cumplimiento legal y normativo

El Decreto 1421 de 2017 y la Ley 1618 de 2013 exigen la creación de una historia escolar actualizada para cada estudiante con discapacidad

Además, el Acuerdo 936 de 2024 del Concejo de Bogotá establece la implementación de sistemas de información longitudinal para registrar datos cuantitativos y cualitativos sobre estudiantes con discapacidad, sus familias, barreras de acceso y medidas adoptadas. Un expediente digital facilita el cumplimiento de estas obligaciones y permite auditorías y mejora continua.

2. Mejora en la atención educativa personalizada

Con un expediente digital se puede consolidar:

Valoraciones pedagógicas y de salud, intereses, metas de aprendizaje, ajustes curriculares, apoyos requeridos y compromiso familiar.

Seguimiento sistemático del PIAR (Plan Individual de Apoyos y Ajustes Razonables), garantizando su implementación y revisión gradual.

3. Coordinación eficiente entre actores educativos

El sistema digital permite el flujo de información entre:

Instituciones educativas, Secretaría de Educación, sector salud, familia y personal de apoyo.

Seguimiento a barreras, atenciones de convivencia, discriminación o acoso, y las medidas tomadas.

4. Análisis y respuesta basada en datos

Al centralizar la información —identificación de barreras, avances académicos, audiencia familiar— se generan datos que permiten:

Evaluaciones de impacto a nivel institucional o distrital.

Identificación de patrones comunes, orientación de políticas o priorización de recursos en función de necesidades reales

5. Inclusión educativa efectiva

La educación inclusiva busca eliminar barreras y adaptar el sistema educativo a la diversidad individual.

El expediente digital es una herramienta clave para asegurar:

Que cada estudiante reciba los ajustes y mediadores necesarios (intérpretes, mediadores pedagógicos, tecnología asistida, etc.)

6. Continuidad institucional y ambiental

Garantiza que la información no se pierda durante traslados o cambios de institución.

Automatiza la actualización y reduce el uso de papel, alineándose a prácticas sostenibles en la gestión educativa

Ahora bien, un expediente digital es una herramienta potente para asegurar que los estudiantes con discapacidad en Bogotá reciban atención educativa adecuada, continua, coordinada y evaluable. Permite que los sistemas respondan con equidad, pertinencia e inclusión real, transformando datos en mejoras concretas.

6.MARCO JURÍDICO

6.1 DERECHO COMPARADO

NORMA	AÑO	FUNDAMENTO
-------	-----	------------

Declaración Universal de los Derechos Humanos – ONU	1948	<p>La Carta de los Derechos humanos comprende la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y sus dos Protocolos facultativos.</p> <p>En virtud de la Declaración Universal de los Derechos humanos, el ideal del ser humanos es ser libre, y gozar de sus libertades civiles y políticas para ser liberado de la miseria, Dichos derechos no pueden ser realizados sino son utilizados como condiciones que permitan a cada persona de gozar de estos derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, civiles y culturales.</p>
Convención sobre los Derechos del Niño – ONU	1989	<p>Aprobada por el Congreso de la República en la Ley 12 de 1991. Ratificada el 28 de enero de 1991. Promulgada por el Decreto 94 de 1992, 'por el cual se promulgan la Convención sobre los Derechos del Niño y la reserva formulada por Colombia respecto de su artículo 38, numerales, 2o. y 3o'. En vigencia para Colombia desde el 28 de febrero de 1991.</p>
Declaración de Cartagena de indias	1992	<p>Políticas integrales para las personas con discapacidad en el área iberoamericana.</p>
Convención Interamericana para la Eliminación de todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad - OEA	1999	<p>Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad. Establece que la discriminación se manifiesta con base a cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga como efecto impedir a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Resalta que la distinción solo se justifica si está al servicio de una mejor y mayor inclusión. Aprobada por el Congreso de la República en la Ley 762 de</p>

		2002. En vigencia para Colombia a partir del 11 de marzo de 2004
Convención de las personas con discapacidad ONU	2006	<p>El propósito de la convención es promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto los derechos humanos por las personas con discapacidad. Cubre una serie de ámbitos fundamentales tales como la accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación en la vida política, y la igualdad y la no discriminación. La convención marca un cambio en el concepto de discapacidad, pasando de una preocupación en materia de bienestar social a una cuestión de derechos humanos, que reconoce que las barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad.</p> <p>En su artículo 23 del numeral 1, se reconoce que los niños y niñas con discapacidad “deberán disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación del niño en la comunidad”.</p> <p>En el artículo 24 del numeral 1 se reconoce el derecho que los niños y niñas con discapacidad tienen al “más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud.”</p> <p>En vigencia para Colombia a partir del 10 de junio de 2011.</p>

5.2 MARCO CONSTITUCIONAL, LEGAL Y NORMATIVO

CONSTITUCIONALIDAD

Artículo 13	El Estado deberá proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.
Artículo 47	El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.
Artículo 54	Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.”
Artículo 68	... “La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.”

LEGAL

NORMATIVA NACIONAL	DISTRITAL Y	APLICACIÓN
Ley 361 de 1997 Por el cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones		Se lleva a cabo la inclusión a personas con discapacidad, familias, cuidadoras y cuidadores en el sector educativo, laboral.
Ley 1145 de 2007 Por medio del cual se organiza el Sistema Nacional de discapacidad y se dictan otras disposiciones		Es la norma sobre la cual se estableció el lineamiento nacional para el funcionamiento del sistema distrital de discapacidad y también es la base para el desarrollo del proceso de elecciones de representantes distritales y locales de discapacidad en la ciudad.
Ley 1346 de 2009 Por medio del cual se aprueba la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad		La Convención sobre los derechos de las PcD, es la norma básica sobre la cual fue establecida la Política Pública de discapacidad para el distrito, por lo tanto, todas las acciones que han contenido los planes de acción distritales de discapacidad contienen los lineamientos de la convención
Ley 1306 de 2009 Por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental		Se busca la protección e inclusión social de toda persona natural con discapacidad mental o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad.

y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipado	
Ley 1618 de 2013 Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.	A partir de la implementación del Modelo Integral de Salud, los principios del respeto a la dignidad, la autonomía individual, la participación e inclusión, entre otros, están dispuestos en los lineamientos técnicos y políticas de atención en salud que establece los procesos de aseguramiento en salud, prestación y provisión de servicios de salud y rehabilitación y acciones colectivas de salud pública.
Ley Estatutaria 1752 de 2015 Por medio de la cual se modifica la Ley 1482 de 2011, para sancionar penalmente la discriminación contra las personas con discapacidad.	Esta ley tiene por objeto sancionar penalmente actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación.
Ley 1996 de 2019 “Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad	Se ha llevado a cabo la elección de representantes locales y distritales de discapacidad, en donde las personas con discapacidad pueden representar sin importarla condición o el sector al que pertenezcan
Decreto 1421 de 2017	Se reglamenta la ruta, el esquema y las condiciones para la atención educativa a la población con discapacidad en los niveles de preescolar, básica y media.

NORMATIVIDAD DISTRITAL

Acuerdo 234 de 2006 “por medio del cual se establecen las ferias locales y distritales, donde se den a conocer las manifestaciones y expresiones artísticas de la población de personas en condición de discapacidad	A través de la gala de Exaltación y reconocimiento de las PcD sus familias y cuidadoras se reconoce las expresiones artísticas de los colectivos de PcD entregando galardones definidos para este tipo de actividades.
Acuerdo 245 de 2006 “Por medio del cual se institucionaliza el mes de las personas en condición de discapacidad y se dictan otras disposiciones	Desde el Sistema Distrital de Discapacidad se viene desarrollando el reconocimiento, movilización y visibilización de la población con discapacidad, la SDS ha desarrollado acciones de promoción de la salud, así como espacios comunitarios. Así mismo en octubre de cada año, las entidades distritales realizan actividades que buscan

	visibilizar a la población con discapacidad, sus familias y cuidadores.
Acuerdo 447 de 2010 Por medio del cual se implementa la formación laboral a las personas en condiciones de discapacidad y/ sus familias	Implementación de las rutas diferenciales de empleabilidad para PcD, así como la intermediación laboral.
Acuerdo 505 de 2012 Por medio del cual se modifica el Acuerdo 137 de 2004 "Por medio del cual se establece el Sistema Distrital de Atención Integral de personas en condición de discapacidad en el Distrito Capital y se modifica del Acuerdo 022 de 1999	Refiere al acompañamiento que hacen las entidades distritales al sistema distrital de discapacidad, dando cumplimiento a las instancias de unidad técnica y unidades operativas (Consejo Distrital, Consejos Locales de Discapacidad)
Acuerdo 561 de 2014 Por medio del cual se establecen los lineamientos para verificar la incorporación de la política pública de discapacidad en el proyecto del plan de desarrollo distrital de cada gobierno y su posterior seguimiento.	Corresponde a la gestión realizada desde el ejercicio de delegación en las instancias del Sistema Distrital de Discapacidad. De esta manera se da garantía de recursos y sostenibilidad de programas para la atención en salud, rehabilitación funcional, inclusión de la población con discapacidad, sus familias y cuidadores en los programas de inversión sectorial
Acuerdo 936 de 2024	Proponer herramientas que faciliten la representación y defensa de los derechos de los y las estudiantes con discapacidad, sus familiares y sus personas cuidadoras.
Decreto 089 de 2023 – Política Pública de Distrital de Discapacidad	Se presenta como una "construcción colectiva" que involucra a la Administración Distrital y a la población con discapacidad, sus familias y cuidadores.

6. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ DC

Este Concejo es competente para tramitar la presente iniciativa de conformidad con las siguientes normas:

➤ **Constitución Política de Colombia.**

- **Artículo 313.** Corresponde a los concejos:

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.

➤ **Decreto Ley 1421 de 1993. Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá.**

- **Artículo 12°.** Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

7. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 “En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que aclarar que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación, en la medida en que el presupuesto asignado para el desarrollo del presente proyecto de acuerdo fue planteado dentro del marco fiscal del Plan de Desarrollo Distrital vigente.

Es relevante mencionar, para el caso en concreto que, la Corte Constitucional en Sentencia C-911 de 2007, puntualizó que el impacto fiscal de las normas no puede convertirse en obstáculo para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa, afirmando:

“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo”.

“(…) Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda”.

Así las cosas, el Artículo 7 de la Ley 819 de 2003 establece la obligatoriedad de analizar el impacto fiscal de las normas en cuanto a los gastos adicionales o reducción de los ingresos correspondientes a la entidad territorial en la cual se apliquen.

El presente Proyecto de Acuerdo no incluye en su articulado ninguna disposición que pueda generar gastos adicionales a los presupuestados para el cumplimiento de los fines de las entidades distritales y puede ser

desarrollado en las funciones operativas propias de las entidades distritales, por lo que no genera impacto fiscal.

En el mismo sentido, tampoco tiene incidencia en la reducción de los ingresos distritales.

ORIGINAL FIRMADO

ANDRÉS DARÍO ONZAGA NIÑO

Concejal de Bogotá

Partido Alianza Verde

PROYECTO DE ACUERDO NO 755 DE 2025**PRIMER DEBATE****“Por medio del cual se crea el expediente digital de seguimiento y consulta de información de los estudiantes con Discapacidad en el Distrito Capital”.**

El Concejo de Bogotá D.C., en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las previstas en el Decreto- Ley 1421 de 1993, Artículo 12, numeral 1

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. OBJETO: El presente Acuerdo tiene por la creación de un expediente digital de seguimiento y consulta de información de los estudiantes con discapacidad en el Distrito Capital

ARTÍCULO 2. La Administración Distrital, por medio de la Secretaría de Educación Distrital, implementará el expediente digital de seguimiento y consulta de información de los estudiantes con discapacidad en el Distrito Capital, con el propósito de tener una historia escolar actualizada.

ARTÍCULO 3: La Administración contará con doce (12) meses para la creación del expediente digital de seguimiento y consulta de información de los estudiantes con discapacidad en el Distrito Capital.

ARTÍCULO 4. Vigencia: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá a los ____ días del mes de _____ de dos mil veinticinco (2025).

PROYECTO DE ACUERDO NO 756 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS BAJO LOS CUALES SE CREARÁN E IMPLEMENTARÁN LAS CASAS DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL PYBA Y LAS UNIDADES MÓVILES DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA ANIMALES EN BOGOTÁ”

I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

El presente proyecto de acuerdo tiene como objeto establecer los lineamientos para la creación e implementación de Casas de Protección y Bienestar Animal PYBA en el Distrito Capital y sus Unidades Móviles de Atención Prioritaria para Animales

II. MARCO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente proyecto de acuerdo se registrá por el siguiente marco constitucional y legal:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA	<p>Artículo 1 de la Constitución Política: Establece a Colombia como un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana y la solidaridad.</p> <p>Artículo 2: Define como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan.</p> <p>Artículos 79: Garantiza que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. El estado garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.</p> <p>Artículos 80: El Esta planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Asimismo, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.</p> <p>Artículo 95 (Numeral 8): Este establece que es deber de todas las personas proteger los recursos naturales y velar por la conservación del ambiente sano.</p> <p>Artículo 366: Establece el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida como finalidades sociales del Estado.</p>
MARCO LEGAL NACIONAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL.	<p>Ley 84 de 1989: Establece las normas para prevenir el sufrimiento innecesario, promueve un trato digno y regula conductas permitidas y prohibidas hacia los animales.</p>

	<p>Ley 1774 de 2016:</p> <p>Artículo 1: Los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos.</p> <p>Artículo 2: Modifica el artículo 655 del código civil, donde reconoce la calidad de seres sintientes a los animales.</p> <p>Artículo 3: Plantea los principios de protección, bienestar animal, solidaridad social. Estables sanciones penales por maltrato animal.</p> <p>Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía: Regula la tenencia responsable y prohíbe el maltrato, el abandono y la comercialización ilegal de animales.</p> <p>Ley 2054 de 2020: Crea el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (SINAPBA), fortaleciendo políticas públicas con enfoque territorial.</p> <p>Ley 99 de 1993: Crea el Ministerio de Ambiente e incluye la fauna dentro del patrimonio natural protegido.</p>
MARCO LEGAL DISTRITAL	<p>Acuerdo 801 de 2021: <i>“Por el cual se prohíbe la comercialización de animales vivos en plazas de mercado, se regula su comercialización en otros establecimientos y promueve la protección y bienestar animal”</i></p> <p>Decreto 242 de 2015:</p> <p>Artículo 1: <i>“Adóptese la política Publica Distrital de Protección y Bienes Animal 2014-2038, de acuerdo con lo establecido en este decreto.”</i> Este instrumento de planeación que orienta el desarrollo de las acciones a implementar en el Distrito Capital en procura de otorgar a los animales escenarios de vida óptimos de acuerdo con sus necesidades y requerimientos.</p> <p>Este articulo tiene como finalidad que los animales que habitan en el territorio distrital tengan mejores condiciones de vida, a partir de la apropiación de una cultura ciudadana e institucional comprometida con la protección, la adquisición y tenencia responsable de animales de compañía, así como el bienestar animal.</p> <p>Las disposiciones de la Política Pública se aplicarán en el territorio urbano y rural de Bogotá D.C y su implementación son responsables las entidades, órganos y organismos que hacen parte de los sectores que integran la estructura de la Administración Distrital.</p>

	<p>Tiene como principios el Bienestar y Protección Animal, el trato a los animales debe basarse en la ética, compasión, justicia y especial cuidado.</p> <p>El Gobierno Distrital considerará a los animales sujetos de protección especial y buscará erradicar cualquier forma de maltrato, violencia o trato degradante.</p> <p>Decreto 588 de 2023: Por medio del cual se regula y fortalece el Sistema Unificado Distrital de Inspección Vigilancia y Control (SUVIC) de Bogotá, D.C. Este sistema es el conjunto de normas, procedimientos, instrumentos, herramientas, actividades y actores que se organizan, en el marco de las competencias de las entidades que lo conforman.</p> <p>Resolución 163 de 2025 (IDPYBA- IDPAC): Por medio de la cual se reglamenta la elección de cuatro delegados o representantes por las organizaciones, fundaciones, colectivos o grupos que tengan relación con el sector de la protección y bienestar animal al Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal y un delegado.</p> <p>Acuerdo Local 002 de 2024 – Localidad de Usme: La alcaldía local de Usme se asegurará que, mediante los servicios de la casa PYBA y las Móvil PYBA. Establece que los animales en condición de vulnerabilidad de la localidad reciban atención prioritaria. Esto incluye, rescate, atención médica, esterilización, rehabilitación y procesos de adopción, así como acciones de educación comunitaria sobre tenencia responsable y prevención del maltrato animal.</p>
--	---

III. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá tiene facultades tanto Constitucionales como legales, dentro de las que se halla el Decreto Ley 1421 de 1996, el cual dispone:

ARTÍCULO 12. Atribuciones. *Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la constitución y la ley:*

1.Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

IV. IMPACTO FISCAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, el presente Proyecto de Acuerdo tiene un impacto fiscal sobre los ingresos tributarios distritales, sin representar cargas sobre el gasto público. Sin embargo, es importante el pronunciamiento de la Secretaría Distrital de Hacienda previo a su discusión con el fin de conocer el respectivo concepto de viabilidad que debe emitir como entidad asesora del Concejo de Bogotá, según lo dispuesto en el artículo 11, literal F del Decreto Distrital 601 de 2014. Esta evaluación deberá incluir las fuentes de financiación y la estimación de los posibles costos derivados del desarrollo del Programa Distrital de Protección y Bienestar Animal.

No obstante, tal como lo advierte la **Sentencia C-911 de 2007** de la Corte Constitucional, el análisis del impacto fiscal no puede convertirse en una barrera para el ejercicio legítimo de la función legislativa por parte de las corporaciones públicas.

Adicionalmente, el presente proyecto encuentra sustento en el **Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027**, adoptado mediante el **Acuerdo 927 de 2024**, en particular en el **Programa 15: “Bogotá protege todas las formas de vida”**, que establece el deber del Distrito Capital de garantizar la protección, atención veterinaria, prevención del maltrato y condiciones apropiadas de bienestar para la fauna doméstica y silvestre urbana. En dicho programa se señala:

“Se trabajará por convertir a Bogotá en la ciudad amiga de todos los animales, tanto domésticos, como silvestres y sinantrópicas, materializando el enfoque de bien-estar animal mediante una oferta de servicios de atención médico veterinaria para los más vulnerables, de esterilización de perros y gatos como una medida ética de control poblacional y amplificando la capacidad de respuesta para salvar a los que son víctimas de maltrato y abandono.”

Asimismo, el Plan de desarrollo establece que los Fondos de Desarrollo Local deben realizar inversiones complementarias para la protección animal, y fija metas institucionales claras, como la optimización de servicios de atención integral a animales, la sensibilización de más de 50 000 personas y el fortalecimiento del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). Estas disposiciones demuestran la existencia de un marco programático, técnico y financiero previamente aprobado, que respalda la ejecución progresiva del Programa Distrital de Protección y Bienestar Animal propuesto en este Acuerdo. (**ART 61. ACUERDO 927 DE 2024**)⁴⁶

V. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO

En Bogotá persiste una problemática estructural asociada al maltrato, abandono y desprotección de los animales, especialmente aquellos en condición de calle o sometidos a tratos crueles en espacios públicos y privados. La cual se ha venido acrecentando con un crecimiento desproporcional de la presencia de animales felinos y caninos den la ciudad, pues después de tener una cifra de más un millón doscientos diez mil (1.210.820)⁴⁷ animales entre felinos y caninos en el 2020, a hoy esta cifra se ha duplicado, teniendo una proyección de población para el 2025 de más de tres millones (3.466.628)⁴⁸ de animales. A lo que se aúna que, Según datos del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal IDPYBA, en 2022 se realizaron más de 15.000 atenciones a animales vulnerables y se sensibilizó a cerca de 30.000

⁴⁶ Tomado de: <https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=155699>

⁴⁷ Tomado de: https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/indicadores/vacuna_rabia/

⁴⁸ Tomado de: https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/indicadores/vacuna_rabia/

personas sobre tenencia responsable de animales. Evidenciando de esta manera la magnitud del reto institucional en esta materia (IDPYBA, 2022).⁴⁹

Que, como consecuencia de esta realidad expuesta, el Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027, adoptado mediante el Acuerdo 927 de 2024, contempla en su Programa 15: “Bogotá protege todas las formas de vida”, el desarrollo de acciones interinstitucionales para garantizar el bienestar animal, señalando que:

“Se buscará garantizar el desarrollo de condiciones apropiadas para la coexistencia interespecie, a través del reconocimiento del valor intrínseco de todas las formas de vida, implementando acciones de prevención, atención y protección de la fauna doméstica y las especies sinantrópicas del Distrito Capital; especialmente, la que se halla en situación de vulnerabilidad...” (Acuerdo 927 de 2024, Programa 15).⁵⁰

Programa que ha establecido metas claras como la atención de 70.000 animales, la esterilización de 320.000 perros y gatos y la vinculación de 50.000 personas en acciones educativas durante el cuatrienio, lo cual respalda institucional y presupuestalmente la creación de un Programa Distrital de Protección y Bienestar Animal.

Sin embargo, también es necesario señalar las cifras alarmantes que se han presentado en los últimos años, hallando que desde el 2023 se ha presentado una disminución en la cifra de adopciones. Encontrando que después de haber tenido 638 adopciones en el mencionado año, esta disminuyó a 504 en el 2024 y 90 en el presente año. (Instituto de Protección Animal y Bienestar Anima, 2025)⁵¹. Además de contar con un incremento en el reporte de maltratos en los últimos años, presentándose las siguientes cifras:

CANAL DE ATENCIÓN	2021	2022	2023	2024	2025
Telefónico	931	1.888	2.052	2.165	569
Bogotá te escucha	506	1.192	1.158	2.895	900
Correo electrónico	2.933	1.723	1.952	1.091	202
Presencial	361	377	338	379	102
Línea NUSE- 123	3.325	3.035	2.519	2.436	576
Total	8.056	8.215	8.019	8.966	2.349
Gran total	35.605				

Tomado de: Respuesta del Instituto de Protección y Bienestar Animal con número de radicado 2025BAER0006787

La evidencia empírica lleva a inferir que el fomento de una cultura de respeto por la vida en todas sus formas es fundamental para construir sentido de pertenencia, convivencia pacífica y cohesión social. Por lo que es necesario acrecentar esfuerzo en la política protección animal de la ciudad, reforzando la capacidad institucional de reacción,

⁴⁹ Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA. *Más de 15.000 animales fueron atendidos en 2022.*: <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/ambiente/instituto-de-proteccion-animal-hizo-rendicion-de-cuentas-vigencia-2022>

⁵⁰ Concejo de Bogotá. *Acuerdo 927 de 2024 – Por el cual se adopta el Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027: Bogotá Camina Segura*. Programa 15: “Bogotá protege todas las formas de vida”.

⁵¹ Respuesta del Instituto de Protección y Bienestar Animal con número de radicado 2025BAER0006787

descentralizando servicios fundamentales en las localidades, lo cual se puede realizar a través de las casas PYBA y sus unidades de atención prioritaria.

VI. ALCANCES DE LA INICIATIVA Y DEMÁS CONSIDERACIONES DEL AUTOR

Los alcances de esta iniciativa involucran el fortalecimiento del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y la asignación de responsabilidades coordinadas a las entidades del nivel central y local, todo esto con el objetivo de incrementar la capacidad de la entidad para responder a la demanda actual de problemática que tiene el distrito en términos del bienestar y la protección de los animales en Bogotá. *La propuesta contempla el impulso de Casas PYBA, “como un lugar físico dotados de insumos, equipo e instrumental médico quirúrgico, dispuesto para la prestación de servicios de atención a los animales en estado de abandono, en calle, de hogares de paso, de cuidadoras y cuidadores, de proteccionistas, de rescatistas, de activistas, de refugios sin ánimo de lucro y de familias de estratos 1, 2 y 3, en pobreza extrema o pobreza multidimensional”⁵². Y de sus unidades móviles.*

Desde esta perspectiva, la iniciativa pretende consolidarse como un instrumento eficaz para avanzar hacia una ciudad que reconozca el valor intrínseco de los animales, prevenga las violencias hacia ellos y fortalezca la empatía y la corresponsabilidad ciudadana. Así, la defensa del bienestar animal no se presenta como un asunto secundario, sino como un eje estratégico para el desarrollo humano, sostenible y pacífico de Bogotá.

6.1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE ACUERDO

En el marco de las competencias del Concejo de Bogotá y de conformidad con la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal, el presente Proyecto de Acuerdo tiene como objetivo establecer los lineamientos bajos los cuales se crearán y funcionaran las Casas de Protección y Bienestar Animal “Casa PYBA” y las Unidades móviles de atención prioritaria.

Con la creación de estas se busca fortalecer la política de bienestar y protección animal de la ciudad, así como fomentar una identidad ciudadana basada en la empatía, la corresponsabilidad y el respeto por la vida de otros seres vivos, como principios fundamentales para la sana convivencia en Bogotá. A través de la creación de estas casas y sus unidades móviles se implementarán acciones de cultura ciudadana, educación, atención veterinaria, vigilancia y control, con el fin de generar un sentido de pertenencia, apropiación y corresponsabilidad social frente a los animales como seres sintientes.

En esa medida, se busca avanzar hacia una Bogotá más consciente, compasiva y solidaria, donde el bienestar animal sea parte del proyecto colectivo de ciudad.

6.2. POBLACIÓN OBJETIVO

La implementación del Programa Distrital de Protección y Bienestar Animal (PDPBA) está dirigida a toda la ciudadanía de Bogotá D.C., incluyendo residentes permanentes, población flotante, organizaciones sociales y ambientales, y funcionarios públicos, con el objetivo de generar una transformación cultural orientada al respeto y la empatía hacia los animales como seres sintientes. La población beneficiaria abarca especialmente a niños, niñas y adolescentes, quienes serán impactados por estrategias educativas de sensibilización, así como a comunidades vulnerables que conviven con

⁵² Definición tomada de: [Acuerdo Local 002 de 2024 Junta Administradora Local de Usme](#)

animales en condiciones precarias, como habitantes de calle o trabajadores informales. Este programa contempla un enfoque territorial, multisectorial, diferencial e interseccional, garantizando la inclusión, la equidad y la promoción de prácticas de tenencia responsable y convivencia armónica entre personas y animales en el espacio público y privado del Distrito Capital.

6.2.2. DE LA IMPORTANCIA DE LAS CASAS “PYBA” Y SUS UNIDADES MOVILES EN BOGOTÁ

Como se hizo mención en la justificación de este proyecto de acuerdo, Bogotá ha tenido un crecimiento exponencial en la proyección poblacional de sus animales, principalmente caninos y felinos, contando con una cifra de **TRES MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO (3.466.628)**, de los cuales **DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO PERTENENCEN (2.742.541)** a caninos y **SETECIENTOS VENTICUATRO MIL OCHENTA Y SIETE (724.087)**⁵³ a felinos. Lo cual ha traído como consecuencia un incremento en la demanda de atención de animales en: **PRIMERO AUXILIOS VETERINARIOS, ATENCIONES POR MALTRATO ANIMAL, ABANDONO, ENTRE OTROS SERVICIOS.**

Sin embargo, pese a crecimiento tan evidente de esta población que encuentra que en cifras reportadas por la entidad, disminución en cifras de atención de animales, pasando de tener cifras de atención en **URGENCIAS VETERINARIAS** en promedio de **MIL OCHOCIENTOS (1.800)**⁵⁴ entre el 2021 y el 2022, a **MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO COMA CINCO (1358,5)** en promedio durante 2023 y 2024. Hallando una disminución del **24,52%**⁵⁵ en promedio de **URGENCIAS VETERINARIAS.**

Que, en adición, se encontró una disminución en esterilizaciones en los últimos dos años pese a tener un crecimiento poblacional en promedio por año desde el 2021 al 2024 del 6, 78% y del 135% en el 2025. Pasando de tener de una media de más de setenta y cinco mil (75.863) esterilizaciones entre el 2021 y el 2022 a un promedio de 33 mil aproximadamente (33.006) entre el 2023 y el 2024.

Demostrando lo anterior una regresión en la capacidad de respuesta institucional frente a una problemática que se halla creciente en esta ciudad, y que por ende actualmente posee una alta demanda de servicios. Requiriendo por lo anterior, una descentralización de servicios que permitan una mayor cobertura de las necesidades de los animales y sus tenedores en esta gran ciudad. Llevando de esta manera a los territorios servicios médico-veterinarios que permitan la atención de animales en estado de abandono, de tenencia de poblaciones vulnerables, proteccionistas, refugios, hogares de paso, entre otros.

⁵³ Tomado de: https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/indicadores/vacuna_rabia/

⁵⁴ Promedio ponderado sacado de cifras dadas por el IDPYBA en respuesta con número de radicado 2025BAER0006787. Teniendo como cifra de URGENCIAS VETERINARIAS en 2021, 1894 y en 2022, 1905.

⁵⁵ Promedio ponderado sacado de cifras dadas por el IDPYBA en respuesta con número de radicado 2025BAER0006787. Teniendo como cifra de URGENCIAS VETERINARIAS en 2023, 1416 y 2024 de 1301.

En ese sentido las casas PYBA surgen como una alternativa de solución, en la que no solo se buscará responder de manera técnica a las necesidades meramente de atención, sino que será un espacio donde se propenderá por hacer difusión en las comunidades de la valía de los animales de compañía como seres sintientes, creando de esta manera una conciencia colectiva y sentido de apropiación por la problemática que rodea a estos seres.

6.2.3 ANTECEDENTES FÁCTICOS DEL PROYECTO

6.7.1. DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN ANIMAL EN EL MUNDO

Países Bajos, ha sido una de las pioneras en implementar políticas de protección animal con un enfoque de bienestar, educación y no sacrificio. Reconociendo su sensibilidad como seres vivos y como consecuencia prohibiendo el sufrimiento animal en su territorio (World Animal Protection, 2020)⁵⁶, “encontrando como alcance de su gestión de listas “positivas de adopción” donde se determina que tipo de animales pueden ser animales de compañía; además de la eliminación de jaulas en la cría de ciertos animales como las gallinas o cerdos. Llegando al punto de tener tal eficacia que las cifras de animales en abandono son casi inexistentes” (World Animal Protection, 2020)⁵⁷

Por otro lado, se encuentra a Barcelona como un modelo de ciudad cuidadora, ha promovido desde el año 2014 una política integral para los animales de compañía, integrando acciones de protección, educación y participación ciudadana. En 2019 se consolidó la red de espacios públicos “correcans”, con más de 116 áreas habilitadas para perros, junto a una amplia estrategia educativa en colegios e institutos sobre empatía, convivencia y respeto interespecie. La campaña “Barcelona, ciutat amiga dels animals” se convirtió en un referente simbólico, promoviendo el mensaje de que los animales son parte del tejido urbano y emocional de la ciudad (Ajuntament de Barcelona, 2019).⁵⁸



Informes del CAACB (barcelona.cat)

https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/tema/informacio-de-servei/tots-els-serveis-i-espais-per-garantir-el-benestar-animat-a-la-ciutat_1382792.

⁵⁶ Tomado de: <https://api.worldanimalprotection.org/country/netherlands>

⁵⁷ Tomado de: <https://api.worldanimalprotection.org/country/netherlands>

⁵⁸ Ajuntament de Barcelona. (2019). *Barcelona, ciutat amiga dels animals*.

Por su parte en América Latina, México se ha destacado por un marco normativo proteccionista, hallando como principal logro la constitucionalización de las Políticas de Protección y Bienestar Animal en el país, obligando de esta manera a los Estados el país federal en “*garantizar la protección de los animales en sus territorios*”, marcándose este hito en Diciembre del 2024 (Animal Legal Defense Fund, 2025)⁵⁹. Sin embargo, este no es un hecho aislado en este país se han presentado diferentes reformas normativas como la Ley Maple que establecía un sistema de protección a lo animales que se hallaban bajo el cuidado de pensiones, veterinarias y escuelas de adiestramiento (MXC;2024)⁶⁰. Esta legislación permitió la creación del Hospital Veterinario Público, el cual ha atendido más de 500 mil casos desde su apertura, ofreciendo servicios gratuitos y de bajo costo. Además, se estructuró la Red de Protectores Vecinales, en la cual habitantes de diferentes colonias cuidan animales comunitarios especialmente colonias felinas, en articulación con el gobierno local (Gobierno de la CDMX, 2023).⁶¹



Funcionamiento de una red vecinal con respaldo institucional.

<https://www.ssc.cdmx.gob.mx/agrupamientos/brigada-de-vigilancia-animal>

En Santiago de Chile, la promulgación de la Ley 21.020, también conocida como Ley Cholito, marcó un punto de inflexión en la protección animal. Esta ley reconoce la sintiencia animal y establece obligaciones claras para los cuidadores, autoridades locales y establecimientos comerciales. Logrando a agosto del 2023 más de **DOS MILLONES** 2.303.919 de animales inscritos en el registro Nacional de Animales en Compañía; (Gobierno de Chile, 2023).⁶²

⁵⁹ Animal Legal Defense Fund est 1979. (2025). Mexico adds Animal Protection to its Constitution. Tomado de: <https://aldf.org/article/mexico-adds-animal-protection-to-its-constitution/#:~:text=M%C3%A9xico%20se%20ha%20convertido%20en,entraron%20en%20vigor%20de%20inmediato.>

⁶⁰ MXC. (2024). Ley maple: ¿En qué consiste la reforma de la Ley de Protección de los Animales? Tomado de: <https://mxc.com.mx/2024/01/25/ley-maple-en-que-consiste-la-reforma-de-la-ley-de-proteccion-a-los-animales/>

⁶² Gobierno de Chile. (2023). *Informe de ejecución Ley Cholito 2020–2023*. SUBDERE. Tomado de: <https://www.subdere.gov.cl/sala-de-prensa/aniversario-de-%E2%80%9899ley-cholito%E2%80%9899-m%C3%A1s-de-2-millones-de-animales-de-compa%C3%B1%C3%ADa-han-sido#:~:text=Con%20la%20promulgaci%C3%B3n%20de%20la,Magallanes:%2026.627>

Estos ejemplos evidencian que la cultura de protección animal se construye desde políticas públicas estructuradas, con respaldo normativo, recursos suficientes y una apuesta por la corresponsabilidad ciudadana. Las ciudades mencionadas han demostrado que es posible consolidar entornos urbanos más amables, seguros y compasivos para humanos y animales cuando se integran los principios de bienestar animal en la planificación, la educación y la cultura ciudadana.

6.7.2. DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN COLOMBIA

Colombia ha venido consolidando un marco institucional y normativo orientado a garantizar el bienestar animal como parte integral del desarrollo territorial. En 1989⁶³, con la Ley 84 se estableció el Estatuto Nacional de Protección Animal, que sentó las bases jurídicas para sancionar el maltrato y fomentar prácticas de respeto por la fauna silvestre. No obstante, es con la Ley 1774 de 2016 cuando se reconoce a los animales como seres sintientes, generando un cambio de paradigma que abrió paso a políticas públicas más estructuradas en las ciudades y departamentos del país.

Un caso emblemático a nivel nacional ha sido el de Bogotá, con la creación del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) en 2016⁶⁴, como primera entidad pública en Latinoamérica dedicada exclusivamente al bienestar animal. Desde entonces, se han implementado estrategias como el Escuadró, procesos de investigación y gestión del conocimiento para la defensa de los derechos de la protección y bienestar animal, las Unidades Móviles Veterinarias, campañas de esterilización masiva, y procesos de formación ciudadana con enfoque interespecie y territorial (IDPYBA, 2022).⁶⁵ Estos esfuerzos se han desarrollado en articulación con organizaciones sociales y han contado con evaluación sistemática mediante el Observatorio PYBA⁶⁶.

A nivel nacional, ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga también han avanzado en consolidar modelos institucionales con enfoque educativo y comunitario. Medellín, por ejemplo, cuenta con un Centro de Bienestar Animal sobre el cual es necesario realizar serio hincapié, en el entendido que puede ser un antecedente directo de la casa PYBA, esto, al hallar en dicho lugar el cual es mejor conocido como “la perla”, *“realizando evaluaciones médicas, pruebas diagnósticas, hospitalizaciones, cirugías a animales que se hallen en situación de emergencia y vulnerabilidad para luego pasarlos a procesos de adopción”* (Alcaldía de Medellín, 2021)⁶⁷.

⁶³ Congreso de Colombia. (1989). Ley 84 de 1989.

⁶⁴ Alcaldía Mayor de Bogotá. (2016). Decreto 546 de 2016. Tomado de: <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=67660>

⁶⁵ Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). (2022). Informe de Gestión. Tomado de: https://www.animalesbog.gov.co/documentos/control/informe_de_gestion_2022_0.pdf

⁶⁶ Tomado de. <https://www.animalesbog.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/aprende/observatorio-pyba>

⁶⁷ Alcaldía de Medellín. (2021). Regresan las Visitas Presenciales al Centro de Bienestar Animal La Perla. Tomado de: <https://www.medellin.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/regresan-las-visitas-presenciales-al-centro-de-bienestar-animal-la-perla/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20la%20evoluci%C3%B3n,responsable%20con%20los%20recursos%20naturales.>

Barranquilla, por su parte, inauguró en 2023 un moderno centro de bienestar animal que atiende hasta 700 animales, incluyendo equinos, y presta servicios gratuitos de esterilización, vacunación y adopción (Alcaldía de Barranquilla, 2023).⁶⁸



Centro de Bienestar Animal de Barranquilla

<https://barranquilla.gov.co/dependencia/centro-de-bienestar-animal>

Además, el Ministerio de Ambiente creó en 2023⁶⁹ un grupo de protección animal dentro de su estructura, con el objetivo de articular políticas intersectoriales y buscando garantizar la protección de la fauna silvestre.

Todo este ecosistema institucional ha sido fortalecido por propuestas legislativas como el proyecto de decreto para la creación del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (SINAPYBA), el cual busca integrar acciones de diferentes entidades del Estado, universidades y organizaciones sociales. (Ministerio de Ambiente, 2025)⁷⁰.

En conclusión, Colombia ha avanzado de forma significativa en la construcción de una cultura de protección animal con base normativa, articulación institucional y compromiso ciudadano. Si bien persisten retos en su implementación homogénea a nivel territorial, los logros alcanzados demuestran que el bienestar animal ha pasado de ser una causa marginal por constituirse como un eje estratégico de la política pública contemporánea, y un modelo replicable para otras ciudades que, como Bogotá, aspiran a consolidar una nueva cultura ciudadana.

6.7.3. DE LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN BOGOTÁ

⁶⁸ Alcaldía de Barranquilla. (2023). Centro de Bienestar Animal abre sus puertas en Barranquilla. Tomado de: <https://barranquilla.gov.co/mi-barranquilla/centro-de-bienestar-animal-abre-sus-puertas-en-barranquilla#:~:text=El%20alcalde%20Jaime%20Pumarejo%20inaugurar%C3%A1,en%20alta%20condici%C3%B3n%20de%20vulnerabilidad.&text=Un%20espacio%20seguro%20y%20adecuado,%2C%20hospitalizaci%C3%B3n%2C%20desparasitaci%C3%B3n%20y%20vacunaci%C3%B3n.>

⁶⁹ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2023). Min. Ambiente creará grupo especial para la Protección y Bienestar Animal en el PND. Tomado: <https://www.minambiente.gov.co/minambiente-creara-grupo-especial-para-la-proteccion-y-bienestar-animal-en-el-pnd/#:~:text=Minambiente%20crear%C3%A1%20Grupo%20Especial%20para%20la%20protecci%C3%B3n,ser%20el%20articulador%20de%20la%20pol%C3%ADtica%20p%C3%ABlica.>

⁷⁰ Ministerio de Ambiente. (2025) Ministra Lena Estrada anuncia creación del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal. Tomado: <https://www.minambiente.gov.co/ministra-lena-estrada-anuncia-creacion-del-sistema-nacional-de-proteccion-y-bienestar-animal/#:~:text=El%20Sinapyba%20representa%20un%20modelo,y%20protege%20a%20los%20animales.>

Bogotá ha sido pionera en Latinoamérica al crear en 2016 el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), marcando un hito en la institucionalización del cuidado interespecie. Este organismo ha desarrollado un ecosistema de programas articulados que han situado el bienestar animal como una prioridad de política pública en la capital. Desde su creación, se han promovido estrategias de intervención directa, educación ciudadana, y transformación cultural con enfoque territorial, ético y ambiental.

Uno de los programas más emblemáticos ha sido el Escuadrón Anticrueldad, que actúa frente a denuncias de maltrato, articulando respuesta interinstitucional con las autoridades judiciales y ambientales. A esto se suman las unidades móviles veterinarias y las jornadas comunitarias que han facilitado el acceso de población vulnerable a servicios de salud animal.

En el campo de la transformación cultural, se han desarrollado proyectos como "Adopta un Gato del Bronx", que no solo promueve la adopción sino también la reparación simbólica de poblaciones marginadas. Se han consolidado procesos de educación interespecie en colegios, piezas comunicativas como "No es moda, es maltrato" y acciones territoriales como "Caminatón por los animales". Además, el Observatorio PYBA ha generado datos e informes clave para la evaluación y ajuste de las políticas. En términos de innovación, Bogotá ha implementado el programa "Árbol para tu animal", en el cual las familias adoptantes reciben un árbol como símbolo de cuidado compartido con la vida.

Asimismo, se ha promovido la creación de espacios públicos adaptados a la convivencia interespecie, incluyendo zonas PET, señalética educativa, mobiliario de hidratación y puntos de adopción itinerantes en centros comerciales y parques.

La ciudad también ha impulsado el enfoque de micro territorios de cuidado, como el programa "Adopta tu Punto", que permite a comunidades hacerse responsables del cuidado de colonias felinas o perros comunitarios, con apoyo institucional. Estas experiencias promueven la corresponsabilidad social y el arraigo barrial. Finalmente, el Distrito se encuentra en proceso de construcción de un nuevo Centro de Bienestar Animal con mayor capacidad técnica y enfoque bioético.

Estos avances han posicionado a Bogotá como un referente nacional e internacional en políticas públicas de bienestar animal. No obstante, el camino hacia una verdadera cultura interespecie requiere profundizar las acciones educativas, ampliar la cobertura institucional, y garantizar la sostenibilidad de los programas más allá de los cambios administrativos.



Vehículos IDPYBA

<https://www.animalesbog.gov.co/>

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ajuntament de Barcelona. (2019). *Barcelona, ciudad amiga de los animales*. <https://ajuntament.barcelona.cat/benestaranimal/>
- Congreso de Colombia. (1989). *Ley 84 de 1989. Estatuto Nacional de Protección Animal*. http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0084_1989.html
- Congreso de Colombia. (2016). *Ley 1774 de 2016. Por medio de la cual se modifica el Código Civil y el Código Penal en relación con el maltrato animal y se dictan otras disposiciones*. http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1774_2016.html
- Flores, C., Torres, M., & Gómez, L. (2022). Evaluación participativa de políticas de bienestar animal: herramientas y aprendizajes. *Revista Colombiana de Evaluación*, 18(2), 103–121.
- Hernández, D. (2023). Participación ciudadana y políticas de convivencia interespecie en entornos urbanos. *Revista de Estudios Sociales*, 73, 89–104.
- Hidalgo, A. (2019). Campañas urbanas y cultura ciudadana: hacia una política sensible al bienestar animal. *Ciudad y Territorio Estudios Territoriales*, 51(202), 221–239.
- IDPYBA. (2022). *Informe de gestión institucional 2022*. Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. <https://www.animalesbog.gov.co/>
- IDPYBA. (2024). *Estrategias territoriales de protección animal*. <https://www.animalesbog.gov.co/actualidad/noticias>
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2023). *División de Protección Animal*. <https://www.minambiente.gov.co>
- Ministerio de Salud. (2015). *Lineamientos para la política pública de tenencia responsable de animales de compañía*.
- Molina, J. (2023). Reconocimiento ciudadano y bienestar animal: propuestas desde el activismo comunitario. *Revista de Innovación Pública*, 11(4), 77–90.
- Márquez, P., Torres, N., & Salas, V. (2024). Empatía interespecie y vínculos protectores en territorios urbanos. *Psicología Urbana y Sociedad*, 19(1), 135–152.
- Núñez, R., Pardo, S., & Mejía, F. (2018). Del diálogo a la acción: metodologías participativas para el bienestar animal en entornos urbanos. *Revista de Ciencias Sociales*, 34(2), 56–72.
- Proyecto de Acuerdo 161 de 2024. Concejo de Bogotá D.C.
- Proyecto de Decreto SINAPYBA. (2024). Departamento Nacional de Planeación. <https://sinapyba.dnp.gov.co>
- Secretaría de Salud Distrital de Barranquilla. (2023). *Inauguración del nuevo centro de bienestar animal*. <https://www.barranquilla.gov.co/>

- Villar-Urbe, M. (2021). Comunicación pública y cultura animalista en el contexto urbano: desafíos para Bogotá. *Comunicación, Ciudad y Territorio*, 15(3), 63–82.
- Animal Legal Defense Fund est 1979. (2025). Mexico adds Animal Protection to its Constitution. Tomado de: <https://aldf.org/article/mexico-adds-animal-protection-to-its-constitution/#:~:text=M%C3%A9xico%20se%20ha%20convertido%20en,entraron%20en%20vigor%20de%20inmediato.>
- MXC. (2024). Ley maple: ¿En qué consiste la reforma de la Ley de Protección de los Animales? Tomado de: <https://mxc.com.mx/2024/01/25/ley-maple-en-que-consiste-la-reforma-de-la-ley-de-proteccion-a-los-animales/>

VII. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE ACUERDO

Como consecuencia de una revisión de proyectos de acuerdo desde el 2022, no se halla la presentación de iniciativa semejante.

VIII. TITULO-ATRIBUCIONES-CONSIDERANDOS

PROYECTO DE ACUERDO NO 756 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS BAJO LOS CUALES SE CREARÁN E IMPLEMENTARÁN LAS CASAS DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL PYBA Y LAS UNIDADES MOVILES DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA ANIMALES EN BOGOTÁ”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 1 del artículo 313 de la Constitución Política y el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA

IX. ARTICULADO

ARTICULO 1°. OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos bajo los cuales el Distrito Capital, en coordinación con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y demás entidades competentes, planeará, creará e implementará las CASAS DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL PYBA Y LAS UNIDADES MOVILES DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA ANIMALES EN BOGOTÁ”

ARTÍCULO 2. PRINCIPIOS. La planeación, creación e implementación de las “CASAS DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL PYBA Y LAS UNIDADES MOVILES DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA ANIMALES EN BOGOTÁ” se regirá por los siguientes principios:

- a) **CORRESPONSABILIDAD:** La protección y bienestar animal es una responsabilidad compartida entre las entidades distritales, la ciudadanía y las organizaciones sociales.
- b) **PARTICIPACIÓN:** Se promoverá la participación de la ciudadanía en la construcción de una cultura de respeto y protección hacia los animales.
- c) **COORDINACIÓN:** Se articularán acciones entre las entidades del Distrito en el marco de sus competencias.
- d) **PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN:** Fomentar una cultura de prevención del maltrato, abandono y tenencia irresponsable de animales a través de programas educativos y de sensibilización que promuevan la convivencia armónica interespecie desde la primera infancia.
- e) **REHABILITACIÓN Y REINTEGRACIÓN:** Garantizar la atención integral, rehabilitación física y etológica, y la búsqueda de hogares responsables para los animales rescatados, fomentando la adopción como la principal vía para su reintegración.
- f) **ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE:** Asegurar que los programas y servicios de protección y bienestar animal sean accesibles y respondan a las necesidades específicas de los animales pertenecientes a poblaciones humanas en situación de vulnerabilidad, incluyendo aquellas en pobreza extrema o multidimensional, habitantes de calle y otros grupos con limitaciones para proveer cuidado adecuado a sus animales.

ARTICULO 4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS. La planeación, creación e implementación de las “CASAS DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL PYBA Y LAS UNIDADES MOVILES DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA ANIMALES EN BOGOTÁ” se desarrollarán a través de las siguientes líneas estratégicas:

- a) **Atención primaria médico-Veterinaria y Gestión de Rescate:** Provisión y fortalecimiento de servicios de medicina veterinaria, incluyendo atención de urgencias, valoraciones, consultas, vacunación, desparasitación, y demás procedimientos de baja complejidad. Esto se realizará a través de las Casas PYBA y Unidades Móviles de Atención Prioritaria, abarcando el rescate, albergue temporal por aprehensión preventiva de maltrato y otras atenciones misionales para animales en estado de abandono, en calle o provenientes de poblaciones vulnerables.
- b) **Desarrollo, Consolidación y Operación de la Infraestructura PYBA:** Establecimiento y fortalecimiento de la red de Casas PYBA y Unidades Móviles "Móvil PYBA", garantizando su equipamiento, talento humano y operatividad eficiente en los puntos estratégicos del Distrito determinados por la demanda y los análisis de cobertura.
- c) **Apoyo y Fortalecimiento a la Ciudadanía Protectora:** Articulación de esfuerzos y provisión de apoyo a hogares de paso, cuidadores, proteccionistas, rescatistas, activistas y refugios sin ánimo de lucro, reconociendo su labor y facilitando su gestión en beneficio de los animales, especialmente en zonas de alta vulnerabilidad.
- d) **Investigación, Monitoreo y Evaluación del Bienestar Animal:** Recopilación, análisis y difusión de datos e indicadores sobre la situación del bienestar animal en Bogotá, para orientar la toma de decisiones, asegurar la optimización de los recursos y evaluar el impacto del programa.
- e) **Articulación Interinstitucional y Movilización de Recursos:** Establecimiento de alianzas estratégicas con entidades locales, distritales, nacionales e internacionales, el sector privado y la sociedad civil, para la consecución de recursos, el intercambio de buenas prácticas y la implementación conjunta de iniciativas de protección y bienestar animal.

ARTÍCULO 5. RESPONSABILIDAD. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) será la entidad líder en la implementación de la presente estrategia. Para su desarrollo podrá articular esfuerzos con alcaldías locales, la secretaria de ambiente, la Dirección de carabineros y protección animal, y demás dependencias cuyas funciones se relacionen con el bienestar animal. Esta articulación garantizará una acción intersectorial coherente, territorializada y sostenida en el tiempo.

ARTICULO 6. CRITERIOS PARA IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DEL LUGAR DE UBICACIÓN DE LAS CASAS “PYBA” Y SUS UNIDADES MOVILES: Los criterios que la Administración Distrital y el Instituto de Protección Animal deberán tener en cuenta para la identificación y selección del lugar de ubicación de las CASAS DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “PYBA” Y LAS UNIDADES MOVILES DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA ANIMALES EN BOGOTÁ” son:

- a) **Centralidad Geográfica:** Para optimizar la prestación de servicios y maximizar su impacto, la ubicación debe ser de fácil acceso desde múltiples localidades objetivo. Permitiendo atender eficientemente a poblaciones de diferentes sectores, asegurando que el servicio sea accesible para la mayor cantidad de usuarios posible.
- b) **Demanda potencial:** Que la ubicación sea consecuencia de un análisis de la demanda de servicios de tenedores, rescatistas, proteccionistas, hogares de paso, activistas, entre otros actores relacionados con la protección y el bienestar animal,

ARTÍCULO 7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. El IDPYBA, en coordinación con las entidades distritales responsables, presentará informes anuales al Concejo de Bogotá sobre la implementación, seguimiento y evaluación de los resultados de la estrategia de Cultura PYBA.

ARTÍCULO 8. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

AUTOR:

SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA
Concejal de Bogotá
Partido Liberal Colombiano

PROYECTO DE ACUERDO NO 757 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS HUMEDALES DEL DISTRITO CAPITAL AL SISTEMA DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y AL SISTEMA DISTRITAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2469 DE 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**1. OBJETIVO**

Este Acuerdo tiene como objetivo implementar medidas integrales, normativas y programáticas para asegurar la incorporación efectiva y prioritaria de los humedales del Distrito Capital en el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres (SDGRD) y en el Sistema Distrital de Cambio Climático (SDCC). Esto se realiza en cumplimiento de la Ley 2469 de 2025, reconociendo estos ecosistemas como una infraestructura natural clave para adaptarse al cambio climático, reducir el riesgo de desastres y conservar la biodiversidad urbana.

Con este Acuerdo se busca fortalecer la gobernanza ambiental, garantizar la participación comunitaria en la gestión de los humedales, promover acciones de restauración ecológica, y asegurar su articulación con la planificación territorial y la estructura ecológica principal del Distrito Capital.

2. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA**2.1 Contexto Histórico**

Los humedales del Distrito Capital han sido parte fundamental de la historia ambiental de la Sabana de Bogotá, representando ecosistemas de alta productividad biológica y servicios ecosistémicos clave como la regulación hídrica, el almacenamiento de carbono, la mitigación de inundaciones y la conservación de la biodiversidad urbana (Andrade, 2011). Antes de la urbanización masiva del siglo XX, la sabana contaba con más de 50.000 hectáreas de áreas inundables y humedales, que fueron drásticamente reducidas por la expansión urbana, la canalización de ríos, el relleno de cuerpos de agua y la falta de planeación ecológica (Van der Hammen, 2006).

Durante las décadas de 1980 y 1990, ante la degradación sistemática de los humedales urbanos, surgieron procesos ciudadanos de defensa ambiental liderados por comunidades locales, organizaciones ambientales y sectores académicos, quienes exigieron el reconocimiento jurídico y ecológico de estos ecosistemas. Uno de los hitos más relevantes fue la Sentencia del Consejo de Estado (Radicación 25000-23-24-000-2001-90025-01 de 2014) que ordenó la delimitación y protección de varios humedales de Bogotá, incluyendo Juan Amarillo, Córdoba y Capellanía, sentando precedente en la defensa del derecho colectivo a un ambiente sano.

El Decreto 190 de 2004 (POT de Bogotá) reconoció a los humedales como parte de la Estructura Ecológica Principal (EEP), obligando a su inclusión en la planificación territorial. Sin embargo, la implementación de esta figura ha sido parcial, y muchos planes de manejo ambiental (PMA) han carecido de articulación efectiva con los sistemas de gestión del riesgo y cambio climático, limitando su impacto frente a las crecientes amenazas ambientales.

En los últimos años, el cambio climático ha intensificado los riesgos asociados a eventos extremos como inundaciones, sequías y pérdida de biodiversidad. Bogotá no es ajena a estos fenómenos: entre 2010 y 2011, el fenómeno de La Niña generó afectaciones significativas en zonas urbanas y rurales del Distrito, especialmente en sectores próximos a humedales, evidenciando la urgencia de integrar estos ecosistemas en la gestión del riesgo de desastres (IDIGER, 2012).

En respuesta a este contexto, el Congreso de la República aprobó la Ley 2469 de 2025, por medio de la cual se incorporan los humedales al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional de Cambio Climático, reconociendo su papel estratégico como infraestructura natural para la adaptación climática. Esta Ley exige a las entidades territoriales adoptar medidas específicas para articular los humedales a sus sistemas de gestión del riesgo y de cambio climático, con enfoque de cuenca, participación comunitaria y justicia ambiental.

Bogotá, como capital del país y territorio históricamente afectado por decisiones urbanísticas excluyentes de la naturaleza, debe liderar el cumplimiento de esta ley mediante una normatividad local que reconozca a los humedales no solo como cuerpos de agua aislados, sino como estructuras vivas del metabolismo urbano, esenciales para construir resiliencia, equidad territorial y sostenibilidad.

Este proyecto de acuerdo se inscribe así en una tradición de lucha ambiental, mandatos legales y principios constitucionales que abogan por un modelo de ciudad más justo, ecológico y adaptado al cambio climático.

2.2 Justificación

La ciudad de Bogotá cuenta con una riqueza ecológica estratégica representada en sus humedales que cumplen funciones fundamentales en la regulación hídrica, mitigación del cambio climático provisión de servicios ecosistémicos y conservación de la biodiversidad. Sin embargo, estos ecosistemas enfrentan amenazas crecientes por urbanización desordenada, rellenos ilegales, contaminación y la baja articulación institucional para su protección.

La ciudad de Bogotá cuenta con una riqueza ecológica estratégica representada en sus humedales, que cumplen funciones fundamentales en la regulación hídrica, mitigación del cambio climático, provisión de servicios ecosistémicos y conservación de la biodiversidad. Sin embargo, estos ecosistemas enfrentan amenazas crecientes por urbanización desordenada, rellenos ilegales, contaminación y la baja articulación institucional para su protección.

En respuesta a este contexto, el Congreso de la República expidió la Ley 2469 de 2025, que establece la incorporación de los humedales al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional de Cambio Climático (SNCC), especialmente en su componente de adaptación. La ley también ordena adoptar mecanismos en las cuencas hidrográficas para garantizar la gestión integral del recurso hídrico y la protección de los humedales.

Este proyecto de acuerdo busca aterrizar y aplicar esta ley en el Distrito Capital, fortaleciendo el marco normativo local para que los humedales sean reconocidos como elementos claves del sistema distrital de gestión del riesgo, restauración ecológica y planificación del territorio. Esto se hace más urgente ante el reconocimiento de la emergencia climática en Bogotá, declarada por el Concejo mediante el Acuerdo 790 de 2020.

3. METODOLOGÍA

La construcción de este proyecto de acuerdo se fundamenta en una metodología participativa, técnica y normativa, orientada por principios de planificación ambiental integrada, justicia climática y gobernanza ecosistémica, en concordancia con el mandato de la Ley 2469 de 2025. La propuesta legislativa fue desarrollada a través de las siguientes etapas:

3.1 Revisión normativa y jurisprudencial

Se llevó a cabo un análisis exhaustivo del marco jurídico aplicable, incluyendo leyes, decretos, sentencias judiciales y lineamientos técnicos nacionales e internacionales, con el

fin de garantizar que el contenido del proyecto se alinee con los marcos vigentes de política pública en materia ambiental, climática y de riesgo.

Normas consultadas:

- Ley 1523 de 2012 – Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
- Ley 1931 de 2018 – Por la cual se crea el Sistema Nacional de Cambio Climático.
- Ley 2469 de 2025 – Por medio de la cual se incorporan los humedales al SNGRD y al SNCC.
- Decreto 190 de 2004 – POT vigente de Bogotá.
- Sentencia del Consejo de Estado Rad. 25000-23-24-000-2001-90025-01 de 2014.
- Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNBSE, MinAmbiente, 2012).

3.2 Análisis ecosistémico de los humedales del Distrito

Se realizó un estudio documental de los principales diagnósticos y líneas base sobre los humedales urbanos de Bogotá, integrando enfoques de servicios ecosistémicos, conectividad ecológica, amenaza por cambio climático, y vulnerabilidad social (Andrade, G. et al; 2011). Este componente fue clave para sustentar técnicamente la necesidad de su integración efectiva a los sistemas distritales de gestión del riesgo y cambio climático Van der Hammen, T. (2006).

3.3 Consulta y participación comunitaria

El proyecto fue construido con insumos de espacios de diálogo social con organizaciones ambientales, colectivos ciudadanos, veedurías de humedales, ediles de localidades con presencia de estos ecosistemas (Suba, Kennedy, Engativá, Fontibón y Bosa), así como representantes del sector académico y de entidades distritales como la Secretaría de Ambiente, el IDIGER y el Jardín Botánico (Red de Humedales de Bogotá, 2023)

Se aplicarán técnicas de recolección como:

- Mesas de trabajo locales y temáticas.
- Recorridos comunitarios de verificación en campo.
- Consulta a planes de manejo ambiental vigentes.
- Sistematización de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía sobre deterioro y riesgos en humedales (Participación Bogotá IDPAC, 2024)

3.4 Articulación con políticas públicas distritales

El contenido del proyecto de acuerdo fue alineado con los objetivos del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027, el Plan de Acción Climática (PAC) de Bogotá, y el Plan Distrital de Gestión del Riesgo, asegurando coherencia interinstitucional e inclusión en los instrumentos de planificación ambiental y territorial.

3.5 Redacción técnica-legislativa y validación jurídica

La redacción del articulado del proyecto de acuerdo fue elaborada bajo criterios de técnica normativa, claridad conceptual y competencia legal del Concejo de Bogotá, con el acompañamiento de asesores jurídicos y expertos en derecho ambiental.

Síntesis metodológica

Este proyecto de acuerdo es resultado de un ejercicio legislativo responsable, basado en evidencia científica, enfoque territorial y participación ciudadana. Responde al mandato de la Ley 2469 de 2025, pero también a una deuda histórica con los ecosistemas que sostienen la vida en Bogotá.

4. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El presente proyecto de acuerdo se fundamenta en un marco jurídico robusto que reconoce a los humedales como ecosistemas estratégicos para la sostenibilidad urbana, el manejo del riesgo y la adaptación al cambio climático, en concordancia con las competencias legales y constitucionales del Concejo de Bogotá como autoridad normativa de orden local.

4.1 Constitución Política de Colombia

- **Artículo 79:** Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y el Estado debe proteger la diversidad e integridad del ambiente.
- **Artículo 80:** El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación y restauración.
- **Artículo 313, numeral 9:** Faculta a los concejos municipales y distritales para dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.

Estos preceptos obligan a las autoridades territoriales a adoptar normas y medidas que garanticen la conservación de los ecosistemas y prevengan los riesgos derivados de la transformación ambiental del territorio.

4.2 Ley 136 de 1994 (Art. 91) – Régimen municipal

Establece que los concejos municipales y distritales pueden reglamentar la preservación del medio ambiente y participar en la formulación de políticas ambientales en el ámbito de su jurisdicción.

4.3 Ley 99 de 1993 – Sistema Nacional Ambiental (SINA)

Crea el Ministerio de Ambiente y establece que las autoridades ambientales deben coordinar la gestión integral de los recursos naturales, reconociendo la importancia ecológica de ecosistemas como los humedales.

4.4 Ley 1523 de 2012 – Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Establece el marco para la gestión del riesgo en Colombia y obliga a los entes territoriales a incorporar el análisis del riesgo en los instrumentos de planeación, reconociendo la importancia de los ecosistemas en la reducción del riesgo.

4.5 Ley 1931 de 2018 – Sistema Nacional de Cambio Climático

Define los mecanismos de articulación entre los niveles de gobierno para la adaptación y mitigación del cambio climático, e impone a los entes territoriales el deber de formular e implementar planes y acciones climáticas.

4.6 Ley 2469 de 2025

Es la norma central que motiva este proyecto. Ordena la incorporación de los humedales al **Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD)** y al **Sistema Nacional de Cambio Climático**, reconociéndolos como infraestructura natural y actores estratégicos en la adaptación climática. Exige a las entidades territoriales desarrollar acciones normativas, técnicas y presupuestales para cumplir este mandato.

4.7 Decreto 190 de 2004 – Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá

Reconoce a los humedales como parte integral de la **Estructura Ecológica Principal** del Distrito Capital, lo que les otorga un régimen especial de protección y exige su articulación con los sistemas de planeación urbana y ambiental.

4.8 Acuerdo 546 de 2013 – Política Pública de Ecurbanismo y Construcción Sostenible.

Establece principios para promover el equilibrio entre el desarrollo urbano y la conservación ambiental, destacando la importancia de la infraestructura ecológica en la resiliencia urbana.

4.9 Sentencia C-339 de 2002 (Corte Constitucional):

Reafirma la prevalencia del derecho al ambiente sano y la responsabilidad de las entidades territoriales en su protección.

4.10 Consejo de Estado, Sentencia Rad. 25000-23-24-000-2001-90025-01 de 2014:

Ordena la delimitación y protección efectiva de varios humedales de Bogotá como bienes de interés público y patrimonio ecológico.

4.10 Competencia del Concejo de Bogotá

De acuerdo con el **Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 (Estatuto Orgánico de Bogotá)**, el Concejo Distrital tiene la facultad para dictar acuerdos sobre:

- La protección del medio ambiente, los recursos naturales y la planificación del desarrollo territorial;
- La creación de políticas públicas ambientales;
- La reglamentación de los usos del suelo, incluyendo áreas protegidas;

- El fortalecimiento del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y del Sistema Distrital de Cambio Climático.

En este marco, el Concejo de Bogotá no solo tiene la **facultad**, sino también el **deber político y ético** de expedir normas orientadas a garantizar la protección de los humedales como bienes comunes estratégicos, especialmente en el contexto de emergencia climática declarado por el propio Distrito.

5. IMPACTO FISCAL

Este proyecto de acuerdo no crea una nueva entidad ni modifica la estructura administrativa del Distrito, y por tanto no genera gastos permanentes. En cambio, propone la adopción de medidas de articulación, planeación y priorización de los humedales dentro de los instrumentos existentes de gestión del riesgo de desastres y cambio climático. Las acciones propuestas podrán ser financiadas con cargo a los recursos de inversión previstos en los siguientes planes e instrumentos:

5.1 Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027

El Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” incluye en su eje ambiental líneas estratégicas relacionadas con la restauración ecológica, la acción climática y la gestión del riesgo de desastres, que podrán servir de marco para la inclusión de acciones específicas sobre humedales, sin requerir adiciones presupuestales extraordinarias.

5.2 Plan de Acción Climática de Bogotá (PAC 2020–2050)

El PAC contempla estrategias de adaptación climática basadas en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), dentro de las cuales los humedales urbanos se reconocen como infraestructura natural esencial para la resiliencia climática. En su línea estratégica 3, se priorizan intervenciones de restauración, conservación y conectividad de ecosistemas urbanos, que podrán financiar parcialmente las acciones propuestas en este proyecto (Secretaría de Ambiente, 2020).

5.3 Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres 2022–2031

Este plan asigna recursos específicos a medidas de reducción del riesgo, incluyendo intervenciones en zonas de amenaza por inundación, restauración ambiental y ordenamiento del territorio con enfoque preventivo. Los humedales hacen parte de las áreas críticas identificadas para reducción de vulnerabilidades (IDIGER, 2020).

5.4 Fuentes complementarias

Este proyecto puede ser financiado parcialmente mediante recursos de cooperación internacional, regalías, transferencias intergubernamentales, y mecanismos como los pagos por servicios ambientales (PSA), fondos ambientales (como el FAEP o Fondo Verde Distrital) o inversiones obligatorias de compensación ambiental en el marco de licencias urbanísticas y ambientales.

La implementación de las medidas propuestas puede dividirse en tres fases presupuestales:

Fase	Actividad principal	Posible fuente	Rango estimado
1	Incorporación normativa en instrumentos de planificación (SDGRD y SDCC)	Funcionamiento sector ambiente / IDIGER	\$0 – \$200 millones (ajustes normativos y técnicos)
2	Estudios y priorización de humedales para acciones de restauración y monitoreo	PAC / Plan de Gestión del Riesgo / IDIGER / SDA	\$1.000 – \$3.000 millones
3	Intervención ecológica y monitoreo comunitario	Presupuesto inversión ambiental + cooperación	Desde \$5.000 millones, progresivo

Tabla 1. Fases presupuestales para la implementación del Proyecto de Acuerdo

Estas cifras son aproximadas y podrán ajustarse en la fase de implementación, según lo determinen las entidades competentes en los planes operativos anuales de inversión (POAI) y en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) del sector ambiental y de riesgo.

El presente proyecto de acuerdo no compromete recursos no apropiados, no crea rentas nuevas ni gastos permanentes, y se ejecutará conforme a los principios de eficiencia y sostenibilidad financiera definidos en la Ley 819 de 2003, y en el marco fiscal del Distrito.

Además, este tipo de inversión en infraestructura natural genera retornos socioeconómicos comprobables. Estudios del Banco Mundial (2021) y de la CEPAL (2022) han demostrado que las Soluciones Basadas en la Naturaleza pueden generar beneficios de hasta 3 a 1 en reducción de costos por daños y pérdidas frente a desastres, incremento de resiliencia comunitaria y mejora en la calidad de vida urbana.

6. TÍTULO – ATRIBUCIONES - CONSIDERANDOS

6.1 TÍTULO

PROYECTO DE ACUERDO No. ____ DE 2025

“Por medio del cual se adoptan medidas para la incorporación de los humedales del Distrito Capital al Sistema Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y al Sistema

Distrital de Cambio Climático, en cumplimiento de la Ley 2469 de 2025, y se dictan otras disposiciones”

6.2 Atribuciones

El Concejo de Bogotá, D.C., en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 313 numeral 9 de la Constitución Política, el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 (Estatuto Orgánico de Bogotá), la Ley 2469 de 2025, la Ley 99 de 1993, la Ley 1523 de 2012, la Ley 1931 de 2018, y demás normas concordantes, ACUERDA:

6.3 Considerandos

- Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica.
- Que el artículo 313 de la Constitución, en su numeral 9, faculta a los concejos distritales para dictar las normas necesarias para el control, preservación y defensa del patrimonio ecológico del territorio.
- Que el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 establece que corresponde al Concejo de Bogotá dictar normas para la preservación y defensa del patrimonio ecológico y natural del Distrito Capital, así como reglamentar lo relacionado con el medio ambiente.
- Que la Ley 2469 de 2025 establece que los humedales deben ser incorporados a los Sistemas Nacionales y Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático, reconociendo su función ecológica, su capacidad de regulación hídrica, y su importancia como infraestructura natural esencial para la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres.
- Que la Ley 1523 de 2012 establece que la gestión del riesgo de desastres es un proceso social, colectivo y participativo, cuyo fin es la prevención, mitigación y atención de los efectos de los fenómenos naturales y antrópicos, y que debe estar incorporado en todos los niveles de planificación del desarrollo.
- Que la Ley 1931 de 2018 establece las directrices para la gestión del cambio climático en Colombia y define la obligación de las entidades territoriales de formular e implementar acciones que promuevan la adaptación basada en ecosistemas.

- Que el Plan de Acción Climática de Bogotá (PAC) reconoce a los humedales como ecosistemas clave para enfrentar los efectos del cambio climático urbano, proponiendo su restauración, protección y articulación con instrumentos de planeación.
- Que el Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres (2022–2031) identifica los humedales como áreas funcionales para la reducción de vulnerabilidades frente a fenómenos como inundaciones, y recomienda su incorporación como zonas de mitigación activa del riesgo.
- Que la jurisprudencia del Consejo de Estado, en especial la sentencia Rad. 25000-23-24-000-2001-90025-01 (2014), ha ordenado al Distrito la delimitación, recuperación y protección de humedales como bienes públicos de especial protección, y ha reconocido su papel en el equilibrio ambiental de la ciudad.
- Que los principios de desarrollo sostenible, precaución, resiliencia climática, gestión integral del agua y participación ciudadana exigen que las políticas públicas territoriales incorporen los ecosistemas estratégicos en sus estrategias de planificación, inversión y gobernanza, conforme a lo establecido en la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNBSE).
- Que el Distrito Capital ha declarado la Emergencia Climática mediante acto administrativo de la Alcaldía Mayor en el año 2020, lo cual compromete a todas las entidades del orden distrital a adoptar medidas urgentes y estructurales para la adaptación y mitigación del cambio climático, priorizando la protección de los ecosistemas estratégicos.
- Que el deterioro progresivo de los humedales por ocupación ilegal, contaminación, infraestructura vial, rellenos y mal manejo institucional ha debilitado sus funciones ecosistémicas, generando mayor exposición al riesgo de desastres y profundizando la desigualdad ambiental en territorios históricamente vulnerados.
- Que este proyecto de acuerdo responde a un mandato legal, ambiental, ético y social para asegurar el papel de los humedales como infraestructura natural esencial, integrarlos a los sistemas distritales de gestión del riesgo y cambio climático, y avanzar hacia un modelo de ciudad más resiliente, justa y ecológicamente equilibrada.

7. CONCLUSIONES

7.1 El cambio climático y el riesgo de desastres exigen una respuesta ecosistémica e integral.

La evidencia científica nacional e internacional ha demostrado que la restauración, protección y gestión sostenible de ecosistemas estratégicos, como los humedales urbanos, constituye una de las soluciones más efectivas para reducir vulnerabilidades y aumentar la resiliencia de las ciudades frente a eventos extremos como inundaciones, sequías y olas de calor.

7.2 Los humedales del Distrito Capital deben ser reconocidos como infraestructura natural esencial.

Estos ecosistemas prestan servicios fundamentales para el metabolismo urbano, como la regulación hídrica, la recarga de acuíferos, el almacenamiento de carbono y el hábitat de la biodiversidad que se observa hoy en día en el distrito capital. Su deterioro debilita la capacidad adaptativa de la ciudad y pone en riesgo a miles de personas que habitan áreas aledañas.

7.3 La Ley 2469 de 2025 obliga a los entes territoriales a incorporar los humedales a sus sistemas de gestión del riesgo y cambio climático.

Este mandato legal es una oportunidad para avanzar hacia un modelo de planificación territorial basado en el respeto por la naturaleza y el principio de precaución, mediante la articulación normativa, institucional y presupuestal de las entidades responsables en el Distrito Capital.

7.4 El Concejo de Bogotá tiene la competencia constitucional y legal para expedir normas que garanticen la protección ecológica de los humedales.

Conforme al artículo 313 numeral 9 de la Constitución Política y al artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, el Concejo puede dictar normas sobre preservación del medio ambiente y protección del patrimonio ecológico, especialmente en el marco de políticas públicas de gestión del riesgo, adaptación climática y ordenamiento territorial.

7.5 La incorporación de los humedales al Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y al Sistema Distrital de Cambio Climático no implica un gasto adicional estructural.

Las acciones contempladas pueden ser implementadas mediante los recursos de inversión ya previstos en el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan de Acción Climática (PAC), el Plan Distrital de Gestión del Riesgo (PDGRD), y con apoyo de fuentes complementarias como

cooperación internacional, regalías, PSA o compensaciones ambientales (Secretaría de Ambiente, 2020; IDIGER, 2020).

7.6 Este proyecto de acuerdo representa un avance hacia una ciudad más resiliente, equitativa y ambientalmente responsable.

Incorporar los humedales al sistema distrital de gestión del riesgo y cambio climático es una acción concreta de justicia climática y justicia ambiental, que responde a los principios del desarrollo sostenible, a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (especialmente ODS 11, 13 y 15), y a la Declaratoria de Emergencia Climática hecha por el Distrito en 2020.

7.7 El papel de las comunidades y organizaciones sociales es clave en la gobernanza de los humedales.

Este proyecto de acuerdo contempla un enfoque participativo y territorializado, reconociendo el conocimiento local, la vigilancia comunitaria, y el derecho de las comunidades a incidir en el manejo y restauración de estos ecosistemas vitales.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acuerdo 790 de 2020. Concejo de Bogotá. “Por el cual se declara la emergencia climática en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.
- Andrade, G. (2011). *Ecosistemas estratégicos para la adaptación al cambio climático en Colombia*. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
- Andrade, G. et al. (2011). *Ecosistemas estratégicos para la adaptación al cambio climático en Colombia*. Instituto Humboldt.
- CAR Cundinamarca. (2022). *Diagnóstico participativo de humedales compartidos en Bogotá y Sabana*.
- Congreso de la República de Colombia. Ley 2469 de 2025. *Por medio de la cual se incorporan los humedales al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y al Sistema Nacional de Cambio Climático*.
- Consejo de Estado. Sentencia Radicación 25000-23-24-000-2001-90025-01 (2014).

- Constitución Política de Colombia (1991), artículos 79 y 80.
- Decreto 190 de 2004. Por el cual se compilan las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D.C.
- IDEAM. (2023). *Informe Nacional sobre Cambio Climático y Ecosistemas Estratégicos*.
- IDIGER (2012). *Balance de afectaciones por el fenómeno de La Niña 2010-2011 en Bogotá D.C.* Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.
- IDIGER (2020). *Mapa Distrital de Amenazas por Inundación*.
- Jardín Botánico de Bogotá (2021). *Inventario de humedales y su estado ecológico*.
- ONU Medio Ambiente. (2022). *Lineamientos internacionales para la adaptación basada en ecosistemas*.
- Participación Bogotá (IDPAC) (2024). *Sistematización de encuentros ciudadanos sobre gobernanza ambiental*.
- Red de Humedales de Bogotá (2023). *Informes de monitoreo comunitario de humedales*.
- Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA). (2024). *Caracterización ecológica de los humedales del Distrito Capital*.
- Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). (2024). *Guía técnica para la incorporación de ecosistemas en el SNGRD*.
- Van der Hammen, T. (2006). *La sabana de Bogotá: de los ecosistemas naturales a la estructura socioecológica*. Bogotá: Sociedad Colombiana de Ecología.
- Van der Hammen, T. (2006). *La sabana de Bogotá: de los ecosistemas naturales a la estructura socioecológica*.
- Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres 2022-2031 (IDIGER).
- Plan de Acción Climática – PAC Bogotá 2020-2050 (Secretaría de Ambiente, 2020).
- Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (versión vigente y proyecto modificado).
- Congreso de la República. Ley 819 de 2003, Artículo 7.

- Congreso de la República. Ley 2469 de 2025.
- Alcaldía de Bogotá. Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027.
- Secretaría Distrital de Ambiente. (2020). *Plan de Acción Climática de Bogotá (PAC)*.
- IDIGER. (2020). *Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres 2022–2031*.
- CEPAL. (2022). *Soluciones basadas en la naturaleza para el desarrollo sostenible en América Latina*.
- Banco Mundial. (2021). *Nature-based Solutions for Disaster Risk Management*.
- IDIGER. (2020). *Plan Distrital de Gestión del Riesgo 2022–2031*.
- Secretaría Distrital de Ambiente. (2020). *Plan de Acción Climática (PAC) de Bogotá*.
- IPCC. (2022). *Sixth Assessment Report*. Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Banco Mundial. (2021). *Nature-Based Solutions for Disaster Risk Management*.
- CEPAL. (2022). *Soluciones basadas en la naturaleza para el desarrollo sostenible*.
- Andrade, G. et al. (2011). *Ecosistemas estratégicos para la adaptación al cambio climático en Colombia*. Instituto Humboldt.
- Van der Hammen, T. (2006). *La sabana de Bogotá: de los ecosistemas naturales a la estructura socioecológica*.
- Congreso de la República. Ley 2469 de 2025.
- Congreso de la República. Ley 1523 de 2012.
- Congreso de la República. Ley 1931 de 2018.
- IDIGER. (2020). *Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres 2022–2031*.
- Secretaría de Ambiente. (2020). *Plan de Acción Climática (PAC) de Bogotá*.
- Constitución Política de Colombia (1991), Art. 79, 80 y 313.
- Decreto Ley 1421 de 1993.

- Agenda 2030 – Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU).
- Alcaldía Mayor de Bogotá. (2020). *Declaratoria de Emergencia Climática*.
- Listado oficial de los humedales reconocidos en Bogotá.
- Diagnóstico sobre el riesgo climático en humedales (IDEAM – SDA).
- Inventario de acciones del Plan Distrital de Gestión del Riesgo en humedales.
- Indicadores de adaptación climática aplicados a los ecosistemas de humedal.
- Ley 2469 de 2025. Congreso de la República de Colombia.

Cordialmente,

JOSE CUESTA NOVOA

Concejal de Bogotá D.C

Colombia Humana

9. ARTICULADO

PROYECTO DE ACUERDO NO 757 DE 2025

PRIMER DEBATE

Proyecto de Acuerdo No. 757 de 2025

“Por medio del cual se adoptan medidas para la incorporación de los humedales del Distrito Capital al Sistema Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y al Sistema Distrital de Cambio Climático, en cumplimiento de la Ley 2469 de 2025, y se dictan otras disposiciones”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las que le confieren los numerales 1, 7, y 25 artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993,

RESUELVE

Artículo 1. Objeto.

El presente Acuerdo tiene por objeto establecer lineamientos, instrumentos y obligaciones para la incorporación efectiva de los humedales del Distrito Capital al Sistema Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y al Sistema Distrital de Cambio Climático, en cumplimiento de la Ley 2469 de 2025.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Las disposiciones del presente Acuerdo son de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del nivel central, descentralizado, y para las Alcaldías Locales en cuya jurisdicción se encuentren humedales urbanos, periurbanos o rurales.

Artículo 3. Lineamientos generales.

Las autoridades distritales deberán:

- a) Incorporar los humedales como zonas de protección prioritaria en el análisis de riesgo y vulnerabilidad climática.
- b) Integrar los Planes de Manejo Ambiental de los humedales (PMAH) con los Planes de Gestión Local del Riesgo.
- c) Reconocer a los humedales como infraestructura natural para la adaptación al cambio climático.
- d) Incluir los humedales y sus cuencas de recarga hídrica en los instrumentos de ordenamiento territorial, como zonas de amenaza por fenómenos de origen natural y antrópico.

Artículo 4. Instrumentos de planificación y acción.

Las entidades distritales competentes deberán:

- a) Elaborar un Plan Distrital de Gestión del Riesgo en Humedales, que deberá actualizarse cada 4 años.

- b) Diseñar un Sistema de Monitoreo Integrado de Humedales con sensores ambientales, mapas de riesgo e indicadores climáticos.
- c) Garantizar la inclusión de estos ecosistemas en el Plan de Acción Climática de Bogotá y los Planes Locales de Desarrollo.
- d) Articular acciones con la CAR en zonas rurales de Bogotá donde existan humedales compartidos.

Artículo 5. Participación y gobernanza socioecológica.

Créanse los Consejos Locales de Humedales y Gestión del Riesgo, como instancias de articulación entre la ciudadanía, organizaciones ambientales, academia y autoridades locales para la formulación, seguimiento y veeduría social de los planes y acciones adoptadas.

Artículo 6. Presupuesto y financiación.

El Distrito deberá destinar anualmente un porcentaje mínimo del 0,5% del presupuesto del Fondo de Gestión del Riesgo para actividades de protección, restauración y monitoreo de humedales, en el marco de los proyectos de inversión de cambio climático y protección de la Estructura Ecológica Principal.

Artículo 7. Educación, cultura y apropiación social.

La Secretaría de Educación Distrital, en coordinación con la Secretaría de Ambiente, diseñará estrategias pedagógicas sobre el valor de los humedales, enfocadas en la prevención del riesgo, la adaptación al cambio climático y la cultura del agua.

Artículo 8. Seguimiento y control.

El seguimiento al cumplimiento del presente Acuerdo estará a cargo de la Comisión de Plan de Desarrollo del Concejo de Bogotá, que podrá crear una Subcomisión Técnica Permanente de Humedales y Cambio Climático, con participación ciudadana.

Artículo 9. Vigencia.

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS FERNANDO GALÁN PACHÓN

ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D.C

PROYECTO DE ACUERDO NO 758 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA DISEÑO, LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA U HOGARES CON JEFATURA FEMENINA EN BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

1. OBJETIVOS

Objetivo principal:

-  Diseñar lineamientos para que la Administración Distrital formule la Política Pública de Madres Cabeza de Familia u hogares con jefatura femenina en Bogotá.

2. ANTECEDENTES

El presente proyecto de acuerdo **NO** registra antecedentes en la Red Interna de la Corporación y a la fecha la administración Distrital no cuenta con una política pública de madres cabeza de familia.

En el proceso de elaboración de este acuerdo se han realizado varias mesas de trabajo con la Fundación u ONG Más Políticas para Mamá, con Tatiana Padilla, activista y líder en el tema, con el doctor Camilo Salazar del Observatorio de Política Fiscal de la Universidad Javeriana, con quienes se ha ido construyendo este articulado que se tramitará para lograr se convierta en acuerdo de ciudad, que contribuya a mejore las condiciones de las mujeres cabeza de familia y de los hogares con jefatura femenina en Bogotá.

Durante el proceso también se realizó análisis del contexto normativo nacional y distrital, y seguimiento a la implementación de acciones que promuevan la vinculación de las madres cabeza de familia en la ciudad, resaltamos que la ciudad cuanta con dos acuerdos el 11 de 1998 y el 17 del mismo año donde el Concejo de Bogotá *solicita a la administración Distrital implementar planes de acción institucionales y un sistema único de información que permita identificar la situación de las madres cabeza y responder a sus necesidades básicas insatisfechas.*

*Al hacer seguimiento a los programas y proyectos de la administración Distrital, para las Madres Cabeza de Familia (MCF) permite reflexionar lo siguiente: **En Bogotá la atención a mujeres cabeza de familia no cuenta con un lineamiento de política pública, que oriente la planeación e implementación de acciones afirmativas el acceso a programas, bienes y servicios a las mujeres y sus hogares, situación que permite la prevalencia de pobreza multidimensional de las mujeres y sus familias,** promover esta política pública beneficiaría el 46,08% de los hogares de la ciudad, y contribuiría a disminuir la feminización de la pobreza en Bogotá.*

3. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA

Este proyecto de acuerdo, se convierte en per se en lo que la Corte Constitucional, máximo Tribunal garante de los derechos constitucionales, ha llamado una acción afirmativa o de discriminación positiva, es decir acciones desplegadas desde la Administración Nacional o territorial, que buscar disminuir, morigerar o eliminar las diferencias, exclusiones, discriminaciones, que han sufrido de forma permanente, las mujeres en todas sus diferencias, diversidades e interseccionalidades.

🚦 DIAGNÓSTICO DE LAS MUJERES CABEZA DE FAMILIA

La situación de los hogares con jefatura femenina en Bogotá, aproximadamente uno de cada dos hogares tiene jefatura femenina, según datos de la secretaria Distrital de la Mujer, 1.378.395 hogares, el 46,08% los hogares Ciudad tienen jefatura femenina.

Según el DANE en el 2024 en Bogotá se incrementó la brecha del índice de Pobreza Multidimensional⁷¹ entre personas que viven en hogares con jefatura femenina y los hogares con jefatura masculina, la brecha de pobreza se amplió a 3,2 puntos porcentuales, debido al aumento pobreza multidimensional en los hogares con jefatura femenina, que tuvo un incremento estadísticamente significativo entre el año 2023 y 2024, pasando del 4 al 7,5 punto porcentual.

Tabla 8. Incidencia de pobreza multidimensional según el sexo del jefe del hogar (porcentaje)
Regiones
Años 2023 y 2024

Región	2023			2024			Variación p.p.		
	Hombre	Mujer	Brecha (M-H)	Hombre	Mujer	Brecha (M-H)	Hombre	Mujer	Brecha (M-H)
Caribe	18,9	21,5	2,6	17,9	19,2	1,3	-1,0	-2,3*	-1,4
Oriental	10,3	12,3	2,0	7,2	10,7	3,5	-3,1*	-1,6	1,6
Central	9,2	11,6	2,4	9,9	11,8	2,0	0,7	0,2	-0,4
Pacífica	11,9	13,5	1,5	10,8	13,1	2,3	-1,1	-0,4	0,7
Bogotá (Cabecera)	3,2	4,0	0,8	3,4	7,5	4,1	0,2	3,5*	3,2
Amazonía - Orinoquía	24,9	23,2	-1,7	21,8	18,2	-3,7	-3,1*	-5,0*	-2,0

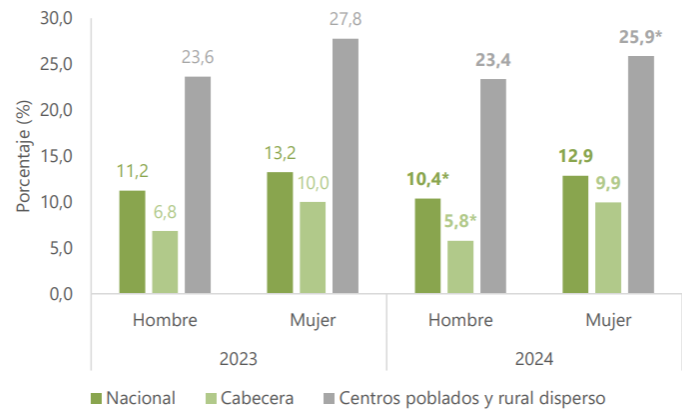
Fuente: DANE, cálculos con base en la ECV 2023 y 2024 y proyecciones del CNPV 2018.

Nota: (*) corresponde a cambios estadísticamente significativos.

El índice de pobreza multidimensional en el 2024 tuvo una reducción en Colombia, pero los centros poblados y áreas rurales dispersas, representa la mayor pobreza multidimensional para los hogares de jefatura femenina y masculina, al duplicar el promedio Nacional y superar ampliamente la pobreza multidimensional de las cabeceras municipales.

⁷¹ Índice de Pobreza Multidimensional – IPM: está compuesto por cinco dimensiones: i condiciones educativas del hogar, ii. condiciones de la niñez y juventud, iii. salud, iv. trabajo y v. acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda

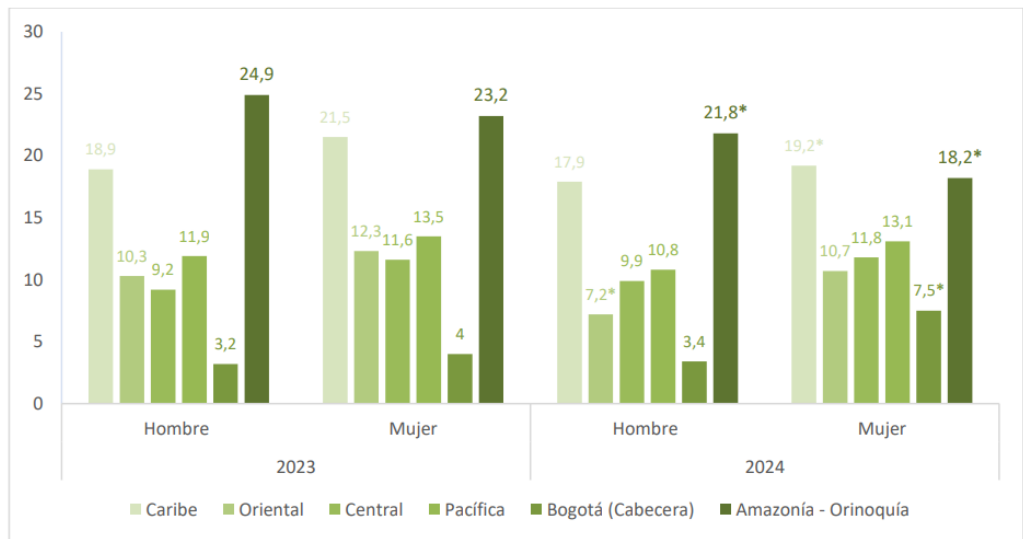
**Incidencia de Pobreza Multidimensional
Según sexo del jefe del hogar
Grandes dominios
2023 y 2024**



Fuente: DANE, cálculos con base en la ECV 2024 y proyecciones del CNPV 2018.
Nota: para el cálculo total nacional, total cabeceras y centros poblados y rural disperso no se tiene en cuenta la ruralidad de la Amazonia- Orinoquía. (*) corresponde a cambios estadísticamente significativos.

Bogotá representa el índice de pobreza multidimensional más bajo del país, aunque el último año, este índice creció de forma significativa en los hogares con jefatura femenina y tuvo un leve incremento en los hogares con jefatura masculina.

Incidencia de Pobreza Multidimensional
Según sexo del jefe del hogar
Regiones
2023 y 2024



Fuente: DANE, cálculos con base en la ECV 2024 y proyecciones del CNPV 2018.
Nota: para el cálculo total nacional, total cabeceras y centros poblados y rural disperso no se tiene en cuenta la ruralidad de la Amazonía- Orinoquía. (*) corresponde a cambios estadísticamente significativos.

Colombia durante el 2024 se redujo la pobreza multidimensional excepto en la Región Central y Bogotá, en Bogotá, los hogares con jefatura femenina presentaron un incremento de pobreza multidimensional en 3.5 puntos porcentuales llegado al 7,5%, mientras que en los hogares con jefatura masculina la incidencia de pobreza multidimensional fue del 3,4%, lo que representa una brecha de 3,1 puntos porcentuales entre los hogares de jefatura femenina y masculina.

IPM - Incidencia de Pobreza Multidimensional según sexo del jefe de hogar								
DANE 2024		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nacional	Hombre	18,1	16,6	17,2	14,7	12,0	11,2	10,4
	Mujer	21,0	18,9	19,6	17,6	14,1	13,2	12,9
Bogotá	Hombre	2,7	6,9	6,0	3,5	3,1	3,2	3,4
	Mujer	6,7	7,2	9,7	8,2	4,6	4,0	7,5

En Bogotá el índice la pobreza multidimensional según pertenencia étnica, representa de 12.1 puntos porcentuales en la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera con una brecha aproximada de 6,9 puntos porcentuales frente a otros grupos étnicos en la ciudad.

Tabla 9. Incidencia de pobreza multidimensional según el autorreconocimiento étnico-racial del jefe del hogar (porcentaje)
Regiones
Año 2024

Región	Negro (a), mulato (a) (afro descendiente), afrocolombiano(a)	Indígena	Sin autorreconocimiento étnico	Brecha Negro (a), mulato (a) (afrodescendiente), afrocolombiano(a) - sin autorreconocimiento étnico	Brecha indígenas - sin autorreconocimiento étnico
Caribe	22,4	53,0	15,0	7,4	38,0
Oriental	7,8	22,9	8,7	-0,9	14,2
Central	14,1	32,2	10,3	3,8	21,9
Pacífica	21,3	28,4	6,2	15,1	22,2
Bogotá (Cabecera)	12,1	4,5	5,3	6,9	-0,8
Amazonía-Orinoquía	17,6	46,5	14,1	3,5	32,4

Fuente: DANE, cálculos con base en la ECV 2023 y 2024 y proyecciones del CNPV 2018.

ANALISIS MADRES CABEZA DE FAMILIA
Documento consolidado de atención de las MCF en Bogotá

De acuerdo a la información recibida por la diferentes Entidades Distritales de la oferta institucional, en programas y servicios sociales del Distrito, resaltamos que Entidades como secretaria de Integración social, secretaria de Hábitat y la Agencia Atenea, incluyen las madres cabeza de familia o hogares con jefatura femenina como criterio de focalización y/o evaluación para acceder a programas específicos como:

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Estor programas de secretaria Distrital de Integración tienen como criterio de focalización por demanda a personas cuidadoras de hogares con jefatura femenina.

PROGRAMA	OBJETIVO
7.12.2. Servicio Tiempo Propio para Personas Cuidadoras	Brindar actividades que contribuyan a la reducción y reconocimiento del trabajo de cuidado dedicado al hogar y/o a las personas, mediante el acceso a lavanderías comunitarias y al disfrute de actividades de descanso y autocuidado, en el marco de los lineamientos establecidos por el Sistema Distrital de Cuidado.
7.14.1. Servicio Respuesta Social	Atender a personas, hogares o familias que tienen dificultad para enfrentar situaciones sociales inesperadas y/o transitorias que desestabilizan o disminuyen su capacidad de respuesta, las cuales configuran una emergencia social, brindando uno o más de los beneficios disponibles a través de la realización de un análisis de fragilidad social en el marco del proceso de

PROGRAMA	OBJETIVO
	atención del servicio compuesto por atención en emergencia social y en acompañamiento
7.15.1. Servicio para la Integración y los Derechos del Migrante, Refugiado y Retornado"	Aborda el fenómeno de flujos migratorios mixtos en la ciudad, brindando atención a personas, familias u hogares migrantes, refugiados o retornados en situación de vulnerabilidad o fragilidad social en flujos migratorios mixtos en las 20 localidades de Bogotá y que requieren atención inmediata y de estabilización social a mediano y largo plazo, buscando superar las atenciones humanitarias y avanzar hacia la integración socioeconómica y cultural de estas personas, a partir de las estrategias de intervención individuales o comunitarias de la SDIS.
7.15.1.1. Modalidad Ayuda Humanitaria para la Estabilización	El Servicio para la Integración y los Derechos del Migrante Refugiado y Retornado, aborda el fenómeno de flujos migratorios mixtos en la ciudad, brindando atención a personas, familias u hogares migrantes, refugiados o retornados en situación de vulnerabilidad o fragilidad social en flujos migratorios mixtos en las (20) localidades de Bogotá y que requieren atención inmediata y de estabilización social a mediano y largo plazo, buscando superar las atenciones humanitarias y avanzar hacia la integración socioeconómica y cultural de estas personas, a partir de las estrategias de intervención individuales o comunitarias de la SDIS.
7.15.1.2. Modalidad Atención Integración en tu Camino	El Servicio para la Integración y los Derechos del Migrante Refugiado y Retornado, aborda el fenómeno de flujos migratorios mixtos en la ciudad brindando atención a personas, familias u hogares migrantes, refugiados o retornados en situación de vulnerabilidad o emergencia en flujos migratorios mixtos en las 20 localidades de Bogotá y que requieren atención inmediata y de estabilización social a mediano y largo plazo, buscando superar las atenciones humanitarias y avanzar hacia la integración socioeconómica y cultural de estas personas, a partir de las estrategias de intervención individuales o comunitarias de la SDIS.
7.15.1.3. Modalidad Acciones para la Integración y los Derechos	"El Servicio para la Integración y los Derechos del Migrante Refugiado y Retornado, aborda el fenómeno de flujos migratorios mixtos en la ciudad, brindando atención a personas, familias u hogares migrantes, refugiados o retornados en situación de vulnerabilidad o fragilidad social en flujos migratorios mixtos en las 20 localidades de Bogotá y que requieren atención inmediata y de estabilización social a mediano y largo plazo, buscando superar las atenciones humanitarias y avanzar hacia la integración socioeconómica y cultural de estas personas, a partir de las estrategias de intervención individuales o comunitarias de la SDIS."
7.16.2. Servicio Compromiso por una Alimentación Incluyente	Contribuir a la reducción de inseguridad alimentaria a la población focalizada por la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, a través de acciones de inclusión, promoción en hábitos y estilos de vida saludable, vigilancia del estado nutricional y entrega de beneficio alimentario o económico.

FONDO ATENEA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

El Fondo Atenea incluye como un criterio de evaluación para el acceso a la oferta de fondos de educación superior ser madre cabeza de familia.

PROGRAMA	FOCALIZACIÓN
Fondo Atenea Técnica y Tecnológica	"Para la selección de sus beneficiarios, la Agencia Atenea implementa un mecanismo de puntos (entre 0 y 100), con el objetivo de priorizar a aquellas personas que, de no ser por su condición de vulnerabilidad, habrían ingresado a la educación posmedia de alta calidad. Este mecanismo se concentra en dos frentes. Por un lado, considera las variables que reflejan desventajas en el acceso a la educación posmedia, ya sea por razones económicas (vulnerabilidad socioeconómica que otorga hasta un máximo de 40 puntos) o por razones sociales, individuales o históricas (vulnerabilidad estructural (que otorga hasta un máximo de 15 puntos acumulables). Esta última dimensión de vulnerabilidad estructural busca cerrar brechas y reducir barreras que han afectado a grupos poblacionales específicos, como mujeres (5 puntos) madres cabeza de familia (5 puntos) , víctimas del conflicto armado, población étnica, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, miembros de la fuerza pública con discapacidad, reincorporados y reinsertados. Por otro lado, el otro frente se concentra en el mérito académico del individuo medido a través de la Prueba Saber 11 (con una puntuación máxima de 40 puntos) y el fomento a trayectorias que otorga puntos por la participación de la persona en programas estratégicos del Distrito (5 puntos). Así, la priorización de las madres cabeza de familia con un puntaje prioritario es una medida orientada a promover su acceso y culminación de la educación posmedia.
el Fondo de víctimas del conflicto armado, Fondo Alianza Bogotá Ciudad Educadora “Suma a tu Región” y el Fondo Atenea Técnica y Tecnológica	<p>En el caso del Fondo de víctimas, este no tiene límite de edad, es un crédito condenable que no genera intereses en el periodo de estudio del joven beneficiario. Como requisito especial la persona debe estar incluida en el Registro Único de Víctimas (RUV) o reconocidos como tal en las Sentencias de Justicia y Paz, Restitución de Tierras, Jurisdicción Especial para la Paz o en las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este fondo, a los sujetos de especial protección constitucional obtienen dos puntos por cada criterio: mujeres (2 puntos), mujeres cabeza de familia (2 puntos), víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual (2 puntos), grupos étnicos (2 puntos) y personas con discapacidad (2 puntos).</p> <p>Se mantienen los requisitos que el programa Jóvenes a la E y la asignación de puntajes con criterios diferenciales por población y género otorgan un máximo de 14 puntos distribuidos de la siguiente manera: mujer (6 puntos), mujeres que se inscriban a programas STEM (4 puntos) y maternidad (4 puntos).</p>

SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT

La Secretaría Distrital del Hábitat ha diseñado y articulando acciones para la atención a la población vulnerable entre las cuales se encuentran las madres cabeza de familia; en efecto, mediante el Decreto 431 DE 2024 en el artículo 31 prioriza a la madres cabeza de familia y a las madres cabeza de familia que estén o hayan estado en riesgo de feminicidio o violencia intrafamiliar, puedan acceder a un subsidio diferencial, para que puedan tener la atención diferencial recibiendo 30 SMLMV si cuentan con caja de compensación familiar o 20 SMLMV si no la tienen.

**tabla 1. Montos programa Oferta Preferente. Subsidios del Programa
“Oferta Preferente”**

Ingresos	Subsidio	Requisitos
Hogares con ingresos de hasta cuatro (4) SMLMV	30 SMLMV	Hogares que NO estén en concurrencia con subsidios otorgados por las Cajas de Compensación Familiar y cumplan con al menos una de las siguientes condiciones: a. Postulante(s) víctimas (s) del conflicto armado interno; b. Hogares con algún integrante en situación de discapacidad con certificado en escala moderada, severa o completa, según la normatividad vigente; c. Postulante(s) perteneciente(s) a alguna minoría étnica; d. Postulante (s) reincorporados del conflicto armado interno; e. Mujeres cabeza de familia f. Mujeres cabeza de familia que estén o hayan estado en riesgo de feminicidio o violencia intrafamiliar; g. Postulante(s) transgénero y/o trans sexuales h. Hogares objeto de reasentamiento según el Decreto Distrital 330 de 2020 o la norma que lo modifique, sustituya o reglamente.
	20 SMLMV	Hogares que estén en concurrencia con subsidios otorgados por las Cajas de Compensación Familiar y cumplan con al menos una de las siguientes condiciones: a. Postulante(s) víctimas (s) del conflicto armado interno; b. Hogares con algún integrante en situación de discapacidad con certificado en escala moderada, severa o completa, según la normatividad vigente; c. Postulante(s) perteneciente(s) a alguna minoría étnica; d. Postulante (s) reincorporados del conflicto armado interno; e. Mujeres cabeza de familia f. Mujeres cabeza de familia que estén o hayan estado en riesgo de feminicidio o violencia intrafamiliar; g. Postulante(s) transgénero y/o trans sexuales h. Hogares objeto de reasentamiento según el Decreto Distrital 330 de 2020 o la norma que lo modifique, sustituya o reglamente
	10 SMLMV	Hogares sin las características antes señaladas.

Mientras entidades como secretaria Distrital de Educación, secretaria Distrital de Desarrollo Económico y secretaria Distrital de la Mujer, plantean que la atención e inclusión de las Madres Cabeza de Familia en sus programas no responde a tener un criterio de focalización específico, pero esto no limita que las MCF accedan a los servicios prestados por la Entidad, a continuación, presentamos algunas de las cifras presentadas por estas entidades en relación a la prestación de sus servicios.

SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

"La asignación de los elementos se realiza teniendo en cuenta lo preceptuado en el párrafo del artículo 1 del acuerdo, que indica los criterios para definir la asignación de beneficiarios de paquetes escolares: población víctima del conflicto armado, puntaje de SISBEN IV, población rural, población con trastornos del aprendizaje, grupos étnicos, población con condición de discapacidad y pobreza oculta".

“De acuerdo con las políticas públicas vigentes, se priorizó la entrega para el 100% de la población perteneciente a grupos étnico, población con discapacidad y población atendida en los establecimientos educativos rurales. Los criterios de focalización restantes, los beneficiarios deben cumplir dos o más criterios en cualquiera de sus combinaciones para ser parte de la población beneficiaria”

“Programa de Alimentación Escolar (PAE): la Secretaría de Educación beneficia al 100% de estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial que lo requieren, atendiendo la totalidad de las solicitudes que realizan las instituciones educativas de la matrícula oficial, mediante las modalidades de Refrigerios escolares y Servicio integral de desayunos y almuerzos escolares (SIDAE)”.

“Estrategia de Promoción del Bienestar Estudiantil: las líneas pedagógicas que se promueven son alimentación saludable, actividad física, movilidad segura, prevención de accidentes y corresponsabilidad por el bienestar estudiantil, y con ellas se beneficia el 100% de estudiantes del sistema de matrícula oficial del distrito durante el desarrollo del calendario escolar.”

“Programa de Movilidad Escolar (PME): busca promover el acceso, permanencia y asistencia escolar, ofrece diferentes modalidades de desplazamiento en forma segura, sostenible y eficiente, para los estudiantes de las instituciones educativas con matrícula oficial que cumplan con los lineamientos definidos, de acuerdo con el manual operativo vigente y la oferta pública educativa. Para cumplir este propósito se cuenta con 3 modalidades: ruta escolar, subsidio de transporte y medios alternativos (Al colegio en bici, Ciempiés y Bici parceros)”

“Es importante destacar que, aunque los beneficios de los programas reseñados en líneas anteriores no están específicamente dirigidos a madres cabezas de familia, muchos de los beneficiarios pueden ser hijos de esas madres, quienes también se ven impactadas positivamente a través del apoyo brindado a sus familias en virtud de los programas y estrategias desarrollados por la entidad”.

El acceso y la participación efectiva de las madres cabeza de familia, se desarrolla a través de la implementación de estrategias educativas flexibles en las manzanas del cuidado en el marco del Sistema Distrital de Cuidado (SIDICU), siendo pertinentes, desde un enfoque diferencial en los ciclos lectivos especiales integrados (CLEI), realizando las adaptaciones pedagógicas, didácticas y curriculares, según las condiciones y necesidades de la población, para garantizar su continuidad y egreso.

**La SED ha dispuesto la oferta de tres servicios en el Sistema
Distrital del Cuidado, a saber**

Tabla 1. Oferta de servicios - SED

Estrategia Educativa Flexible	Desarrolla acciones que permitan la participación efectiva de la población de especial protección constitucional (personas cuidadoras), a través de la implementación de Estrategias Educativas Flexibles, pertinentes, desde un enfoque diferencial en los Ciclos Lectivos Especiales Integrados - CLEI, realizando las adaptaciones pedagógicas, didácticas y curriculares, según las condiciones y necesidades de la población, para garantizar el acceso al sistema educativo, su continuidad y egreso.
--------------------------------------	---

La SED ha dispuesto la oferta de tres servicios en el Sistema Distrital del Cuidado, a saber	
Tabla 1. Oferta de servicios - SED	
Refuerzo Escolar	Este servicio se genera con el fin de dar respuesta a la necesidad emergente del SIDICU, de contar con duplas de cuidado para los niños, las niñas y los adolescentes entre los 6 y 14 años, que están bajo la responsabilidad de las personas cuidadoras que hacen uso de los servicios del sistema. Por ello, desde el compromiso institucional con el sistema Distrital de Cuidado y teniendo en cuenta la misionalidad de la SED, se implementa una apuesta pedagógica de refuerzo escolar para los puntos en donde se implementan las Estrategias Educativas Flexibles, como un servicio a demanda
Talleres Socio ocupacionales	En el marco del desarrollo de la estrategia “Yo puedo ser”, la cual comprende tres dimensiones en el abordaje de la orientación socio ocupacional, se desarrollan talleres con relación al mundo del autoconocimiento, y que tienen que ver con la continuidad de estudios de educación posmedia y la inserción en el mundo laboral.

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

La secretaria Distrital de Desarrollo económico: entre 2024 y 2025 se han realizado 92 ferias Hecho en Bogotá, con los cuales beneficia a 1407 negocios locales bogotanos liderados por mujeres (64,69%) y 451 de ellos por mujeres cabeza de familia (20,74%).

Tabla No. 1 Estrategia Hecho en Bogotá - beneficiarios mujeres 2024-2025			
Vigencia	Negocios locales beneficiados	Negocios locales - mujeres	Negocios locales - mujeres cabeza de familia
2024	2088	1355	431
2025	87	52	20
Total	2175	1407	451
Fuente: Elaboración propia con bases SUIM enviadas a la DDEE			

• Empleo Incluyente:

Colocadas en la vigencia 2024 a enero de 2025: 138 madres Cabeza de Familia y en la vigencia 2024 72 madres cabeza de familia

Formados a enero de 2025: 53 madres cabeza de familia

• Formación de competencias técnicas y habilidades blandas –SENA:

298 madres cabeza de familia

Socios de Talento Capital

Formados L: 136 madres Cabeza de Familia

Formados BT: 48 madres Cabeza de Familia

colocados: 18 madres Cabeza de Familia

Tabla No. 2 Programa de Orientación a la formalización empresarial Beneficiarios mujeres 2024-2025			
Vigencia	Negocios locales beneficiados	Negocios locales - mujeres	Negocios locales - mujeres cabeza de familia
2024	200	140	69
2025	42	30	9
Total	242	170	78
Fuente: Elaboración propia con bases SUIM enviadas a la DDEE			

Gestión de Empleo con Incentivo en la Colocación, con énfasis en mujeres, denominado pago por Resultados:

Formados: 49 madres Cabeza de Familia

Colocados: 118 madres Cabeza de Familia

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER

Según datos de la SDM Bogotá para el 2023 cuenta con aproximadamente 1.378.395 hogares con jefatura femenina lo que corresponde a un 46,08% de los 2.991.250 hogares de la ciudad, las localidades con más jefatura femenina son Suba, Kennedy, Engativá, Bosa, Ciudad Bolívar y Usaquén, entre estas 6 localidades suman el 63% de los hogares con jefatura femenina de la ciudad.

Localidad	No. De Hogares
Suba	187.927
Kennedy	175.189
Engativá	149.685
Bosa	135.620
Ciudad Bolívar	115.308
Usaquén	109.953
Fontibón	77.103
Rafael Uribe Uribe	67.147
San Cristóbal	64.332
Usme	56.096
Puente Aranda	40.662
Teusaquillo	40.110
Chapinero	37.653

Localidad	No. De Hogares
Tunjuelito	30.151
Barrios Unidos	28.050
Santa Fe	22.198
Los Mártires	21.261
Antonio Nariño	15.578
La Candelaria	4.315
Sumapaz	57
Total, Hogares	1.378.395

Los diferentes servicios que presta la Secretaría Distrital de la Mujer, no están diseñados exclusivamente para mujeres cabeza de familia, esto no implica que quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad puedan acceder a los mismos.

El Sistema Distrital de Cuidado representa una de las principales estrategias para aliviar las cargas de cuidado de las mujeres cabeza de familia, permitiéndoles acceder a formación y espacios de bienestar.

La Casa de Todas y las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres brindan apoyo en autonomía económica, asesoría jurídica, formación en derechos y acompañamiento psicosocial en las localidades de Bogotá.

La Secretaría cuenta con mecanismos de protección como la Estrategia Casas Refugio, que ofrece alojamiento seguro y atención integral para ellas y sus hijos, cuando son víctimas de violencias y la mujer está en riesgo de feminicidio.

Asimismo, la Estrategia Justicia de Género y las Duplas de Atención Psicosocial brindan acompañamiento especializado en casos de violencia basada en género, para facilitar el acceso a justicia. Adicionalmente, la Línea Púrpura Distrital está disponible 24/7 para orientación psicológica y jurídica a mujeres.

Mujeres cabezas de hogar atendidas por situaciones relacionadas con violencia en los servicios de la Secretaría Distrital de la Mujer. Bogotá, 2020 a 2025	
Año	Total
2020	6.774
2021	7.359
2022	8.199
2023	8.278
2024	3.548
2025 (enero)	182
Total, general Atenciones	34.340
Total, de Mujeres atendidas	29.306

Fuente: Simisional 1: antes de abril de 2024; Simisional 2: abril de 2024 en adelante. Cálculos OMEG. Información preliminar sujeta a cambios por actualización. Para la categoría Mujer se toman todas las combinaciones de las categorías de las variables Sexo e Identidad de género Excepto: Hombres e intersexuales con identidad de género masculino o sin información. No incluye seguimientos. La suma de las filas o de las columnas no corresponde necesariamente al total consignado en la tabla ya que una misma mujer pudo acceder a los servicios más de una vez.

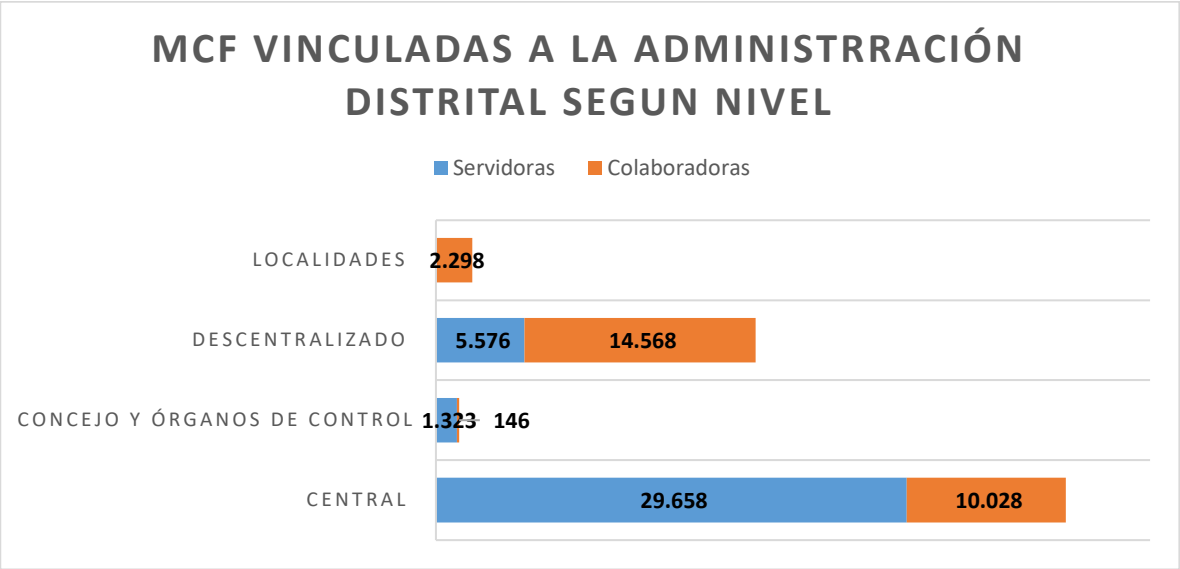
Durante el año 2024 la atención a mujeres cabeza de familia víctimas de violencias por parte de la secretaria Distrital se redujo a 57,1% pasando de 8.278 atendidas en el 2023 a 3.548; situación muy preocupante teniendo en cuenta las cifras de SDSCYJ reportan un incremento del 38% de la VIF contra las mujeres, pasando de 21.704 casos a 29.947 en el 2024 y los homicidios a mujeres que creció un 30, % pasando de 89 homicidios en el 2023 a 116 homicidios el 2024.

Atenciones a mujeres cabezas de hogar por situaciones relacionadas con violencia en los servicios de la Secretaría Distrital de la Mujer según tipo de violencia. Bogotá, 2020 a 2025.	
Tipo de violencia Atenciones	
Psicológica	26.267
Verbal	18.200
Física	15.857
Económica	15.513
Patrimonial	5.906
Sexual	3.940
Institucional	755
VCM reportadas	86.438
Fuente: Simisional 1: antes de abril de 2024; Simisional 2: abril de 2024 en adelante. Cálculos OMEG. Información preliminar sujeta a cambios por actualización. Para la categoría Mujer se toman todas las combinaciones de las categorías de las variables Sexo e Identidad de género Excepto: Hombres e intersexuales con identidad de género masculino o sin información. No incluye seguimientos. En una atención se puede identificar más de un tipo de violencia. Se hace el cálculo por cada uno de los reportes de alguna violencia.	

COMISIÓN DISTRITAL DEL SERVICIO CIVIL

La comisión Distrital del Servicio Civil envió las estadísticas de Madres cabeza de familia vinculadas a la administración Distrital según tipo de vinculación (Servidoras públicas o Colaboradoras) y de acuerdo a los niveles de la administración (Sector central, Descentralizado y el de las localidades)

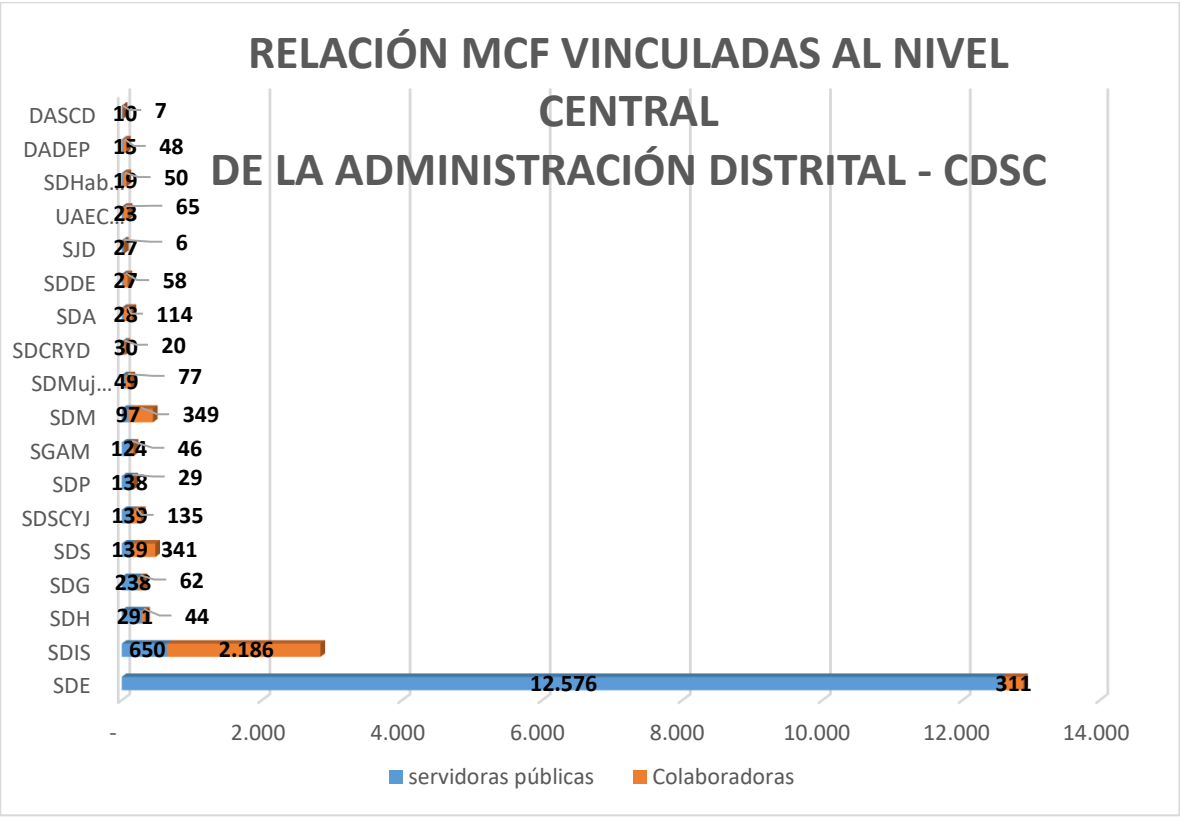
La comisión nos presenta que la administración distrital tiene vinculadas aproximadamente 63.597 madres cabeza de familia a la administración Distrital, 36.557 son servidoras publicas un 57% mientras 27.040 se encuentran vinculadas como colaboradoras de la administración Distrital en un 43%.



El nivel central de la administración concentra el mayor número madres cabeza de familia vinculadas como servidoras públicas, seguido del nivel descentralizado que tiene el mayor numero de madres cabeza familia vinculadas como colaboradoras, seguido del sector de localidades que no cuenta con madres cabeza de familia vinculadas como servidoras públicas y si como colaboradoras.

NIVEL CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN

En el Nivel central de la administración distrital, la secretaria Distrital de Educación es la Entidades con mayor vinculación a Madres Cabeza de Familia como servidoras públicas en la ciudad el 70.31 %, seguida de SDS entidad que tiene aproximadamente 9.94% MCF como servidoras públicas, en un 3.93 % de SDIS.

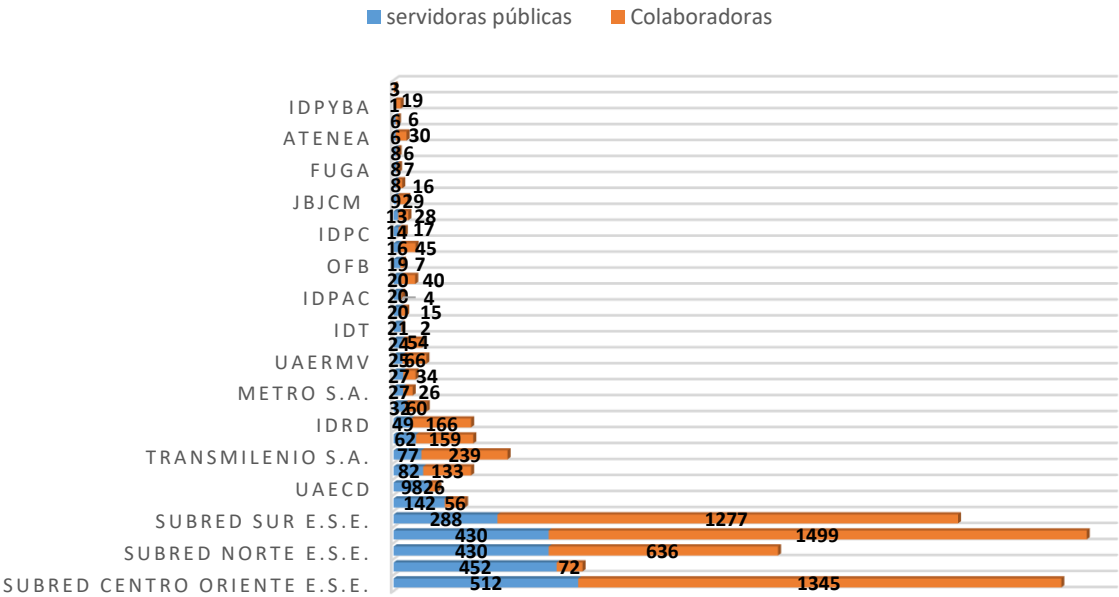


En cuanto colaboradoras, la secretaria de Salud 46,19%, seguida de Secretaría Distrital de Integración Social 21,25%, y secretaria de Movilidad 7,39%, son las Entidades que tienen mayor número de mujeres cabeza de familia vinculadas por prestación de servicios.

NIVEL DESCENTRALIZADO

En el nivel descentralizado, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., identifica el mayor número de madres cabeza de familia vinculadas como servidoras públicas con un 17,38%; y el índice más alto registrado respecto a colaboradoras, se encuentra en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E con un 24,49%.

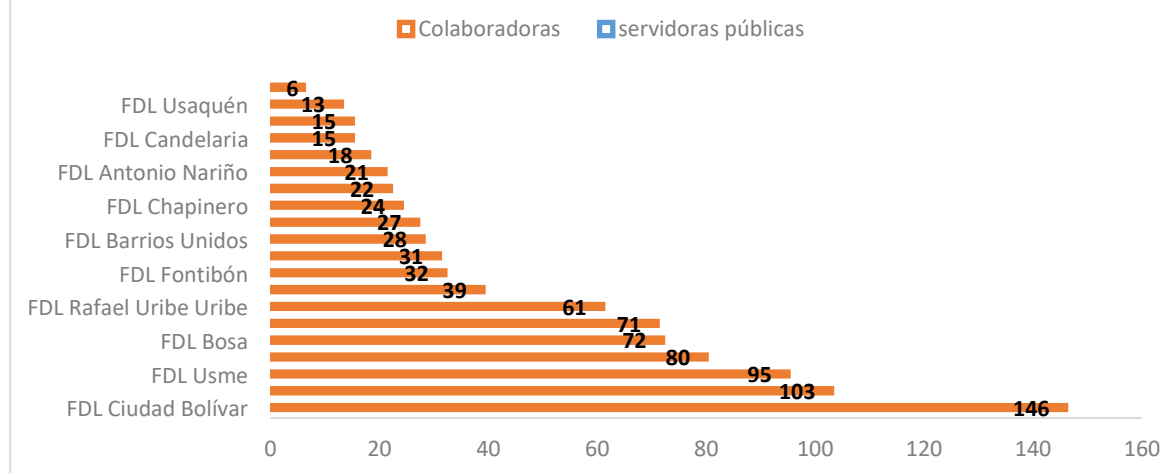
RELACIÓN MCF VINCULADAS AL NIVEL DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL - CDSC



EN LAS LOCALIDADES

Finalmente, en el sector de las localidades, el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar presenta los mayores índices de madres cabeza de familia vinculadas a la administración con un 15,89%, seguida de la localidad de Suba con el 11,21% y el 100 % de las madres cabeza de familia vinculadas a las localidades se encuentran como colaboradoras de la administración, por contratos de prestación de servicios.

RELACIÓN MCF VINCULADAS AL SECTOR DE LAS LOCALIDADES - CSCD



4. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL

Al revisar el marco jurídico Nacional y Distrital respecto a las madres cabeza de familia y los hogares con Jefatura Femenina encontramos algunos elementos a tener en cuenta en el debate:

Colombia cuenta con un amplio marco normativo que contempla la inclusión de las Madres Cabeza de Familia (MCF) en diferentes escenarios de la vida social y económica del país, resaltamos el Artículo 43. De la Constitución Política de Colombia de 1991 que contempla el Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. Desde la expedición de la constitución a la fecha por lo menos 13 leyes se han referido al tema de las Madres Cabeza de Familia (MCF) o la Jefatura Femenina en el país.

CONSTITUCIÓN POLITICA

ARTÍCULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

ARTICULO 8.

Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

ARTICULO 13.

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

ARTÍCULO 42.

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable.

ARTÍCULO 43.

La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.

LEYES

LEY	OBJETO
Ley 3 de 1991:	En cabeza del Gobierno nacional determinar la cuantía del subsidio familiar de vivienda, "(...)"
Ley 82 de 1993:	El Gobierno Nacional establecerá mecanismos eficaces para dar protección especial a la mujer y al hombre cabeza de familia, promover la equidad y la participación social con el propósito de ampliar la cobertura de atención en salud y salud sexual y reproductiva; el acceso a servicios de bienestar, de vivienda, de acceso a la educación básica, media y superior, el acceso a la ciencia y tecnología, a líneas especiales de crédito y trabajos dignos y estables.

Ley 790 de 2002	Artículo 12. Protección especial a Madres Cabeza de Familia (MCF), estabilidad laboral en empleo público
Ley 750 de 2002	Expide normas sobre el apoyo de manera especial, en materia de prisión domiciliaria y trabajo comunitario a la mujer cabeza de familia.
Ley 861 de 2003	Dictan disposiciones relativas al único bien inmueble urbano o rural perteneciente a la mujer cabeza de familia
Ley 797 de 2003:	Beneficio de pensión: La madre trabajadora cuyo hijo padezca invalidez física o mental, debidamente reconocida, hasta tanto permanezca en este estado y continúe como dependiente de la madre, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez
Ley 1232 de 2008:	Modifica la Ley 82 de 1993, Ley Mujer Cabeza de Familia y se dictan otras disposiciones, e introduce el concepto de jefatura femenina
Ley 1900 de 2018:	Establece criterios de equidad de géneros en la adjudicación de las tierras baldías, vivienda rural, proyectos productivos.
Ley 2069 de 2020	Impulsa el emprendimiento en Colombia e introduce como un factor de desempate a madres cabeza de familia
Ley 2115 de 2021	Por la cual se crean garantías de acceso a servicios financieros para mujeres y hombres cabeza de familia, se adiciona la Ley 82 de 1993 modificada por la Ley 1232 de 2008 y se dictan otras disposiciones.
Ley 2242 de 2022:	Por la cual se crea el programa “Estado Contigo” para mujeres cabeza de familia, se fortalece el sistema de información para niños, niñas y adolescentes
Ley 2292 de 2023	Por medio de la cual se adoptan acciones afirmativas para mujeres cabeza de familia en materias de política criminal y penitenciaria, se modifica y adiciona el código penal, la ley 75 de 2002 y el código de procedimiento penal y se dictan otras disposiciones

Las temáticas abordadas en este marco normativo nacional son diversas, abordan temas como el acceso a derechos económicos, trabajo, pensión, salud, educación, vivienda y propiedad rural, patrimonio familiar y política criminal, entre otras.

5. JURISPRUDENCIA

⁷²La Corte Constitucional sobre las mujeres cabeza de familia, ha establecido:

⁷³Al respecto la Corte ha explicado que una mujer es cabeza de familia cuando, en efecto, el grupo familiar está a su cargo.

Aunque en el mismo artículo se incluye un párrafo en el que se indica que la mujer deberá declarar ante notario dicha situación, tanto cuando la adquiera como cuando la pierda, para efectos de prueba, no es una condición que dependa de una formalidad jurídica.

⁷² Fuente: [C-065-21 Corte Constitucional de Colombia](#)

⁷³ Fuente: [C-964/03 Corte Constitucional de Colombia](#)

Con la categoría “mujer cabeza de familia” se pretende apoyar a la mujer a soportar la pesada carga que, por razones, sociales, culturales e históricas han tenido que asumir, abriéndoles oportunidades en todas las esferas de su vida y de su desarrollo personal y garantizándoles acceso a ciertos recursos escasos, al tiempo que se busca preservar condiciones dignas de vida a los menores y personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta a cargo de ella^[35].

Las medidas concretas de apoyo a la mujer cabeza de familia establecidas en la Ley 82 de 1993 son de diversa índole.

Así además del llamado general al Estado y a la sociedad para que a partir de la vigencia de la misma busquen “mecanismos eficaces para dar protección especial a la mujer cabeza de familia” (art. 3°), entre ellas pueden citarse las siguientes:

- (i) La adopción de reglamentos que garanticen su ingreso a la seguridad social de la mujer cabeza de familia y de la familia a su cargo (art. 4°),*
- (ii) La creación de programas de capacitación gratuita y desarrollo de microempresas industriales, comerciales y artesanales; empresas de economía solidaria y empresas familiares, donde la mujer cabeza de familia realice una actividad económica rentable (art. 8° y 20);*
- (iii) Acceso preferencial a los auxilios educativos, así como servicio básico de textos y apoyo educativo a las entidades de economía solidaria integradas en su mayoría por mujeres cabeza de familia (art. 9)*
- (iv) La fijación de estímulos para que el sector privado cree programas especiales para las mujeres cabeza de familia (art. 10);*
- (v) El establecimiento mediante reglamento de un factor de ponderación, que beneficie las propuestas de la mujer cabeza de familia o de las personas jurídicas en las cuales ella participe mayoritariamente, en los procesos de adquisición y venta de bienes estatales y de contratación de servicios también con el Estado. Factor que permitirá que se seleccione la oferta de la mujer cabeza de familia o de la correspondiente persona jurídica “siempre que sea por lo menos igual a las de las demás proponentes” (art. 11); vi) especial atención de las entidades municipales o distritales de vivienda, que en alguna forma reciban recursos del presupuesto nacional o participen en programas que tengan financiación de dicho origen (art. 12);*
- vii) Planes especiales de vivienda (art 13 y 14), viii) programas especiales de crédito, asesoramiento técnico y vigilancia para las empresas y programas que tengan por objeto apoyar a la mujer cabeza de familia, por parte de las entidades oficiales de crédito (art 15), así como el acceso a líneas de crédito por parte de microempresas, famiempresas y similares que tengan mayoría de mujeres cabeza de familia (art. 20).*

ACUERDOS DISTRITALES

Bogotá cuenta con 2 Acuerdos distritales y dos circulares que establecen lineamientos para la atención integral a las Madres cabeza de familia en la ciudad.

Documento	OBJETO
Acuerdo 11 de 1998 Concejo de Bogotá, D.C:	Dicta normas para la Atención Integral de la Mujer Cabeza de Familia. La Administración Distrital a través de sus entidades promoverá los planes y programas que den respuesta a las necesidades básicas insatisfechas de las mujeres cabeza de familia. Establece Informe semestral al Concejo
Acuerdo 17 de 1998 Concejo de Bogotá, D.C:	Adopta el Sistema Único de Información Distrital Mujer Cabeza de Familia, para facilitar los beneficios previstos en la Ley 82 de 1993, a favor de esta población y establece que las Entidades Distritales deberán utilizar este Sistema, para coordinar las estrategias locales a favor de la Mujer Cabeza de Familia
Circular 9 de 2000 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C:	Se imparten instrucciones acerca del cumplimiento de los Acuerdos 11 y 17 de 1998, solicita adelantar los estudios que permitan dentro del marco de sus competencias, implementar las políticas necesarias para promover los proyectos que benefician a las madres cabeza de familia y evaluar los mecanismos de orden administrativo necesarios para el cumplimiento.
Circular 010 de 2021 Secretaría Distrital de la Mujer:	Imparte lineamientos para aplicar los criterios de desempate en procesos de Selección Abreviada.

La implementación de este marco normativo contribuiría a avanzar en el restablecimiento de los derechos de las madres cabeza de familia y los hogares con jefatura femenina en la ciudad, contrarrestando la feminización de la pobreza y disminuyendo el índice de pobreza multinacional.

6. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, la presente iniciativa **NO** genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación. Las medidas a adoptar deberán ser financiadas con el presupuesto de las entidades pertinentes.

El Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, estableció:

“En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

7. COMPETENCIA DEL CONCEJO

El Decreto Ley 1421 expresa en el artículo 12, numerales 1 y 25, lo siguiente:

"Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. (...)
25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes

ANDRÉS LEANDRO CASTELLANOS SERRANO

Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde
Autor

PROYECTO DE ACUERDO NO 758 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO, LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA U HOGARES CON JEFATURA FEMENINA EN BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1°. OBJETO. El presente proyecto de acuerdo, tiene por objeto dictar lineamientos para *el diseño, la formulación y elaboración Política Pública de Mujeres Cabeza de Familia u hogares con jefatura femenina en Bogotá.*

ARTÍCULO 2. ESTRATEGIA. La Administración Distrital en cabeza de las Secretarías Distritales de Planeación, Secretaria de la Mujer, Secretaria de Integración Social, Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, Secretaria de Hábitat y otras entidades competentes, realizarán o elaborarán la formulación de la Política Pública de Mujeres Cabeza de Familia o con jefatura femenina de hogar en Bogotá, que involucre a todos los niveles de desarrollo físico, sicosocial, laboral, familiar y económico de este grupo poblacional.

ARTÍCULO 3. LINEAMIENTOS. La política pública de Mujeres Cabeza de Familia u hogares con jefatura femenina en Bogotá, tendrá en cuenta los siguientes lineamientos:

- Diseñar acciones que permitan mejorar las condiciones económicas, de acceso y vinculación laboral tanto en el sector público como en el privado, de mujeres cabeza de familia o con jefatura femenina de hogar, para superar la feminización de la pobreza.
- Contribuir con acciones y estrategias encaminadas a fomentar la participación con incidencia en espacios comunitarios y políticos de las mujeres cabeza de familia u hogares con jefatura femenina de Bogotá.
- Elaborar planes y/o recomendaciones para mejorar el acceso a salud tanto en el régimen contributivo y subsidiado, enfocándose en las condiciones de salud que redunden en vulnerabilidad para grupos específicos de mujeres.

- Priorizar los programas, proyectos, acciones, estrategias y campañas que impulsen el acceso real y en condiciones de equidad a la educación de las mujeres cabeza de familia u hogares con jefatura femenina en Bogotá, en todas sus modalidades (básica, media y superior).
- Establecer los programas, proyectos, acciones, estrategias y campañas que impulsen el acceso real y en condiciones de equidad a la vivienda digna, con acceso a servicios públicos domiciliarios.
- Prevenir la violencia y la discriminación de las madres cabeza de familia en la ciudad, a través de la implementación de cambios culturales, que promuevan la equidad de género.

ARTÍCULO 5°. ENFOQUES. La Política Pública de Mujeres Cabeza de Familia u hogares jefatura femenina en Bogotá tendrá los siguientes enfoques:

a. Enfoque de Derechos Humanos: La Política Pública Mujeres Cabeza de Familia u hogares con jefatura femenina, se basará en un enfoque de derechos humanos, acciones afirmativas de discriminación positiva,

b. Enfoque poblacional-diferencial: La Política Pública de Mujeres Cabeza de Familia o con jefatura femenina de hogar en Bogotá, evidenciará las características de las mujeres cabeza de familia en todas sus diversidades y con calificaciones específicas: jóvenes, adultas mayores, con discapacidad, migrantes, LGBTIQ+ y pertenencia étnica.

c. Enfoque de género: Reconoce la importancia de transformar las condiciones de desigualdad que han afectado históricamente a las mujeres en diferentes sociedades, busca transformar las relaciones desiguales entre los sexos y propone una sociedad equitativa y justa.

ARTÍCULO 6°. CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN. La Administración Distrital a instancia de las entidades competentes, podrá difundir y adelantar campañas informativas que permitan expandir la Política Pública de Mujeres Cabeza de Familia o con jefatura femenina de hogar en Bogotá.

ARTÍCULO 7°. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 759 DE 2025

PRIMER DEBATE

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS QUE GARANTICEN LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN QUE REALIZA ACTIVIDADES SEXUALES PAGAS DE ÉLITE EN BOGOTÁ EN LA MODALIDAD DE WEBCAM, PREPAGO, ACOMPAÑANTES, APLICACIONES, ENTRE OTRAS"

"Las ASP son una actividad económica compleja, que involucra la interacción de múltiples factores, identidades, actores y por ende, comprenden un amplio número de problemáticas derivadas de la heterogeneidad del tema y de las intersecciones que lo cruzan. Esto conlleva a que, en desarrollo de las ASP, se presenten de manera constante situaciones de vulneración de derechos de las personas que las realizan, lo que se refleja principalmente en escenarios de desigualdad, violencias, discriminación, barreras y dificultades para acceder a bienes y servicios. El abordaje de las ASP como se ha explicado anteriormente, ha implicado en el trasegar de la historia, el desarrollo por un lado, de acciones encaminadas a controles sanitarios, territoriales y administrativos (medidas higiénico sanitarias, de ordenamiento territorial y policivas); y por otro, de acciones dirigidas a atender la dimensión social y personal de quienes se dedican a estas actividades; es decir, reconocer que quienes ejercen libremente las ASP, suelen en muchas ocasiones estar expuestos a condiciones de vulneración que limitan el goce efectivo de sus derechos y atentan contra su calidad de vida."

Documentos CONPES DC #11 de 2019

"Un balance preliminar indica que las fuerzas que se mueven y que emergen de este negocio sexual virtual resultan contrarias y desproporcionadas en relación con los seres humanos involucrados, ya que cada vez hay más de aquellos inmersos laboralmente, mientras que sus condiciones de seguridad y de salud son casi ignoradas y olvidadas, demostrándose un preocupante desconocimiento sobre esta problemática tanto en Colombia, como en Latinoamérica, y en los diversos países del mundo."

"Trabajadoras 'Sexcam' en Colombia: una Impresión Diagnóstica sobre la Seguridad y Salud" Carlos Fajardo Guevara y Carlos Mesa Lorza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El origen de la webcam se remite a comienzos de los años 90 en cabeza de los ingenieros Quentin Stafford -Fraser y Paul Jardetzky, investigadores de la Universidad de Cambridge. Ambos personajes instalaron una cámara para vigilar una cafetera cercana a la sala de cómputo en la que trabajaban y luego la conectaron a un servidor el cual comenzó a transmitir imágenes intermitentes cada cierto lapso de tiempo de la cafetera. Tres años después, en 1993, el invento evolucionó y comenzó a transmitir imágenes de la cafetera por la red mundial (internet). En consecuencia, millones de personas en todo el mundo se conectaron por muchos años para ver la imagen de la icónica cafetera de la sala de cómputo de Cambridge. Lo que comenzó como una práctica primitiva con poca tecnología evolucionó con el tiempo hasta convertirse en una práctica muy popular con múltiples usos, entre ellos el del modelaje a través de la webcam.

Aunque no se tiene una fecha exacta sobre el inicio del modelaje webcam se cree que su práctica data de la última década y su auge o mayor exposición comenzó justo con el año de la pandemia del Covid-19 donde este modelo de trabajo sexual digital comenzó a crecer exponencialmente así como las y los modelos.

El modelaje webcam está catalogado una actividad en la que una persona (modelo) transmite en vivo durante promedios de 6 a 8 horas, conectado a un sitio web privado o público. Al otra lado de la transmisión está el cliente quien visita el sitio web y paga, puede ser a través de token virtual que se adquiere previamente, con el que tiene derecho a unirse a un chat privado con la modelo en la que se desarrolla una actividad sexual paga de manera de virtual.

La evolución del modelaje webcam, que es directamente proporcional a la evolución de las nuevas tecnologías, ha permitido desarrollar algunas modalidades como: modelo independiente siempre y cuando garantice una plataforma de transmisión idónea – modelo satélite que debe estar vinculada a un estudio webcam, pero puede realizar trabajo en casa – modelo de base vinculada a estudio webcam trabajando desde el estudio con los elementos proporcionados por el estudio.

En la actualidad la industria del modelaje webcam continúa expandiéndose y como modelo de negocio se calcula que genera al año ingresos por más de 600 millones de dólares lo que le representa al país, solo en impuestos unos 80.000 millones de pesos al año con una demanda de clientes que va en ascenso y cuya expansión y florecimiento va de la mano de la tecnología. Colombia esta ranqueada como el cuarto país en el mundo que más modelos webcam aporta a la industria de las ASP de élite

Según la Federación Colombiana de comercio electrónico para adultos a través del sistema webcam (Fenalweb) se estima en Colombia existen un poco más de 12.000 estudios entre Bogotá, Medellín y Cali y que puede haber entre 120.000 a 400.000 modelos dedicada a esta actividad. Así mismo, se estima que solo en Bogotá al menos 2 de cada 10 estudios webcam son legales, por lo que se cree que el 80% del total de estudios en la ciudad están fuera de cualquier regulación lo que abre la puerta a todo tipo de irregularidades y abusos como la explotación sexual.

En Colombia esta práctica que hace parte de las Actividades Sexuales Pagas (ASP) está en camino de ser regulada y a la espera que finalmente surta trámite un nuevo proyecto de ley en el Congreso de la República que oficialice y que permita la regulación del trabajo de las modelos webcam, así como los estudios y empresas que las contratan.

En Bogotá, si bien es cierto que existe una política pública de actividades sexuales pagas 2020-2029 consagrada en el documento CONPES DC 11 de 2019, dicha política distrital no incluye actividades sexuales pagas de élite, líneas telefónicas eróticas, sexo virtual por webcam, servicios de acompañantes y por ende no se cuenta con una caracterización o censo de esta población dedicada exclusivamente al trabajo sexual virtual.

Desde el año 2013 Secretaría de la Mujer ha venido adelantando trabajos y estrategias como “casa de todas”, pero que solo incluye mujeres en situación de prostitución y no con personas que realizan actividades sexuales pagas. En 2015 se expidió la resolución 490 que establece la estructura del Plan de Acción para la Protección Integral de las Mujeres en Ejercicio de la Prostitución, como un instrumento de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. El objetivo general del plan, en su artículo 4 dice: “garantizar los derechos de las mujeres en ejercicio de prostitución, reconociendo sus diversidades en razón a identidades de género, orientaciones sexuales, diversidades étnicas,

raciales, culturales, religiosas, ideológicas, territoriales, de discapacidad, etarias, de origen geográfico, condiciones socio-económicas, de afectación por el conflicto armado y otras, mediante el desarrollo de acciones afirmativas y de igualdad de oportunidades, con el fin de contribuir a la eliminación de la discriminación, la desigualdad y la subordinación en Bogotá D.C.”

Así mismo, existe jurisprudencia sobre las ASP como la Sentencia **T-594 de 2016** la cual protege los derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales a la libre circulación, la libertad personal y la no discriminación por su actividad y que instó a la Administración Distrital a darle prioridad a la formulación de la política pública para las personas que ejercen trabajos sexuales; pero que no se ocupó de las denominadas ASP de élite en las que se enmarca el modelaje webcam, lo cual continúa dejando un vacío jurídico frente a las personas que hacen parte de la industria de este modelo de negocio asociado a una actividad laboral sexual virtual paga.

Sentencia **T 407 de 2018**... “Aunque la industria del entretenimiento para adultos no se encuentra proscrita en nuestro ordenamiento jurídico, esta Corte reconoce las tensiones y retos que este tema implica para un Estado social de derecho, alrededor del cual se han generado amplios debates que involucran distintas miradas sobre este fenómeno y que encuentran diferentes posturas”

Dicho lo anterior, a continuación, se analizará a profundidad la importancia de contar con una caracterización y censo de la población que hace parte de las Actividades Sexuales Pagas de élite como las y los modelos webcam, entre otros.

I. OBJETO DEL PROYECTO

Establecer lineamientos que garanticen los derechos de la población que realiza actividades sexuales pagas de élite en Bogotá en la modalidad de webcam, prepago, acompañantes, aplicaciones, entre otras similares.

Así mismo, se busca ejercer un mayor control sobre la industria de las actividades sexuales pagas de élite y la protección de los derechos tanto humanos como laborales de las personas que se benefician de este modelo de negocio sexual pago.

Así las cosas, urge a esta Corporación velar por la identificación y protección de los derechos de todos los actores involucrados en la industria de las Actividades Sexuales Pagas de élite.

II. CONSIDERACIONES Y JUSTIFICACIÓN

Afectación por falta de caracterización y censo poblacional

El sábado 8 de abril de 2017 la agenda mediática del país se ocupó de un hecho trágico en el Metro de Medellín. Las operaciones fueron suspendidas luego que una mujer se lanzara a las vías del tren. La persona que intentó terminar con su vida era una joven de 20 años que sufría de acoso por conocidos que se enteraron de que era modelo *webcam*. Este hecho puso en evidencia las

situaciones a las que se exponen estas personas y los inconvenientes que pueden traer para sus vidas y para la salud mental de cada una de estas modelos.

La ausencia de una caracterización de la población que se dedica a las ASP de élite (webcam) impide conocer los perfiles sociodemográficos de estas personas, así como la calidad de vida que llevan, las condiciones en las que laboran y las percepciones e imaginarios sociales (prostitución) que en su mayoría son negativos y discriminatorios. El siguiente testimonio es de una persona dedicada a las ASP que fue registrado en 2022 por la Secretaría de la Mujer y el Observatorio de mujeres y equidad de género de Bogotá durante uno de sus talleres participativos: *“Las ASP son una bendición o es una maldición, porque me otorga posiblemente estabilidad económica, estabilidad emocional porque puedo pagar mi salud, puedo ayudar a mi familia, pero como está mal visto no puedo tener una relación social normal, yo no me siento normal en la sociedad, yo me siento excluida, me siento criticada, juzgada, también asqueada, aburrida de tanto maltrato psicológico”*.

Esto evidencia esa dicotomía en la que la mayoría de la población ASP vive en la capital y todos los prejuicios y exclusión que trae consigo esta labor. En ese sentido es indiscutible que se produce una afectación emocional que está ligada a posibles trastornos de la salud mental. Por ende urge también una caracterización de la ASP de élite que permita conocer las afectaciones en términos de acceso a salud mental y general y que garantice ese derecho

Respecto de los perfiles sociodemográficos, en la capital solo se tiene identificación por parte del Observatorio de la Mujeres y Equidad de Género de Bogotá de las mujeres dedicadas a las ASP en general; pero se desconoce con certeza una bigdata que arroje cifras sobre la población ASP de élite en la que se pueda tener información sobre edades, género (mujeres/hombres) nivel socioeconómico – nivel de estudios, su identidad de género, orientación sexual y nacionalidad, tipo de vivienda, entre otros.

Igualmente, la falta de caracterización imposibilita identificar y contextualizar las dinámicas económicas que emergen de la industria de las ASP de Élite y las condiciones en las que los actores de este modelo de negocio se desenvuelven laboralmente y las zonas en las que más se están desarrollando el modelaje webcam (estudios). En ese sentido urge realizar una cobertura geográfica en la capital que incluya todas las localidades exclusivamente para las ASP de élite.

Vulneración de los derechos laborales

A pesar que existe una ausencia de regulación en Colombia frente a las ASP de élite, especialmente a las actividades asociadas a la industria del modelaje webcam, no es menos cierto que hay un precedente objeto de estudio de caso de Corte Constitucional y que sienta jurisprudencia. Para la alta corte la falta de regulación no es razón para que las ASP de élite como el modelaje webcam abran la puerta a escenarios de abusos y violación de derechos para las personas que hacen parte de la cadena laboral de este modelo de negocio.

Ha dicho la Corte Constitucional en sentencia T-109 del 27 de febrero de 2021 que se reconoce derechos laborales a una modelo Webcam en razón a que la forma en que el gestor del estudio webcam sistematizó la actividad del modelaje, permitiendo concluir que entre la modelo webcam y el gestor del estudio existía una relación laboral, por cuanto que se podía percibir las tres condiciones mínimas para que se constituya el contrato realidad. En ese sentido, la Corte ha establecido que: *“la realidad de muchas mujeres en estado de vulnerabilidad que ingresan a la industria del sexo condicionadas por situaciones de pobreza y ausencia de oportunidades, lo que en una cultura sexista, globalizada y movida por el afán de lucro abre paso a que algunos busquen tomar provecho de las circunstancias apremiantes de estas mujeres”*.

A partir de este caso, no solo se traza un precedente y se dicta jurisprudencia al respecto; sino que se ha instado al Congreso de la República a formular una ley que regule el modelaje webcam; así como al Ministerio del Trabajo en el mismo sentido. De hecho la única normatividad existente a las ASP de élite sobre el trabajo webcam es la **ley 2010 de 2019**, que añadió un parágrafo al artículo **368 del Estatuto Tributario** para indicar que tienen calidad de agentes de retención *“las personas jurídicas y naturales exportadoras de servicios de entretenimiento para adultos a través del sistema webcam”*

Sin embargo, hasta la fecha ambas corporaciones Congreso y Ministerio de Trabajo están en mora de formular una regulación contundente sobre las ASP de élite a través de los servicios del modelaje webcam. En consecuencia, es una realidad que en Colombia se cuenta con regulación en términos del derecho tributario y policivo, pero persiste la ausencia de una legislación que defina la situación jurídica de las personas que hacen parte de la industria de las ASP de élite en la modalidad de modelaje webcam.

Violencia

La falta de una regulación jurídica que proteja y garantice el ejercicio del trabajo webcam en condiciones dignas favorece situaciones de abuso y explotación dentro de las relaciones. Las mujeres tal y como lo reseña la socióloga Blanca Pedroza (2009) hacen parte del propio botín en el que están incluidos sus cuerpos y sus mentes. “de ahí la pertinencia del término (feminización de la pobreza). Para Pedroza (2009) “las mujeres tienen menor posibilidad de apropiación de la riqueza social y menores oportunidades de desarrollo. Las mujeres latinoamericanas, para no hablar de las mujeres de todo el mundo, suelen tener un estatus legal que las pone en desventaja frente a los hombres y todavía son excluidas de los espacios políticos. Las que logran entrar deben jugar con las reglas de un mundo de hombres”⁷⁴

De la mano de esa vulneración de los derechos esta la desigualdad y los prejuicios que abren la puerta a hechos de violencia y discriminación. Desde esa perspectiva el modelaje webcam carga a cuestas con prejuicios sociales que no desligan esta práctica de la prostitución tal y como se le conoce.

En ese contexto, las modelos webcam se ven expuestas a una estigmatización que las asocia a la pornografía y es ahí donde se abre otra puerta, la de la explotación sexual y todos los peligros que

⁷⁴ Tomado de “Privatización y globalización: derechos humanos de las mujeres” – Pedroza Blanca 2009. Recuperado de: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20140611041303/10pedro.pdf>

esto acarrea. Dichos señalamientos atentan contra la integridad y vida emocional de las personas que se dedican a las ASP de élite y a su vez imposibilitan el acceso a la educación, servicios de salud, incluida la salud mental, y otros derechos que en su mayoría son vulnerados constantemente. Todo ellos sucede cuando la misma sociedad legitima todos estos abusos a los que se ven expuestas las personas que hacen parte de la industria de las ASP por el simple hecho de realizar una actividad sexual remunerada, tal y como lo ha publicado The New York Times (2021) *“Legitimar el abuso sexual como un trabajo vuelve particularmente atractivos los sitios de cámaras web como OnlyFans para las personas con carencias económicas”*.⁷⁵ Mientras esto siga sucediendo la industria del sexcam seguirá en ascenso así como la vulneración de derechos de las modelos que hacen parte de esta industria.

En este sentido, resulta necesario que el Concejo de Bogotá, como órgano competente para tomar medidas en relación con la protección de los derechos de la población dedicada a las ASP de élite, adopte las medidas pertinentes para dictar lineamientos sobre la caracterización y censo de las personas que hacen parte de la industria de la ASP de élite.

III. MARCO JURÍDICO

A. DE ORDEN CONSTITUCIONAL

- **Sentencia T-629 de 2010**

Acerca del **CONTRATO LABORAL ENTRE PERSONA QUE EJERCE LA PROSTITUCION Y ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO** y una conclusión inexorable desde los principios constitucionales de libertad, dignidad e igualdad. En ese sentido la Corte dice: *“Habrá contrato de trabajo y así debe ser entendido, cuando el o la trabajadora sexual ha actuado bajo plena capacidad y voluntad, cuando no hay inducción ninguna a la prostitución, cuando las prestaciones sexuales y demás del servicio, se desarrollen bajo condiciones de dignidad y libertad para el trabajador y por supuesto cuando exista subordinación limitada por las carácter de la prestación, continuidad y pago de una remuneración previamente definida. Una conclusión del juez constitucional que no pretende ni auspiciar la actividad, ni desconocer su carácter no ejemplificante, más sí proteger a quienes se ganan la vida y cumplen con su derecho deber al trabajo a través de la prostitución ejercida no de modo independiente sino al servicio de un establecimiento de comercio dedicado a ello. Más aún cuando desde el punto de vista del **juicio de igualdad** y la jurisprudencia constitucional que lo ha estructurado, no existe en la Constitución ninguna disposición que autorice una discriminación negativa para las personas que ejercen la prostitución.*

- **Sentencia T-594 de 2016**

Acerca de la vulneración de los derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales a la libre circulación, la libertad personal y la no discriminación por su actividad. Al respecto la Corte ha dicho: “Los trabajadores sexuales conforman un grupo discriminado y marginado

⁷⁵ Recuperado de [El mito de OnlyFans - The New York Times](#)

por su actividad respecto a los cuales el Estado tiene un deber de especial protección bajo los mandatos constitucionales de la igualdad material. Es necesario enfatizar que existe una diferencia entre el trabajo sexual lícito que parte del ejercicio de la voluntad libre y razonada de su titular, así como de contextos de vulnerabilidad socioeconómica, y la prostitución forzada o la explotación de seres humanos por el lucro económico de terceros. Las conductas de explotación sexual, trata de personas, inducción a la prostitución, estímulo a la prostitución de menores de edad, demanda de explotación sexual comercial de niños, niñas o adolescentes, pornografía con menores de 18 años, turismo sexual, prostitución de menores de 18 años y facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores de edad, se encuentran penalizadas en Colombia, con el objetivo legítimo y deseable de suprimir y perseguir estas actividades ilegales y vulneratorias de derechos humanos.

- **Sentencia T407 de 2018**

Acerca de la vulneración de los derechos fundamentales de las personas que actúan en producciones audiovisuales pornográficas. Al respecto la Corte ha señalado que: “Aunque la industria del entretenimiento para adultos no se encuentra proscrita en nuestro ordenamiento jurídico, esta Corte reconoce las tensiones y retos que este tema implica para un Estado social de derecho, alrededor del cual se han generado amplios debates que involucran distintas miradas sobre este fenómeno y que encuentran diferentes posturas”

- **Sentencia T109 de 2021**

Acerca de vulneración de los derechos fundamentales de una mujer que se desempeñaba como modelo webcam, como una medida para garantizar el derecho a la intimidad y la protección contra injerencias en la vida privada y familiar. Al respecto la Corte señala que: “la realidad de muchas mujeres en estado de vulnerabilidad que ingresan a la industria del sexo condicionadas por situaciones de pobreza y ausencia de oportunidades, lo que en una cultura sexista, globalizada y movida por el afán de lucro abre paso a que algunos busquen tomar provecho de las circunstancias apremiantes de estas mujeres”

CONSTITUCIÓN POLITICA:

- **Artículo 2:** Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
- **Artículo 53:** El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios

mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

B. DE ORDEN LEGAL Y NORMATIVO

- **Ley 2010 de 2019**

“Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones.”

- **Ley 1801 de 2016**

“Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”

NORMATIVIDAD DISTRITAL

- **Documentos Conpes DC 11 de 2019**

“Política pública de actividades sexuales pagadas 2020 – 2029”

- **Resolución 490 de 2015 de la Secretaría Distrital de la Mujer**

Por medio del cual se establece la estructura del Plan de acción para la protección integral de las mujeres en ejercicio de la prostitución, y se dictan otras disposiciones.

- **Acuerdo No. 79 de 2003 del Concejo de Bogotá**

Por la cual se expide el Código de Policía de Bogotá, D.C.

IV. COMPETENCIA DEL CONCEJO

La Constitución Política de 1991 consagra en el artículo 313 que:

Corresponde a los concejos:

9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.

El Decreto Ley 1421 expresa en el artículo 12, numeral 1, lo siguiente:

“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

- 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.
(...)*

En ese sentido, a partir de La Constitución Política de 1991, artículo 313 numeral 9, el Decreto Ley 1421 expresa en el artículo 12, el principio de precaución y el principio de rigor subsidiario, es competente esta corporación para pronunciarse sobre el presente proyecto de acuerdo.

V. IMPACTO FISCAL

De conformidad con lo anterior y en cumplimiento de la Ley 819 de 2003, “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones y que en su artículo 7 determina que:

“Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. (...)

Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberán contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.”

Aclaramos que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el Presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación, ya que las acciones deben estar enmarcadas en los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo Distrital.

Cordialmente,

MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA
Autora - Concejal de Bogotá

PROYECTO DE ACUERDO NO 759 DE 2025

PRIMER DEBATE

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS QUE GARANTICEN LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN QUE REALIZA ACTIVIDADES SEXUALES PAGAS DE ÉLITE EN BOGOTÁ EN LA MODALIDAD DE WEBCAM, PREPAGO, ACOMPAÑANTES, APLICACIONES, ENTRE OTRAS"

EL CONCEJO DE BOGOTÁ

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por la normatividad vigente,

ACUERDA

Artículo 1°. Objeto. Establecer lineamientos que garanticen los derechos de la población que realiza actividades sexuales pagas de élite en Bogotá en la modalidad de webcam, prepago, acompañantes, aplicaciones, entre otras similares.

Artículo 2°. Supervisión y Protección en el Comercio Electrónico para Adultos. La Administración Distrital implementará mecanismos de inspección, vigilancia y control que, desde un enfoque basado en derechos humanos, garanticen el desarrollo de la actividad y el servicio de comercio electrónico para adultos, tales como el modelaje webcam, bajo principios de dignidad y libertad humana. Además, promoverá acciones para la prevención, atención, asistencia y protección de las víctimas y posibles víctimas de trata de personas.

Artículo 3°. Caracterización. La Administración Distrital deberá realizar, en un plazo razonable, una caracterización y censo tanto de los estudios como de las personas que realizan actividades sexuales pagas de élite en Bogotá, incluyendo modalidades como el modelaje webcam, servicios de acompañantes, prepagos, aplicaciones digitales y otras similares.

Artículo 4°. Actualización de la Política Pública. La Administración Distrital, en un plazo máximo de un (1) año contado a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, deberá actualizar la política pública relacionada con las actividades sexuales remuneradas, incorporando dentro de su marco regulatorio las Actividades Sexuales Pagadas (ASP). Esta actualización deberá incluir las modalidades realizadas a través de plataformas digitales, tales como el sistema webcam, y otras emergentes.

Dicha actualización deberá estar orientada por un enfoque de derechos humanos, garantizando la dignidad, el respeto y la protección de quienes desarrollan estas actividades, e incluyendo mecanismos para su regulación, supervisión y control.

Artículo 5°. Ampliación de la Oferta Educativa para Trabajadores de Actividades Sexuales. La Administración Distrital diseñará e implementará estrategias específicas para ampliar el acceso a la educación formal, técnica y superior de las personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas (ASP) en Bogotá. Estas estrategias deberán incluir modalidades educativas flexibles y programas adaptados a las necesidades y horarios de esta población, como formación técnica, competencias digitales y acceso a programas de educación superior, priorizando la promoción de su autonomía económica y el respeto de sus derechos fundamentales.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

PROYECTO DE ACUERDO NO 760 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE BUSCA LA PRESERVACIÓN LA CULTURA BOYACENSE EN BOGOTÁ, SE CREA EL EVENTO CARRANGA AL PARQUE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****I. OBJETO DEL PROYECTO**

Generar un espacio de encuentro ciudadano que permita, a través de la expresión musical y artística, preservar la cultura boyacense en Bogotá. En el marco de las actividades que se adelanten en el Distrito Capital, se creará un evento anual denominado “Carranga al Parque” con el fin de apreciar, difundir, proteger y visibilizar este género musical que hace parte del legado generacional de muchos habitantes de Bogotá y la Región Metropolitana.

II. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

De acuerdo con documentos del Archivo de Bogotá, nuestra ciudad “ha sido la meca de la migración boyacense desde los primeros tiempos de la República”. Así se observa en la publicación “*Bogotanos con alma boyacense*”⁷⁶ donde indican:

La migración boyacense hacia Bogotá fue una empresa quizás dispersa en el tiempo y en las circunstancias, pero que trajo consigo un desarrollo económico y empresarial indiscutible a la ciudad. Hoy, alrededor de un 34 por ciento de quienes viven en la capital son de origen boyacense; es decir, algo más de dos millones de personas, de acuerdo con el censo del Dane. Cerca de 400 empresarios están asentados en la capital y gerencian empresas tan diversas dedicadas al procesamiento de lácteos y bebidas, la agroindustria, organizaciones de mensajería, construcción y vivienda, artesanías, manufactura de electrodomésticos y confección de ropa y siderurgia, entre muchas otras actividades. Al tiempo, la colonia boyacense tiene 60 organizaciones que se reúnen mensualmente con el propósito de crear actividades en pro del desarrollo social de su departamento.

⁷⁶ <https://archivobogota.secretariageneral.gov.co/noticias/bogotanos-alma-boyacense#:~:text=Hoy%2C%20alrededor%20de%20un%2034,con%20el%20censo%20del%20Dane.>

Dentro del universo que compone la cultura boyacense, observamos como la carranga es un género que retoma y promueve las formas musicales campesinas. En la nota “La carranga: voces campesinas de vida y libertad”⁷⁷, se describe la carranga así:

La música carranguera y una apuesta para vivir en paz

Desde sus inicios, la música carranguera ha sido un canto a la vida en todas sus variadas manifestaciones. Con una perspectiva profundamente arraigada en la cultura campesina, la propuesta musical de este género se ha entrelazado con temáticas que abogan por una existencia en armonía tanto con el entorno natural como con el humano. Es decir, desde sus comienzos, los objetivos de las poéticas de la música carranguera han estado enfocados en fomentar y construir la paz.

Este género musical no solo refleja la cotidianidad y los desafíos de la vida en el campo, sino que también destaca la importancia de la coexistencia pacífica y el respeto por la naturaleza. Las canciones carrangueras, a través de sus letras, transmiten mensajes de unidad, solidaridad y amor por la tierra, promoviendo valores esenciales para la convivencia armónica entre las comunidades.

La inquietud ecológica inherente a la música carranguera es un elemento esencial y distintivo de este género. Al encarnar la voz auténtica del campo, la carranga articula con gran precisión y sensibilidad las preocupaciones ambientales que afectan a los ecosistemas rurales. Esta expresión musical se convierte en un canal para manifestar las alarmantes situaciones relacionadas con la contaminación de los ríos, la degradación de montañas y valles, y la alteración de los paisajes naturales, los cuales son vitales para las comunidades campesinas.

III. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA.

SISTEMA INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

"Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural", hecho en París el 23 de noviembre de 1972 (aprobada mediante la Ley 45 de 1983).

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, hecha y firmada en París el tres (3) de noviembre de dos mil tres (2003). (aprobada mediante la Ley 1037 de 2006).

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, **promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos** y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida

⁷⁷ <https://www.bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca-digital/CDM/acontratiempo/articulo?id=59>

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (...).

Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.

Artículo 8. Es Obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la Investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones esculturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

Artículo 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.

LEY 397 DE 1997, *Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.*

ARTÍCULO 4.- Definición de patrimonio cultural de la Nación. Modificado por el Artículo 1 de la Ley 1185 de 2008: El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, filmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico.

ARTÍCULO 18. del fomento y los estímulos a la creación, a la investigación y a la actividad artística y cultural: De los estímulos. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para tal efecto establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes, así como para integrantes de las comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y colectivo en cada una de las siguientes expresiones culturales:

- a) Artes plásticas;
- b) Artes musicales;
- c) Artes escénicas;
- d) Expresiones culturales tradicionales, tales como el folclor, las artesanías, la narrativa popular y la memoria cultural de las diversas regiones y comunidades del país;
- e) Artes audiovisuales;
- f) Artes literarias;
- g) Museos Museología y Museografía;
- h) Historia;
- i) Antropología;
- j) Filosofía;
- k) Arqueología;
- l) Patrimonio;
- m) Dramaturgia;

ARTÍCULO 29.- Formación artística y cultural. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentará la formación y capacitación técnica y cultural, del gestor y el administrador cultural, para garantizar la coordinación administrativa y cultural con carácter especializado. Así mismo, establecerá convenios con universidades y centros culturales para la misma finalidad.

DECRETO 2941 DE 2009, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial.

ARTÍCULO 3. *Comunidad o colectividad.* Para los efectos de este decreto, se entiende como comunidad, colectividad, o grupos sociales portadores, creadores o vinculados, aquellos que consideran una manifestación como propia y como parte de sus referentes culturales.

Para los mismos efectos, se podrá usar indistintamente el término "comunidad", "colectividad", o "grupo social".

IV. COMPETENCIA DEL CONCEJO

De conformidad con el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993:

“ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

Por su parte, el artículo 13, del mismo decreto, señala:

“ARTICULO 13. INICIATIVA. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el contralor y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario.

Por lo tanto, el Concejo de Bogotá, D.C., cuenta con facultades y competencia para dictar las normas introducidas mediante el presente Proyecto de Acuerdo.

V. IMPACTO FISCAL

Como lo establece el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, es obligatorio esclarecer el impacto fiscal que tienen las normas sobre las finanzas públicas, lo que significa medir la carga fiscal que estas pueden tener tanto en el presupuesto anual y en el Marco Fiscal de mediano Plazo que deben observar las diferentes entidades del Estado. Ahora bien, esto no significa que los instrumentos normativos que pueda aprobar el Concejo de Bogotá estén limitados por este hecho, pues como lo aclara la Sentencia C-911 de 2007, el impacto fiscal no se puede convertir en una limitación absoluta para que las corporaciones públicas cumplan con sus funciones legislativas o de orden normativo. En este sentido, la sentencia establece:

En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo.

(...) el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda.

Teniendo en cuenta el objeto del proyecto y cómo este se alcanzará, aclaramos que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el Presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación, ya que el vigente Plan Distrital de Desarrollo contempla líneas de inversión destinadas a los festivales musicales y a la generación de eventos que permitan fortalecer la identidad bogotana.

VI. CONCLUSIÓN

En mérito de lo expuesto y de conformidad con el Capítulo IX del Acuerdo 741 de 2019, nos permitimos presentar a su consideración el presente proyecto de acuerdo, para su trámite y aprobación.

Respetuosamente,

H.C. DAVID HERNANDO SAAVEDRA
Autor

ANDRÉS LEANDRO CASTELLANOS
Autor

VII. ARTICULADO

PROYECTO DE ACUERDO NO 760 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE BUSCA LA PRESERVACIÓN LA CULTURA BOYACENSE EN BOGOTÁ, SE CREA EL EVENTO CARRANGA AL PARQUE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1.- OBJETO: Implementar medidas que permitan reconocer la importancia de la identidad boyacense en la ciudad de Bogotá, preservando y promoviendo sus distintas manifestaciones culturales en eventos locales, contemplando desde escenarios barriales hasta eventos que impacten la región metropolitana.

ARTÍCULO 2.- Crease el evento denominado “Carranga al Parque”, el cual se realizará cada año en fecha que establezca la administración distrital.

Parágrafo: La administración distrital deberá, previo a concertar la fecha y lugar del evento, realizar mesas de trabajo con las organizaciones ciudadanas que demuestran experiencia en la promoción de acciones tendientes a la conservación y promoción de la cultura boyacense en Bogotá, con el fin compartir experiencias y escuchar sugerencias para el óptimo desarrollo del evento.

ARTÍCULO 3.- La administración distrital promoverá la gastronomía y la música carranguera en las ferias campesinas que se realicen en los barrios de Bogotá.

ARTÍCULO 4. El primer evento denominado “Carranga al Parque”, se realizará un plazo de 12 meses después de entrada en vigencia del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 5.- VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE